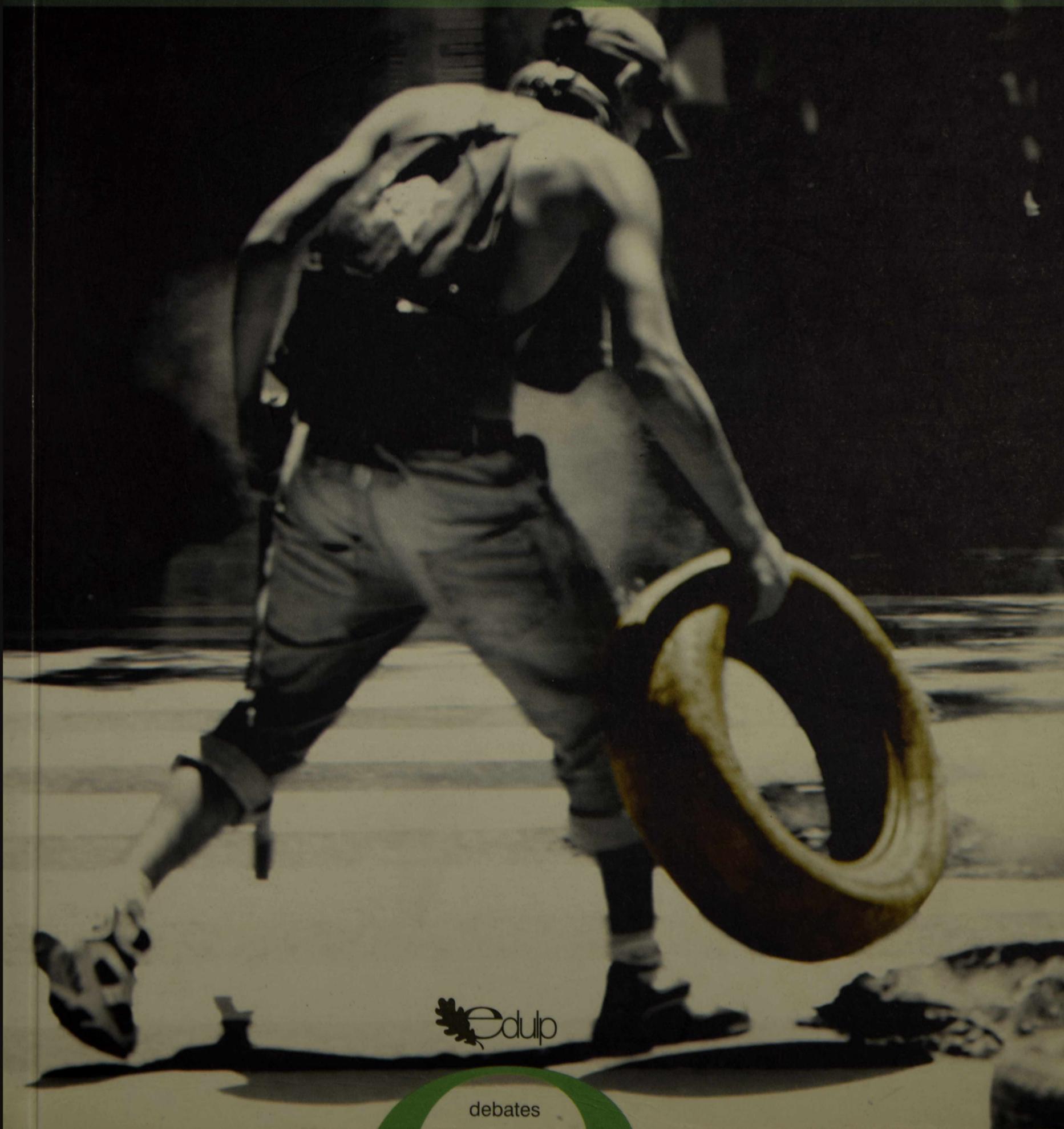


PABLO FORNI | LUCIANA CASTRONUOVO (compiladores)

Ni punteros ni piqueteros

Organizaciones populares durante el kirchnerismo



 EduLP

debates

Pablo Forni

Licenciado en Sociología, Universidad del Salvador (USAL). M.A. y Ph.D. en Sociología, University of Notre Dame. Es docente en la USAL y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Buenos Aires). Es investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Asimismo, es director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la USAL. Ha sido profesor visitante en distintas universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa. Ha publicado sobre organizaciones comunitarias, economía y capital social así como sobre métodos cualitativos de investigación en Ciencias Sociales.

Luciana Castronuovo

Licenciada en Sociología (USAL). Candidata a Doctora en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha sido becaria doctoral del CONICET (2008-2013). Integrante de proyectos de investigación relacionados con el análisis de organizaciones comunitarias. Investigadora IDICSO (USAL). Profesora de metodología de investigación en carreras de grado y posgrado (UBA, FLACSO, USAL). Se ha desempeñado en el ámbito estatal en el área de evaluación de programas sociales y en organizaciones no gubernamentales en el área de investigación social, especializada en metodología cualitativa.

NI PIQUETEROS NI PUNTEROS

Organizaciones populares
durante el kirchnerismo

NI PIQUETEROS NI PUNTEROS

Organizaciones populares
durante el kirchnerismo

Pablo Forni - Luciana Castronuovo
(Compiladores)

Forni, Pablo

Ni piqueteros ni punteros : organizaciones populares durante el kirchnerismo /
Pablo Forni y Luciana Castronuovo ; compilado por Pablo Forni y Luciana
Castronuovo. - 1a ed. - La Plata : EDULP, 2014.
269 p. ; 21x15 cm.

ISBN 978-987-1985-44-9

1. Movimientos Sociales. I. Castronuovo, Luciana II. Forni, Pablo, comp. III.
Castronuovo, Luciana , comp.
CDD 303.4

NI PIQUETEROS NI PUNTEROS
Organizaciones populares durante el kirchnerismo

Diseño y diagramación: Erica Anabela Medina
Foto de tapa: Sebastián Miquel



Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (Edulp)
47 N.º 380 / La Plata B1900AJP / Buenos Aires, Argentina
+54 221 427 3992 / 427 4898
editorial@editorial.unlp.edu.ar
www.editorial.unlp.edu.ar

Edulp integra la Red de Editoriales de las Universidades Nacionales (REUN)

Primera edición, 2015
ISBN N.º 978-987-1985-44-9

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723
©2015 - Edulp
Impreso en Argentina

Índice

Prólogo	9
<i>Sergio De Piero</i>	
Introducción	15
Los procesos de organización popular y movimientos sociales en las últimas décadas: cambios y continuidades	21
<i>Forni, Pablo; Nardone, Mariana; Castronuovo, Luciana; Nougués, Tomás; Zapico, Manuel</i>	
Los Movimientos de Desocupados y el Estado: el estilo de gestión de los programas de promoción social implementados por el Movimiento Barrios de Pie en el Ministerio de Desarrollo Social de la nación, durante el período 2003-2009	45
<i>Agustina Gradin</i>	
Disputas en torno al trabajo político: cooperativas, militancia y reconocimiento en el Programa Ingreso Social con Trabajo en un municipio bonaerense	69
<i>Laura Fiszman</i>	
El campo <i>nacional y popular</i> durante el kirchnerismo: una aproximación a las diferentes experiencias históricas, identidades y tradiciones políticas que reconfiguraron ese espacio desde el 2003	99
<i>Mauricio Schuttenberg</i>	
El eslabón perdido entre movimiento popular y democracia	127
<i>Ariel H. Colombo</i>	

La recreación de la gramática <i>movimentista</i> de acción colectiva: movimientos sociales y nuevas institucionalidades	149
<i>Ana Natalucci</i>	
La persistencia de la organización popular: algunas reflexiones en torno a las organizaciones sociales de base territorial y comunitaria en la Argentina contemporánea	167
<i>Pablo Vommaro</i>	
La <i>política vivida</i> : una propuesta programática desde la antropología	189
<i>Julieta Quirós</i>	
Interés, identidad, arreglos morales: notas para pensar la participación política popular en Argentina	215
<i>Gabriel Vommaro</i>	
Demandas colectivas y formas de intervención estatal: un enfoque relacional de la política en el Gran Buenos Aires	241
<i>Virginia Manzano</i>	
Autores	265

Prólogo

Aunque no sé si sea del todo pertinente, me gustaría realizar un prólogo, a este prólogo. Luego de leer la obra que aquí se presenta, dudé en la forma y contenidos que debían aparecer en este escrito. Desistí, no porque no sea apropiado, de un prólogo del tipo *inventario* que dé cuenta apretadamente, de cada uno de los artículos aquí escritos. Les dejo a los lectores esa tarea sobre los mismos textos. Tampoco es posible, al menos no me es posible a mí, una introducción que pretenda generar un resumen, una comprensión global de toda la obra donde concurren varios autores y temáticas con algún grado de diversidad. Por otra parte, este tipo de escritos, pueden provocar la incómoda sensación que las obras contenidas aquí pueden ser resumidas en unos pocos párrafos. Alternativa, no necesariamente original, es hablar de lo que en la lectura me parecieron los aspectos más llamativos que las autoras y los autores presentan e indagan en sus escritos. Aquí va.

El primero de ellos es el objetivo, diría nítido, que busca comprender las principales dimensiones políticas y sociales, de la primera década del siglo XXI. Esto es básicamente, aunque no exclusiva-

mente, el desarrollo del movimiento político denominado kirchnerismo, en particular las implicancias de su accionar de gobierno. Y hago esa salvedad porque los trabajos que se enmarcan más claramente en esa dimensión, no refieren exclusivamente a los procesos de gobierno sino a lo que ellos implican o generan. Es desde luego también una forma de analizar al kirchnerismo y a cualquier proceso político: pensarlo desde sus impactos en diversos actores políticos y sociales; o también, como sucede aquí, indagar acerca del proceso de democratización que lo atraviesa y lo tensiona. En particular porque esto sucede en un momento histórico, donde las particularidades refieren a notables cambios en la configuración política ideológica, por caso. Como así también otra dimensión que abarca a varios de los temas tratados: la tensión generada entre la soberanía de los Estados y el respeto por los derechos humanos; aunque el tema no sea abordado directamente, subyace en varias líneas esa visión de un Estado menso monolítico de cómo lo estudiábamos décadas pasadas, y cuestionado, atravesado, por diversas lógicas de acción y de decisión.

De este modo se destacan en este sentido, varios textos que indaguen sobre las acciones políticas de distintos actores, en donde la referencia al kirchnerismo se entrecruza, se mezcla, y a su vez ayuda a explicar a varias expresiones provenientes de espacios políticos que adquirieron, en particular desde la crisis del 2001, una notable relevancia en el espacio público. Aunque vale la aclaración: la mayor parte de estos movimientos, preceden a la emergencia del movimiento político que alcanza el poder en 2003; de allí que lo relevante sea comprender, conocer, el proceso relacional entre ambas construcciones. Los efectos de lo que dio en llamarse crisis de representatividad, que puso en cuestión a los partidos políticos, en algún sentido habilitó a que organizaciones y movimientos de la sociedad civil, ocuparan la escena de la mano de dos variables: la protesta y la intervención en lo social. Ambos fenómenos emergen en este libro, señalándonos la complejidad y riqueza de la sociedad civil y sus organizaciones en la Argentina. Ya que si bien el impacto de la crisis del 2001 alcanza un nivel notable, de ningún modo agota las explicaciones y comprensiones que pueden realizarse sobre estos fenómenos sociales. Al leer el libro, y en este aspecto gratamente,

nos encontramos ante una obra hecha por un colectivo y no solo por una serie de artículos intercalados; las autoras y los autores nos presentan múltiples escenarios y trayectorias que marcan el accionar, las identidades y las opciones de los movimientos y organizaciones, complementando miradas y análisis (y también discutiendo sobre esas miradas). Hay allí, me parece, un punto que puede rastrearse en varios textos reunidos en este volumen: en qué proporciones la trayectoria y la ruptura de principio de siglo están presentes en los movimientos; cuántas de sus prácticas e identidades (un par imprescindible para analizarlos) podemos descubrir como nuevos o podemos rastrearlos en su historia, y hasta dónde debería llegar esa búsqueda. En cualquier caso, me atrevería a decir que una coincidencia recorre la obra en su conjunto: nos hallamos ante realidades nuevas cuyo punto de quiebre en términos generales, se inicia hace 13 años (desde el 2001) que necesitamos explicar. Eso nuevo, no refiere a la emergencia de fenómenos inexistentes, sino en todo caso al modo en que la crisis del 2001 impactó en las organizaciones sociales y políticas ya existentes, de modo tal que lo que se torna relevante como objetivo de estudio son las transformaciones que pudieron operar en sus prácticas, en las identidades, en su relación con el sistema político, o incluso en las propuestas de transformarse en otras instituciones, como la alternativa electoral que plantearon algunos. Esta situación generó a su vez distintas respuestas. Algunas organizaciones, podemos leer, buscaron adaptar sus roles y sus prácticas a la nueva realidad política; otras en cambio plantearon escenarios nuevos de acción que pasaron tanto por la opción electoral, como las alianzas que les permitieron ingresar al aparato del Estado, teniendo la posibilidad de gestionar las políticas desde el corazón mismo de la institución clave de dominación. En distintos párrafos reaparece con nitidez la importancia de la interrelación entre las organizaciones o los movimientos y los gobiernos y el Estado. La relevancia dada a la cuestión me mueve a una pregunta: ¿cuánto del contexto político explica el rol y las prácticas de las organizaciones? Las respuestas desde luego tienen que ver con la capacidad de organización autónoma (o relativamente autónoma) que puede darse la propia sociedad civil, en términos efectivos, mucho más

allá de las definiciones conceptuales, y tiene que ver justamente con las acciones, identidades y relatos de las mismas organizaciones y movimientos que en el libro aparecen. Ello a su vez me genera otra pregunta: ¿el péndulo de esa cuestión nos dice algo sobre la sociedad civil en Argentina? ¿Tiene sentido la pregunta sobre la autonomía y heteronomía de este espacio? ¿Cómo jugó el kirchnerismo en esta relación? En este punto habría que tomar con precaución los diversos matices que tuvo el intercambio el cual penduló entre la articulación y el conflicto, según de cuales temas y territorios estemos hablando (vale la aclaración de territorio: la relación a escala nacional corrió por andariveles distintos cuando tomamos realidades provinciales o locales). Por otra parte, se presenta también la distinción necesaria que los propios espacios se dieron entre una autopercepción de *movimientos* o de *organización popular*; distinción que también desde luego, convocó a los investigadores en general. Y en este aspecto surge muchísimo para cortar y analizar. Por caso, ¿cómo discurrieron los procesos subjetivos al interior de los propios movimientos y organizaciones respecto de manera muy particular, de su identidad?; ¿las transformaciones operadas en el Estado, encuentran siempre su referencia en cambios paralelos al interior de la sociedad civil? Me parece que este punto impacta decididamente en la cuestión de la ciudadanía. Aunque en estas páginas lo veremos con mayor nitidez en contraposición a la idea de *clientelismo*, puede percibirse también esta noción en otras discusiones en lo que hace a las demandas de las organizaciones y movimientos y su relación respecto del Estado. Pues, ¿qué otra cosa que la ciudadanía, aun cuando no la nombremos, está allí en juego y en tensión? Detrás de las transformaciones en los tipos de acción de estos actores, de las modificaciones en las estrategias frente al Estado, o las relaciones que se den con diversos actores, flota la cuestión de la ciudadanía, asumida con las heterogeneidades de prácticas e identidades que estos mismos espacios implican.

Tiene el lector frente a sí, un libro que se adentra en lo que a mí respecta una preocupación central: ¿cuántas y con qué intensidad, se han producido transformaciones en la Argentina reciente? Por lo pronto es nítida la preocupación por desplegar herramientas conceptuales y

analíticas con el fin de explicar fenómenos novedosos. Y eso se refleja en que existe aquí mayor preocupación por entender procesos, antes que por concluir en categorías definitivas.

Los análisis son múltiples, las miradas diversas, lo mismo que los enfoques y los encuadres teóricos. Pero el hilo conductor por comprender mejor nuestro presente político y social, anuda los trabajos y esfuerzos aquí reunidos. Un valor extra que nos regala el libro.

Sergio De Piero

Ciudad de Buenos Aires, noviembre 2013

Introducción

Los sectores populares cuentan con una extensa y rica historia organizativa en la Argentina. Las primeras mutuales de inmigrantes, las bibliotecas populares, los gremios de diferentes orientaciones político-ideológicas, las unidades básicas del peronismo clásico, las sociedades de fomento y los movimientos piqueteros son algunas instancias organizativas en diferentes circunstancias y momentos históricos. El presente es igualmente rico y original a este respecto de períodos anteriores. En efecto, a partir del año 2003 se vienen desarrollando renovadas experiencias organizativas en el contexto de las políticas públicas y el liderazgo político del peronismo kirchnerista. El cambio en el papel del Estado y el inicio de un ciclo de políticas públicas de amplia cobertura fueron acompañados por el surgimiento y desarrollo de organizaciones populares que combinan actividades de promoción comunitarias junto con la economía social y la militancia política. En muchos casos se vinculan activamente con los diferentes niveles gubernamentales y son asimismo apoyadas desde el Estado. Creemos que revisiones y sistematizaciones de la literatura existente, los estudios de caso así como las aproximaciones teórico-conceptuales y las reflexiones

metodológicas sobre estas son el modo de avanzar hacia una mejor comprensión del presente de las organizaciones populares.

Así, el presente libro pretende realizar un aporte a la discusión respecto a las organizaciones populares en la Argentina actual. Los artículos que aquí se presentan fueron discutidos en dos encuentros académicos realizados en el marco de un Proyecto de Investigación Plurianual del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (PIP 0141). El primer encuentro se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2012 y el segundo el 18 de abril de 2013, ambos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador. Estas reuniones constituyeron momentos de reflexión y discusión en torno a las problemáticas teóricas y metodológicas que surgen en las investigaciones que abordan los procesos organizativos de los sectores populares. Se convocaron investigadores de diferentes disciplinas de las ciencias sociales pertenecientes a distintos ámbitos académicos con el fin de intercambiar experiencias y debatir acerca de investigaciones realizadas sobre organizaciones populares surgidas y consolidadas durante la última década en la Argentina. La discusión permitió pensar nuevas formas de concebir y categorizar los procesos de organización de los movimientos sociales populares y analizar las continuidades y las diferencias con procesos de otros períodos históricos. Las discusiones giraron en torno, por un lado, a la relación entre gobierno y organizaciones y, por el otro, al desarrollo de nuevos conceptos y perspectivas que puedan contribuir en la tarea de abrir nuevos caminos para el estudio de un fenómeno tan complejo y cambiante. Se plantearon diferentes tensiones analíticas generadas por la dicotomización de conceptos tales como: interés-desinterés, protesta-clientelismo, militancia-contraprestación, etc. Lo que se plantea es una nueva forma de aproximación a los fenómenos populares, tomando distancia de las dicotomías antes presentadas con el fin de poder considerar cuestiones más amplias que las de *subsistencia, territorio e interés*. Partiendo del reconocimiento de los puntos ciegos de las conceptualizaciones disponibles sobre las formas de politicidad y organizaciones del campo popular, se propone una reflexión en torno a las implicancias que conllevan análisis reduccionistas de las formas de política popular y su relación con el Estado.

En el primer artículo de este libro (Forni y otros), se presenta un análisis de diferentes trabajos sobre la temática de los movimientos sociales y las organizaciones populares. Se trata particularmente de investigaciones empíricas que se han realizado desde el año '90 hasta la actualidad. El objetivo del artículo es identificar los principales conceptos y enfoques metodológicos utilizados para analizar los distintos procesos organizativos. Se revisan los trabajos publicados en las principales revistas de divulgación científica y se señalan continuidades y rupturas en las fuentes bibliográficas y metodologías utilizadas.

A continuación se presentan diferentes trabajos que en base a extensos trabajos de campo estudiaron distintos tipos de organizaciones. El artículo de Agustina Gradín, se propone exponer las principales características que asumió el estilo de gestión desplegado por el Movimiento Barrios de Pie (BDP) en su experiencia en el Ministerio de Desarrollo social de la Nación durante el período 2003-2009. Lo que le interesa a la autora es analizar la forma en que BDP accedió a sus cargos de gestión y su forma de ejercer el poder. La pregunta que subyace a este trabajo es: ¿cómo actuó BDP en el interior de este organismo público y qué impacto tuvo esto en la organización?

Por su parte, Laura Fiszman, a partir de un estudio etnográfico, explora el concepto de reconocimiento social en relación a diversos militantes de un municipio bonaerense y la dinámica de la sucesión política municipal en las elecciones de 2011. En el artículo se analiza el conocimiento práctico de los dirigentes para lograr dominar la anarquía de las estrategias individuales de cada referente y así producir una acción concertada, constituyéndose en su portavoz, hablando en nombre del grupo y en su favor, dándole existencia al presentarlo y representarlo frente a otros actores políticos del Municipio.

Finalmente, Mauricio Schuttenberg analiza los cambios y continuidades en la organización e identidad nacional-popular de tres organizaciones (Libres del Sur, Movimiento Evita y Movimiento de Unidad Popular) a partir de la relación entablada con el gobierno de Néstor Kirchner, desde su asunción en 2003. Schuttenberg sostiene que este proceso de articulación política entre movimientos populares y el gobierno no ha sido analizado en profundidad, ya que generalmente se utilizan conceptos como *cooptación*, *manipulación del discurso*, *cons-*

trucción del relato y otras formas que implican una despolitización de los sujetos participantes y que pasan por alto procesos de disputa. A través de su investigación, el autor intenta comprender la articulación con el kirchnerismo como una decisión consciente y política por parte de las organizaciones, lo que lleva a distintos procesos de institucionalización y de organización que modifican la forma de concepción del conflicto popular y la integración política.

Luego, se presentan distintos artículos que reflexionan sobre el uso de conceptos y metodologías que permiten abordar los fenómenos vinculados a las organizaciones populares y su vínculo con el Estado. El artículo de Ariel Colombo comprende una revisión de expresiones contemporáneas acerca del nexo interno entre movimiento popular y democratización, un vínculo complejo en vistas a las discrepancias de fondo sobre la naturaleza de los procesos de cambio de la última década en algunos países latinoamericanos. Al respecto, según el autor, parece necesaria una reformulación de las categorías de análisis habituales.

Ana Natalucci, por su parte, analiza los cambios en la dinámica política que se han venido dando desde el año 2003 y que incidieron en la mutación del espacio multiorganizacional, trastocando la relación que había mantenido con el régimen político. La propuesta de este trabajo es analizar la recreación de la *gramática movimentista*, considerando principalmente las modalidades de participación y, en menor medida, los mecanismos de representación y dispositivos de legitimidad del orden y la autoridad política. Todo esto enmarcado en una discusión sobre las transformaciones recientes de la democracia argentina.

A continuación, Pablo Vommaro presenta un artículo en el que propone estudiar el proceso de gestación de los principales rasgos que caracterizan a las organizaciones sociales urbanas de base territorial y comunitaria en la Argentina actual. Para hacerlo, elabora una constitución de las configuraciones productivas, políticas y subjetivas de los movimientos sociales en diferentes momentos históricos. El trabajo está basado en las investigaciones desarrolladas durante los últimos años acerca de las formas de organización y participación que se produjeron en la zona de Quilmes (sur del Conurbano Bonaerense).

Por su parte, Julieta Quirós presenta un ejercicio de análisis sobre prácticas de conocimiento de la ciencia social contemporánea en re-

lación a un objeto particular: la actividad política de los sectores populares. Partiendo de la identificación de una matriz interpretativa que, en el seno de un debate social y político, opone explicaciones *economicistas* y *moralistas* del activismo popular, la autora propone desplazamientos conceptuales y metodológicos para hacer una antropología de la política vivida, enfoque que procura potenciar nuestras herramientas para conocer, comprender y explicar cómo la política misma, en sus diversas y dinámicas formas, es creada y transformada.

En el mismo sentido, Gabriel Vommaro parte de ciertos puntos oscuros que se han generado a partir de la investigación de las prácticas políticas de los sectores populares argentinos para trazar algunos lineamientos fundamentales que permitan mejorar y enriquecer la comprensión de las dinámicas políticas de dichos sectores ya que se constituyen como alternativa a los problemas que causan las consideraciones dicotómicas. Este pensamiento dicotómico tiende a separar nociones y actores que en el terreno aparecen fuertemente imbricados: interés-identidad/cultura/moral; ciudadanía-clientelismo; punteros-piqueteros; dominación-negociación; militancia-contraprestación. En este sentido, Vommaro propone una aproximación reflexiva que restituya la politicidad popular al entramado del que surge considerando las representaciones de los mismos actores involucrados para discutir la concepción dominante sobre el clientelismo proponiendo la noción de cálculo moral como una alternativa que procura evitar tanto el reduccionismo culturalista como el racionalista.

Finalmente, Virginia Manzano propone un abordaje relacional para el estudio de la política de los sectores subalternos, dividiendo su argumentación en dos planos complementarios: el primero corresponde a la elaboración de un análisis de la configuración de un *espacio político* para demandar colectivamente entorno al problema de la desocupación, indicando formas particulares de intervención estatal desde la década del ochenta; el segundo responde a la conceptualización de un orden de relaciones que posibilitó que políticas sociales se convirtieran en demandas colectivas y en expectativa subjetivas.

Los artículos aquí reunidos intentan dar cuenta de los cambios acontecidos en los movimientos sociales, su forma de organización, sus reclamos, reivindicaciones e identidades, las prácticas y enfrentamientos

cotidianos que las distintas políticas y espacios de participación han constituido. Por supuesto, este trabajo está lejos de ser concluyente o definitorio. Esa tampoco es su intención. Lo que proponemos en este libro es un reconocimiento de la complejidad y variedad de las prácticas e identidades de las organizaciones populares, así como también buscamos demostrar cómo, a través de la elaboración teórica y la investigación empírica, pueden construirse nuevas facetas de los fenómenos que han definido el mapa político-social de la Argentina como nunca antes y que probablemente lo seguirán haciendo. Es por eso que el análisis de las organizaciones populares, sus dinámicas, mutaciones y relaciones, constituye un aporte para comprender el presente -y el pasado reciente- de nuestro país.

Los procesos de organización popular y movimientos sociales en las últimas décadas: cambios y continuidades

*Pablo Forni; Mariana Nardone; Luciana Castronuovo;
Tomás Nougués; Manuel Zapico*

Durante las dos últimas décadas, a partir del creciente interés en las Ciencias Sociales y las políticas públicas por las organizaciones populares en particular, y de la sociedad civil en general, se han realizado distintas caracterizaciones y periodizaciones de las mismas (Campetella y González Bombal, 2000; De Piero, 2005; Filmus, Arroyo y Estebanez, 1997). En el debate académico (y político) reciente confluyen la transformación (o acentuación) de los rasgos *clientelísticos* de las organizaciones populares conjuntamente con el debate respecto a las características de las organizaciones de desocupados (piqueteros). Tanto el desarrollo conceptual que se realizó alrededor del denominado *movimiento* piquetero, como aquel que tuvo como objeto el estudio de las redes clientelares, permitió diferenciar dos formas de organización popular.

El momento actual es tan rico en cuanto a diversidad de fenómenos como períodos anteriores. Durante los últimos años se han desarrollado renovadas experiencias organizativas en el contexto de las políticas públicas y del liderazgo político del peronismo kirchnerista. En muchas de estas se combinan las actividades de promoción comu-

nitaria junto con la economía social y la militancia política. Consideramos relevante realizar una revisión crítica de los trabajos publicados hasta el momento, con el fin de reinterpretar las características y funcionamiento de las organizaciones populares. Si bien diferentes autores (Fontecoba, 2010; Schutenberg, 2012; Masetti, 2010; Retamozo, 2011) han realizado una revisión de los trabajos respecto a movimientos sociales, focalizando en el significado de la protesta social y/o la dimensión *política* de los movimientos, en el presente trabajo pretendemos analizar la producción académica reciente con el fin de caracterizar las organizaciones populares, procurando señalar las diferencias y similitudes entre distintos enfoques, así como también sopesar la potencialidad heurística de dichos enfoques para el análisis de las organizaciones populares en la actualidad. La selección de los trabajos se ha realizado en función de la repercusión que los mismos han adquirido dentro de la comunidad académica.

Para el análisis se consideran tres períodos diferentes: primero, el de la década del '90; luego, el de los años 2001-2003; y, finalmente, el período desde el 2003 hasta la actualidad. La elección de estos tres períodos de análisis corresponde a las diferencias observadas en la literatura académica surgida a través de esos años. Asimismo, en estos tres momentos se pueden observar diferencias en las políticas sociales dirigidas a los sectores populares. Siendo que los vínculos con el Estado se determinan, por lo menos en parte, a partir de la relación que se establece en función de la asistencia brindada por él a las organizaciones populares, en términos principalmente de recursos, los tres períodos establecidos reflejan importantes diferencias en las políticas sociales implementadas ¿Cuáles son estas principales características? En los años '90, dentro de un marco general de cambio en las políticas públicas y la consolidación de un estado neoliberal, las políticas sociales se describen y analizan en relación a su carácter de *focalizadas y descentralizadas*. Durante los años 2001 y 2002, en cambio, las políticas sociales se desarrollan en relación a la situación de crisis político institucional experimentada por el país y, con la irrupción del Plan Jefes y Jefas de Hogares Desocupados, se marca un punto de inflexión en las políticas sociales, no tanto por la lógica de la política, similar a las impulsadas durante los '90, sino por la amplia

cobertura que alcanza el Plan. Por último, a partir del 2003 comienza un ciclo de crecimiento económico y cambios en las políticas sociales, a partir de la implementación de políticas de amplia cobertura como la Asignación Universal por Hijo y distintas gestiones desarrolladas desde el Ministerio de Desarrollo Social vinculadas a la economía social. Asimismo, las políticas sociales modificaron -y aún lo hacen- la relación de las organizaciones con el Estado.

De organizaciones populares y movimientos sociales

En primer lugar resulta importante precisar los usos que se le dan a los conceptos de organizaciones populares y movimientos sociales. Es importante mencionar que la literatura acerca de estos, y su conceptualización, es mucho más amplia que la de las organizaciones populares, categoría cuya conceptualización pareciera no remitir mayor complejidad en la identificación con su objeto empírico. Sin embargo, la utilización en forma intercambiable de los dos términos reviste la necesidad de establecer las diferencias entre ambos. Las organizaciones populares son homologables a las organizaciones de base, es decir aquellas que

presentan un núcleo reducido de miembros organizadores, una estructura interna simple, un ámbito de acción eminentemente local y una orientación hacia problemas concretos de la comunidad. Dependen, en buena medida, de recursos externos para su funcionamiento que obtienen primariamente de fuentes estatales. (Forni, 2004: 43)

En relación al uso del concepto de movimiento social, aun cuando la conceptualización y alcance de la categoría han dado lugar a importantes discusiones en el ámbito académico, coincidimos con Masetti (2010) en afirmar que muchos de los autores que consideran a los movimientos sociales su objeto de estudio, no señalan las fuentes teóricas que utilizan para desarrollarlo. Se señala que los dos teóricos más citados a la hora de hablar de *movimientos sociales* son Melucci

y Tarrow¹, autores que pertenecen a escuelas antagónicas de las teorías de los movimientos sociales: una hace hincapié en el rol instrumental de la acción colectiva y la otra en la capacidad de generar identidades alternativas o de politizar el proceso identitario.

Si bien consideramos que la capacidad de generar identidad de las organizaciones es un eje de análisis recurrente en distintos trabajos, también han sido utilizados conceptos provenientes de otras escuelas como por ejemplo: la capacidad de establecer una temporalidad de las protestas (*ciclo de protestas* de Tarrow); la idea de *estructura de oportunidades* de Tarrow para explicar el flujo de actividades de los movimientos y dar cuenta de la racionalidad de algunos actores; y el concepto de *repertorio* para enmarcar las acciones de los actores en su contexto específico. La falta de claridad en el uso del término debe comprenderse no tanto como una falta de rigor analítico en el devenir de las investigaciones empíricas, sino como «la incomodidad que genera esta terminología al enfrentar el desafío de la construcción del objeto de estudio [...], lo que está en el trasfondo de esta incomodidad es la disputa por un nuevo ethos en las ciencias sociales» (Melucci, 2010: 21).

De esta forma, organizaciones populares y movimientos sociales se vincularían a través de las acciones colectivas (si bien no toda acción colectiva se enmarca dentro de un movimiento social) surgidas de las mismas, y se diferencian principalmente por la mayor o menor flexibilidad organizativa que presentan. Más allá de considerar importante la construcción de las *organizaciones populares* como objeto empírico, en este trabajo nos enfocaremos en los estudios sobre movimientos sociales elaborados particularmente a partir de la última década, ya que los mismos aportan elementos teóricos importantes para comprender las dinámicas y cambios de las organizaciones. Nos preguntamos justamente cuáles fueron los conceptos que han permitido caracterizarlos en su accionar a lo largo de los últimos años.

¹ El autor señala los autores más citados en las ponencias del Primer Congreso Nacional sobre Protesta Social, Acción Colectiva y Movimientos Sociales.

Los años '90: ¿clientelismo y *desertificación* organizativa?

A lo largo de los últimos 20 años, varios autores han analizado las organizaciones populares que se desarrollan en los barrios del Gran Buenos Aires. Los distintos estudios enfatizan el carácter territorial de estas organizaciones y proveen diferentes visiones respecto a los alcances y sus formas de hacer.

Durante los años '90 se profundizó en el país un ciclo de políticas neoliberales que incorporó un conjunto de reformas en el mercado de trabajo y tuvieron como consecuencia el aumento del desempleo, la precariedad e informalidad laboral; aspectos que impactaron fuertemente en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. En el terreno de las políticas sociales, se diseñaron e implementaron medidas de tipo focalizadas y descentralizadas a partir de una voluntad de *achicamiento* del Estado. En este contexto, surgieron diferentes esfuerzos teóricos por caracterizar las organizaciones populares en particular y la sociedad civil en general, así como su vínculo con las políticas públicas.

Distintos autores (Filmus, 1997; Thompson, 1995; Roitter y González Bombal, 2000) generaron tipologías que permitieron caracterizar al heterogéneo conjunto de las organizaciones de la sociedad civil. Dentro de estas tipologías, las *organizaciones de base* correspondieron a un tipo entre otros. Estos esfuerzos taxonómicos, si bien proporcionaron herramientas para conocer al tercer sector, no se focalizaron en los vínculos de las organizaciones con otros actores, sus trayectorias organizacionales ni en sus dinámicas de funcionamiento. Durante los años '90, fue el concepto de *clientelismo* aquel que sirvió para comprender la dinámica de las organizaciones populares y la forma de vincularse con el Estado. El principal autor que ha trabajado esta temática es Auyero (1997; 2001), quien estudió las redes clientelares en un partido del conurbano bonaerense. Si bien la emergencia del clientelismo político es anterior a este período, el autor considera que fue en esos años en los que las redes clientelares cobraron mayor importancia. En su análisis de estas redes, complejiza la relación entre cliente y mediador, intentando, tal como él mismo señala, escapar de la *presión metonímica* de la idea de clientelismo político. En palabras del autor:

La resolución de problemas mediante la intervención política personalizada, es entonces un proceso estructurado y estructurante, un conjunto de relaciones que comienzan a tener sus propias reglas, sus silencios y sus propias voces, sus trayectorias, dando lugar a performances, identidades y narrativas particulares. (2001: 231)

La visión de Auyero enfatiza la pertinencia del abordaje relacional para este tipo de fenómenos y posee una mirada que procura analizar las redes, los entramados sociales y las identidades que se actualizan y transforman en los intercambios que se realizan. Este mismo enfoque es utilizado por el autor para analizar los saqueos que se producen en el contexto de la crisis del 2001 (Auyero, 2007). Según él, las *relaciones clientelares* (Auyero, 2001, 2003) tienen importancia no solamente en la política partidaria y la vida cotidiana de los habitantes de los barrios, sino también para entender las formas extraordinarias de acción colectiva, como por ejemplo los saqueos. Para comprender esos fenómenos, debería indagarse acerca de la *zona gris*, la cual «hace referencia a un grupo de relaciones clandestinas entre estos actores (punteros políticos, fuerzas represivas, vecinos)» (Auyero, 2007: 74).

El principal aporte de Auyero consiste en ser capaz de analizar las redes clientelares en un entramado de redes informales de ayuda recíproca más amplio, que configura una identidad política determinada. El enfoque parte de una visión relacional y recupera aportes de la antropología desarrollando un *clientelismo sociocultural* (Vommaro y Quiros, 2010) diferenciándose de enfoques de costo-beneficio, enmarcados dentro de la escuela de la acción racional (Brusco; Nazareno; Stokes, 2004). En términos de Auyero, «el intercambio de votos por favores es visto como una de las posibles formas de relación entre los partidos políticos y los grupos populares organizados» (Auyero, 2001; 37). En el análisis del autor, la forma clientelar resulta la de mayor carácter explicativo a fines de comprender relaciones que se establecen al interior de los sectores populares.

De esta forma, a fines de comprender la dinámica de estas organizaciones y su vínculo con el Estado, los partidos políticos y las políticas sociales, la principal categoría utilizada ha sido la del *clientelismo*. Si

bien en los estudios se complejiza el concepto de *clientelismo* propio de la acción racional y se aportan elementos que superan una visión en la que solo existen patrones y clientes que establecen relaciones en una clara asimetría que produce que unos voten por otros, las redes clientelares aparecen como una pieza fundamental a fines de comprender las formas y posibilidades de organización popular en la década del '90.

La mencionada década, y los respectivos cambios ocurridos en el campo de las políticas sociales, es también el contexto en el cual se desarrolla el trabajo de Frederic. La autora analiza la moralidad y la división del trabajo político a partir de la implementación de un programa focalizado en un partido del conurbano bonaerense. En este análisis, presta especial importancia a los conceptos de *reconocimiento* y *profesionalización* y a cómo, a través de estos conceptos, se alteran o ratifican categorías como *villeros*, *vecinos*, *militantes sociales* y *militantes políticos* (Frederic, 2004). El aporte de esta perspectiva reside en incluir la intervención del Estado en el análisis de las formas políticas que se desarrollan en los barrios, complejizando así la idea de una total ausencia del mismo durante el período neoliberal. La autora señala la importancia de la conformación de un grupo de tecnócratas que compiten con la visión del político tradicional y reconfiguran a los distintos actores. También analiza los *actos de reconocimiento* que hacen referencia al proceso de *oficialización*, a través del cual el Estado incorpora a los movimientos y reconoce su labor asistencial.

Al analizar las expresiones de beligerancia popular ocurridas en el 2001, la autora utiliza el mismo marco conceptual y afirma que a fines de explicar estas expresiones, es necesario considerar que el proceso de profesionalización alteró las reglas de acceso y permanencia: estas eran más difíciles «de cumplir para los más desplazados antes reconocidos por el Estado como villeros e incluso insertos en carreras políticas» (Frederic, 2009: 262).

Si bien los autores citados poseen importantes diferencias, ambos consideran que son las redes clientelares aquellas que permiten caracterizar al período analizado y que estas redes son las que configuran barrios populares. El esfuerzo por captar la vida política de los barrios donde residen hogares en situación de pobreza, procurando

incorporar la visión de los propios actores y complejizar un concepto ampliamente utilizado, se considera un aspecto de importancia en los trabajos recientemente citados.

Sin embargo, es importante resaltar que las organizaciones de los sectores populares que se desarrollan en los barrios no pueden enmarcarse en su totalidad dentro de relaciones clientelares. La *clientela* es un tipo de red que existe en un universo heterogéneo de conformaciones sociales. Asimismo, un énfasis en las relaciones de tipo clientelar obstaculiza el análisis de la capacidad organizativa de los habitantes de la villa:

Las organizaciones de excluidos de estos años daría cuenta de distintos patrones de funcionamiento basado en diferentes trayectorias: por un lado aquellas organizaciones vinculadas a las redes clientelares que operan en los barrios y, por el otro, organizaciones articuladas en red, que constituyen una estructura organizacional novedosa y que tiene importantes implicancias en las posibilidades de desarrollo y supervivencia de las organizaciones en contextos de exclusión social. (Forni: 2004)

Los principales trabajos realizados en este período basan sus investigaciones en trabajo de campo de tipo etnográfico. Las conclusiones de sus investigaciones se infieren de estudios de casos realizados en barrios situados en el conurbano bonaerense que se consideran relevantes para el estudio de las redes clientelares y que se corresponden con barrios con un alto porcentaje de hogares en situación de pobreza. Sin embargo, pueden señalarse también trabajos que han intentado cuantificar el fenómeno del clientelismo político (Levitsky, 2004; Brusco, Nazareno y Stokes, 2004). El trabajo de Levitsky (2001) analiza al partido justicialista en el período 1980-1990, concentrándose en la organización partidaria y «las formas organizacionales informales y sub-institucionalizadas», siendo el argumento central del artículo la idea de que «las estructuras organizacionales sub-institucionalizadas pueden facilitar la adaptación partidaria en un entorno de crisis» (Levitsky, 2001: 3).

Brusco, Nazareno y Stokes (2004) se preguntan acerca de la magnitud del fenómeno del clientelismo y la existencia de cambios a lo largo del tiempo. Para responder esta pregunta desarrollan un cuestionario que les permite identificar dicha magnitud presente en la Argentina.

Cabe señalar que estos esfuerzos por cuantificar el fenómeno se enmarcan en estudios cuyo objeto empírico estaba vinculado más al funcionamiento de los partidos políticos entendidos como organización que a comprender los vínculos de sectores en exclusión social con la política.

A fines de complejizar el concepto de clientelismo, resulta pertinente el análisis de Masson (2002), quien señala la identificación que existe en la literatura entre los sectores populares y las redes clientelares, de modo tal que esta forma asimétrica de relación social fuera prioritaria de un único sector social: los sectores en situación de pobreza, vinculándose clientelismo con estrategias de supervivencia. La autora propone

utilizar la categoría de clientelismo a partir de su propia lógica, desvincularla de situaciones de extrema privación (ya sea de comida, medicamentos o contención afectiva) y centrar el análisis en todos los actores de la red, más allá de su lugar de residencia (estudiando en aldeas-no aldeas) (Masson, 2010: 77)

De esta forma, durante los años '90, en el análisis de las organizaciones populares, se encuentran distintos tipos de literatura. Pueden mencionarse aquellas que consideran a las organizaciones populares en tanto organizaciones de base y las incluyen dentro de una amplia categoría de organizaciones de la sociedad civil, las cuales cobran relevancia en este período en especial por el rol que les es asignado por los organismos internacionales de créditos en el desarrollo de las políticas sociales que se implementan (De Piero, 2005) y, por otro lado, hay investigaciones que plantean la heterogeneidad de las organizaciones que existen en contextos de exclusión social, y las diferentes trayectorias y formas organizativas que adoptan (Forni, 2004). En contraposición a estas investigaciones que señalan la existencia de una amplia vida organizativa en contextos de pobreza extrema, aquellos trabajos que consideran a las redes clientelares como estruc-

tura hegemónica para comprender la vida política de los barrios, afirman que en la estudiada década existe una *desertificación* organizativa, la cual contribuye al desarrollo de redes clientelares (Auyero, 1997). El término de clientelismo político es aquel que serviría para explicar entonces la relación de los sectores populares con la vida política de los barrios.

La crisis del 2001: la importancia de lo *territorial* y el análisis del movimiento piquetero

Luego de la crisis del año 2001, comenzaron a proliferar estudios que señalaban el dinamismo de las organizaciones populares. Los piqueteros, surgidos hacia la segunda mitad de la década, primero en el interior e inmediatamente después en el Gran Buenos Aires, fueron las organizaciones que recibieron la mayor atención en este período.

Svampa y Pereyra (2004) analizaron en profundidad la historia y composición del movimiento piquetero a través de la descripción de sus bases sociales, la metodología de acción directa implementada, y las prácticas de democracia directa y asamblearia que utilizaban (Svampa y Pereyra, 2009). En el análisis de la experiencia piquetera, los autores resaltaron el hecho que, «desde el fondo mismo de la descomposición social pudieron emerger importantes elementos de recomposición» (Svampa y Pererya, 2004: 15).

En su análisis del movimiento piquetero, los autores se preguntan acerca de las dimensiones principales que conforman el espacio común piquetero, a saber: composición de sus bases sociales, metodología de acción directa, democracia directa y asamblearia, y el modelo de intervención territorial correspondiente.

El tipo de política social más relevante en la conformación de organizaciones de anclaje territorial y su relación con el gobierno fue aquella que otorgaba subsidios a cambio de contraprestaciones laborales, encarnada en diversos planes. Esto generó una fuerte dependencia de las organizaciones piqueteras en su relación con el Estado pero, gracias a la lucha y a la autogestión, los planes sociales fueron resignificados como demandas efectivizadas; *arrancadas*, a través de

la lucha popular organizada y el método piquetero de acción directa: el corte de rutas (Svampa y Pereyra, 2004).

La dependencia material de las organizaciones autónomas respecto de los recursos del Estado proviene justamente del recibimiento de planes sociales, ya que estos constituyen el recurso principal que tienen las organizaciones para cubrir las necesidades de sus miembros. Pero, debido a las lógicas de construcción política de autogestión y al trabajo territorial, las organizaciones pudieron resignificar los subsidios y los utilizaron como catalizadores de su constitución como actores sociales relevantes en la escena política nacional.

De hecho, se constituyeron como fuerte competencia a los punteros en dos aspectos: por un lado, debido a su impronta marcadamente territorial, se consolidaron como organizaciones capaces de movilizar al barrio en su conjunto a través de su metodología de cortes de ruta para efectivizar reclamos e iniciar negociaciones con el gobierno; por otro lado, compitieron con los punteros por el control y manejo de los planes sociales. El resultado final favoreció ampliamente a las organizaciones ya que, a través de su publicidad mediante los cortes y los enfrentamientos -condensados en las *puebladas* y piquetes-, se constituyeron como actores sociales activos y representativos, que se encargaron de las negociaciones con las distintas instancias del gobierno para efectivizar las demandas que, como se dijo anteriormente, el Estado satisfacía con planes sociales o promesas de planes que los movimientos resignificaban como victorias, producto de su lucha popular organizada (Svampa y Pereyra, 2009).

Si bien las organizaciones buscaban la autogestión y practicaban la democracia directa, sus recursos materiales provenían de los gobiernos contra los que luchaban y esto los colocó en una situación de dependencia difícil (Svampa y Pereyra, 2009).

Es también durante las vicisitudes de la crisis del 2001 que Denis Merklen desarrolla el concepto de *territorialización*. El barrio comienza a concebirse como el lugar privilegiado de la expresión política de las clases populares, y la idea del *pasaje de la fábrica al barrio* adquiere un papel central en el debate académico: es el barrio el lugar en donde las clases populares se organizan y desarrollan actividades políticas. El autor analiza las nuevas formas de asociación so-

cial -sus estrategias de acción y sus relaciones con los gobiernos- que emergieron como consecuencia de la crisis del Estado benefactor. Estas nuevas formas de acción tienen un aspecto en común: están basadas en inscripciones territoriales, esto es, una integración basada en la vecindad. Las movilizaciones y la lucha por obtención de recursos están desligadas de las condiciones laborales. El barrio sirve de punto de apoyo para la movilización colectiva y constituye la base para establecer una relación con el sistema político. También asume importancia al convertir al *barrio* en el actor con el que se relaciona la política y, además, funciona como un soporte para las familias, estableciéndose nuevas formas de solidaridad con anclaje territorial.

Según Merklen (2010), hay tres aspectos comunes que identifican el piquete, el estallido y el saqueo: la exterioridad respecto de las relaciones salariales clásicas, el anclaje territorial y una nueva relación con el Estado, basada en el conflicto por la distribución de una ayuda social cuyos recursos son tan indispensables como escasos e insuficientes.

Los individuos que han quedado desvalidos de las asociaciones o de otro tipo de *seguro social* garantizado por las relaciones laborales o por el Estado mismo, se han caracterizado por desarrollar estructuras de solidaridad local y han hecho de su barrio el punto de partida de movilizaciones enfocadas en aspectos reivindicativos. De todos modos, estas formas de asociaciones no están exentas de producir conflictos interbarriales y de generar *anomia* entre los habitantes del mismo. Esto puede ser consecuencia de las diferentes normas de acción y comportamiento que exigen los diversos grupos, que viven en estado de urgencia para poder garantizar la supervivencia: son *cazadores*, ya que los diferentes grupos, para solucionar sus problemas, están al *acecho* de la asistencia que el Estado pueda otorgarles, utilizando todo su potencial para apropiarse de los recursos que los organismos oficiales entregan esporádicamente. Es cuestión, por lo tanto, de conseguir aquellos recursos que son escasos o que corresponden a una cuestión de intereses: al no estar institucionalizado, diferentes grupos pueden adjudicarse mayores beneficios de los que necesitan. Merklen explica que «las organizaciones barriales se constituyeron así en una de las bases principales de la participación popular en la creación de una nueva demanda social ya no asociada al mundo del trabajo ni organizada por

los sindicatos» (2008: 51). En el caso de este autor, el límite de la política de las clases populares está presente en las nociones de *inscripción territorial* y *lógica de cazador*, ya que las clases populares se construyen a partir del territorio, para poder reclamar recursos y beneficios estatales, *presas* que los ayudan a vivir día tras día. Esta lógica particular y la territorialidad, según Merklen, establecen los parámetros de una ciudadanía popular (Varela, 2010).

De esta forma, a través del estudio del movimiento piquetero, se analiza la capacidad política de las organizaciones populares, el carácter territorial de las mismas y la necesidad de movilización a fin de obtener recursos. En el trabajo de los principales autores que se han enfocado en las organizaciones piqueteras se resaltan entonces sus prácticas de acción directa, constituyéndose como actores colectivos que efectivizaban las demandas del grupo al que representan. A partir de estos análisis en relación al movimiento piquetero se reconoce la capacidad de autonomía de los sectores populares y las acciones directas como método predominante de visibilizar sus reclamos e interpelar al Estado. El nivel de organización alcanzado a través de asambleas y demás mecanismos permite hablar tanto del movimiento piquetero como de organizaciones piqueteras surgidas al interior del mismo.

Como se ha observado en la otra etapa señalada, la forma de abordar el objeto de estudio ha sido cualitativa, siendo la etnografía el principal método utilizado. Es importante resaltar que los trabajos realizados en este período son el punto de partida de una importante cantidad de autores interesados en estudiar aquellas organizaciones consolidadas luego del 2003.

El kirchnerismo: ¿las organizaciones con y en el Estado?

En el año 2003, con la asunción al poder de Néstor Kirchner, comenzó un ciclo de crecimiento económico y cambios en las políticas sociales, a partir de la implementación de medidas de amplia cobertura. Los cambios en el rol del Estado se ven acompañados asimismo por el surgimiento de organizaciones populares que se vinculan acti-

vamente con los distintos niveles de gobiernos y son apoyadas e impulsadas por el gobierno nacional.

Ante estos cambios en las organizaciones piqueteras, que alteraron no solo los reclamos sino principalmente su forma de protesta y de relación con el Estado, surgieron diferentes estudios que se preguntaron sobre la posibilidad de estos movimientos de seguir constituyendo un espacio de movilización política que preservara su autonomía (Perelmiter, 2010; Cortes 2010; Natalucci, 2008; Masetti, 2010).

Perelmiter (2010) señala en base a un estudio de campo etnográfico realizado en la Secretaría de Organización y Capacitación Popular (SOCP) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que las destrezas y atributos que aportan los militantes los constituyen como un grupo diferenciado al interior de la estructura gubernamental. Esto les permite reforzar su identidad, diferenciándose también de los empleados estatales y los burócratas; concibiendo su accionar como una expresión diferenciada dentro del Estado. A partir de esta diferencia, se construye entre estas dos formas de gestión una concepción opuesta del *desinterés*: por un lado, los grupos administrativos burocráticos conciben el *desinterés* como una forma de imparcialidad y neutralidad (aspectos tomados del análisis de autores como Bourdieu); y, por otro lado, los movimientos sociales se reconocen como *voceros de intereses particulares* y como defensores de los intereses de organizaciones populares puntuales. De este modo, este sentido de *desinterés* se basa no en una forma de neutralidad y trabajo (burócrata), sino en una idea de sacrificio desinteresado por un movimiento determinado (militante). Como afirma la autora: «El clivaje entre militantes y ‘no militantes’ da lugar a una competencia por los criterios legítimos de asignación de recursos (técnicos, ideológicos, políticos-partidarios) y de inclusión/exclusión de los agentes en ámbitos de circulación de información y autoridad» (Perelmiter, 2010: 146).

Sin embargo, Perelmiter también señala que la *asociación* entre movimientos sociales y Estado tiene resultados paradójicos: los movimientos disputan ciertos aspectos participativos y de asistencia estatal, pero, al inscribirse en las lógicas de gestión administrativa, transforman su estatuto de militantes, «volviendo ambivalente su carácter de ‘portavoces’ de las aspiraciones populares» (Perelmiter, 2010: 152).

En su análisis, la autora pretende diferenciarse de enfoques como el de Svampa, quien ve en este proceso de *oficialización* una forma de subordinación al Estado, cancelando el potencial de diferenciación de las organizaciones populares de agrupaciones clásicas como el peronismo, aspecto que terminaría siendo contraproducente para la organización, en especial a la hora de hablar de autonomía o de proyectos diferenciados y superadores.

Otra autora interesada en comprender las relaciones de autonomía o heteronomía de las organizaciones sociales durante el período kirchnerista es Natalucci (2010), quien a través de la reconstrucción de la trayectoria del Movimiento Barrios de Pie, establece diferentes momentos. La primera etapa, que el movimiento define como *etapa piquetera*, es entendida por la autora como una posición autónoma «en tanto la expectativa giraba en torno a poder consolidar una estrategia de movilización y de confrontación, donde se resaltaba el carácter destituyente de la política» (Natalucci, 2010: 105). Esta etapa era de confrontación total con gobiernos asociados con el neoliberalismo. El paso a una estrategia heterónoma del Movimiento fue posible porque nunca rechazaron taxativamente a la democracia. A su vez, la asunción de Néstor Kirchner fue leída como la instauración de una *nueva política* que posibilitaba nuevas oportunidades que «marcaron un punto de inflexión respecto de su dinámica interna, la modalidad de construcción política y la redefinición de su expectativa de futuro» (Natalucci, 2010: 105). La estrategia heterónoma del Movimiento involucró la participación en distintas instancias estatales y el manejo de planes sociales.

En trabajos posteriores (Natalucci, 2012) la autora analizó la trayectoria del Movimiento Evita y señaló la importancia de diferenciar analíticamente conceptos tales como *movimientismo*, gramáticas, nacional y popular y estrategias heterónomas, siendo la idea de gramáticas aquella que le brinda mayores posibilidades para el análisis del fenómeno.

Schuttenberg es otro de los autores interesados en las organizaciones surgidas durante el período kirchnerista, analizando los movimientos Libres del Sur, Movimiento Evita y Movimiento de Unidad Popular. En el proceso de construcción de su objeto de estudio, el autor analizó en forma exhaustiva la producción académica realizada

hasta el momento en relación al vínculo entre las organizaciones sociales y la política estatal. En este análisis, el autor señala que

la mayoría de trabajos que abordan la etapa posterior a 2003 dan cuenta del paso del ciclo de protesta a una mutación de la misma a partir de la asunción de Kirchner, poniendo el acento en cómo desde el Estado se condicionó la acción política de las organizaciones. (Shuttenberg, 2012: 202)

En los análisis han primado visiones *desde arriba*, pero ha sido insuficientemente investigado qué sucede en las bases, es decir, cómo viven las organizaciones esos procesos de mutación. En opinión del autor, un apropiado abordaje de las organizaciones nacionales y populares no puede hacer caso omiso de la historia y tradiciones de las mismas. A través del análisis empírico, Schuttenberg muestra cómo «la dinámica política que comienza en 2003 no es necesariamente para ellas (las organizaciones populares) una ruptura, cooptación y abandono de prédicas revolucionarias, sino que se trata de un proceso de construcción y reconstrucción de las identidades ‘nacionales populares’» (Schuttenberg, 2012: 202). Para el autor, la articulación de los movimientos con el kirchnerismo comprende una decisión consciente y política de parte de las organizaciones; esto lleva a distintos procesos de institucionalización y de organización que modifican la forma de concepción del conflicto popular y la integración política. A partir de un análisis del discurso político de las organizaciones, el autor busca específicamente las dimensiones ideológicas y los límites que las mismas establecen en el campo nacional y popular y en las posibilidades de acción. De este modo, afirma que la configuración identitaria no es algo *esencial* de cada movimiento particular, sino que es una construcción histórica que se reconstituye a partir de los cambios en las relaciones y experiencias políticas: las distintas formas de articulación dependen de las experiencias, legados políticos e interpretaciones².

² El análisis de la obra del autor se basa en una relatoría (en prensa) del Evento Procesos de organización popular en la Argentina contemporánea llevado a cabo en la Universidad del Salvador en diciembre del 2012.

Por su parte, Virginia Manzano (2006) analizó las prácticas que se generan en la gestión de un programa social, y señaló la complejidad que se dio en el proceso «de especialización técnica y apropiación de saberes que torna sumamente difusa la frontera teórica entre Estado y movimientos sociales» (Manzano, 2008: 91). También demostró la importancia de analizar los distintos grados de autonomía que existen en estos movimientos y la configuración de las relaciones de poder. Estos abordajes, por un lado, comparten con los análisis realizados sobre el movimiento piquetero el énfasis en la capacidad de organización y la destreza para encarar una acción colectiva y, por otro lado, coinciden con la intención de hacer del vínculo con el Estado y la posibilidad de autonomía, un eje central de análisis. El interés principal de la autora fue analizar las relaciones que entablaban el Estado y los movimientos sociales. Sus estudios mostraron que las características primordiales de las políticas subalternas eran el permanente desplazamiento espacial y la invención de lugares para la acción política. Desplazamiento y recreación que no son contingentes, sino que se sostienen en la sedimentación de experiencias y tradiciones históricas y cotidianas, activando aprendizajes de la lucha colectiva, del funcionamiento estatal y de los partidos políticos. Manzano considera que la categoría gramsciana de *hegemonía* es útil para conceptualizar la relación entre el Estado y las organizaciones populares: las relaciones que entablan los dos actores debe ser comprendida como una compleja relación entre coerción y consenso. La concepción de hegemonía como proceso de dominación y lucha permiten mostrar cómo pudo formarse un marco común material y significativo que estableció los términos centrales sobre los cuales ocurren la lucha, la impugnación y la demanda.

De este modo, se cuestiona que las políticas sean meros mecanismos de cooptación e institucionalización de movimientos sociales disruptivos, porque los movimientos y el Estado son entidades que se reconfiguran constantemente en los procesos históricos de lucha.³

³ El análisis de la obra de la autora se basa en una relatoría (en prensa) del Evento Procesos de organización popular en la Argentina contemporánea llevado a cabo en la Universidad del Salvador en diciembre del 2012.

Quirós y Vommaro (2011), en base a sus investigaciones, efectúan una reflexión en torno al concepto de *clientelismo*, donde señalan los límites de este concepto para comprender los significados de hacer política en contextos de exclusión. Los autores se diferencian tanto de la perspectiva instrumental (propia de enfoques economicistas y vinculada a la acción racional) como la sociocultural (cuyo principal exponente serían los trabajos de Auyero y su estudio del *habitus clientelar*) del concepto de clientelismo. En este sentido, los autores se oponen a la conceptualización de la politicidad popular como relaciones entre clientes y patronos, y también a la distinción epistemológica efectuada por el enfoque sociocultural que supone una jerarquía superior al interés y al cálculo por sobre el desinterés y el compromiso. Quirós y Vommaro consideran que estas perspectivas se focalizaron en el intercambio y no analizaron «lo que se *hace*». El *hacer* convierte el trabajo dispensado, es decir la contraprestación, transforma los recursos otorgados por la asistencia social en bienes merecidos. A su vez, construye el reconocimiento social y gubernamental del *referente*. Por otro lado, la dimensión de actividad del *hacer* genera rutinas y sentido que permiten comprender la relación de la gente con la política popular. Finalmente, esta concepción del *hacer* permite entender la dimensión de trabajo con la que se nombra la participación política: trabajo social y trabajo político.

Los trabajos señalados, al igual que los analizados para las etapas anteriores, utilizan principalmente estudios cualitativos basados en entrevistas en profundidad y análisis de los documentos producidos por las organizaciones y etnografías. Los estudios de caso han sido la estrategia metodológica prioritaria para el análisis de los diferentes movimientos y organizaciones analizadas. Cabe señalar la diversidad de autores que desde diferentes disciplinas, ciencias política, antropología y sociología, han planteado ideas similares en tanto la necesidad de superar enfoques de años previos vinculados a la idea de *cooptación* o *clientelismo*.

Conclusiones

Hemos realizado un somero recorrido por cuestiones clave de los estudios sobre movimientos sociales en los últimos años. Las modificaciones en las relaciones entre estos y el Estado, ha provocado mutaciones también en los conceptos y términos utilizados: algunos deben ser repensados; otros, modificados. También se debe trabajar en construir nuevas perspectivas que ayuden a reconsiderar las organizaciones populares y sus complejas prácticas. Consideramos que para el estudio de este tipo de organizaciones es central recuperar una mirada longitudinal de los fenómenos, que permita vincular los procesos microrelacionales al interior de los barrios con circunstancias de carácter macrosocial como el rol del Estado, el tipo de políticas sociales llevadas a cabo y las características del contexto económico. El abordaje longitudinal permite observar que la vida organizativa de los barrios presenta rupturas y continuidades, y que los actores se vinculan de diferentes maneras de acuerdo al contexto político-económico. En la reconstrucción de la historia de las organizaciones populares se observa que los conceptos utilizados, que parecerían caracterizar diferentes períodos, son útiles como herramientas heurísticas para definir la vida organizativa de los barrios, siendo un desafío para el investigador el desarrollo de andamiajes conceptuales que no anulen los desarrollos anteriores pero que lo complejicen señalando las nuevas configuraciones que adoptan los fenómenos. Juzgamos necesario trascender visiones maniqueas (autonomía/heteronomía), para poder ser capaces de establecer conceptos que, aun funcionando como herramientas heurísticas, permitan comprender dinámicas que ciertamente suponen relaciones de poder y asimetrías, pero también de solidaridad, identificación y apoyo; dinámicas que además se desarrollan no solo en el barrio sino también, muchas veces, al interior del aparato estatal. Han sido los trabajos realizados a partir del 2003 aquellos que han estado más preocupados en superar visiones estigmatizantes de las organizaciones y movimientos sociales, a la luz del estudio de organizaciones/movimientos que comienzan a vincularse de una forma diferente con el Estado.

Asimismo, es crucial recuperar para el estudio de este tipo de fenómenos una perspectiva relacional (Auyero, 1997; Forni, 2001) que permita analizar la importancia de las relaciones entre los vecinos, los vínculos de confianza que se establecen, la conformación de redes de organizaciones al interior del barrio y las vinculaciones que también se establecen con el afuera. Consideramos que también es importante estudiar las distintas relaciones que se entablan entre organizaciones y el Estado, a fin de comprender las diferencias en las dinámicas que se establecen. Es importante además incorporar en el análisis la visión de los actores estatales, de forma tal de poder captar de una forma más enriquecedora los vínculos entre unos y otros.

A diferencia de autores que estiman que la multiplicidad de estudios de caso se traduce en un conocimiento acotado y producción parcial de la investigación científica, pensamos que los buenos estudios de caso proporcionan una forma de analizar grandes estructuras y procesos que involucran distintos aspectos en base a evidencia empírica. Todo esto es fundamental para generar teorías de alcance medio. Creemos que tanto las metodologías de este tipo como las cuantitativas, las cuales no han sido utilizadas en la mayor parte de los casos, pueden aportar elementos fundamentales para comprender -y reinterpretar- el fenómeno analizado.

BIBLIOGRAFÍA

- Auyero, J. (1997). *Favores por Votos*. Buenos Aires: Losada.
- _____(2001). *La política de los pobres*. Buenos Aires: Manantial.
- _____(2007). *La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Biglieri, P. y Perelló, G. (comp.) (2007). *En el nombre del pueblo. La emergencia del populismo kirchnerista*. Buenos Aires: Universidad Nacional de San Martín.
- Blaustein, E. (2001). *Prohibido vivir aquí. Una historia de los planes de erradicación de villas de la última dictadura*. Buenos Aires: Comisión Municipal de la Vivienda.
- Brusco, V.; Nazareno, M. y Stokes, S. (2004) «Vote Buying in Argentina». *Latin American Research Review*, (pp. 66-88), Vol. 39, 2.
- Campetella, A.; González Bombal, I. (2000). «Historia del Sector sin Fines de Lucro en Argentina». En Roitter, M. y González Bombal, I. (comp.). *Estudios sobre el sector sin fines de lucro en Argentina*. CEDES-Johns Hopkins University.
- Cortés, M. (2010). «Movimientos sociales y Estado en el «kirchnerismo». Tradición, autonomía y conflicto». En Massetti, A., Villanueva, E. y Gómez, M. *Movilizaciones, protesta e identidades políticas en la Argentina del Bicentenario* (pp. 97-119). Buenos Aires: Nueva Trilce.
- Cravino, M. C. (2001). *La propiedad de la tierra como un proceso. Estudio comparativo de casos en ocupaciones de tierras en el Área Metropolitana de Buenos Aires*. Ponencia presentada en Land Tenure Issues in Latin America SLAS 2001 Conference Birmingham. En línea en: <http://infohabitat.com.ar/web/img_d/est_06072009225952_n06072009225724.pdf>. Consultado en mayo del 2010.
- De Piero, S. (2005). *Organizaciones de la sociedad civil. Tensiones de una agenda en construcción*. Buenos Aires: Paidós.
- Filmus, D.; Arroyo, D. y Estébanez, M. E. (1997). *El perfil de las ONGs en Argentina*. Texas: Banco Mundial.

- Forni, P. (2001). «El surgimiento de redes inter-organizacionales y la consolidación de las ONGs de base en el Gran Buenos Aires». *Revista de Ciencias Sociales* (Quilmes) (pp. 217-238), Quilmes, 12.
- Laclau, E. (2005). *La Razón Populista*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Lezcano J. (1997). «La Política de Radicación de Villas en la Capital Federal». En *Serie de Estudios N° 16*. Buenos Aires: Centro de Estudios para el Cambio Estructural.
- Manzano, V. (2008). «Un barrio, diferentes grupos: Acerca de dinámicas políticas locales en el distrito de La Matanza». En Grimson, A., Segura, R. y Ferraudi Curto, C. (comp.). *La vida política en los barrios populares*. Buenos Aires: Prometeo-Universidad de General San Martín.
- Masseti, A. (2010). «La protesta social en la Argentina del bicentenario». En Massetti, A., Villanueva, E. y Gómez, M. *Movilizaciones, protesta e identidades políticas en la Argentina del Bicentenario*. Buenos Aires: Nueva Trilce.
- Ministerio de Planificación Federal, Inversión y Obras Públicas (2013), Convenio Marco Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos. En línea en: <[http:// vivienda.gov.ar/construccion/normativa.html](http://vivienda.gov.ar/construccion/normativa.html)>
- Merklen, D. (2010). *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina 1983-2003)*. Buenos Aires: Gorla.
- Natalucci, A. (2010). «Aportes para la discusión sobre la autonomía o heteronomía de las organizaciones sociales». *Revista Lavboratorio*, (pp. 90-108), 23, FSOC-UBA.
- _____(2011). «Entre la movilización y la institucionalización. Los dilemas de los movimientos sociales (Argentina, 2001-2010)». *Revista Polis*, (pp. 1-17), 28, Universidad Bolivariana, Chile, 2011. En línea en: <<http://revistapolis.cl/28/art11.html>>. Consultado en octubre de 2012.
- Perelmiter, L. (2010). «Militar el Estado. La incorporación de movimientos sociales de desocupados en la gestión pública de las políticas sociales. Argentina (2003-2008)». En Massetti, A., Villanueva, E. y Gómez, M. *Movilizaciones, protesta e identidades políticas en la Argentina del Bicentenario*. Buenos Aires: Nueva Trilce.

- Masseti, A., Villanueva, E. y Gómez, M. (2010). *Movilizaciones, protesta e identidades políticas en la Argentina del Bicentenario*. Buenos Aires: Nueva Trilce.
- Svampa, M. (2005). *La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*. Buenos Aires: Taurus.
- Svampa, M. y Pereyra, S. (2003). *Entre la ruta y el barrio: las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.
- Varela, P. (2010). «Los límites del territorio. Una hipótesis sobre la territorialización de la política». En Massetti, A.; Villanueva, E. y Gómez, M. (comps.). *Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del Bicentenario*. Buenos Aires: Nueva Trilce.
- Vommaro, G. y Quirós, J. (2011). «Usted vino por su propia decisión: repensar el clientelismo en clave etnográfica». *Revista Desacatos*, (pp. 65-84), 36.

Los Movimientos de Desocupados y el Estado: el estilo de gestión de los programas de promoción social implementados por el Movimiento Barrios de Pie en el Ministerio de Desarrollo Social de la nación, durante el período 2003-2009

Agustina Gradin

El proceso de movilización social que acompañó al colapso político-institucional de diciembre de 2001, generó una ampliación del sistema político a la participación de nuevos actores. Esta ampliación se expresó, entre otras cosas, en la vinculación de los Movimientos de Desocupados (en adelante MDS) con el Estado y las políticas públicas, y en su integración política al gobierno. En este marco, con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), algunos MDS se incorporaron a la gestión pública, vinculados directamente a proponer y ejecutar soluciones a sus propios problemas (Masseti, 2010). Desde la mirada de estas organizaciones, la posibilidad de integración política representó un cambio en sus márgenes de acción, resignificando sus prácticas y métodos de lucha, y abriendo un nuevo abanico de posibilidades. En esta línea, consideramos que la incorporación en la gestión de políticas públicas fue una de las formas de institucionalización de su participación en el Estado en el período. Paralelamente, este proceso posibilitó su constitución en actores sociales y políticos con capacidad de incidir en la agenda pública. Consecuentemente con esto, su incorporación a la administración pública comenzó a vislumbrar un nuevo modelo y

una nueva forma de gestión, transformando la práctica cotidiana del Estado y de las mismas organizaciones (Perelmiter, 2010). Es en este novedoso modelo de gestión donde, consideramos, se pueden encontrar algunas claves que nos permitan desentrañar las complejas formas que asumió la relación entre los Movimientos de Desocupados, el gobierno y el Estado, durante el período analizado.

En esta línea de análisis, y en el marco de la convocatoria del IDICSO a repensar y reflexionar sobre las continuidades y rupturas de los procesos de organización popular en la Argentina contemporánea, este trabajo se propone presentar las principales características que asumió el estilo de gestión pública desplegado por el Movimiento Barrios de Pie (BDP) en su experiencia en el Ministerio de Desarrollo social de la Nación durante el período 2003-2009. Nos interesa analizar la forma en que BDP accedió a sus cargos de gestión y su forma de ejercer el poder. De la combinación de estas dos dimensiones caracterizaremos el estilo de gestión desplegado por BDP en su experiencia en el Ministerio. La pregunta que subyace a este trabajo es cómo actuaron los MDS al interior de los organismos públicos y qué impacto tuvo esto en las organizaciones. Este análisis, consideramos, aportará elementos para problematizar las capacidades técnicas y políticas de este actor para gestionar soluciones a sus demandas; y su autonomía, o por el contrario su burocratización, con respecto al gobierno para definir sus cursos de acción.

De esta forma, en un primer momento presentaremos a BDP, enfocándonos en su trayectoria política en relación con el Estado y las políticas sociales, con el objetivo de analizar el proceso de integración al gobierno del entonces Presidente, Néstor Kirchner. En un segundo momento, analizaremos los principales elementos de la forma de ejercicio del poder y el estilo de gestión desplegado por BDP en su experiencia en el Ministerio. Para esto presentaremos avances provisionarios del trabajo de campo¹ desarrollado en el marco

¹ El trabajo de campo se realizó en dos etapas. Una primera etapa entre Julio y Septiembre del año 2010 donde se realizaron un total de 20 entrevistas semi-estructuradas a integrantes de BDP que se habían desempeñado en diferentes roles dentro del Ministerio. La segunda etapa se realizó entre Abril y noviembre de 2012, donde se realizaron un total de 10 entrevistas en profundidad a militantes y funcionarios del Ministerio. Las entrevistas fueron contrastadas y complementadas con el análisis de

del proyecto de investigación *Limitaciones, contradicciones y potencialidades de la relación entre el Estado y los Movimientos de Desocupados. Éxitos y fracasos de esta relación en la construcción de un modelo de desarrollo inclusivo*, del Programa de Estado y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina. Por último, en las reflexiones finales plantearemos algunas consideraciones sobre el enfoque del estilo de gestión, para analizar las continuidades y rupturas en las formas de organización popular y su relación tanto con el Estado, las políticas públicas y el sistema político.

El Movimiento Barrios de Pie: del piquete al organigrama del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

El Movimiento Barrios de Pie nació a fines del año 2001, cuando un sector de la central de Trabajadores Argentinos, auto denominado CTA de los Barrios, se separó de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV). La CTA de los Barrios había surgido en el año 2000 como iniciativa de un grupo de militantes vinculados a la corriente nacional Patria Libre² y a la agrupación Juvenil Venceremos³, que a partir del desarrollo de comedores comunitarios en el conurbano bonaerense, la capital federal y del interior del país, fueron consolidando una incipiente organización territorial de extensión nacional. Entre los años 2002 y 2004, Barrios de Pie tuvo un fuerte crecimiento en cantidad de integrantes y extensión territorial, en el marco de la profundización de la crisis social, económica y política que azotaba nuestro país.

fuentes secundarias como documentos institucionales, publicaciones e información recabada de una selección de noticias en los tres principales medios nacionales del período. Producto de este trabajo de campo, realicé mi tesis de maestría en políticas públicas de FLACSO Argentina, que se titula *El proceso de integración política de los Movimientos de Desocupados al Estado en la Argentina Kirchnerista* (En evaluación).

² Corriente Nacional Patria Libre: Organización política de Izquierda Nacional fundada en Córdoba en el año 1987.

³ Rama Juvenil Universitaria de la Corriente Nacional Patria Libre.

La experiencia desarrollada en las *áreas*⁴, convocó a sectores de la clase media a participar del desarrollo territorial del movimiento, y se constituyó en un importante antecedente de gestión social, que luego fue retomado en la experiencia de gestión pública. La gestión de las diferentes actividades, requería de recursos humanos, materiales y simbólicos para la consecución de objetivo. La organización y capacitación de *promotores* comunitarios a partir de la educación popular, fueron experiencias que le permitieron al movimiento adquirir herramientas, conocimientos y técnicas en gestión pública desde ámbitos no estatales. Esta forma de organización le permitió, según Natalucci (2010), fortalecer su expansión territorial, ampliar su vinculación con los sectores medios y construir una representación social legítima. Estos elementos favorecieron lo que la autora denomina como la *etapa de institucionalización* de BDP, y que se inscribe dentro del primer gobierno kirchnerista (2003-2007). A su vez, esta red de trabajo constituida por promotores y profesionales de los sectores medios posibilitó comenzar a entablar relaciones con el Estado nacional, provincial y municipal desde el territorio. Esta institucionalización del movimiento reorganizó el campo de acción de BDP y del Estado.

El proceso de integración política: la forma de acceder al poder

En el año 2003, BDP interpretó que se abría una nueva etapa política con un gobierno que «parec(ía) alejarse de la ortodoxia neoliberal de los 90» y que «algunos de los intereses de los sectores populares podr(ían) concretarse desde el Estado»⁵. Esta caracterización del gobierno de Néstor Kirchner los llevó a repensar su estrategia política, pasando de la cons-

⁴ En el territorio, BDP se organizó alrededor de *Centros Comunitarios* con el objetivo de construir una organización que inscriba a los comedores populares y a todas las actividades que allí se realizaban, con un abordaje integral de todas las problemáticas sociales. De esta manera, todos los centros presentaron un esquema organizativo similar, compuesto por un coordinador/a general y *Áreas* de trabajo. Estas últimas estuvieron vinculadas a problemáticas generales de todos los barrios, y su objetivo fue el desarrollo de actividades orientadas a la solución de las mismas. Las temáticas sociales que se abordaron fueron Salud, Educación Popular, Género, Comunicación Comunitaria, Derecho Popular, Cultura popular, Juventud, Micro emprendimiento y Vivienda. En los *centros*, el desarrollo de todas las tareas fueron garantizadas a través del trabajo colectivo de los vecinos, de docentes, estudiantes, y profesionales.

trucción a partir de la protesta y la confrontación a una estrategia de acumulación basada en la gestión territorial de políticas sociales estatales.

Diferentes trabajos académicos han analizado el proceso de integración de BDP al gobierno Néstor Kirchner (2003-2007). Desde diferentes miradas (Biglieri, 2008; Cortés, 2010; Masetti, 2010 y 2011; Natalucci, 2010; Perelmiter, 2010, Schuttenberg, 2012) se desentrañaron las condiciones sociales, políticas e ideológicas que posibilitaron la inscripción de los MDS, y entre ellos BDP, dentro del entramado organizacional kirchnerista. Obviamente, su acercamiento político al gobierno posibilitó su incorporación en la gestión pública. Esto se vio expresado en diferentes estrategias político-electoral de BDP⁶. Estas respondieron a la necesidad de construir alianzas para conseguir representación institucional por la vía electoral, y fueron orientadas tácticamente hacia adentro del kirchnerismo. Sin embargo, no fueron exitosas. Esto se evidenció en los escasos o nulos candidatos propios en las listas a legisladores nacionales tanto en las elecciones del 2005 y 2007, donde BDP, de la mano de la Corriente Nacional Patria Libre primero y del Movimiento Libres del Sur después, participó de las listas oficiales. En 2007, por primera vez, Libres del Sur consiguió dos bancas en la Cámara de Diputados Nacionales: una por la 3° sección de la provincia de Buenos Aires y otra por la provincia de Córdoba. En este mismo período, dicha organización también consiguió algunas representaciones menores en algunas provincias y municipios⁷.

⁵ Entrevista a Jorge Ceballos publicada el 23 de Mayo de 2006 en Diario *Página/12* en línea en <<http://pagina12.com.ar/diario/elpais/1-67258-2006-05-23.html>>.

⁶ La conformación del Frente de Organizaciones Populares y el acto en el Luna Park junto con el espectro de organizaciones sociales, progresistas y peronistas no PJ, en el mes de Octubre de 2004; el Frente Patria Para Todos en vísperas de las elecciones de medio término del 2005, o el lanzamiento del Movimiento Libres del Sur en abril de 2006.

⁷ En las elecciones legislativas de 2005, dentro del acuerdo con el Frente para la Victoria, compite y asume por una banca en la legislatura provincial de la Provincia de Buenos Aires, Laura Abelardo, responsable nacional del área de Salud de Barrios de Pie. En el 2007 BDP consigue una banca en la legislatura de la Provincia de Salta y en 2009 en la Provincia de Chaco. En el ámbito municipal, BDP y libres del Sur, en el 2005 consiguen ingresar un Concejal en la localidad de Lanús, Lomas de Zamora y Avellaneda de la Provincia de Buenos Aires, y un concejal en la capital de la Provincia de Salta. Para las elecciones de 2007, se le suman un concejal en la ciudad capital de la Provincia de Neuquén y un concejal en la localidad de Esteban Echeverría de la Provincia de Buenos Aires. (Datos obtenidos a partir de las entrevistas realizadas y del análisis de los principales Diarios Nacionales).

En base a estos elementos podemos decir que la escasa representación política de BDP en el armado electoral kirchnerista puso en evidencia que la estrategia de construcción *transversal*⁸, no se correspondió con el armado electoral de las elecciones de 2005, 2007 y 2009, donde claramente continuaba existiendo un peso relativo muy importante de las estructuras peronistas tradicionales (Mocca, 2009). Sin embargo, esta misma estrategia de acercamiento, de vinculación al proyecto nacional del gobierno y de incorporación a la gestión, pero no de integración política a una estructura orgánica kirchnerista, le permitió mantener niveles de autonomía lo suficientemente amplios como para dejar su huella en el estilo de gestión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

La experiencia de gestión en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: la forma de ejercer el poder de BDP

La relación de BDP con las políticas sociales nacionales se puede rastrear desde fines de la década de los '90 a través de la implementación de programas de asistencia a la desocupación como el Programa Trabajar (PT) y, posteriormente, el Programa Jefes y Jefas

⁸ Entendemos por *Transversalidad* una forma alternativa de representación y de construcción de un nuevo espacio de poder y de consenso frente a la crisis de legitimidad de los partidos tradicionales y de la dirigencia política en general. En este marco general, Torre (2004) señala «¿De qué hablamos cuando hablamos de transversalidad? Por medio de esta palabra, puesta en boga por la prensa, se hace referencia a la operación política puesta en marcha por el presidente Kirchner con vistas a incorporar a su empresa política a sectores de la izquierda peronista y no peronista marginales a las estructuras del partido Justicialista. Esa operación persigue dos objetivos. El primero, dotar al presidente Kirchner de recursos partidarios propios para compensar el déficit de apoyos organizados que exhibió al llegar al gobierno. Recordemos algo ya sabido: la mayoría de los votos que lo colocaron en la presidencia no le pertenecían en primera persona; eran más bien votos que respondían a quien apadrinó su candidatura, Eduardo Duhalde, el caudillo peronista del Gran Buenos Aires. El segundo objetivo de la operación política de la transversalidad es más ambicioso y consiste en utilizar a los sectores de la izquierda peronista y no peronista para impulsar una transformación del partido Justicialista, desplazando las ramas viejas del aparato partidario y promoviendo un viraje hacia la izquierda, congruente con las credenciales setentistas levantadas por el presidente Kirchner.»

de Hogar Desocupados (PJJHD), el Programa de Empleo Comunitario (PEC). Como señala Massetti (2011), la implementación de estos programas de transferencias condicionadas de ingreso, que se caracterizaron por incluir en sus diseños un componente de contraprestación laboral o comunitaria, impactaron en la trayectoria política de las organizaciones de desocupados. En este sentido, fortalecieron su capacidad de organización y movilización territorial en un marco de la interpelación constante al Estado como proveedor de recursos mínimos para su subsistencia.

Este esquema de relación tuvo un giro, en términos de Massetti (2011), cuando a partir del 2003 se incorporaron al diseño de las políticas sociales, estrategias de fortalecimiento de capital social, la economía social y el desarrollo local, dando un salto en el tipo de programas que se implementaban. Se combinaron los programas masivos de transferencia condicionada de ingresos, con programas de promoción social como el Programa Manos a la Obra. Este programa se constituyó en el paradigma de este nuevo tipo de diseño ya que implicaba la transferencias de sumas importantes de dinero (un subsidio promedio rondaba los 5.000 y 10.000 pesos), directamente a las organizaciones sociales para la implementación de proyectos socio-productivos. Esta nueva concepción de los programas sociales impactó nuevamente en la trayectoria política de las organizaciones, aumentando sus recursos organizativos y su capacidad de movilización. BDP fue una de las primeras organizaciones que participó en el programa Manos a la Obra, accediendo a través de diferentes asociaciones civiles armadas para gestionar con el Estado, a una serie de proyectos de financiamientos de emprendimientos textiles y alimentarios. Estos proyectos fueron desarrollados por el Área de Economía Social de la organización, creada con el fin de la implementación de los emprendimientos. De esta forma, podemos decir que en este período previo a su incorporación directa en la gestión del Ministerio, la relación entre BDP y las políticas sociales se caracterizó por: la implementación de programas de transferencia condicionada de ingresos, que le permitieron ampliar su base de organización y su capacidad de movilización; y por la implementación de proyectos socio-productivos, que le permitieron

recibir financiamiento directo para la organización, dando un salto de calidad en el tipo y alcance de su construcción.

Estas estrategias sufrieron un tercer giro cuando, a partir del acercamiento político de BDP al gobierno de Néstor Kirchner, fueron convocados a *sumarse* a la estructura de gestión del propio Ministerio de Desarrollo social de la Nación. A mediados del año 2004, su coordinador nacional, Jorge Ceballos, fue convocado por Alicia Kirchner, Ministra de Desarrollo Social de Nación, para ocupar el cargo de Director Nacional de Asistencia Comunitaria (DNAC) de dicho Ministerio⁹. La experiencia de gestión en dicha Dirección, le permitió a BDP adquirir conocimientos, saberes y capacidades, así como formar cuadros políticos para dicha tarea. De la DNAC dependían la Dirección de Apoyo Logístico y Emergencia Social, la Dirección de Asistencia Directa a Organizaciones (DADO), la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DASE), la Coordinación del Tren de Desarrollo Social y Sanitario, y la Coordinación del Área de Asistencia Directa e Inmediata¹⁰.

⁹ En la Resolución conjunta N° 35/2004 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de la Secretaría de la Gestión Pública de la Presidencia de la Nación, con fecha del 4 de Junio de 2004, se estableció la reorganización, derogación y creación de nuevas unidades ejecutoras dentro de la estructura ministerial, de acuerdo al proceso de transformación del rol del Estado, y a los objetivos y líneas estratégicas definidos por el Ministerio. En este marco, entre otras unidades, se crearon la Secretaría de Gestión y articulación cuyo objetivo general era la construcción del modelo de gestión social estratégico e integral sustentado en interacción y articulación con otros organismos del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, desde una mirada territorial y transversal de las problemáticas sociales. Dependiendo de dicha Secretaría, se creó la Dirección Nacional de Asistencia Comunitaria, para la cual se incorporó Jorge Ceballos como Director Nacional.

¹⁰ Cada Dirección de línea o coordinación respondía a objetivos particulares. Por ejemplo, la DADO tenía por objetivo fortalecer las organizaciones sociales y de base mediante el subsidio de proyectos de fortalecimiento y capacitación en tres ejes de acción: desarrollo de infraestructura (construcciones, refacciones, etc.), capacitación (capacitando a las personas con las cuales estas organizaciones trabajan) y equipamiento (equipos, herramientas e insumos que les permite llevar adelante esa función). La DASE estaba orientada a resolver los problemas de salud de personas que no tuvieran obra social, de condición humilde y que su municipio y provincia no pudiera dar respuesta a la situación, la demanda podía ser pequeña (un remedio muy simple) hasta un trasplante de elevado costo, imposible de acceder para una

En acuerdo con la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional, y por iniciativa de BDP, la DNAC integró sus diferentes líneas de acción bajo la estrategia de intervención en el territorio denominada como las *Jornadas Comunitarias*, enmarcadas dentro de una política integral que apuntaba a la promoción social, el reconocimiento de la dignidad y los derechos de las personas. Sus objetivos eran: impulsar nuevas formas de intervención comunitaria, construyendo junto a los vecinos organizaciones sociales e instituciones, espacios en los que la gente pudiera participar y reflexionar sobre sus problemas y posibles soluciones; y fomentar alternativas que recuperaran el saber popular; que consideraran a las habilidades y capacidades productivas como pilares de la economía social; que revalorizaran el trabajo artesanal, la creatividad y esfuerzo cotidiano por hacer realidad sus proyectos. A partir del contacto con organizaciones sociales, sus referentes e instituciones de la comunidad, se planificaban acciones conjuntas, se realizaban entrevistas domiciliarias para atender a la demanda, se creaban espacios de articulación y participaciones como *mateadas* y reuniones, con el objetivo de abordar integralmente las necesidades y demanda de cada comunidad. Si bien esta estrategia de intervención implicó una novedad en términos del modelo de gestión de las políticas sociales en comparación al paradigma gerencial de la etapa anterior, su impacto real en términos de cobertura de la población objetivo fue mínimo. De hecho, según el Informe de Gestión 2003-2004, únicamente 590 familias participaron de las Jornadas Comunitarias en diferentes localidades. Si bien excede este trabajo realizar una evaluación de impacto de dicha estra-

familia. La Dirección de Apoyo Logístico se encargaba de llevar toda la logística de aquellos reclamos que se canalizaban a través del Ministerio. Atendía principalmente, las catástrofes humanas y sociales como las inundaciones, sismos, etc. El Tren llevaba los programas del Ministerio a aquellos lugares municipios muy pequeños - en algunos casos, ni municipios sino parajes - donde muchas veces el Estado no llegaba. Recorría tres zonas del país, el Noroeste Argentino (que llega hasta Tucumán), Cuyo (San Juan, Mendoza y San Luis) y el Sur (de Bariloche a Viedma). Por último, el Área de Asistencia Directa e Inmediata estaba compuesta por un equipo de trabajadores sociales, y estaba a cargo de llegar al territorio frente a los pedidos que se hubieran hecho al Presidente o la Ministra.

tegia, debemos señalar que parte de los problemas que se presentaron en la implementación respondían, según las entrevistas realizadas a trabajadores de la Dirección, a cuestiones vinculadas al contexto y disputas políticas que caracterizaron el período 2003-2005¹¹.

Sin embargo, conforme a una valoración positiva de la gestión desarrollada por BDP en la DNAC, se comenzaron a abrir diferentes espacios dentro del Ministerio, donde se fueron incorporando militantes de dicha organización con diferentes responsabilidades, funciones y posibilidades de acción¹². En Noviembre de 2004, el Ministerio convocó a un grupo de organizaciones, entre ellas BDP, para «transitar juntos el desafío de construir la propuesta del Programa de Promotores Territoriales para el cambio social»¹³. Dicho programa fue una iniciativa de la propia Ministra y en él se incorporaron varios militantes de BDP en diferentes espacios y funciones: desde el Co-Coordinador Nacional del Programa, 12 Facilitadores Nacionales, 33 Provinciales, un centenar de Promotores territoriales *ad honorem*. Este Programa fue recorriendo diferentes espacios en el organigrama del Ministerio, hasta consolidarse como Dirección de Promotores Terri-

¹¹ La disputa política hacia adentro del oficialismo por el armado de las listas de legisladores en Octubre de 2005, que enfrentó al kirchnerismo con el duhaldismo, tiñó las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno y hacia adentro del propio Estado. Según Mocca (2009: 29) «La operación de reformulación del sistema de partidos pareció alcanzar un punto de inflexión cuando en 2005, Kirchner decidió enfrentar a la estructura formal del PJ en la provincia de Buenos Aires, después de rechazar la propuesta de Duhalde para la distribución de la lista de candidatos. Con el triunfo de Cristina Kirchner sobre *Chiche* Duhalde por más de veinte puntos en la competencia por la senaduría nacional parecía afirmarse el liderazgo del presidente, en detrimento de la máquina tradicional del peronismo. Sin embargo, el triunfo – basado principalmente en la popularidad del matrimonio presidencial – no prescindió del apoyo de un conjunto de intendentes del conurbano bonaerense, expresión conspicua de la conformación de la estructura territorial clientelística del peronismo».

¹² Según la información recolectada en las diferentes entrevistas, durante el periodo de gestión de la Dirección Nacional, BDP consiguió ingresar una cantidad de 20 militantes como trabajadores en el depósito del Ministerio, y varios militantes en otras direcciones nacionales de la mano de acuerdos políticos con otros sectores.

¹³ En *Construcción Participativa en el Estado, Relato de una experiencia* Programa de Promotores Territoriales para el cambio social, Dirección Nacional de Formación de Actores Territoriales, Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

toriales, dependiente de la Dirección Nacional de Formación de Actores Territoriales de la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular, en el año 2008.

En ese mismo período, BDP, a través de su rama juvenil Jóvenes de Pie, se integró a la dirección Nacional de Juventudes. En la misma se integraron la cantidad de 4 militantes a cumplir diferentes funciones, entre ellos Alberto Vivanco, quien formó parte de la coordinación de la DINAJU durante el período; y Daniel Menéndez, quien sin tener nombramiento se desempeñó como Director del Área de Proyectos y Programas de la misma durante el período 2006-2007. Sus líneas de acción más importantes fueron el Programa de Formación para la Participación Claudia Falcón, y las Jornadas Juveniles Solidarias *Argentina Somos Todos*, con gran repercusión mediática y capacidad de convocatoria y movilización de jóvenes.

El 30 de Junio de 2006, Ceballos fue nombrado Subsecretario de Organización y Capacitación Popular. Desde sus comienzos, se adoptó un formato que reproducía la lógica de organización de BDP, incorporando a la gestión pública otra mirada sobre las formas de construcción del Estado en el territorio (Natalucci, 2010). En este sentido, y en lo que respecta a la estructura interna, la organización en áreas temáticas vinculadas a problemáticas sociales, aspecto característico de su forma de organización social, se adoptó como eje ordenador de los diferentes programas, planes y proyectos que se desarrollaron. De esta forma, la organización puso a disposición de la gestión pública, su bagaje de experiencias y saberes construidos en la gestión social de su organización en el territorio. De hecho, los principales responsables de la construcción de las *áreas* fueron incorporados al equipo de trabajo de la *subse*.

La subsecretaría impulsó un abanico de programas sociales, cada cual relacionado a un área temática diferente. Entre ellos, se destacaron el Programa de *Alfabetización en Salud*, orientado a la formación de Promotores en Salud Comunitaria; el Programa *Contálo Vos*, de promoción y fortalecimiento de iniciativas de comunicación Comunitaria; el Programa *Haciendo Historia*, orientado a OSC y cuyos objetivos eran promover autonomía, capacidad de gestión y de incidencia en las políticas públicas; y el Programa *Vínculos, experiencias*

comunitarias en Educación popular, que financiaba proyectos que desarrollaban prácticas comunitarias.

A fines de 2008, a raíz de una serie de diferencias planteadas por BDP en diferentes comunicados de prensa¹⁴, se retiró de sus espacios de gestión en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de otros ministerios. La subsecretaría, que había sido «creada a medida» (Perelmiter, 2010: 138) para esta organización, sigue actualmente a cargo de otra organización, desarrollando algunos de los programas impulsados durante este período.

El estilo de gestión: una compleja relación entre la forma de acceder y la forma de ejercer el poder.

Todo nuevo proyecto político, y sus actores, introduce tensiones, reacomodamientos y ajustes en el aparato estatal, derivados de las posibilidades e inclinaciones de cada unidad burocrática. De esta forma, el análisis del proceso de implementación de una política pública, no puede dejar de considerar la compleja relación entre las características del régimen político y de su burocracia estatal en un determinado tiempo y espacio. El régimen refleja y reproduce determinados patrones de conducta y de distribución del poder, cuya configuración influye de algún modo en el desarrollo de la administración del aparato del Estado y del manejo de las políticas sociales. En esta línea de análisis, Mazzuca (2002) nos propone repensar el concepto de régimen político propuesto por O'Donnell (1977) y Oszlak (1980)¹⁵, en base a dos dimensiones de análisis diferenciables analíticamente, y que permiten caracterizar de forma más precisa, en función de nuestros objetivos, los estilos de gestión que presenta cada régimen. Las

¹⁴ Vinculadas principalmente a una lectura de *pejotización* de la alianza de gobierno, en relación a la decisión de Néstor Kirchner de asumir la presidencia del Partido Justicialista en ese año, según se indican en los comunicados de prensa de la organización.

¹⁵ Oszlak (1980), siguiendo a O'Donnell (1977) define el régimen político como la modalidad de reclutamiento o acceso a los roles superiores del Estado, y a los mecanismos de representación política vigente.

dos dimensiones que el autor diferencia analíticamente son los mecanismos de acceso al poder y la forma de ejercicio del poder. Los mecanismos de acceso al poder nos proponen pensar en las características generales del sistema político, su forma de gobierno (distribución vertical y horizontal del poder), sus actores (el sistema de partidos políticos, el marco de alianzas, las identidades partidarias y las características de los liderazgos), y las reglas de juegos (atribuciones y competencias de cada poder, el sistema electoral y de representación política). Estos mecanismos de acceso determinan quiénes, cómo y por cuánto tiempo ejercen el poder en una sociedad determinada¹⁶, pero no nos aportan elementos para pensar cómo lo hacen. Esta segunda dimensión, el ejercicio del poder, nos invita a reflexionar sobre la dinámica interna del gobierno y de su aparato ejecutor administrativo, el Estado. La forma de ejercicio del poder se encuentra condicionada por los saberes y valores propios de quienes acceden al poder, sus lógicas, racionalidades y prácticas que ponen en práctica en su paso por el Estado, y por su forma de vinculación con la sociedad civil y el sector privado. Las estructuras de autoridad y las formas de circulación de la información al interior de la burocracia, la distribución de atribuciones, competencias y responsabilidades al interior de las diferentes áreas del Estado, los criterios técnico-administrativos que las organizan y controlan, la forma que adquiere el flujo de bie-

¹⁶ Los diferentes marcos de alianzas, los actores políticos y los interlocutores sociales validados o soslayados en cada período, las decisiones políticas de fortalecer o favorecer a alguna organización en desmedro de otras, son elementos que perteneciendo al nivel de régimen político, condicionan e influyen en los diferentes estilos de gestión desplegada en cada política. A nivel macro, influyen en el estilo de gestión de lo público desde el Estado nacional. A nivel micro, establecen qué cuestiones sociales se interviene, qué actores tienen la posibilidad de acceder a cargos en la gestión y de qué nivel, qué tipo de políticas públicas se implementan, cuáles son sus características, potencialidades e impactos. A su vez, cada actor se incorpora a la gestión pública con sus propias experiencias, trayectorias, capacidades e intereses. En esta línea, las lógicas, sus rutinas, sus formas de organización y de resolución de problemas, son diferentes elementos que constituyen las prácticas de gestión que los diferentes actores involucrados despliegan en el marco de una política. Dichas prácticas son resultado de la propia experiencia de los diferentes actores en los procesos de gestión, que si bien se adecúan al marco normativo que las rige, lo transforman y resignifican a partir de su propia experiencia.

nes materiales y financieros entre las diferentes dependencias, las características de sus recursos, su procedencia y formas de distribución, son algunas de los elementos vinculados a las características de la burocracia que condiciona la forma de ejercer el poder.

De la combinación de ambas dimensiones, los mecanismos de acceso y la forma de ejercicio del poder en una sociedad, y de las características de los actores que las desarrollan, podemos diferenciar estilos de gestión que determinan el proceso de implementación de una política pública.

El estilo de gestión de BDP en la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular.

En este apartado presentaremos las principales características del estilo de gestión desplegado por BDP en su experiencia como integrante del Ministerio de Desarrollo. Para esto retomaremos, como ya señalamos, los elementos más significativos que expresan este estilo, y que fueron desarrollados en la tesis de Maestría *El proceso de integración política de los Movimientos de Desocupados a la gestión del Estado en la Argentina kirchnerista. Un análisis del estilo de gestión de los Programas Promotores Territoriales para el cambio Social y de Fortalecimiento y Participación de las Mujeres Juana Azurduy durante el período 2003-2009* (FLACSO, 2013). Según el trabajo de campo realizado, el estilo de gestión de BDP se caracterizó por presentar tres dimensiones analíticas¹⁷ que permiten dar cuenta de la compleja articulación entre la forma de acceder y la forma de ejercer el poder. Debemos señalar, asimismo, que el estilo de gestión aquí analizado es producto y expresión del proceso sociopolítico que comenzó con la crisis de representación y legitimidad de 2001 y 2002, continuó con la asunción y gobierno de Néstor

¹⁷ Estas dimensiones son construcciones puramente analíticas ya que en la práctica no se encuentran diferenciadas. Pensar el estilo de gestión en términos de su dimensión simbólica, dimensión relacional y dimensión procedimental, nos permite desarrollar y reconstruir conceptualmente los sentidos, valores y lógicas que construyen la lógica política de acción de BDP en la implementación de políticas públicas.

Kirchner (2003-2007) y su convocatoria a la transversalidad como nueva forma de construcción política y social.

La primera de ellas, la dimensión simbólica, se encuentra en estrecha relación con las características que asumió el régimen político durante la etapa analizada. La incorporación de nuevos actores como los MDS, dieron como resultado una redefinición de la mirada generalizada sobre la cuestión social, el rol del Estado y sus actores. Esta redefinición, que operó a nivel político y social reorganizando las categorías del debate público y de la agenda política, tuvo su correlato en la forma en que se pensaron desde la gestión de las políticas sociales estos tres elementos. De esta forma, podemos decir que el estilo de gestión de BDP se caracterizó por presentar una mirada integral de las cuestiones sociales como construcciones sociales e históricas, productos de determinantes sociales, y basadas en el enfoque de derechos de la política social. Presentó, también, una concepción del rol del Estado como el principal actor en el desarrollo social y territorial, abierto a la participación de las organizaciones de la sociedad civil. E introdujo un nuevo actor motorizador de las políticas sociales, el militante social con inserción territorial. Estos tres componentes pueden ser sintetizados en una idea que caracterizó la forma de implementación de los programas. *Militar el Estado*¹⁸ se constituyó en una consigna que estructuró la forma en que se implementaron los diferentes programas en el territorio y la forma en que BDP se desempeñó al interior del aparato estatal.

La segunda dimensión, denominada relacional, debe rastrearse en las características asumidas por las relaciones de autoridad entre el sistema político y la burocracia en el período. La debilidad institucional que caracterizó a sus programas, expresados en sus encuadres institucionales difusos y con bajos niveles de autonomía operativa para el desarrollo de actividades, junto con la fragilidad normativa en la cual se inscribieron y funcionaron, favorecieron una fuerte gravitación de aspectos subjetivos en la implementación de los programas. Algunos de estos aspectos fueron: las relaciones políticas entre los diferentes

¹⁸ Ver Gradin (2012).

actores intervinientes, sus disputas y acuerdos; el peso de la iniciativa personal o la voluntad, la capacidad individual y el compromiso para el desarrollo de los programas. Estos elementos influyeron claramente en el estilo de gestión. Este presentó una racionalidad de tipo política que estructuró la lógica de acción dentro de los marcos de cada programa; una relación abierta y participativa con la sociedad, tanto con los vecinos como con las otras organizaciones e instituciones de la sociedad civil, y basada en la necesidad política de mostrar inserción territorial y capacidad de movilización y convocatoria; una relación con las otras dependencias estatales que tendió a la articulación intersectorial, aun en un marco desfavorable debido a los prejuicios existentes por parte de sectores de la administración pública; una relación *buena aunque conflictiva* con la burocracia representada tanto por los trabajadores de planta como por los técnicos profesionales; y por último, una relación con su propia organización social donde esta se constituyó en uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de los programas, tanto en términos territoriales como en términos de recursos humanos. Estos indicadores operaron de diferente manera en la construcción de una idea que estructuró las relaciones y alianzas políticas de BDP al interior de la gestión. *El Estado en disputa* se constituyó en lógica que guió la forma de actuar de este actor dentro del Estado y en la implementación territorial de los programas.

La dimensión procedimental, por último, se desprende de las características que asumieron las relaciones burocráticas funcionales y materiales en la experiencia analizada. La condición, experiencia y formación de los militantes sociales que llevaron adelante la implementación de los programas, junto la planificación y las modalidades organizativas desarrolladas, fueron elementos que condicionaron la forma de *gestionar* el Estado. Estos elementos se inscribieron en un escenario de informalidad normativa general, y de ausencia o escasez de recursos materiales y financieros para desarrollar las actividades de los programas, así como de precariedad laboral de sus integrantes. Podemos decir, entonces, que estos elementos definieron una modalidad de implementación de los programas, se caracterizó por presentar: un formato de organización colectiva hacia el interior de cada programas; un conjunto de tecnologías de gestión basadas en

la participación social, la organización social, la promoción de derechos y la instalación de capacidades en la comunidad para la búsqueda colectiva de soluciones, la utilización de formatos de intervención con fuerte visibilidad pública, como las campañas nacionales o las jornadas de intervención pero de bajo impacto social, un manejo de las normas y procedimientos del Ministerio basada en la búsqueda de alternativas que permitieran adecuar los objetivos de cada programa a las mismas, o viceversa; y una utilización de los recursos materiales y financieros determinados por la relación política con la estructura de autoridad, con las posibilidades brindadas por las normas y procedimientos establecidos por el Ministerio. Estos elementos conformaron la forma de *gestionar* un proyecto, un evento, una intervención, o la vida interna del propio programa. *Gestionar* fue la forma en que BDP buscó adecuar sus acciones políticas a la racionalidad técnica burocrática del Ministerio.

Principales aspectos del estilo de gestión de BDP

En este marco general, podemos afirmar que el estilo de gestión de determinado programa puede ser pensado como un atributo del actor específico que lo implementa, en función de su forma de acceder al poder y su forma de ejercerlo. A su vez, cada estilo expresa una forma de articulación particular entre las dimensiones política/subjetivas y técnica/administrativas, de forma que la lógica de acción de este actor se encuentra condicionada por una de las dos dimensiones por sobre la otra. Esta particular forma de articulación entre ambas dimensiones condicionó la forma de implementación de una política pública determinada, limitando sus alcances y su impacto en función de sus objetivos. Por otro lado, el estilo de gestión de BDP no se puede entender, como ya hemos señalado, sino en el marco del estilo de gestión del Ministerio¹⁹ durante el período analizado, ya que fue quien habilitó la

¹⁹ Según documentos públicos del Ministerio y las entrevistas realizadas, podemos pensar en un estilo de gestión donde el compromiso social y la gestión pública como forma de resolución de los problemas, se combinan en la idea de *técnico-social*. Este aspecto fue desarrollado con mayor profundidad en la tesis de maestría de la autora.

posibilidad de que emergiera este estilo particular. En el caso de los programas implementados por BDP, su ingreso a la gestión como parte del armado oficialista con posterioridad al proceso electoral²⁰, su marco de relaciones y alianzas políticas²¹, y su relación conflictiva con la burocracias y con las normas y procedimientos²², basada en desconfianzas mutuas, desconocimientos, falta de capacitación y experiencia, construyeron un estilo de gestión que en caracterizamos como político-militante. Este estilo se caracterizó por presentar una mayor gravitación de los aspectos subjetivos por sobre los aspectos técnicos implicados en el proceso de implementación de una política pública. La voluntad, la capacidad individual del militante, el compromiso con el *proyecto nacional* y con los problemas de su comunidad, aparecieron como elementos diferenciadores de este estilo. A su vez, este introdujo elementos novedosos para pensar la implementación de programas. La organización, la participación y la territorialidad fueron tecnologías que cobraron relevancia pública en este período y que luego fueron retomadas por otras iniciativas del Ministerio.

La introducción del militante social como agente de gestión de los programas se contrapuso a la figura del *técnico* del estilo gerencial y al *burócrata* del estilo tradicional en políticas sociales. Este nuevo agente combinaba la racionalidad política como lógica de acción, con tecnologías y formatos de intervención social del repertorio de los

²⁰ Cabe recordar que en las elecciones Presidenciales del año 2003, BDP llamó a sus partidarios a votar en blanco bajo la consigna de que todos los candidatos *eran lo mismo*. Recién a partir de las primeras medidas de gobierno, y luego de un fuerte debate interno, a principios del año 2004 la organización decide hacer pública su simpatía con el gobierno.

²¹ El marco de alianzas de BDP previo a su incorporación a la gestión se limitaba a la mayoría de los Movimientos de Desocupados y movimientos sociales que protagonizaron la resistencia al modelo neoliberal, la central de trabajadores Argentinos (CTA), y a las organizaciones de centro izquierda e izquierda nacional. Su relación con el aparato peronista territorial era conflictiva y de confrontación en la mayoría de los distritos.

²² La relación de los militantes de BDP con los trabajadores del Ministerio fue caracterizada por diferentes entrevistados como conflictiva, básicamente porque los militantes carecía de experiencia y de conocimiento de la normativa y los procedimientos. Esta cuestión tensionaba la relación, generando conflictos de intereses entre ambos actores, donde BDP se esforzaba por conseguir resultados, mientras que los trabajadores se esforzaban por hacer cumplir las normas.

MDS. Tanto el técnico como el burócrata expresaron una particular tensión entre la dimensión política y la administración. Mientras que el burócrata nos remite a la preeminencia de los criterios legales administrativos por sobre el objetivos particular, el técnico expresa la importancia de los resultados de las políticas por sobre los aspectos técnicos. El militante, podría decirse, también prioriza los resultados por sobre los aspectos legales administrativos, pero se compromete con las *causas* que asume como propias. Esta imagen del militante como el agente que gestiona soluciones claramente depende de su voluntad, compromiso y capacidad para movilizar recursos, es decir de la capacidad política más que de las cuestiones formales. En contraposición, el técnico del estilo gerencial se encuentra asociado a otro referente: el *gerente* de los programas sociales quien debe velar por los recursos disponibles y su implementación eficiente, eficaz y económica. Este técnico, devenido en *gerente*, se diferencia del militante ya que este último pone el acento de su trabajo en los fines por sobre los medios.

Por otro lado, la incorporación de militantes generó tensiones con los técnicos y con los burócratas del Ministerio. Los prejuicios y la desconfianza con que los trabajadores del Ministerio recibieron a BDP fueron reconocidos por varios entrevistados. Desde los trabajadores de planta permanente y transitoria, tanto técnicos como administrativos, así como los funcionarios provenientes de otras fuerzas políticas, se mostraron incómodos con la incorporación de BDP a la gestión del Ministerio. Esto se debió a diferentes razones, entre las cuales se destacan: su pertenencia al mundo de los Movimientos de Desocupados, su falta de experiencia en gestión pública, o su trayectoria política. Sin embargo, según se puede inferir de su trayectoria adentro del Ministerio, su capacidad de gestión política y su experiencia, le significaron a BDP, acceder a más espacios de gestión. ¿Cómo administrar esta tensión entre la racionalidad política que guiaba las acciones de BDP en los programas analizados, y la racionalidad técnico-burocrática del esquema normativo-legal del Ministerio? Esta tensión devino en un reacomodamiento de los objetivos de BDP a las posibilidades habilitadas por el esquema normativo. Su falta de experiencia en la gestión pública, así como la ausencia de técnicos o pro-

fesionales dentro de sus militantes, y su ímpetu por *resolver* las problemáticas sociales, le implicaron muchas veces no observar las normas legales y accionar desde los márgenes de este esquema. Esta falta de observancias de las reglas formales puso en diferentes oportunidades en riesgo el normal desarrollo de la gestión. A su vez, esta situación reforzaba aquella imagen de los militantes como *seguidores de expedientes* ya que debían tener particular cuidado con garantizar que *en los papeles, las cosas salgan*. Esta práctica, difundida en el Ministerio en general, nos permite suponer que existía una fuerte brecha entre lo que se dejaba constancia en los expedientes con lo que realmente se hacía. La experiencia realizada por BDP construyó una síntesis entre la lógica política presente en sus prácticas de gestión y la lógica burocrática administrativa propia del Estado. Esta síntesis se fue construyendo a partir de la práctica y la adaptación de dicha organización a las normas y procedimientos requeridos para la gestión pública de recursos materiales, financieros o simbólicos.

Reflexiones Finales

En el inicio de este trabajo nos interrogábamos sobre cómo la incorporación de los MDS a la gestión pública había modificado al Estado, y a su vez, cómo esta experiencia los había transformado. Para acercarnos a nuestro interrogante, decidimos enfocarnos en el estilo de gestión que emergió de la combinación de la forma de acceder y la forma de ejercer el poder de BDP en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante el periodo 2003-2006. Este enfoque nos permitió poner en evidencia algunas continuidades y rupturas en la forma de participación de los MDS en las políticas sociales entre la actual etapa y el modelo neoliberal. Entre ellas debemos destacar las transformaciones ocurridas a nivel de las mediaciones entre el Estado y la sociedad, y los cambios en la relación entre lo técnico y lo político en las políticas públicas del período.

La integración política de los MDS, su *normalización* a partir de la canalización de sus demandas o la colonización del Estado por su parte, nos introducen a dos debates que atraviesan la producción aca-

démica sobre el tema. Por un lado, la capacidad de este actor social para generar estrategias de acción autónomas del gobierno de turno, y por otro lado, su capacidad para dar respuesta a sus propias demandas desde la estructura del Estado. Los límites impuestos por las relaciones y alianzas políticas, así como las tensiones entre sus capacidades de acción y los condicionamientos impuestos por las capacidades institucionales, condicionaron el desempeño de los MDS en la gestión pública.

En relación a los cambios en las mediaciones entre el Estado y la Sociedad, debemos señalar que las transformaciones ocurridas a partir del año 2003, implicaron una ampliación de la participación a sectores sociales que no se encontraban representados a través de las mediaciones clásicas de las etapas anteriores. Siguiendo a Maneiro, podemos afirmar que:

deshabilitadas las modalidades más desarrolladas de imbricación entre el Estado y la sociedad por la crisis relativa de los movimientos sindicales, se abre una brecha que intenta ser suturada con modalidades territoriales de ejercicio del poder estatal, pero con las crisis de estas últimas se conforma una estructura de oportunidades que permite el surgimiento de ciertos movimientos sociales interpelados por la cuestión del desempleo estructural. (Maneiro, 2012: 94)

Entre estas nuevas mediaciones emergieron los Movimientos de Desocupados como agentes con capacidad de organización, articulación y canalización de las demandas de la sociedad movilizada. A estos se les propuso, a partir de 2003, incorporarse a la gestión pública para diseñar y ejecutar soluciones a aquellas demandas. Este nuevo rol asumido por las organizaciones de desocupados, entre los cuales se encuentra BDP, redefinió las mediaciones entre el Estado y la sociedad civil al involucrar un nuevo canal de vinculación entre ambos. Los cambios ocurridos en los aparatos, recursos y cursos de acción del Estado, expresaron las transformaciones ocurridas a nivel régimen político y en las mediaciones con la sociedad civil. Las trans-

formaciones en las políticas públicas y en los estilos de gestión fueron fruto de la forma que la sociedad encontró para procesar conflictos y consensos en escenarios y con actores en constante tensión.

La revalorización de la militancia como forma de gestión de lo público, y la relocalización de la política como el espacio natural de resolución de los conflictos y de canalización de las demandas, evidenciaron un preeminencia de los aspectos políticos por sobre los técnicos en el proceso de implementación de políticas públicas. De este proceso fueron parte, entre otros actores, los MDS dentro del Estado.

BIBLIOGRAFÍA

- Biglieri, P. (2008). «Nuevas conceptualizaciones sobre populismo en América Latina. La emergencia del Kirchnerismo». En Fernández, A. y Lesgart, C. (comps.). *La democracia en América Latina: partidos políticos y movimientos sociales*, (pp. 63-99). Rosario: Homo Sapiens Ediciones. 2010.
- Cortés, M. (2010). «Movimientos sociales y Estado en el Kirchnerismo. Tradición, autonomía y conflicto». En Massetti, A.; Villanueva, E. y Gómez, M. *Movilizaciones, protesta e identidades políticas en la Argentina del Bicentenario*. Buenos Aires: Nueva Trilce.
- Gradin, A. (2012). «Militar el Estado: las prácticas de gestión del Movimiento Barrios de Pie en el Programa de Promotores para el cambio social durante el periodo 2005-2008». *Revista Perspectivas de Políticas Públicas*, (pp. 98-125), 3 Julio-Diciembre 2012.
- Maneiro, M. (2012). *De encuentros y desencuentros: Estado, gobierno y movimientos de trabajadores desocupados*. Buenos Aires: Biblos.
- Massetti, A. (2010). «Limitaciones de los movimientos sociales en la construcción de un Estado progresista en Argentina». *Argumentos, Revista de Crítica Social*, 12, 2010. En línea en <<http://revistasig.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/article/view/118/108>>
- (2011). «Las tres transformaciones de la política pública asistencial y su relación con las organizaciones sociopolíticas (2003-2009)». *Entramados y Perspectivas Revista de la carrera de Sociología*, (pp. 9-36). Volumen 1, 1, Enero-Julio 2011.
- Mazucca, S. (2002). «¿Democratización o Burocratización? Inestabilidad del acceso al poder y estabilidad del ejercicio del poder en América Latina». *Araucaria Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, Año 4, 7, Primer Semestre de 2002.
- Mocca, E. (2009). «Clivajes y actores políticos en la Argentina democrática». *Revista Temas y Debates*, (pp. 11-32). 17, Agosto de 2009.
- Natalucci, A. (2010). «Aportes para la discusión sobre la autonomía o heteronomía de las organizaciones sociales». *Revista Laboratorio*, (pp. 90-108), 23, FSOC-UBA. 2010.

- O'Donnell, G. (1977). «Apuntes para una Teoría del Estado». Buenos Aires: Doc. CEDES. CLACSO, 9.
- Oszlak, O. (1980). «Políticas públicas y regímenes políticos: Reflexiones a partir de algunas experiencias latinoamericanas». En *Cuadernos de trabajo CEDES*. Buenos Aires, Argentina.
- Perelmiter, L. (2010). «Militar el Estado. La incorporación de movimientos sociales de desocupados a la gestión de políticas sociales. Argentina (2003-2008)». En Massetti, A.; Villanueva, E. y Gómez, M. *Movilizaciones, protesta e identidades políticas en la Argentina del Bicentenario*. Buenos Aires: Nueva Trilce.
- Schuttenberg, M. (2012). «Los movimientos sociales nacionales y populares en la etapa kirchenrista: una revisión crítica de la bibliografía sobre el período». *Intersicticios Revista Sociológica de Pensamiento Crítico*, (pp. 197-207), Vol. 6, 2, 2012.
- Torre, J. C. (2004). «La operación política de la transversalidad. El Presidente Kirchner y el Partido Justicialista». Texto revisado de la intervención en la Conferencia «Argentina en Perspectiva» organizada por el Centro de Estudiantes de la Universidad T. Di Tella, noviembre 2004. En línea en <<http://clubsocialista.com.ar/scripts/leer.php?seccion=articulosyarchivo=127>>

Disputas en torno al trabajo político: cooperativas, militancia y reconocimiento en el Programa Ingreso Social con Trabajo en un municipio bonaerense

Laura Fiszman

El contexto político

Para octubre de 2011 una etapa se cerraba en el Municipio luego de dos años de gestión del que fuera Secretario de Gobierno y reemplazante del Intendente luego de su abrupta renuncia. Yo consideraba que el escenario político tal como lo había conocido cambiaría inminentemente a partir de la asunción de mis interlocutores en sus nuevos cargos públicos.

A partir del cierre de mi trabajo de campo, seguí los resultados de las elecciones presidenciales, provinciales y municipales a través de distintos medios de comunicación como diarios, revistas, blogs, perfiles de Facebook, además de un flujo permanente de llamados telefónicos, mensajes de celular y correos electrónicos con mis informantes clave.

El 23 de octubre el escenario político era de festejo, ya que el Frente para la Victoria había obtenido el 66,22% de los votos en la disputa por la intendencia, 12 concejales y 5 consejeros escolares, logrando ocupar todas las bancas. No solo era el Intendente con ma-

por porcentaje de votos en la historia del Municipio, sino que había logrado superar el apoyo popular obtenido por su antecesor, quien en 2003 había alcanzado el 40,31% y en su interrumpido mandato 2007-2009 solo el 17,78%.

El 10 de diciembre, el Intendente asumía su cargo, emulando las palabras con las que lo hiciera Cristina Fernández de Kirchner (CFK)¹ un día antes:

Yo, [...] juro por Dios, la Patria, mi familia y los vecinos del Municipio, sobre estos Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de intendente del Municipio. Si así no lo hiciere, que Dios, la Patria, mi familia y *todos los vecinos del Municipio* me lo demanden.

Ya distanciado de su antecesor, evaluó su gestión como una etapa en la que habían logrado

poner en práctica una *filosofía diferente* de lo que venía sucediendo en el Municipio [...] Entendimos que el Municipio es una institución que es propiedad de todos los vecinos, logramos que esté de pie, que esté presente, que esté en todos los barrios para gestionar, avanzar, para crecer.

continuando con lo expresado en 2009 al poner en funciones a su gabinete:

Al iniciar mis tareas al frente del Municipio, tenía bien en claro cuál era mi objetivo: reconciliar a la política, a esta administración municipal con los vecinos mediante el trabajo y la recuperación de los valores, del profesionalismo y la transparencia. (18/12/2009)

¹ «'Si así no lo hiciere, que Dios, la Patria y él me lo demanden', alteró, con voz emocionada, la fórmula de jura la presidenta Cristina Kirchner. Acto seguido improvisó y le pidió a su hija Florencia que le colocara la banda presidencial, desdibujando el papel del vice saliente Julio Cobos» (*Página/12* del 11/12/2011 "Vamos a seguir trabajando con todos y por todos por una Argentina más justa").

y que repetiría en su blog en 2011: la política y los vecinos eran

conceptos cuyo significado real parecía poco claro, pero había una aparente certeza: eran contradictorios entre sí. Sin embargo, estaba convencido de que la política es la única herramienta para transformar la realidad de los vecinos, que la política es algo hermoso, si y sólo si está en función de los vecinos. Y que hay una palabra clave que oficia de nexo entre la política y los vecinos, un punto de encuentro cotidiano: *gestión*. (16/07/2011)

Si bien Lenarduzzi hace un análisis de los aspectos *renovadores* de los nuevos intendentes ganadores en 2007, considero que las características que identifica son aplicables a los discursos y las prácticas que desarrolló el intendente durante los dos años de finalización del mandato. La autora señala que los nuevos intendentes remarcaban su contraste con los antiguos, quienes habían usado prácticas clientelares, por ello defendían propuestas de mejor gestión, transparencia, modernización y superación del pasado, fomentaban una relación directa con los vecinos, reivindicando la identidad de vecino-militante y de la juventud peronista en la política, y promovían una transformación que transfería al espacio local el proyecto kirchnerista nacional y que respondía a su vez a las demandas de los vecinos del municipio en sus problemas cotidianos.

El Intendente en la apertura de sesiones del HCD en 2012 sostenía que

como parte fundamental de nuestro proyecto de gobierno quisiera destacar la creación de la Secretaría de Modernización y Transparencia, que marca un hito fundacional para el Municipio. Pretendemos instalar un nuevo concepto en la cultura organizacional. Buscamos dotar a la Comuna de un sistema de trabajo moderno, eficiente y dinámico, que dé respuesta a las exigencias del crecimiento vivido por la Argentina desde 2003 y que nos ponga a la altura de las transformaciones llevadas a cabo a nivel nacional. Pretendemos que la modernización de la gestión pública se traduzca en una mejora concreta en los

servicios que brinda el estado municipal con impacto directo en la calidad de vida de los vecinos. Por eso también buscamos acercarnos más a nuestros ciudadanos, abriendo nuevos canales de comunicación, atendiendo reclamos y sugerencias de cada vecino.

El discurso de la renovación política se basa en un elemento negativo (cambio de personas, de generaciones, de modos de construir, de estructuras) y en una narrativa del líder sobre su trayectoria, que permite aglutinar a actores de diversos tipos y que aparece como un modo de organización política. Esta narrativa es interpretada y representada en el espacio público, en el marco de la militancia apasionada, conjugada con un proyecto esperanzador, en la que la historia personal convive con la personificación del cambio (Lenarduzzi, 2010).

En el cierre de campaña en octubre de 2011 hacía referencia a su lugar como joven político y a su historia personal de enfermedad, que lo mantuvo públicamente alejado durante la mayor parte de su campaña a intendente:

La emoción superó la alegría. Primero, quiero agradecerles el acompañamiento. Elegí el cierre con todos los dirigentes, candidatos y jóvenes, porque quiero decirles «gracias» mirándolos a los ojos. Me sentí, de corazón, muy bien representado estos meses, quiero devolverles lo que hicieron estos meses por mí y por todo el Municipio [...] En este proyecto en el año 2003, Néstor dijo viva la rebeldía, viva la juventud, viva el intercambio de ideas. Son ustedes los máximos responsables de una generación que no debe permitir que vuelva a pasar lo que pasó en la Argentina; los que tienen que defender la bandera del Partido Justicialista. La mejor forma de reivindicar a Perón y al Movimiento es trabajando, haciendo y profundizando el kirchnerismo (19/10/2011).

La identidad de los nuevos líderes se relaciona a su vez con un modo de concepción de la organización política, como un vínculo con: la militancia y las organizaciones que acompañan la gestión y

que llevan adelante las campañas; el electorado peronista en tanto vecinos; y un bagaje de tradiciones y modos de hacer del peronismo que se dan por entendidos (Lenarduzzi, 2010).

Por otra parte, se destaca el uso del Intendente de los medios de comunicación para posicionar su figura y su trabajo en forma masiva (particularmente noticieros en la televisión pública y privada, radios, diarios, Facebook, Twitter, entre otros²). Los políticos deben trabajar para ponerse en escena con ayuda de símbolos, a través de la biografía personal, marcando las características que aportan una distinción ventajosa frente a otros, poniendo de relieve su armonía con el grupo al que desea representar y encarnar las distintas ideas del futuro que existen en ese grupo (Meichsner, 2007 citando a Collovald 1988, 1990 y 1999). En otras palabras, los políticos pueden remarcar su capital político a través de los medios de comunicación, ya que son capaces de formar, estabilizar o dañar su reputación, prestigio y aceptación.

El intendente basó su discurso de asunción en 2011 sobre los tres ejes que le permitieron generar la base de legitimación necesaria para imponerse en las elecciones: la descentralización municipal, la inversión en obras públicas y el protagonismo de los militantes, ejes que no pueden comprenderse sino en mutua relación.

La descentralización municipal en el formato de ocho delegaciones se basó en la división del territorio en grupos de barrios para su administración y buscó construir una relación directa con los vecinos. Las delegaciones tenían a su cargo, por un lado, funciones de baja complejidad, pero que requerían de una logística minuciosa y diaria: obras de pavimentación, plantación de árboles, arbustos y flores, repotenciación lumínica, hormigón en las calles, recolección de bolsas de barrido, ramas, montículos y escombros, zanjeo y corte de pasto, arreglo y colo-

² En la primera revista electrónica a menos de un año de asumir la Intendencia, el intendente avisaba a los vecinos: «Quiero comunicarme con cada vecino sin intermediarios. Por eso abrí un blog, donde escribo sobre ideas de gestión o artículos sobre temas de interés público; una cuenta de Twitter donde diariamente cuento cuál es mi agenda para que sepan qué estoy haciendo; y también estoy en Facebook para que puedan agregarme como amigo, lo cual se los agradezco de corazón, y escribirme directamente. Leo todos los mensajes» (*Diario de la Municipalidad*, Año 1, Vol. 1).

cación de luces, mantenimiento de plazas y espacios públicos, limpieza de basurales crónicos, limpieza de arroyos, etc. Asimismo, recibían los reclamos de los vecinos cuya cuadra requería algún tipo de tarea y contaban con un equipo de profesionales de la psicología y el trabajo social de la Secretaría de Desarrollo Social que brindaba atención al vecino. Por otro lado, colaboraban en la coordinación de obras públicas que abarcaban desde la construcción de centros recreativos, jardines maternos, canchas de bochas, fútbol y volley, anfiteatros o sendas peatonales hasta la canalización de arroyos.

Tanto las funciones más sencillas como las obras públicas de mayor envergadura se basaron en la mano de obra aportada por los cooperativistas del Programa Ingreso Social con Trabajo (PRIST), que en la Delegación de Villa Amelia implicaba la coordinación de un grupo de referentes de 40 cooperativas de la zona que incluían 1.500 cooperativistas.

Mapa de actores

La delegación de Villa Amelia, inaugurada por el anterior Intendente en 2009 y reinaugurada en 2011, fue un espacio de disputa en el que se jugó la pertenencia al proyecto político del Intendente y por lo tanto las jerarquías en la futura estructura municipal. El delegado y los referentes políticos de las cooperativas trabajaron para fortalecer los pilares de su mandato a través de la constitución de la delegación como *modelo de gestión* eficiente y llevando a cabo obras públicas de mediana y baja complejidad en los seis barrios comprendidos. Por su parte, el Intendente consagró a través de distintos actos de institución a quienes fueron parte activa de su proyecto.

Las reuniones semanales de la Mesa de cooperativas del PRST en la Delegación Municipal elegida eran el dispositivo regular de organización de una heterogeneidad de actividades que me permitieron introducirme en el mundo de la política local. La dinámica de las reuniones me fue guiando hacia quienes serían mis sujetos de estudio: los referentes políticos de las cooperativas y sus relaciones con diversos actores de peso en la municipalidad (Frederic, 2000).

Mi intención era lograr una muestra significativa en la que mi estudio de caso fuese pertinente para dar cuenta de cierto haz de relaciones en un sistema social (Ellen, 1984 citado por Guber, 2005). Los *referentes*, palabra nativa con la que se autodenominaban, eran los representantes de las cooperativas. Se trataba de unos 40 hombres y mujeres en similar proporción, militantes políticos de diversas agrupaciones: Corriente de Liberación Nacional Kolina, Movimiento Evita, Segundo Centenario, Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Movimiento Libres del Sur, Polo Obrero, entre otros, o una relación directa con figuras dentro del Frente para la Victoria, como el Intendente o funcionarios menores. La mayor parte de los referentes tenían una trayectoria como conductores en organizaciones comunitarias: clubes deportivos, centros culturales, jardines maternales, sociedades de fomento, comedores comunitarios, iglesias, mutuales, y otros espacios como escuelas o locales de los partidos políticos.

Lo interesante en la trama de relaciones que se tejía a partir de la Mesa estaba vinculado con el crecimiento político de los referentes a partir del Programa. La pertenencia a un movimiento de escala nacional no era una adscripción duradera en el tiempo, y en la Mesa de Villa Amelia se podía observar que los referentes de las cooperativas cambiaban de agrupaciones año a año. A partir de esta constatación, recorté una vez más mi muestra en función del protagonismo que tenía un grupo de referentes, de la relación estrecha y comprometida que habían construido con el Delegado y con los demás referentes de la Mesa, lo cual me llevó a elegir cinco casos.

En la presente ponencia aparecen algunos de ellos, a veces de forma tangencial y en otras, central: Lorenzo y Silvia del Club San Martín, Elías, el referente de la cooperativa 22 de noviembre, Griselda y su pareja del Club Belgrano.

Programa Ingreso Social con Trabajo (PRIST)

El Programa Ingreso Social con Trabajo fue diseñado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y formalizado en septiembre de 2009 mediante la Resolución 3182/09. Como fundamento, se señalaba que

en esta etapa [...] surge como imperiosa necesidad gestionar nuevas herramientas e instrumentos específicos que coadyuven a consolidar un mecanismo central de redistribución del ingreso, propiciando [...] al empleo como instrumento de integración social, resultando primordial el accionar de cooperativas y mutuales, como vías de ingreso al empleo. (Res. 3182/09: 2)

Y tenía como objetivo

la promoción del desarrollo económico y la inclusión social, generando nuevos puestos de trabajo genuino, con igualdad de oportunidades, fundado en el trabajo organizado y comunitario, incentivando e impulsando la formación de organizaciones sociales de trabajadores, quienes tendrán a su cargo el desarrollo de las acciones precedentemente. Asimismo y como objetivo indirecto, el trabajo generado redundará en el desarrollo e incremento de la calidad de vida de los sectores más vulnerables, a través del apoyo a las comunidades más desprotegidas. (Res. MDS 3182/09:10)

El PRIST estaba destinado a personas sin ingresos formales en el grupo familiar, ni prestaciones de pensiones, jubilaciones, nacionales, ni otros planes sociales, a excepción del programa de Seguridad Alimentaria (Guía, 2010:7), que conformarían cooperativas de 60 integrantes como mínimo articuladas por capataces, un orientador social y -en el caso de ser necesario- un arquitecto, un ingeniero o un maestro mayor de obra.

El presupuesto del PRIST fue de \$3.787 millones para el ejercicio del año 2010, mismo valor que se asignó para el año 2011, representando el 19% del total presupuestado para el MDS para el año 2011 (\$19.883 millones). En el año 2010 se crearon 117.275 puestos de trabajo y la meta para el año 2011 fue sumar 100.000 nuevos (Cogliandro y Melamud, 2010).

El distrito estudiado recibió entre la primera y la segunda fase del Programa 5.000 puestos y luego 3.530. El MDS firmó convenios con el Ente Ejecutor, en nuestro caso el Instituto del Trabajo (IT en ade-

lante), a quien transfería un subsidio no reintegrable sujeto a rendición de cuentas para el financiamiento de obras públicas de mediana y baja complejidad que demandaran mano de obra intensiva.

Comprender qué es o cómo funciona el IT, quiénes lo conforman y representan, cobra una gran relevancia al intentar comprender las disputas en torno a la regulación del crecimiento político entre los referentes de las cooperativas del PRIST y los funcionarios del gobierno municipal.

Si bien se trata de una agencia del Estado Municipal resulta compleja su caracterización en el entramado de relaciones de poder. Según la ordenanza que lo reglamenta, se trata de un organismo descentralizado creado por el Municipio a comienzos de la década del '90 con el objetivo de constituirse en un centro de vinculación para la asistencia integral del trabajo, la producción y las actividades empresariales.

El IT maneja un gran presupuesto, dadas sus funciones de ente ejecutor de varios programas sociales (Programa de capacitación de seguro y empleo, Programa Jóvenes con más y mejor trabajo, Plan Más Vida, Plan Envión, Plan Agua+Trabajo, PRIST, entre otros) creando el escenario propicio para la acumulación de poder político no sólo del Intendente, sino de muchos funcionarios del IT.

El Estado es el lugar por excelencia de la concentración y del ejercicio del poder simbólico y sus funcionarios tienen el poder de distribuir capital simbólico bajo la forma de cargos y honores concebidos como recompensas y como puestos de responsabilidad que exigen competencias y evocan una carrera burocrática. El Estado, a través de sus funcionarios, ejerce un verdadero poder creador a través de los actos de nombramiento

al anunciar con autoridad lo que un ser, cosa o persona, es en verdad (veredicto) en su definición social legítima, es decir, lo que está autorizado a ser, lo que tiene derecho a ser, el ser social que tiene derecho de reivindicar, de profesar, de ejercer (en oposición al ejercicio ilegal). (Bourdieu, 1993)

El IT tiene como Presidente al Intendente del Municipio y como vicepresidente a un contador que ocupa el cargo ininterrumpidamen-

te desde 2003. Las acusaciones de corrupción y clientelismo, en especial esgrimidas desde los medios de comunicación local, pero también desde los funcionarios menores, los referentes políticos de las cooperativas, los cooperativistas y los vecinos son frecuentes.

Para poder abordar la complejidad de una agencia estatal como el IT es necesario destacar desde qué perspectiva lo analizamos. Como señala Frederic (2004), los análisis de fenómenos como el clientelismo y la corrupción suelen destacar su costado negativo y poner en evidencia los problemas relativos a los procesos *incompletos* de modernización institucional y democratización en países como la Argentina. La antropología de la política, por su parte, intenta poner en suspenso ese elemento negativo, comprender sin juzgar, para poder abordar el conocimiento de la alteridad, descubriendo así «una diversidad de vínculos y relaciones que dan existencia a la política contemporánea, y son difícilmente aprehensibles mediante categorías sociológicas preestablecidas» (Frederic, 2004: 27).

Por ello, en el presente trabajo seguimos la propuesta de Frederic, al abordar los modos en que las evaluaciones entre los diversos agentes del campo político configuran la distribución del poder socavando el prestigio y la posición de unos a favor de otros, alejándonos de aquellos rótulos que han sido utilizados para caracterizar a la política municipal como el lugar por excelencia de la *baja política* o la política de los pobres.

En nuestro caso, el acceso a entrevistas en profundidad con la máxima autoridad del IT no era de por sí algo factible. En relación al funcionario que dependía de él directamente, a cargo del PRIST, nos concedió amablemente una entrevista en la cual contestó todas las preguntas desde el más formal protocolo, haciendo un notable esfuerzo por no develar los conflictos y tensiones que se sucedieron en la implementación del Programa. Ahora bien, los registros de las reuniones de la Mesa de cooperativas en las que este funcionario participó en la Delegación, las reuniones a las que convocó a los referentes políticos y cooperativistas en la sede del IT del Parque Industrial así como los relatos de los demás actores sobre sus acciones y dichos, nos permitirán acercarnos a la lógica de esta particular agencia del Estado Municipal que aparece como inextricable a primera vista.

El mapa de actores centrales queda conformado entonces por el Intendente y el Secretario General; el organismo municipal IT encargado de la implementación del PRIST a través de su vicepresidente, funcionarios y empleados; las ocho delegaciones municipales a través de sus delegados y empleados; el delegado de Villa Amelia; los 40 referentes políticos de las cooperativas del PRIST organizados en la Mesa de Cooperativas de Villa Amelia, que incluía a 1.500 cooperativistas.

Actos de institución y reconocimiento social en Villa Amelia

La lucha que opone a los profesionales de la política es la forma por excelencia de la lucha simbólica por la conservación o la transformación de las divisiones establecidas entre los grupos y las instituciones que contribuyen a perpetuarlos legitimándolos.

En efecto, en la lucha política se juega, por un lado, la división legítima del mundo social y la movilización de los grupos, y por otra parte, la utilización de los instrumentos de poder (aparato de las organizaciones sociales, los partidos y/o el Estado).

Los adversarios disponen de armas desiguales, siendo el poder político una forma de reconocimiento, una propiedad que se vuelve simbólicamente eficiente al responder a unas expectativas colectivas, socialmente constituidas, que logra ejercer una especie de acción a distancia, sin contacto físico (Bourdieu, 1997).

El capital político es el producto de actos subjetivos de reconocimiento y, en tanto crédito y credibilidad, no existe sino en y por la representación, en y por la confianza, la creencia. El hombre político sostiene su fuerza política en la confianza que un grupo pone en él. Su capital específico tiene un *valor fiduciario* que depende de la representación, la opinión, la creencia, ya que el hombre político es especialmente vulnerable a las sospechas, las calumnias o los escándalos. Por ello, este capital puede ser conservado solamente al precio del trabajo de todos los instantes que es necesario, acumulando el crédito y evitando el descrédito.

El reconocimiento social de los militantes de Villa Amelia se construye en una red de relaciones sociales con heterogéneos actores polí-

ticos, así como en una variedad de espacios físicos donde se disputa el poder.

Los grupos que se conformaron en estas luchas buscaron constituirse en *líneas* internas del Partido Justicialista del Municipio, heterogéneas y de difícil delimitación, que se crearon en función de la confección de la lista del Frente para la Victoria de cara a las elecciones en 2011 (cargos de intendente, concejales del HDC, concejeros escolares).

Como señala Rosato, cuando se preparan las listas de candidatos frente a las elecciones surgen las *líneas internas*:

Hay *líneas* que existen como *agrupaciones* que tienen un nombre, autoridades y espacios físicos propios (locales). Otras veces la *línea* se conforma sólo a efectos de conformar la *lista* de precandidatos y más allá que triunfe o no en la elección, se diluye posteriormente [...] Las *líneas* pueden surgir de las bases [...] o pueden surgir de un *aspirante* a líder que quiere demostrar su poder convocando a *militantes* [...] En primer lugar, se conforman por oposición a otra *línea* -y en general a aquella que «maneja» el aparato partidario- pero pueden unirse para enfrentar una tercera. En segundo lugar, reúnen en su interior a personas pertenecientes a diferentes ramas o sectores territoriales³ del Partido. Y en tercer lugar, tienen un líder [...] Pero la confección de las *listas* de una *línea* no está únicamente en manos del líder ni este puede imponer los nombres a su arbitrio. Debe consensuar y negociar esos nombres con los *aspirantes* y los *militantes* de su *línea*. (2003: 64)

Las *líneas* se negocian en forma cerrada o *mesa chica* donde se sellan los pactos y los acuerdos, y en forma abierta donde los jugadores buscan expresamente ser observados por los otros y donde el va-

³ El Partido Justicialista está organizado en forma análoga a la organización política administrativa del territorio: nacional, provincial, departamental y barrial, niveles presididos por un Consejo (Superior o Nacional, Provincial, Departamental o de Unidad Básica) con un presidente, vicepresidentes y vocales. La organización territorial está atravesada por una sectorial en Ramas Sindical, Femenina y Juventud (Rosato, 2003).

lor del radio-pasillo por verlos juntos es más fuerte que los acuerdos, comentaba un funcionario. Los espacios públicos donde ambas negociaciones tienen lugar se podrían pensar como círculos concéntricos en función de su ubicación geográfica, en relación a la distancia centro-periferia del edificio municipal.

El núcleo central está constituido por el histórico edificio de la Municipalidad inaugurado en 1938⁴, en el que funciona el HCD, a cinco cuadras del cual se halla la sede del Partido Justicialista, a tres cuadras el IT y algunos restaurantes puntuales. Luego, se distribuyen una serie de espacios como las unidades básicas, la Delegación Municipal Centro, las oficinas descentralizadas correspondientes a algunas secretarías como la de Desarrollo Social, el predio del Sindicato de los Trabajadores Municipales, lugar clave para coordinar operativos que incluyen grandes contingentes de personas, al igual que el Parque Municipal, y el Parque Industrial en el que el IT tiene oficinas y desde el cual se distribuyen los materiales para las obras del PRIST. Todos estos espacios quedan incluidos en la localidad del Centro.

A partir de allí, y en relación al recorte del ámbito físico de mi investigación, el camino Perón marca uno de los límites geográficos de la Delegación de Villa Amelia dentro de la localidad del Centro. La mayor porción de los barrios de la delegación quedan incluidos en la localidad de Villa Belén. La presencia del Estado queda encarnada por excelencia y en forma casi exclusiva en la Delegación. Las 40 cooperativas, cuyas sedes suelen coincidir con organizaciones comunitarias, se constituyen en los otros espacios en los que la política se desarrolla⁵.

Ahora bien, el presente trabajo busca identificar ciertos actos de institución que tuvieron sede en la Delegación de Villa Amelia, en la que el poder fue disputado por el Delegado en tanto representante del Estado municipal y responsable de la coordinación del PRIST en los seis barrios de su injerencia, pero también como representan-

⁴ El primer Palacio Municipal fue proyectado por el arquitecto -----, siguiendo el estilo Luis XIII, habilitado en 1885.

⁵ Cabe destacar que el espacio virtual de las redes sociales cobra una gran importancia en el juego político.

te de los referentes de las cooperativas que lo instituyeron como portavoz. La cuestión política que nos interesa de la figura del Delegado reside justamente en su conocimiento práctico para lograr dominar la anarquía de las estrategias individuales de cada referente y así producir una acción concertada, constituyéndose en su portavoz, hablando en nombre del grupo y en su favor, dándole existencia al presentarlo y representarlo frente a otros actores políticos del Municipio (Bourdieu, 1973).

El Delegado disputó entre 2009 y 2011 su reconocimiento social frente al intendente, que lo consagró como candidato a presidente del Consejo Escolar en las elecciones, lucha en la que fueron claves sus estrategias, encarnadas en prácticas y discursos, y que deben ser interpretadas de una manera relacional, es decir como un juego de oposiciones y distinciones frente a las otras líneas internas del peronismo que aspiraban a ser parte del proyecto del Intendente.

El capital político, en tanto crédito, es un ser-percibido y existe en la relación entre unas *propiedades* poseídas por un/os agente/s y unas *categorías* de percepción que constituyen y establecen categorías sociales basadas en la unión y la separación (los del centro/los de los barrios, los funcionarios/ los militantes, los referentes políticos distritales/los referentes barriales, los del *Plan* que nunca trabajan/ los cooperativistas comprometidos del PRIST, los viejos punteros/los referentes del proyecto nacional y popular), está vinculado a unos grupos y es a la vez instrumento y apuesta de unas estrategias colectivas que pretenden conservarlo o aumentarlo, y de unas estrategias individuales que pretenden adquirirlo o conservarlo, uniéndose a los grupos que lo poseen (delegación de Villa Amelia) y diferenciándose de los grupos que lo poseen poco o carecen de él (otras delegaciones, por ejemplo).

Un acto o rito de institución -como puede ser una nominación de cargo o de honores- «es un acto de comunicación, que notifica a alguien su identidad, en el doble sentido de que se la expresa y se la impone al expresarla ante todos, notificándole con autoridad lo que es y lo que tiene que ser» (Bourdieu, 2008:103). Instituir es consagrar un estado de cosas, dar a conocer una diferencia y al reconocerla darle una existencia social.

La investidura ejerce una eficacia simbólica real en la medida en que transforma a la persona consagrada: transforma la representación que se hacen los demás de ella y su comportamiento; y transforma la representación y los comportamientos de la propia persona. (Bourdieu, 2008: 102)

De Villa Amelia al centro del Municipio

En la presente sección se seleccionaron tres momentos de una serie mayor que permiten situar al lector en el campo político estudiado, en el que las luchas entre agentes están orientadas a transformar la relación de fuerzas que confiere a dicho campo su estructura en un momento dado. La estructura del campo es un estado de las relaciones de fuerzas entre los agentes, o en otras palabras, un estado de la distribución del capital específico (entendido como trabajo acumulado) que se logró en luchas anteriores y que orienta las estrategias futuras. El campo político es el lugar donde se generan, en la competencia entre los agentes, productos políticos, problemas, proyectos, análisis, comentarios, conceptos y acontecimientos (Bourdieu, 1982, 2000).

Siguiendo a Quirós, la gestión de un programa social tiene

esfuerzo incorporado: marchas, manifestaciones, reuniones, llamados, censos, cuantificaciones, inscripciones. Esfuerzo que hace que ese bien, o parte de él, sea percibido como propio por aquellos [...] que pusieron allí algo de sí [...] El tiempo que transcurre entre la formulación de un pedido a un funcionario, y su realización efectiva [...] es tiempo de actividad invertido [...] Sin trabajo invertido, sencillamente esos objetos no están ahí. (2011: 278)

Primer momento: disputas al interior del Estado Municipal.

Entre los operativos de inscripciones del PRIST en 2009 y las elecciones en 2011 se desarrolló el núcleo más importante de mi trabajo de campo. El último día que visité la Delegación de Villa Amelia

ocurrió algo inesperado: el Delegado decidió, ya despidiéndose en cierto modo, que «si era para eso [en relación a mi tesis doctoral] tenía que saber cómo había empezado *todo*».

En efecto, el 27 de octubre de 2011, luego de las elecciones presidenciales en las que fuera reelecta Cristina Fernández, y de las elecciones municipales, en las que fuera ganador el intendente, fue un día muy particular para la finalización formal de mi trabajo de campo. Esa jornada había comenzado con una entrevista en profundidad a Claudio, uno de los referentes de la Cooperativa 22 de noviembre, el asentamiento tomado casi tres años antes, que limitaba con el Balneario Municipal y la Delegación de Villa Amelia.

Descendí del auto al llegar a la Delegación, agradeciéndole por su tiempo. Él se quedó charlando con unos hombres que trabajaban en la construcción del nuevo edificio del ANSES en el predio de la Delegación, en el cual se realizaría un mes y medio más tarde uno de los mayores actos de inauguración de la Presidenta en el Municipio y luego hablaría desde allí en cadena nacional. Ingresé al recién estrenado edificio de la Delegación, sabiendo que la reunión de la Mesa de referentes había sido suspendida por la movilización a Plaza de Mayo en ocasión del aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, a lo cual se sumaba una reunión general en el Consejo del Partido Justicialista del Municipio.

Ahora las oficinas tenían todas sus paredes con ventanas vidriadas lo cual permitía observar el movimiento fuera y dentro de la Delegación. En cuanto el Delegado me vio entrar, me hizo señas para que pase a su oficina. Allí estaban Elías, unos de mis informantes clave y un referente de otra cooperativa. Me consultó cómo estaba, muy amable y me preguntó en qué podía ayudarme. Resultó evidente que para él, mi presencia siempre era por alguna razón puntual (búsqueda de información), más teniendo en cuenta que ese día no había reunión. Le expliqué que había hecho algunas reformulaciones en mi investigación, en la cual la Mesa cobraba protagonismo y por ello necesitaba copia de las actas de las reuniones. Llamó de inmediato a Andrés, su mano derecha en la administración, indicándole que me diera las actas, algunos mapas y la página web donde habitualmente subían los informes diarios de las tareas realizadas por las cooperativas.

Luego de guardar la información, pasé por la oficina del delegado, en la que conversaba con algunos referentes de las cooperativas y empleados, para despedirme y entonces me preguntó más detalles. Me dio la sensación de estar contándole por primera vez, ya que en otras ocasiones le había comentado mis intenciones, pero parecía no preocuparle ni interesarle mucho, aunque siempre estuvo bien pre-dispuesto a darme la información que yo requiriera.

Como comenté al inicio, me expresó que «si era *para eso* tenía que saber cómo había empezado *todo*»: con un especial buen humor me contó que cuando se lanzó el PRIST *se allegaron* a la vieja delegación el vicepresidente del IT y su equipo. El delegado recreó la escena imitando la voz del vicepresidente al estilo del personaje de la película *El Padrino* cuando propuso trasladar la reunión al Instituto de Deportes contiguo al predio, ya que el edificio de la Delegación les parecía precario. El delegado se opuso y preguntó, como suele hacer fiel a los procedimientos y directivas oficiales, dónde debían hacerse las reuniones: ante la respuesta *en la Delegación*, tuvieron que aceptar quedarse. Más tarde, el delegado llamó al Intendente para consultarle cuál era el rol que esperaba de él, si debía ser responsable del Programa o no intervenir. Días más tarde, cuando el vicepresidente convocó a cada delegado en la sede del IT en el centro del Municipio, le entregó una carpeta con información del Programa a cada uno y nadie hizo preguntas. La última carpeta correspondía a Villa Amelia y le aclaró al delegado «que sólo él sería independiente para manejar el Programa ¿Me voy a enterar de lo que hacés?» a lo cual el delegado respondió en lo que sería una constante característica de su estrategia político-burocrática: «No, es mi obligación informarte».

Un año más tarde, el IT convocaba a los delegados para saber por qué no estaba funcionando el Programa: las calles estaban sucias (principal tarea en los primeros meses) y los cooperativistas no se presentaban. De los aproximadamente 8.000 cupos asignados del Municipio, había poco más de 1.000 activos. El vicepresidente les consultó *cuántos tenía cada uno*: Villa Amelia contabilizaba 1.017, las restantes siete delegaciones 100. En función de ese número, el Intendente le daba un plazo de dos meses al IT para que *encontrase al resto* y el vicepresidente dispuso como responsables del Programa a la pareja de Florencia, y a José.

A partir de aquella primera reunión, las relaciones de poder entre la Delegación (el delegado y los referentes de las cooperativas) y el IT generaron un campo de disputas en torno al reconocimiento político de funcionarios y militantes, que llegó a un pico máximo de conflicto en las semanas previas a las elecciones de octubre de 2011.

Segundo momento: de referentes municipales y nacionales.

En el mes de abril de 2011, habiendo designado dos meses antes a Jorge como nuevo responsable del Área de Recursos Humanos dentro del IT para el PRIST (habían nombrado y desplazado al menos tres personas a partir de las disputas con la Mesa de Referentes de Villa Amelia), este participaba de una de las reuniones en la Delegación anunciando que había comenzado a hacer un relevamiento de los cooperativistas. El objetivo era elevar un listado al MDS con los pedidos de *liquidación cero* (suspensión), *altas* y *bajas* solicitados por los referentes a través de los Delegados en función de los informes del presentismo. Incluyó a 1.073 cooperativistas en el distrito en dichas situaciones, de los cuales 627 correspondían a Villa Amelia.

Quince días más tarde del anuncio, el listado -previamente enviado a Nación- fue recibido en la Delegación y revisado por el personal administrativo y los referentes, constatando que había muchos casos de cooperativistas incluidos en las *bajas* que trabajan regularmente en los barrios. A través de una Nota de la Delegación se solicitó a IT la suspensión de la medida, pero los referentes sostuvieron que estos errores eran reiterados y justificaban una protesta masiva y el corte de la calle para solicitar una solución inmediata en el Parque Industrial junto con los cooperativistas afectados. «Disculpame [al Delegado] pero me parece muy bien que trabajes como corresponde oficialmente con notas, pero esto no va más, si nos vienen nuevamente a pretender desprolijar y no reconocer nuestro trabajo, se terminó [...] me gusta la vía administrativa, pero también la vía política» (Gloria, referente de cooperativa). El Delegado apoyada la movilización, pero por su función, dio a entender sutilmente que no podía participar.

Tres días más tarde, cuando arribé a la delegación varios referentes esperaban en el predio, ahora convertido en un conjunto de mon-

tañas de tierra y enormes charcos de barro, ya que habían demolido el viejo edificio para iniciar las obras de la primera delegación diseñada por la nueva gestión del Intendente. Unos minutos más tarde llegaron Silvia -coordinando asuntos de las cooperativas por celular como siempre- y Elías, mis dos informantes clave. Ingresamos a la antigua cocina que provisoriamente funcionaba como oficina del Delegado donde se inició una conversación informal, mientras él y su secretario repartían las copias de las notas pidiendo el alta de los cooperativistas: una nota por la situación de cada cooperativa y una nota general de la Mesa. La general era doble faz, ya que el delegado no quería que «me la desglosen y pierdan el trámite» en el IT.

Partimos hacia la entrada de la delegación, donde nos esperaba un micro escolar ya completo por cooperativistas. Mientras viajamos hacia el predio del Parque Industrial donde tiene una oficina el IT, Griselda avisó que ella y Elías habían pagado el costo del micro, ante lo cual los demás ofrecieron aportar, pero ella acordó que la próxima pagaba otro *compañero*.

Charlando de cuestiones de la vida cotidiana y personales con algunos referentes, llegamos al IT donde había más cooperativistas que habían ido por su cuenta. En total eran unas 60 personas que decidieron ubicarse bloqueando la entrada al predio, compartido por el Municipio con empresas privadas.

Un hombre de seguridad, ya notablemente nervioso, solicitó con diversos argumentos que desbloquearan, pero nadie le prestó atención intencionadamente. Pocos segundos después se presentó una de las representantes del IT que fue desplazada de las reuniones y solicitó que ingresemos, ya que Jorge nos recibiría. Los referentes se opusieron a entrar porque sostenían que *los iban a tener sentados todo el día sin atenderlos*: cortar la entrada era lo más efectivo. En pocos minutos se presentó Jorge, invitándonos a pasar: una de las referentes le respondió que no los había invitado para discutir las bajas cuando correspondía y que ahora no iban a pasar. Jorge, de impecable traje, comenzó a sudar y a elevar la voz, rogando que entren para hablar tranquilos. Los referentes reclamaban las razones de las bajas y la solución inmediata sin ingresar. Con varios listados impresos en la mano, y su asistente secundándolo, argumentó durante un largo rato

que las bajas se debieron a errores administrativos del Delegado de Villa Amelia. La discusión continuó, mientras el sol del mediodía ardía y la entrada de camiones resultaba peligrosa, por lo que finalmente se acordó ingresar a la oficina.

El IT se hallaba en un edificio recién pintado, fresco, con un gran salón central con filas de sillas de plástico enfrentadas a varios escritorios. Por detrás, algunas puertas pequeñas correspondían a las oficinas y un único baño. Los empleados, cansados y otros molestos, miraban a los cooperativistas entrar en orden. El nivel de conflicto se redujo notablemente, tal como lo habían anunciado los referentes. «Una vez que entrás, te tienen ahí sentado todo el día» me decía una referente. Otros referentes, como Claudio, que no se habían sumado a la convocatoria y que estaban haciendo trámites particulares por sus cooperativas, decidieron sumarse al grupo.

Jorge explicó que estaban cumpliendo con una directiva del MDS que solicitaba se distinguiera entre *los cooperativistas que trabajan y los que no*. Siempre se hablaba de unos 8.000, de los cuales *menos de la mitad estaba en las calles*.

Los referentes resaltaron que con cada nuevo responsable del IT aparecían bajas injustificadas y los únicos perjudicados eran los *compañeros*. Jorge dijo que esta era la última vez que sucedería y que él no podía responsabilizarse por lo que había ocurrido antes: se organizaría un operativo la semana siguiente, por delegación, para que cada cooperativista ratificase sus datos y tuviera su legajo en orden. Solicitaba para ello la cooperación de los referentes y los delegados. Todos debían estar relacionados a una cooperativa matriculada, a excepción de *las cuadrillas*, que tendrían la oportunidad de matricularse como cooperativistas en el corto plazo.

Jorge ofreció analizar los casos de quienes estaban presentes para demostrar que las planillas enviadas por el Delegado de Villa Amelia contenían errores: junto a algunas situaciones donde los DNI no correspondían, el cotejo arrojó que la mayor parte de los casos correspondían a cooperativistas que habían pedido por nota el pase a otras cooperativas/referentes en 2010 y 2011, pero el IT no había ingresado estas modificaciones, por lo cual figuraban como *bajas* solicitadas por los referentes originales.

Varios cooperativistas expusieron sus situaciones y conflictos particulares en relación a los viejos referentes, ante lo cual Jorge intervino y dijo que «la política se hacía en otro lado», que cada uno tenía que acordarlo con su referente político, movimiento o el Intendente, así como él lo resolvía en la cooperativa a su cargo.

La reunión se fue diluyendo y se acordó participar del operativo. Antes de subir al micro, Leandro, el hijo Gloria, una referente de Amelia, entrevistó en vivo, vía celular a Elías para un programa diario del Municipio que recogía lo que sucedía en los barrios. Comentó que el Intendente lo escuchaba todos los días, les pasó su celular y quedó a disposición de los cooperativistas.

El operativo, al no poder realizarse en la Delegación por las obras, era de esperarse que se realizase en el histórico Club San Martín de Lorenzo, uno de los referentes de la Mesa de Amelia, bastión en el barrio de Santa María del Movimiento Evita. Sin embargo, el Intendente eligió el Club Belgrano, a dos cuadras del anterior, como un acto de institución pública del reciente lazo que había construido con otros dos referentes de la Mesa, ahora ligados a la Agrupación Kolina y al Intendente.

En efecto, dos cooperativas que allí funcionaban se habían escindido del Movimiento Evita un año antes, luego de dos conflictivos piquetes de cooperativistas frente al IT por falta de pagos. En el mes de enero de 2010, el Intendente hacía una recorrida por Villa Amelia y una persona le avisó a Griselda. «El intendente venía paseando y me le tiré encima del auto, le dije ‘Pará, por favor, ¡pará!’ Paró al lado del arroyo. Le dije ‘Necesito ayuda institucional’. Me citaron para el martes, fuimos los dos. Le dije que necesitaba restaurar el Club». Daniel agregó «En enero fue esto y yo en diciembre le había hecho un piquete al intendente que le había paralizado el centro del Municipio. Me dijo que no hablemos de lo que pasó, que era el pasado».

Ese mismo mes, el Municipio recibió varias figuras nacionales. El Intendente, la Presidenta, la Ministra de Desarrollo Social, el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires reinaugaron las piletas del Parque Municipal de Villa Amelia, obra realizada por las cooperativas del PRIST y los aportes de Nación; luego visitaron la Escuela de Adultos aledaña donde se hallaban trabajando un grupo de cooperativistas, para

finalmente arribar al Parque Municipal, donde se desarrollaba un *taller* en el marco del PRIST y donde la Presidenta dio un discurso.

En marzo, el Club organizó un evento y el Intendente invitó a la Ministra a conocer el lugar, aprovechando la visita de la funcionaria en su recorrida por las obras del PRIST. Uno de sus referentes reflexionaba:

Esto tiene una historia larga y el intendente lo sabía. Ahora fijate cómo es la cuestión política: los tenés al (Club) San Martín y eso identifica a Rodolfo del Evita, ahora el Club Belgrano identifica al Intendente, ¿entendés? Ahora hay operativos en este club. Antes no había: se hacían en el San Martín. Entonces él necesitado de lugar, tener su presencia fuerte acá.

En junio el Frente para la Victoria presentaría públicamente su lista de candidatos, buscando integrar distintos sectores del peronismo local. La lista incluiría como candidatos a concejales del HCD a dos de los referentes de cooperativas de Villa Amelia, como candidato a Presidente del Consejo Escolar al Delegado, en el quinto lugar suplente al vicepresidente del IT y como cuarto candidato a concejal suplente al responsable del PRIST en el IT.

Tercer momento: de honores y cargos

Durante el mes de septiembre, las tensiones entre el IT y los referentes de las cooperativas de Villa Amelia se profundizaron y llevaron su conflicto hasta el Municipio. El Intendente, cuya participación pública era escasa debido a un prolongado tratamiento de salud, designó al Secretario General para que concurra a ambos lugares a escuchar los fundamentos y se los transmita.

El Intendente participó de la inauguración del edificio, semanas antes de las elecciones de 2011, junto al Delegado, unos pocos funcionarios, referentes políticos nacionales, referentes de las cooperativas, cooperativistas y vecinos. En esa ocasión expresó:

Amelia se encontraba fuera del mapa para muchos [vecinos del Municipio], algunos ni siquiera sabían dónde se ubicaba,

pero desde hace un tiempo ese preconcepto o indiferencia sobre ciertos lugares de la Comuna, cambió totalmente. Luego de años de abandono y desidia municipal, los vecinos ya pueden encontrar un lugar de apoyo y sostén para todo tipo de demandas y necesidades. Antes, el acercamiento y el vínculo entre el Estado y las personas era algo impensado, poco creíble, pero ahora es una realidad palpable. Tiramos para el mismo lado, porque deseamos lo mismo: un [Municipio] distinto, que forme parte de un proyecto inclusivo e igualitario. [...] la nueva Delegación contará con un Registro Civil propio [...] y una sucursal de la ANSES.

Esta última sería inaugurada por Cristina Fernández al finalizar el año, en un acto multitudinario y profundamente simbólico para Amelia.

Jorge buscó realizar una gestión eficiente desde su cargo, intentando ignorar los conflictos políticos que atravesaban al organismo en el que había sido designado. La participación en las reuniones de la delegación y las solicitudes de explicaciones que nunca habían encontrado respuesta, lo llevaron a revelar información sobre decisiones y problemas internos que obstaculizaban su trabajo.

No confíen en lo que les prometió [...] Sé que para esta Delegación no hay cupos [...] Se les entregó a todas las demás Delegaciones menos a esta [...] Estoy armando una carpeta con todos los inconvenientes y manoseos que existe en el IT para informarle al Sr. Intendente. No me respetan, inclusive tengo conocimiento que van directamente al Ministerio (de Desarrollo Social) a pedir las altas sin mi consentimiento [...] En agosto me di la cara contra la pared cuando el vicepresidente me elevó una nota donde claramente me dice que no me meta más con la ropa ni con las herramientas, que es competencia exclusiva de él [...] Sólo puedo decirles que la Nación gira por mes \$565 por cada cooperativista para la compra de vestimenta, elementos de trabajo y seguridad y del resto desconozco [...] Considero que deberían solicitar una reunión con el Secretario General, trasladarse hasta el Municipio y poner



en conocimiento de todos estos temas. Esta es la única Mesa que realmente funciona y trabaja, merece una respuesta.

Luego de esta reunión, el Secretario General se presentó en la delegación a pedido de la Mesa. El Delegado presentó los tres ejes del conflicto: la falta de herramientas e instrumentaria para realizar los trabajos desde los comienzos del Programa en 2010, la urgencia de normalización de las cooperativas en función de la tramitación de sus matrículas y devolución de los libros retenidos; y la desigualdad en la distribución de nuevos cupos de cooperativistas entre las otras delegaciones y la de Villa Amelia.

El Secretario transmitió tres mensajes del Intendente. En primer lugar, sostenía que el PRIST era central en el Municipio por ser uno de los primeros municipios en implementarlo y por tener uno de los mayores cupos de cooperativistas del Gran Buenos Aires. Señaló que antes de iniciarse las obras públicas más importantes, los cooperativistas habían comenzado a la cambiar *la imagen* de las localidades, permitiendo *el reencuentro y una fluida comunicación del Municipio y el Intendente con la comunidad de vecinos*. En segundo lugar, el Delegado era considerado por el Intendente como *una persona muy importante y leal* que merecía respeto. En tercer lugar, pedía disculpas por la actuación de *algunos funcionarios* «que no hacen lo que deberían hacer. Realmente si no fuera por la madurez mental y política que Uds. tienen hoy estaríamos ante un gran escándalo en la puerta del Municipio del cual soy consciente, por eso estoy aquí a su entera disposición». En efecto, los piquetes y movilizaciones tanto dentro del Municipio como en la Ciudad de Buenos Aires, no eran bien vistos y todos los referentes distritales buscaban evitarlos.

Una de las referentes se preguntaba si era legal que el IT retuviese los libros de las Cooperativas. Sostenía que en la Mesa no controlaban a nadie, no pedían la renuncia de nadie -como había circulado en algunos rumores- ni pedían rendiciones, pero eran maltratados y excluidos de la distribución de nuevos cupos. Alegó que se trataba de una zona *muy carenciada*, que durante las elecciones primarias de agosto habían trabajado mucho para *aportar al proyecto del Intendente*: «los votos hablaron por nosotros» y solo pedían que se los

respete (Gloria). Otra referente agregó que los responsables del IT le dijeron que «mientras siga con el Delegado en Villa Amelia no tendría solución» (Jimena).

El Secretario comentó

Como todos Uds. saben en el Municipio hay una sola persona que conduce y lo eligió la gente. Hay algunos funcionarios que evidentemente no entendieron ello, quieren aprovechar el Programa Argentina Trabaja para hacer un encuadramiento político y de esa forma pasar por encima del Intendente [...] Puedo contestarles desde el aspecto político y aquí en Villa Amelia el Intendente eligió al Delegado, persona que en las elecciones de octubre encabeza la lista de Consejero Escolar. En esta Mesa donde llevan 71 reuniones hay muchos referentes que conozco y otros que es la primera vez que tengo el agrado de escucharlos y que son todos de distintas agrupaciones políticas. Quiere decir que el Intendente no se equivocó cuando dijo que el hombre de Villa Amelia es el Delegado y el más de 60% de los votos del mes de agosto último así lo demostró [...] Si estoy aquí es porque aquí queda en claro cuál es el marco político que tienen Uds., que no piden imposibles y es para valorar la militancia que poseen.

Dos semanas más tarde, el Secretario participó nuevamente de la reunión de referentes. Ese día estaban casi todos los referentes, los que habitualmente asistían y algunos que nunca había visto, el Delegado y su personal administrativo, empleados de escuelas que se iban a incorporar al equipo del delegado cuando asumiese en el Consejo Escolar en diciembre, también había algunos cooperativistas y orientadores. Esta multitud de personas creaba un clima muy diferente al habitual, haciendo evidente que era un día de definiciones.

La nueva sala de reuniones estaba colmada de gente, ocho extensas filas de sillas ocupadas y otros parados en los costados. Había una pantalla gigante en donde ensayaban la proyección de un *PowerPoint*, Andrés y Leandro (hijo de Gloria). El escritorio central no tenía comida como sucedía habitualmente (café y bizcochitos) ni estaba ro-

deado por las habituales personas que colaboraban en la coordinación de la reunión (Griselda o los empleados del Delegado). Estaba ordenado con documentación anillada, junto a un mueble a la derecha con carpetas, biblioratos y cajas. Al fondo, junto a la pantalla, se exponían herramientas de trabajo usadas como palas, picos y ropa. Las empleadas como Sandra (del IT) repartían en bandejas budín y café a los presentes. Una referente repartía churros en una caja.

El delegado acordó leer el Acta de la reunión anterior, como era habitual, para adelantar a los presentes que leería a Germán cuando llegara. Adelantó y se entrevistó con el Secretario General y le presentó un informe según el cual las cooperativas estaban normalizadas, las herramientas y la indumentaria no las entregaba porque había únicamente un 30% de presentismo (470 cooperativistas) y no había asignado cupos porque en Villa Amelia había 1.500 cooperativistas.

Podemos protestar porque si llegamos a esta instancia es porque a otros organismos o estamentos del Estado o al Secretario General, llegó el IT o el vicepresidente con esta suerte de pedido de renuncia que no comparto porque creo que va a estar mucho mejor organizarse que andar pidiendo la renuncia [...] Acá la cosa es sencilla: sin la participación de todos, esto sería imposible. Nosotros vamos por la reunión número 74 y esto denota el compromiso de los compañeros. Esto es lo que se viene: el Estado somos todos. Entonces entre todos vamos a conseguir cosas. Y hacer las cosas lo mejor posible con los elementos: no se puede hacer tanto problema por una pala y un cepillo para compañeros pobres que están levantando...con las napas freáticas, sin guantes y después cantamos la marcha peronista y hablamos de justicia social. Entonces lo que decimos hagámoslo.

El secretario comentó que el vicepresidente del IT había hecho un Informe, que con los responsables de segunda línea no hablaría, ya que eran *compañeros* a los que respetaba, y que sólo restaba llevarle la información al Intendente. Consideró que los funcionarios que buscaban hacer un *armado político* perjudicaban al Intendente, que ne-

cesitaba que la gente estuviera *trabajando en la calle*, ya que era uno de los programas que más votos aseguraba en los barrios y que menos obra pública se había realizado en comparación.

Vine acá a hablar por el quilombo político que el IT no supo resolver. Lo que el IT no puede hacer es ignorar que todas las cooperativas de Villa Amelia están con una posición política. Eso ningún funcionario del Intendente lo puede hacer.

A modo de cierre

Siguiendo las sugerencias de Shore, nuestro enfoque busca resaltar la complejidad y lo desordenado de los procesos de formulación de políticas, las maneras ambiguas y disputadas en que son promulgadas y recibidas en el territorio. Las políticas reflejan maneras de pensar sobre el mundo y cómo actuar en él, contienen modelos implícitos o explícitos de una sociedad y visiones de cómo los individuos deben relacionarse con la sociedad y los unos con los otros, creando muchas veces nuevos conjuntos de relaciones entre individuos y grupos.

Algo muy interesante que resalta el autor es que

las políticas tienen efectos que sobrepasan los diseños e intenciones de sus autores (si en verdad un *autor de políticas* puede ser identificado). Una vez creadas, las políticas entran en una compleja red de relaciones con varios agentes, actores e instituciones, tinglado que puede a menudo generar consecuencias imprevistas e inesperadas. (Shore, 2010:36)

Como señalamos más arriba, instituir es consagrar un estado de cosas, dar a conocer una diferencia y al reconocerla darle una existencia social.

La investidura ejerce una eficacia simbólica real en la medida en que transforma a la persona consagrada: transforma la representación que se hacen los demás de ella y su comporta-

miento; y transforma la representación y los comportamientos de la propia persona. (Bourdieu, 2008:102)

El Delegado disputó su reconocimiento social frente al intendente, quien lo consagró como candidato a presidente del Consejo Escolar en las elecciones, lucha en la que fueron claves sus estrategias para consolidarse como representante de un grupo de militantes y referentes políticos de las cooperativas del PRIST en Villa Amelia, estrategias encarnadas en prácticas y discursos, y que deben ser interpretadas de una manera relacional, es decir como un juego de oposiciones y distinciones frente a las otras líneas internas del peronismo que aspiraban a ser parte del proyecto del Intendente.

Las evaluaciones se activan en la búsqueda de reconocimiento de los militantes políticos por el Intendente (portavoz), estableciendo y dirimiendo las disputas, las competencias y los reordenamientos de la jerarquía política. En este proceso de regulación política, buscamos identificar los mecanismos de reclutamiento, diferenciación, jerarquización, expulsión, así como la pertenencia y movilidad social que supone (Frederic, 2011).

BIBLIOGRAFÍA

- Bourdieu, P. (1973). *Formas de acción política y modos de existencia de grupos*. Comunicación a la Asociación Francesa de Ciencias Políticas.
- _____ (1982). «La representación política. Elementos para una teoría del campo político» (pp. 3-24). *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, 36-37.
- _____ (1996). «Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático». *Revista Sociedad*, 8, Abril.
- _____ (1997). «La economía de los bienes simbólicos». En *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*, (pp.159-202). Barcelona: Anagrama.
- _____ (2000). «Las formas del capital. Capital económico, capital cultural y capital social». En *Poder, derecho y clases sociales*. España: Desclée de Brouwer S.A.
- _____ (2008). «Los ritos de institución». En *¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos*, (pp. 99-109). Madrid: Akal.
- Cogliandro, G. y Melamud, A. (2010). «El Gasto Público Social en el Presupuesto de Prórroga 2011: programas sociales y criterios de distribución a las provincias». En *Documentos de Trabajo*, 3. Buenos Aires.
- Cravino, M. C.; del Río, J. P. y Duarte, J. I. (2008). «Magnitud y crecimiento de las villas y asentamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires en los últimos 25 años». En *Encuentro de la Red ULACAV (XIV, 2008, Buenos Aires, Argentina)*. Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Buenos Aires.
- Distribuidor Programa de Ingreso Social con Trabajo (2010). Buenos Aires. MDS. Buenos Aires.
- Falcón, M. y Raffo, M. L. (2011). *Relevamiento de asentamientos y villas en el Gran Buenos Aires*. Catastro Gran Buenos Aires 2011. Un Techo para mi País Argentina.
- Frederic, S. (2000). «De reunión en reunión: la observación participante en el conocimiento etnográfico de procesos políticos urbanos» (pp. 195-216). En *Horizontes Antropológicos*, 6 (13).

- Frederic, S. (2004). *Buenos vecinos, malos políticos: moralidad y política en el Gran Buenos Aires*. Buenos Aires: Prometeo.
- (2011). *Profesionalización política, moralidades y reconocimiento en el Gran Buenos Aires, 1991-1999*. Dossier. PolHis, 7.
- Guber, R. (2005). *El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo*. Buenos Aires: Paidós.
- Guía informativa sobre el Programa de Ingreso Social con Trabajo. MDS (2010).
- Lenarduzzi, J. (2011). *La renovación kirchnerista en el Conurbano Bonaerense: más allá y más acá de la identidad peronista*. Ponencia presentada en las IX Jornadas de Sociología de la UB: Capitalismo del Siglo XXI, Crisis y Reconfiguraciones. Luces y Sombras en América Latina. Buenos Aires. 8-12 agosto 2011.
- Meichsner, S. (2007). *El campo político en la perspectiva teórica de Bourdieu*. Ibero Forum. Voces y Contextos. Primavera, 3, 2.
- Quirós, J. (2011). *El porqué de los que van. Peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires (una antropología de la política vivida)*. Buenos Aires: Antropofagia.
- Rosato, A. (2003). «Líderes y candidatos: las elecciones internas en un partido político». En Rosato, A. y Balbi, F. *Representaciones Sociales y procesos políticos*. Buenos Aires: Antropofagia.
- Shore, C. (2010). «La antropología y el estudio de la política pública: reflexiones sobre la formulación de las políticas». *Antípoda Revista de Antropología y Arqueología*, 10. Bogotá. Colombia. Enero-junio de 2010.

El campo *nacional y popular* durante el kirchnerismo: una aproximación a las diferentes experiencias históricas, identidades y tradiciones políticas que reconfiguraron ese espacio desde el 2003

Mauricio Schuttenberg

Luego de la crisis de 2001 y los convulsionados meses subsiguientes se dio una recomposición del sistema político. A comienzos de su gobierno, Néstor Kirchner comenzó un acercamiento con distintas corrientes del movimiento *piquetero*¹. Esta actitud del gobierno no tardó en polarizar antiguas diferencias entre organizaciones: de un lado quedaron los movimientos que se sumaron de manera entusiasta a apoyar al nuevo gobierno y del otro un arco opositor. A su vez con la recomposición y el funcionamiento rutinario del sistema político las organizaciones *piqueteras* ante el desafío de reposicionarse frente a un contexto de reflujo de la movilización y, fundamentalmente a redefinir sus estrategias políticas frente a un gobierno que construyó rápidamente su legitimidad de ejercicio en oposición al modelo neoliberal a través de políticas intervencionistas que recuperaba buena parte de las demandas que habían permitido la articulación de la protesta.

¹ El movimiento *piquetero* es en realidad un movimiento de movimientos de trabajadores desocupados de diversas tradiciones, ideologías y formatos organizativos (Svampa, 2004).

El intento de explicar esta *novedosa* relación entre movimientos sociales que habían surgido en una perspectiva de resistencia al neoliberalismo impulsó una gran cantidad de estudios que desde diversas orientaciones teórico-metodológicas y políticas intentaron dar cuenta de esta etapa. Asimismo, el campo de estudio de las organizaciones populares venía teniendo un fuerte crecimiento desde mediados de los años 90, momento en el cual se conforman estas organizaciones políticas.

No obstante, para lograr una buena comprensión del fenómeno de los movimientos sociales, de su proceso de constitución y desarrollo no se puede obviar la necesidad de verlos en perspectiva de largo plazo y en conexión con el resto de las luchas populares y los cambios de las respuestas estatales. Los estudios de caso conllevan la pérdida de escala histórica y de la conexión con procesos sociales más amplios. En algunos casos habría que agregarle el sesgo ideológico de la busca de un sujeto revolucionario lo que puede llevar a convertir a las organizaciones en verdaderos protagonistas de teodiceas (Gómez, 2008: 134).

En este marco, el artículo² plantea una crítica a las explicaciones que desde las ciencias sociales se dieron a la relación entre el gobierno de Kirchner y los movimientos sociales *nacional populares*³. Se intenta cuestionar la principal hipótesis que atraviesa las distintas explicaciones que se asienta en la idea de la cooptación de una parte importante de esas organizaciones populares.

Los trabajos que desde la sociología abordaron los movimientos de desocupados buscaron en principio explicar su emergencia y centraron también su análisis en los formatos organizativos, las formas de protes-

² El presente trabajo constituye una reflexión en torno a la tesis de doctorado en Ciencias Sociales de FLACSO *La reconfiguración de las identidades 'nacional populares' durante el kirchnerismo 2003-2009. Estudio de tres organizaciones: Libres del Sur, Movimiento Evita y Movimiento de Unidad Popular*, dirigida por el Dr. Aníbal Viguera y codirigida por el Dr. Martín Retamozo, a quienes se agradece las observaciones y comentarios.

³ El campo *nacional popular* se constituye a partir de un conjunto de experiencias, imaginarios, figuras, mitos, símbolos y relatos ligados al peronismo, al nacionalismo revolucionario, al campo de las izquierdas y a miradas revisionistas de la historia, a los que las organizaciones apelarán de distinta forma configurando así sus identidades. Este *telón de fondo* es resignificado y atravesado por las identidades de las organizaciones que tomarán esos elementos articulando sus cadenas de significación.

ta y en algunos casos su identidad social en tanto trabajadores desocupados. (Svampa y Pereyra, 2004; Merklen, 2005; Delamata, 2004 y 2005 y Delamata y Armesto, 2005). Los autores destacan tres grandes procesos que confluyeron en el quiebre de los sistemas de bienestar e integración social en la Argentina durante los años noventa: el desempleo cada vez más masivo, el retiro del Estado de la protección social y laboral y la descolectivización del reclamo económico y político de la población asalariada. A partir de allí se da una territorialización de la acción colectiva en donde los sectores sociales afectados por aquellas políticas volcaron sus expectativas de acción hacia sus entornos cotidianos de supervivencia (Battistini, 2004, Delfini y Pichetti, 2004). Svampa y Pereyra (2004) destacan que el movimiento piquetero reconoce dos afluentes fundamentales: por un lado, reenvía a las acciones disruptivas de los piquetes y puebladas del interior, resultado de una nueva experiencia comunitaria vinculada al colapso de las economías regionales y a la privatización acelerada de las empresas del Estado realizada en los '90; por otro lado, remite a la acción territorial y organizativa gestada en el conurbano bonaerense y ligada a las lentas y profundas transformaciones del mundo popular, producto del proceso de desindustrialización iniciado en la década del '70.

En este sentido, la dimensión de las *identidades políticas* tendió a quedar en general en un segundo plano en estos trabajos, aunque hubo algunos desarrollos al respecto. Así por ejemplo, Svampa y Pereyra (2004) marcan dentro del espacio piquetero tres matrices ideológicas diferentes: la populista, las que provienen de partidos de izquierda y el espacio de la nueva izquierda. La que denomina matriz populista se asienta sobre tres ejes que son el principio de la conducción a través del líder (personalista con fuerte retórica nacionalista), el principio de las bases organizadas (el Pueblo-Nación) y el proyecto de pacto social como principio de redistribución. En este marco, la que denomina izquierda populista terminó por reactivar los elementos más negativos de la tradición nacional y popular a partir de su alianza con Kirchner (Svampa, 2008). La autora señala que a diferencia de otras experiencias latinoamericanas, en Argentina la tradición populista tiende a desembocar en el reconocimiento de la primacía del Partido por sobre los movimientos sociales. Esto es el resultado de una relación

histórica entre el Partido Justicialista y las organizaciones sociales y a una determinada concepción del cambio social que deposita la perspectiva de una transformación en el cambio de orientación política de un gobierno, antes que en la posibilidad de un reequilibrio de fuerzas a través de las luchas sociales. Esto se traduce en la primacía del sistema político partidario que tiende a expresar una voluntad de subordinación de las masas organizadas a la autoridad de un líder.

Este último punto es necesario de profundizar. Uno de los elementos a complejizar es el de la complejidad del espacio *nacional popular* y mostrar las diferentes tradiciones que allí convergerán a partir de la construcción de distintos puentes discursivos. Por ello si bien, la idea de matriz populista de Svampa constituye un productivo punto de partida para caracterizar a una porción de las organizaciones, la mirada en profundidad de ese espacio permitirá explicar el proceso de conformación que remite a elementos identitarios sedimentados heterogéneos y reactivaciones que se darán en el nuevo contexto político.

Esta *novedosa* relación entre gobierno y organizaciones se vio reflejada en numerosos trabajos, en el marco del análisis de los intentos de *cooptación* desplegados por el kirchnerismo (Campione y Rajland, 2006; Borón, 2007; Battistini, 2007, Masetti, 2006; Svampa, 2006). Si bien esta idea es un denominador común de muchos estudios sobre el proceso político abierto en 2003, es formulada haciendo hincapié en distintas causas. Se la caracterizó como estrategia estatal de contención de la protesta, como reemplazo al nivel colectivo de la matriz clientelar, como manifestación de la debilidad de los sectores y organizaciones populares y como capacidad de *volver al orden* del Partido Justicialista.

De esta manera, la variable explicativa del reordenamiento político en la etapa post 2003 que tienen en común estas investigaciones es la recomposición de la autoridad y el liderazgo político. La dinámica del período es analizada *desde arriba*, es decir, que los posicionamientos de los actores políticos se entienden a partir de la *recuperación de la autoridad* presidencial dejando de lado las construcciones identitarias que las propias organizaciones realizan.

Desde un enfoque crítico, Novaro (2011) señala que la *novedad* del kirchnerismo radicó en la invención de un *relato*; no en tanto discurso, sino en el sentido de una utilización instrumental de las

históricas banderas del partido *del pueblo* con el objeto de consolidar el control monopólico del aparato estatal. De acuerdo con esta visión, la cuestión de la concentración del poder está equiparada a una disfunción del sistema político que sucumbiría frente a un populismo concentrador y a un escaso afecto a practicar la política por las vías institucionales.⁴ Como explica Tonelli (2011), la característica sobresaliente es la concentración inaudita de poder en el vértice de la pirámide del gobierno que constituye un núcleo decisional configurado por pocas personas.

En tanto, el análisis de los discursos y de las identidades, tuvo mayor desarrollo en torno al realineamiento que produjo la irrupción de Néstor Kirchner en la coyuntura post crisis de 2001 y menos en los movimientos sociales. La anterior fase se caracterizó por el establecimiento de un antagonismo por parte del movimiento de trabajadores desocupados con el Gobierno, lo que otorgó cierta unidad al sujeto político. No obstante, el período post 2003 se define por la ruptura de ese antagonismo lo que genera una serie de fracturas y reposicionamientos dentro del espacio *piquetero*, aspecto que las perspectivas ligadas a la hipótesis de la cooptación tendieron a soslayar. Es de destacar que los estudios anteriormente citados sobre transformaciones hegemónicas han tenido en cuenta una mirada desde el lado *articulador* (Barros, 2005) y no desde el lugar del *articulado*. De esta manera, se mostraron algunas investigaciones que analizan el discurso de Kirchner y *el llamado* a construir el espacio de la transversalidad, pero es más escaso el desarrollo en torno al discurso desde la perspectiva de las organizaciones y cómo estas construyen dicho proceso.

⁴ Alejados de esta mirada de corte institucionalista, otros autores retoman la cuestión de la *batalla cultural* y la recuperación de lo político que instaló el kirchnerismo en su praxis. En esta línea, se encuentran los trabajos de Forster, González y Rinesi, quienes problematizan distintas dimensiones donde el kirchnerismo rompe con el pasado reciente. Forster, Ricardo, *La anomalía Argentina*. Buenos Aires, Sudamericana, 2010; González, Horacio, *Kirchnerismo: una controversia cultural*, Buenos Aires, Colihue, 2011; Rinesi, Eduardo, «¿Qué es el kirchnerismo?» en Freibrun, Nicolás, Hamawi, Rodolfo y Socías, Manuel (comps.), *Qué es el kirchnerismo. Escritos desde una época de cambio*, Buenos Aires, Peña Lillo, 2011.

Teniendo en cuenta el desarrollo nos centramos en un análisis del discurso político de las organizaciones⁵ y esto implica definir el concepto de discurso. En ocasiones se suele discernir entre lo que los actores hacen y lo que dicen, pero nuestra idea es que para superar ese dualismo la noción de discurso debe entenderse que en todo comportamiento social, la acción política no es comprensible fuera del orden simbólico que la genera y del universo imaginario que ella misma engendra dentro de un campo determinado de relaciones sociales.

Ahora bien, el camino para acceder a los mecanismos imaginarios y simbólicos asociados al sentido de la acción es el análisis de los discursos sociales. Esta tarea no consiste en estudiar lo que los actores dicen por oposición a lo que hacen, como sostiene Verón y Sigal, (2004: 15) el análisis de los discursos es indispensable porque si no conseguimos identificar los mecanismos significantes que estructuran el comportamiento social, no comprenderemos tampoco lo que los actores hacen. De esta manera, los discursos interesan analíticamente en tanto es imposible interpretar la acción política fuera de toda hipótesis sobre la matriz significativa que la genera.

En esta línea Laclau (2005) critica la distinción entre retórica e ideología. El fundamento de esta distinción es que concibe a la retórica como una dimensión absolutamente separada de la acción política y como mero adorno del lenguaje. El equivalente de aquello a lo que se opone la retórica es una noción de los actores sociales como constituidos alrededor de intereses bien definidos y que negocian racionalmente. Según esta visión de la sociedad, la imagen de agentes sociales cuyas identidades se constituyen en torno a símbolos populistas difusos sólo puede ser la expresión de irracionalidad.

⁵ El artículo se basa en documentos, entrevistas a dirigentes y publicaciones de las organizaciones. Para el análisis se tomaron documentos públicos de las tres organizaciones y documentos de circulación interna. En tanto, también se trabajó con las publicaciones que las organizaciones tuvieron en las distintas etapas: Revista Evita del Movimiento Evita, Revista En Marcha de Patria Libre y Revista Patria Grande de Libres del Sur y con respecto al MUP se tomaron centralmente los documentos en los diversos períodos abordados. A su vez, se realizaron 23 entrevistas semiestructuradas a dirigentes de las tres organizaciones desde agosto de 2007 a la fecha. Los cuestionarios apuntaban a recabar información sobre las distintas interpretaciones, posicionamientos que las organizaciones analizadas tuvieron desde su conformación hasta el presente y sobre las trayectorias y tradiciones de la militancia que las compone.

Lo central de esta crítica al enfoque dual entre retórica e ideología es que deja de lado el hecho que si, mediante operaciones retóricas se logra constituir identidades populares, no hay que dejar de lado la importancia de estas. Todo lo contrario en lugar de pensar la retórica como *parásito de la ideología* debería concebirse como la anatomía del mundo ideológico. (Laclau, 2005: 27)

La dinámica de las organizaciones en el período 2002-2003

Numerosos estudios coinciden en señalar que los nuevos actores sociales surgidos o potenciados a partir de las jornadas de diciembre de 2001 tenían en común una alta preocupación por la autonomía frente al Estado, las patronales, y los partidos políticos sistémicos. Esta cuestión aparecía además ligada al rechazo generalizado a la dirigencia política. Este auge de movilización dio paso a un proceso de recomposición gradual de la autoridad estatal y de pacificación del conflicto, a partir de la estabilización económica, la asistencia social elemental pero eficaz de los planes Jefas y Jefes y la solución progresiva del conflicto con los sectores medios a partir de la devolución de los depósitos bancarios (Campione y Rajland, 2006).

Al asumir el presidente Duhalde en enero de 2002, se enfrenta a los problemas de la crisis económica y financiera, la inestabilidad política y la movilización de amplios sectores sociales. Desde el inicio de su gestión implementa una estrategia diferenciada y selectiva para con las organizaciones de desocupados basada en lo que diversos trabajos llaman *planes y palos*, que consiste, en términos generales, en dar un lugar a la negociación con algunos sectores del arco piquetero y de represión hacia las organizaciones más cuestionadoras. En este marco, las elecciones de 2003 constituyeron un punto de inflexión y, si bien, el declive en el grado de movilización y de profusión de luchas puede situarse bastante antes a mediados de 2002, fueron los comicios los que demostraron que el sistema político existente podía recrear aún una cierta *normalidad*.

En sus primeros discursos Kirchner fue construyendo un campo antagónico. Los enemigos fueron las grandes corporaciones, la cúpula

de las Fuerzas Armadas, las empresas concesionarias de los servicios públicos privatizados, la Corte Suprema de Justicia, el FMI y a lo que se sumaba una posición latinoamericanista en política exterior. Biglieri (2007) destaca que desde el gobierno se comenzó a absorber demandas circulantes en el entramado social. De esta manera, la nominación de los *enemigos* implicó también la definición de los *amigos*.

En este proceso de inclusión de movimientos sociales dentro del gobierno y otras expresiones políticas se la denominó *transversalidad*. Torre (2004) hace referencia a la operación política puesta en marcha por el presidente Kirchner con vistas a incorporar a su empresa política a sectores de la izquierda peronista y no peronista marginales a las estructuras del Partido Justicialista. Esa operación perseguía dos objetivos. El primero, dotar al presidente Kirchner de recursos partidarios propios para compensar el déficit de apoyos organizados que exhibió al llegar al gobierno, puesto que accedía al poder a partir del apoyo de las estructuras de Duhalde. El segundo objetivo, según el autor, de la operación política de la transversalidad consistía en utilizar a los sectores de la izquierda peronista y no peronista para impulsar una transformación del Partido Justicialista, desplazando las ramas viejas del aparato partidario y promoviendo un viraje hacia la izquierda, congruente con las credenciales setentistas levantadas por el presidente Kirchner.

Para Torre (2004), la cruzada regeneracionista del presidente Kirchner tuvo el efecto de reactivar los entusiasmos de la izquierda peronista. Al abandonar su condición de célula política dormida, los sobrevivientes de la generación setentista volvieron esta vez menos tocados por los valores republicanos que habían marcado su anterior encarnación, en los tiempos del Frepaso, y más animados por el espíritu vindicativo con el que ingresaron originalmente a la vida pública.

Al mismo tiempo, en el período que se abre en el 2003 donde observa un importante cambio en el tenor e intensidad de las protestas. El cambio obedece, según Pérez (2008), a un desgaste de las organizaciones que no pueden conseguir recursos y, lo más importante, son los cambios a nivel organizacional y la relación entre las agrupaciones piqueteras y las agencias gubernamentales. Organizacionalmente, se han reestructurado tanto las alianzas entre grupos como se han generado nuevos agrupamientos en torno a la transversalidad kirchnerista, generando un efecto polarizante del campo opositor piquetero.

Además hay que tener en cuenta que pasada la época de efervescencia social y la efímera resonancia con las clases medias movilizadas, hacia mediados de 2004, las organizaciones piqueteras disidentes se encontraron en las calles con un importante nivel de aislamiento social, pero en un marco político bien diferente al de los años anteriores. El corrimiento de los conflictos sociales hacia la matriz sindical y la explosión de conflictos socio-ambientales volvieron a colocar un velo de indiferencia e invisibilidad sobre el accionar de las organizaciones piqueteras en gran parte debilitadas, encapsuladas en el trabajo territorial de los barrios y con escasas posibilidades de hacer escuchar sus reclamos (Svampa, 2008).

En tanto, otros trabajos abordaron las transformaciones del orden social (Muñoz y Retamozo, 2008; Biglieri, 2007; Laclau, 2005) a partir del enfoque de las identidades y cómo estas se construyen en el discurso. Parten de la categoría de hegemonía y analizan cómo se constituye un determinado orden social a partir de la articulación de demandas e identidades políticas. De hecho, la recomposición política que implicó la llegada de Kirchner fue analizada desde esta mirada por numerosos autores que describen cómo el presidente articula una serie de demandas que se encontraban en distintos sectores sociales en su discurso.

Aquí es necesario destacar que los estudios anteriormente citados sobre transformaciones hegemónicas han tenido en cuenta una mirada desde el lado *articulador* (Barros, 2005) y no desde el lugar del *articulado*. De esta manera, existen algunas investigaciones que analizan el discurso de Kirchner y *el llamado* a construir el espacio de la transversalidad, pero es más escaso el desarrollo en torno al discurso *desde abajo* y cómo estos actores construyen dicho proceso, cuestión que se propone abordar en profundidad en este artículo.

Orígenes identitarios de las organizaciones

Para dar cuenta de lo que se denominará puentes discursivos de la inserción en el kirchnerismo debemos retrotraernos a los puntos nodales (Laclau, 2005) sobre los cuales las tres organizaciones analizadas construyeron sus identidades. El objetivo de esta sección del trabajo es avanzar en la búsqueda de los puntos nodales centra-

les que estructuraron el discurso de las organizaciones políticas en sus comienzos para reconstruir a partir de esta lógica la dinámica política posterior a 2003. Estos puntos de fijación del sentido los encontramos en las concepciones que las organizaciones tenían del Estado, la revolución, el sujeto político de la transformación social, el camino para llegar a ella, el relato de la historia y los símbolos *políticos* que reivindicaban.

El discurso se constituye en la tentativa de dominar y de detener el flujo de las diferencias para constituir una identidad. En ese marco, los puntos nodales condensan sentidos y fijan parcialmente las identidades. Estos puntos nodales constituyen de alguna forma significantes centrales que estructuran una cadena significativa en una articulación hegemónica (Laclau, 2006).

Como bien señala Laclau (1990) las identidades nunca logran una sutura *definitiva* y están siempre en redefinición. Los agentes mismos transforman su propia identidad en la medida que actualizan ciertas posibilidades y desechan otras. Siendo que toda identidad es contingente y esencialmente relacional respecto de sus condiciones de existencia, ningún cambio de estas últimas puede dejar de afectar aquella. Por ello, la reformulación hegemónica cambia la identidad de todas las fuerzas sociales en presencia.

En este sentido, las tres organizaciones nuclearán movimientos de diversa identidad política e irán confluyendo en tres espacios de mayor amplitud que terminarán fusionando las anteriores experiencias. Este proceso se dio entre el 2004 y 2006 donde se terminan de consolidar las nuevas estructuras políticas.

Libres del Sur⁶ que se conformó oficialmente en 2006 nucleará un conjunto de partidos, movimientos de trabajadores desocupados y organizaciones que se definían como *izquierda nacional*, es decir se reivindicaban *marxistas*, planteaban la cuestión *revolucionaria*, pero desde una óptica crítica a la que definían como *la izquierda dogmática*.

⁶ El movimiento Libres del Sur se lanzó oficialmente el 27 de abril de 2006 en un acto en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires. El movimiento se conformó a partir de la fusión del Movimiento Barrios de Pie (brazo territorial de la Corriente Patria Libre), el Partido Comunista Congreso Extraordinario, la Agrupación Martín Fierro, el Frente Barrial 19 de Diciembre, la Agrupación Envar el Kadri y la Corriente Patria Libre.

En tanto, el Movimiento Evita⁷ expresará de la misma manera el aglutinamiento de experiencias previas pero ligadas a la identidad del peronismo de izquierda. Allí si bien existirán cuestionamientos a *la izquierda* la organización se asume peronista. Ambos movimientos unifican una serie de trayectorias militantes que se aglutinarán en los respectivos espacios. A partir del trabajo de campo se identificaron tres grandes vertientes generacionales:

- La primera es la experiencia militante de los años 70. Allí Libres se nutre de cuadros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que «revisan los posicionamientos en torno a la cuestión nacional», en tanto, el Movimiento Evita se asienta más claramente en la experiencia de Montoneros.

- La segunda vertiente temporal es la militancia de los años 80 en donde el recorrido que nutrirá cada una de las organizaciones se divide principalmente en la Corriente Patria Libre como eje central en torno del cual se conformará Libres del Sur, en tanto que el peronismo y diversas líneas internas del mismo.

- La tercera vertiente será la militancia de los años '90 en donde aparecerán los movimientos de Trabajadores desocupados como organizaciones que nutrirán, junto con las anteriores expresiones políticas, a los dos movimientos.

En este punto radica una diferencia con el Movimiento de Unidad Popular⁸. Si bien luego de la inserción en el gobierno de Kirchner se agregarán al movimiento sectores de experiencias previas como fue

⁷ La confluencia de organizaciones y movimientos que formarán el movimiento Evita se encontraban el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita, el MTD Resistir y Vencer, las 4 P (Pan y Poder para el Pueblo), una escisión de MPRQ (Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho), el MP 20 (Movimiento Patriótico 20 de Diciembre), la organización estudiantil 20 de Febrero (fecha que hace a alusión a la lucha de resistencia a la implementación de la ley de Educación durante febrero de 1996), Peronismo que Resiste, y sectores del Partido Justicialista.

⁸ El Movimiento de Unidad Popular (MUP) surge en 1999 a partir de una organización de vertiente anarquista llamada AUCA (rebelde en mapuche). Este movimiento de raíz libertaria se inició a fines de los años '90 en barrios de La Plata y fue creciendo hacia otras provincias y el conurbano bonaerense. El MUP nacía como el *movimiento de masas* de dicha línea política.

el caso de Libres del Sur y el Evita, su origen fundante se da en la década de los noventa.

No era una organización que más allá de buscar una determinada tradición histórica como lo era el anarquismo no se nutría de fuertes experiencias previas como si fueron los otros dos casos, sino más bien se conformó a partir de militantes jóvenes que cuestionaban las representaciones existentes dentro del panorama político partidario.

Las tres expresaban la crítica al sistema político partidario de los años 90. Libres del Sur y sus organizaciones predecesoras muestran la crisis dentro de las representaciones de izquierda, el Movimiento Evita aglutinará a sectores descontentos con la dirección política que había tomado en esos años el partido Justicialista y entenderán que ese camino era la *traición a las banderas históricas*. En tanto el MUP y su organización anterior AUCA muestra el camino que tomaron algunas experiencias territoriales en donde se expresaba la cuestión asamblearia y la democracia participativa como aspectos centrales de las nuevas construcciones y a su vez de cuestionamiento a la política de los años '90.

Estas diferencias en cuanto a los recorridos y trayectorias de los militantes y de las organizaciones predecesoras marcó también diferencias en las formas de accionar que las tres desarrollarán. Libres del Sur posee una estructura más rígida con una identidad claramente definida y se organiza en torno a lo que denominan *centralismo democrático*. La tensión constante que aparece en la organización es la de ampliarse y aspirar a una representación de mayores sectores sin perder la especificidad de su identidad, por ello, tiene muy marcada la cuestión del centralismo para evitar las diferencias internas y lograr una fuerte cohesión dentro del movimiento.

A diferencia del Movimiento Evita y del Movimiento de Unidad Popular luego del *giro nacional popular*, Libres del Sur tiene la base en Patria Libre que era no tanto un movimiento social sino un partido político con una lógica de funcionamiento que continuará en parte en el nuevo espacio.

En este aspecto el Movimiento Evita abreva más a la tradición movimientista donde no hay un mecanismo formal y estructurado de toma de decisiones. Esta estrategia de *incorporar las contradicciones dentro del movimiento* fue de resultado incierto porque hubo una desme-

dida inclusión de actores sin un espacio interno donde pudiera consolidarse un sentimiento de pertenencia e instituirse instancias deliberativas y de toma de decisiones que generaron disputas internas (Natalucci, 2008).

El caso del Movimiento de Unidad Popular marca un desafío a la hora de *ubicarlo* dentro de alguna de estas dos formas de construcción puesto que en sus comienzos aparecían como elementos fundantes la democracia participativa de las bases, el federalismo y la horizontalidad como forma de construcción política. No obstante, al insertarse en el kirchnerismo su identidad realizará un *giro nacional popular* que implica también acercarse a la lógica movimientista de construcción.

Por último, las tres organizaciones expresan el replanteo, que en el plano más general, implicó la asunción de Kirchner para la dinámica de los movimientos de trabajadores desocupados. Aparece en los tres casos la necesidad de construir otras herramientas políticas para afrontar lo que entendían era una etapa diferente de la historia. La etapa de resistencia de los años '90 era reemplazada por la lectura de que el gobierno de Kirchner abría nuevas posibilidades e implicaba una etapa de *avance popular*. Esta interpretación dejaba de lado la lógica reivindicativa de las organizaciones piqueteras para pensar en una lógica de representación más amplia capaz de llegar a diversos sectores sociales e incluso ser parte de los procesos electorarios.

Como bien se remarcó, en la búsqueda de los puntos nodales fundantes de las tres tradiciones políticas el relato de la historia es central para analizar cómo las organizaciones se presentan como herederas de una determinada lucha que les da sentido a su presente y su futuro. En este sentido, Aboy Carlés (2001) señala que toda identidad política se constituye en referencia a un sistema temporal en el que la interpretación del pasado y la construcción del futuro deseado se conjugan para dotar de sentido a la acción presente. En la medida en que los conflictos actuales pueden ser concebidos como la materialización presente de confrontaciones históricas, los actores políticos pueden asociarse a la figura de un actor imaginario, capaz de atravesar el tiempo idéntico a sí mismo. De esta forma, no sólo se dota de un sentido a la acción inmediata, sino que se contribuye a cimentar una identidad colectiva a partir de una herencia común en la reactualización de una tarea.

El Movimiento Evita retoma la línea clásica del peronismo de izquierda y reivindica a sus figuras históricas como Perón, Eva y Cooke, mientras que en Libres del Sur, si bien como se señaló comparten a grandes rasgos la *lógica histórica*, aparecen otros referentes que rompen con la identidad peronista o apuntan a desbordarla. Allí el peronismo sería un proceso más de los reivindicados y no el central como lo es para el Movimiento Evita.

Ambas organizaciones comparten la idea de *Pueblo* como el sujeto político que lucha contra los diversos enemigos que impedirían su avance. Allí establecen puentes con la historia, puesto que la misma es la lucha entre el Pueblo y sus enemigos, desde el origen mismo de la Nación.

El sujeto político al cual refería AUCA y el MUP no era el *Pueblo* sino más bien *las clases oprimidas* que nucleaban un conjunto de actores subordinados en el sistema capitalista. No obstante, esa diferencia no aparece sustancial puesto que la idea de *Pueblo* estaría apuntada a designar al mismo colectivo.

En cuanto a las referencias históricas en los discursos podemos establecer las diferencias con el Movimiento de Unidad Popular y su organización predecesora AUCA con respecto a los otros dos. La historia no es una referencia sustancial para sostener los posicionamientos actuales frente al imperialismo, incluso las luchas anarquistas de fines de siglo XIX y principios del XX son escasamente retomadas. En su mayoría las referencias son a la década de los noventa y al contexto en el cual surge el movimiento, de hecho, como se señaló el anarquismo representa una forma de cuestionamiento a las formas de acción políticas vigentes en ese contexto.

Los tres movimientos se definían como de izquierda revolucionaria, aunque por ello entendían distintas cosas. El significante *revolución* marca también las similitudes entre Libres del Sur y el Movimiento Evita son muy marcadas en el aspecto de pensar la misma en términos de avance popular a partir de la *conquista* del Estado de las manos del neoliberalismo reconstruyendo el ideal de Estado de Bienestar. El caso de AUCA y el MUP en sus comienzos había un cuestionamiento a las posibilidades de un Estado capitalista de ser un avance para los sectores populares. En su lugar destacaban la concepción de *revolución capilar* como forma de ir avanzado y disputando el orden social en la escala micro.

La revolución entonces se explicaba como un proceso lento de *avance popular* y los tres movimientos compartían la diferenciación de lo que entendían era la postura de *la izquierda dogmática* que plantearía la *insurrección* como el camino a cumplir los objetivos. En este marco, para llegar a la revolución tanto las organizaciones predecesoras de Libres del Sur como las del Movimiento Evita expresaban que la conciencia revolucionaria llegaría de la mano de los movimientos populares y no de los partidos políticos *de clase*. En tanto el Movimiento de Unidad Popular destacaba la necesidad la ruptura con cualquier forma de vanguardia. En este sentido, se retomaba la *acción directa* entendida como la promoción de la lucha *capilar* en pos de crear nuevas *relaciones sociales* que logren el avance de *las clases oprimidas*.

Al desarrollar la cuestión revolucionaria, los tres movimientos planteaban lo que podríamos denominar una etapa de transición. En los movimientos Evita y Libres del Sur la idea de revolución refiere a la transformación de la realidad pero sin un fin último estrictamente teorizado, por ello, el planteo gradualista posterior y de recuperación del Estado de Bienestar se ajusta a los avances que luego verán en la presidencia de Kirchner.

El Movimiento de Unidad Popular hacía hincapié en un proyecto *desde abajo* que aboliera las clases sociales hacia una *sociedad socialista*. No obstante, ese punto de llegada era interpretado como *lejano*, por lo que la etapa de transición permitía pensar en proyectos de avance que no necesariamente los llevaran directamente a esa sociedad sin clases. Además, ese período marcaba las diferencias entre la organización y lo que entendían era el anarquismo *elitista* que negaba la lucha entre *Nación e Imperio* y la cuestión *latinoamericana*.

Identidad e identificación: los puentes discursivos de la inserción en el kirchnerismo

La identidad podría definirse como la conformación *exitosa* de una determinada articulación de sentidos, que aunque con relativa estabilidad siempre es reactualizada y desestabilizada. La llegada de Kirchner al gobierno provocó en las tres tradiciones políticas analiza-

das una desarticulación de los puntos nodales que constituían las identidades de los movimientos. Las tres organizaciones tenían elementos diversos en sus discursos por lo que la *llegada* al nuevo espacio reestructurará de forma disímil a cada una de ellas.

Ranciere (2007) denomina ese proceso de desarticulación como momento de subjetivación política que implica una desidentificación, «el arrancamiento a la naturalidad de un lugar» y la reapertura de la subjetividad en busca de renombrar al sujeto. Como bien señala el autor una subjetivación política vuelve a recortar el campo de la experiencia que daba a cada uno su identidad.

Deshace y recompone las relaciones entre los modos del hacer, del ser y del decir. Un sujeto político no es un grupo que toma conciencia de sí mismo que se da una voz e impone su peso a la sociedad. Es un operador que une y desune las regiones, las identidades, las funciones, las capacidades existentes en la configuración de la experiencia dada. (Ranciere, 2007: 58)

Dentro del espacio de los movimientos sociales el antagonismo que consolidaba fuertemente los posicionamientos era la articulación discursiva que se tejía entre el neoliberalismo y el gobierno. Es justamente a partir de que el discurso de Kirchner, en donde se rompe esa ligazón que provocará una redefinición identitaria en las organizaciones.

Laclau (2005) señala que ese exterior debe ser algo que ponga en cuestión la diferencialidad misma intra-sistema. Al definir un enemigo común, en este caso eran los gobiernos neoliberales, una formación política debilita y cuestiona sus diferencias internas y se constituye como totalidad a través de lo que denominaron una lógica de equivalencia. El discurso de Kirchner operó en la redefinición las fronteras políticas que las organizaciones construirán.

El primero de los pasajes que denominamos *inserción autónoma* estuvo relacionado al caso de Libres del Sur y sus organizaciones predecesoras (Barrios de Pie, Patria Libre, Partido Comunista Congreso Extraordinario) y hace hincapié en el acercamiento paulatino que tuvieron con el gobierno de Kirchner. En este caso la concepción latinoamericanista, antiimperialista y de cuestionamiento al

neoliberalismo fueron los principales explicativos del por qué formar parte del nuevo gobierno.

No obstante, el gobierno aparece como algo externo a la organización, se está en él pero de una forma distante a la vez y evaluando cada paso que se daba. En este caso, la autonomía es reivindicada fuertemente y el movimiento actúa como conjunto tomando sus decisiones a través de su organización interna.

Las tres organizaciones analizadas tienen como características en común el 2001 como un quiebre histórico y como una crisis del sistema neoliberal dominante. A su vez también coincidieron en cuestionar el accionar de lo que denominan *la izquierda* por no haber reconocido una oportunidad que ese proceso abrió para la construcción de *un nuevo orden*.

En tanto, las organizaciones que confluyeron en Libres del Sur, enfatizaron que esa etapa era de *incertidumbre* en busca de algo *nuevo* por lo que las tareas de la militancia eran mantener la movilización y la conflictividad. De hecho, el principal objetivo que aparecía en esos momentos era *romper con el continuismo*, es decir, acrecentar la conflictividad a fin de evitar que el *sistema logre rearmarse*.

En torno a la inserción de lo que será el movimiento Libres del Sur pudimos observar una mutación en su posicionamiento que transcurre en cuatro etapas diferenciadas. La primera en donde Kirchner era interpretado como la continuidad del modelo neoliberal. La segunda, en donde esa interpretación empezó a dar lugar a otras de carácter más conciliadoras: el nuevo presidente, si bien no era lo esperado, expresaba un corte con el neoliberalismo. La tercera abrirá la etapa de inserción directa en donde la lectura del nuevo proceso será apoyada en los términos de ser un gobierno al servicio de los intereses de los sectores populares. Por último, se producirá a fines de 2008 la ruptura con el kirchnerismo.

Nosotros no lo votamos, llamamos a votar en blanco porque vimos en él el continuismo del modelo neoliberal. Particularmente no por la figura de Kirchner, sino por el poder en esa alianza del duhaldismo y por la presencia allí de hombres de derecha, de Beliz, de Scioli. Nosotros dijimos entonces: este

gobierno es más de lo mismo y nos preparamos para enfrentarlo. Nosotros, que no somos proclives a atarnos a esquemas y que no tenemos problemas en decir ‘nos equivocamos’, dijimos entonces: acá hay algo nuevo; esto, al menos por ahora, no es continuismo. No es lo que nosotros quisiéramos, pero tampoco es continuismo. Esa es la caracterización que hemos hecho del gobierno. (4º Congreso de Patria Libre 4 de septiembre de 2003, extraído de <<http://libresdelsur.org.ar>>, diciembre de 2007)

En este caso la inserción parte de la espera y ratificación de lo que entienden son una serie de señales que Kirchner habría dado acerca del rumbo de su gobierno. Lo que se quiere remarcar es que en la llegada de la organización al espacio kirchnerista tuvo un peso central la cuestión antiimperialista y latinoamericanista que el presidente retomaba en sus discursos, es decir que la inserción se daría porque *desde arriba* se habría dado el espacio para la participación de la organización y porque el gobierno representa los mismos intereses que la organización.

En el caso de Libres del Sur se observa una fuerte *custodia* de sus principios identitarios, es decir, durante el gobierno de Néstor Kirchner tejieron una alianza con el gobierno y participaron activamente de la gestión aunque remarcando su independencia política constantemente.

El segundo puente se estructuró en la reconstrucción de la tradición plebeya del peronismo que se relaciona con el movimiento Evita y se fundamenta en la reconstrucción del ideario de la izquierda peronista. Este caso es sin dudas, la operación menos compleja, en el sentido que la ruptura que significó la inserción para las otras dos organizaciones fue en realidad, para el Evita, una cuestión rápida y lógica puesto que podría pensarse que percibieron que era el gobierno el que retomaba y se acercaba a las *banderas históricas del peronismo* por lo que la participación en ese espacio era vivida como el renacer del campo *nacional y popular*.

Cuando se convocó a varias reuniones nacionales en Tanti, en La Matanza y se empezaron a armar encuentros, que buscaba el kirchnerismo que representaba a la izquierda nacional

peronista, o al Peronismo Revolucionario, que buscaba una forma de inserción en el proceso kirchnerista, mucho más fuerte que la que había tenido hasta ese momento. Y ese espacio permite que nos vayamos encontrando compañeros (Entrevista a Dirigente del Movimiento Evita).

Para esta identidad política, la idea de pueblo ligado al peronismo estuvo desde los comienzos, por lo que la ligazón *por abajo* estaba consolidada y faltaba la articulación *por arriba* que se daría con la lectura que Kirchner estaría retomando las históricas banderas de justicia social e independencia económica.

Inmediatamente se identificó el discurso de Kirchner como destinado a reconstruir el Estado de Bienestar y el *proyecto nacional*, y realizando un puente entre el proceso abierto en 2003 y el año 1945. Ambos períodos estarían precedidos de sendas *décadas infames* y serían etapas en donde el pueblo habría recuperado el protagonismo a partir de la construcción de un Estado a favor de los sectores populares. En este sentido, entendieron que la nueva etapa tomaba las *viejas banderas* del peronismo por lo que insertarse tenía más un rasgo de continuidad y de retorno, que de ruptura y refundación como para las otras organizaciones.

En el caso del Movimiento Evita existía una sólida identidad sedimentada condensada en redes heterogéneas de militantes de antiguas experiencias ligadas al peronismo de izquierda que nucleaban a ex militantes montoneros, expresiones ligadas al peronismo en los años 80 y la vertiente de movimientos de trabajadores desocupados que reivindicaban la identidad peronista. La llegada de Kirchner produce una reactivación de ese sustrato en un nuevo contexto.

En este sentido Laclau (1990) afirma que el momento de la reactivación no puede ser una vuelta a los orígenes, al sistema histórico de posibilidades alternativas que fueron desechadas sino que es el redescubrimiento, a través de nuevos antagonismos del carácter contingente de la objetividad. Estas redes reconstruyeron el imaginario simbólico del *peronismo de izquierda* en el marco del sistema democrático y confluyeron en el armado del Movimiento Evita como espacio que disputaría al interior del peronismo.

Además el pasaje operó de forma más directa que en las otras organizaciones. Como se pudo observar tanto para las que conformarán Libres del Sur como para el Movimiento de Unidad Popular la llegada al espacio *transversal* generó un proceso de discusión y requirió de una operación política más compleja.

Las tres vertientes se identificaban como organizaciones de carácter revolucionario, aunque en sus comienzos entendían distintas cosas por revolución. El período que se abre en 2003 obliga a los movimientos a revisar sus interpretaciones sobre la cuestión revolucionaria.

Allí también existían diferencias notorias, mientras el Movimiento Evita se funde detrás de la idea de *proyecto nacional* las otras dos organizaciones construyen un paso entre las concepciones de Estado como dominación a pensar el Estado como posible articulador de los intereses populares.

En el tercer caso, el Movimiento de Unidad Popular, la construcción del puente hacia el kirchnerismo aparece de manera más compleja. La decisión de formar parte del espacio *transversal* generará la ruptura de la organización. A su vez, exhibe una distancia *mayor* entre su identidad originaria, que como se mostró estaba ligada al anarquismo, y la mutación que implicó el nuevo panorama político abierto en 2003.

El pasaje se construirá sobre una revisión de la identidad tradicional y sobre una nueva lectura del sujeto político al cual se aspiraba a representar. La idea de *pueblo peronista* producirá una recomposición identitaria en los dirigentes del MUP que se insertarán en el gobierno. Esto generó lo que denominamos *giro nacional popular* que implicó una transformación en los marcos de interpretación de la realidad política por parte de la organización y la relectura de los anteriores.

Allí radica una diferencia sustancial del Movimiento de Unidad Popular con las otras organizaciones, puesto que el puente hacia el kirchnerismo, si bien también reivindica el discurso del presidente, estaría dado *desde abajo* a partir del redescubrimiento del *pueblo peronista* como motor de la mutación identitaria. Unas páginas antes se desarrolló dicho proceso que tuvo como ejes centrales el redescubrimiento de la identidad del sujeto político al cual se aspiraba a representar y las esperanzas que en esos sectores el gobierno de Kirchner despertaba. De esta forma, se visualizaba que era imposible

no estar con ellos. De esta forma, comienza a haber una inclinación hacia la identidad peronista que empieza a ser leída como sinónimo de pueblo. A su vez el gobierno de Kirchner habría despertado, según esta interpretación, la esperanza en los sectores populares con lo cual se hacía inviable políticamente predicar en contra de ese proceso.

Nosotros teníamos una situación interna que era que todas las bases del movimiento apoyaban a Kirchner, y la conducción que decíamos que Kirchner era más de lo mismo. Cuando nosotros tomamos la decisión de acercarnos al gobierno, lo que primero se produce es una empatía mayor con nuestros propios compañeros (Entrevista a Dirigente del MUP).

En el caso del Movimiento de Unidad Popular la mutación identitaria que se dio con el *giro nacional popular* hizo que de pensar en *clases oprimidas* se pase a *pueblo* como sujeto oprimido y a su vez *peronista*. Esa articulación de sentido explica en parte el pasaje de una identidad anarquista a una *nacional y popular*.

En el pasaje del MUP puede pensarse en un proceso de doble identificación que rearticulará su cadena de significaciones previas. En este punto es necesario pensar en la diferencia entre identidad e identificación. Por el primer concepto se entiende una cierta trascendencia en esa cadena equivalencial (Laclau, 2005) que la constituye. En tanto, el concepto de identificación reabre la posibilidad de redefinir la identidad en la búsqueda de una nueva sutura.

Como bien señala Hall (2003) la identificación se construye sobre la base del reconocimiento de algún origen común o unas características compartidas con otro grupo o con un ideal, y con el vallado natural de la solidaridad y la lealtad establecidas sobre este fundamento. Es un proceso de articulación, una sutura condicional y contingente.

La identificación desde esta perspectiva expresa un lazo emocional con otro sujeto y consistiría, según el autor, en un moldeado a imagen de otro que se funda en la proyección y la idealización. De esta forma, la identidad es el punto de sutura inestable entre los discursos y prácticas. De tal modo las identidades son puntos de adhesión temporaria de las posiciones subjetivas que nos construyen las

prácticas discursivas. Son el resultado de una articulación o encadenamiento *exitoso* del sujeto en el flujo del discurso.

Hay, en el discurso del movimiento y de sus dirigentes, un doble proceso de identificación con el peronismo que aparece anudado al kirchnerismo. Por un lado hay una identificación en el sentido que expresa Hall, es decir una construcción e idealización con el sujeto Pueblo-Peronista, y por otro, la identidad anarquista de sus inicios mutará hacia una identidad *nacional-popular* en un intento de acercamiento al kirchnerismo. Esa inserción en el nuevo espacio político implicará una reorientación del discurso y los elementos que estructuraban la identidad anarquista serán desplazados por los de la identidad *nacional y popular*.

En el territorio hay que reconvertir y hacer un laburo centrado en cuestiones de fomento, lo que es la concepción del peronismo. Entonces ya el eje no pasa a ser lo económico, el eje pasa a ser lo social, lo cultural, la familia. ¿Cómo y dónde van a vivir mis hijos? Ahora se recompone la relación social de otra manera porque hay otra perspectiva. Entonces, evidentemente, una sociedad en ese camino, es mucho más factible de ser organizada racionalmente, de manera peronista (subrayado nuestro). (Entrevista a Dirigente del MUP)

Por ello, de clases oprimidas, lucha de clases, anarquismo, Estado como dominación, se producirá un desplazamiento y la identidad se reconfigurará en torno a la idea de justicia social, Estado al servicio del Pueblo y Peronismo como motor del cambio, que ya no será pensado en términos *de insurrección*, sino en la forma de una transformación gradual de la sociedad en los marcos de la democracia.

Aboy Carlés (2001) destaca que la identidad aparece como el producto de sucesivas identificaciones imaginarias. El acto de identificación, por su parte, es la fundación de una nueva significación y, como tal, la posibilidad de desestabilización de toda identidad objetivada. Este mismo es la institución de nuevos sentidos más allá de la simple repetición, y que como tal puede materializarse en la aparición de una nueva nominación que articulará discursos dispersos atribuyéndolos a una nueva unidad de referencia.

En el caso del MUP se puede observar el proceso de conformación y desplazamiento de una identidad política. Nuevas identificaciones dieron lugar a una desarticulación de los puntos nodales que estructuraban la identidad anarquista y dieron lugar a una rearticulación en torno a los ejes estructurantes del espacio *nacional-popular*. Esa rearticulación operó *desde abajo* al producirse una identificación como acercamiento e idealización con el sujeto popular-peronista y *por arriba* con una *seducción* de la identidad que se pasará a compartir que será el kirchnerismo.

En los tres casos se puede advertir la tensión constitutiva de toda identidad política que aspira a crecer en un contexto dado. Aboy Carlés (2007) destaca la tendencia contradictoria implícita en la afirmación de la propia identidad diferencial y la pretensión de expandirse más allá de los propios límites diferenciales. Así una fuerza política con aspiraciones de poder, atraviesa siempre esa disyuntiva que supone toda tentativa de crecimiento, que es la conversión de lo que inicialmente aparece como el afuera de la nueva identidad diferencial a la propia identidad emergente, o ante la resistencia de antiguas identidades sedimentadas, la apertura de un proceso de negociación en el que las distintas identidades, la emergente y la sedimentada desdibujan sus límites constituyéndose una identidad que ya no reconoce exclusivamente ni en la ruptura fundacional de la identidad emergente, ni en las características previas de las identidades sedimentadas.

Esto es central para analizar la dinámica de las organizaciones. En los tres casos aparece reflejada la búsqueda de esas identidades de generar espacios colectivos más amplios. Ahora bien, el espacio de articulación comienza a ser el peronismo, con lo cual esa identidad que conformaba una fracción de la exterioridad constitutiva de las organizaciones pasa a ser parte, aliado o a ser refundado. Como reflexión final las tres organizaciones analizadas desarrollan distintos posicionamientos y expresan de diversa manera esa tensión de la propia identidad entre la custodia de esta o la apertura y articulación hacia espacios que anteriormente no conformaban parte de la misma.

Reflexiones finales

Las jornadas de 2001 pero más precisamente la llegada de Néstor Kirchner al gobierno en 2003 despertaron inmediatamente la discusión al interior del campo popular, poniendo en cuestión las formas de pensar al nuevo gobierno. ¿Representaba una continuidad o una ruptura en referencia a la década neoliberal? Y si marcaba efectivamente un quiebre, ¿en qué sentido lo era? En este marco, también las ciencias sociales abordaron la nueva coyuntura intentando explicar, una vez más, el resurgimiento del peronismo y el de la *olvidada* matriz nacional y popular. No obstante ese esfuerzo analítico, muchos trabajos reprodujeron ciertas miradas que invisibilizaron la recomposición de esta tradición política, volviendo a viejas tesis signadas por miradas verticalistas que obstaculizaron la comprensión del complejo escenario.

Los procesos identitarios en su dimensión política, que incluyen prácticas y sentidos articulados, permiten comprender la dinámica del período y se establecen como elementos centrales para el análisis de los posicionamientos de las organizaciones en las diversas coyunturas y en su relación con el kirchnerismo. Esto constituye un aporte en el sentido de tomar la producción política de estas organizaciones y estudiar cómo respondieron a la interpelación nacional y popular del gobierno, cuestión soslayada en gran parte de la bibliografía.

Pensar la dinámica política en éstos términos nos permitió analizar cómo los diversos grupos fueron reestructurando sus identidades y cómo la constitución de límites y antagonismos surgidos en las distintas instancias posibilitó el realineamiento y la rearticulación de los elementos discursivos en cada una de las configuraciones identitarias en busca de un nuevo intento de *sutura*. No obstante, si bien las organizaciones compartieron ciertos elementos simbólicos, el vínculo con el gobierno durante el período se construyó de distinta forma de acuerdo a las tradiciones e imaginarios que habían construido históricamente.

BIBLIOGRAFÍA

- Aboy Carlés, G. (2001). *Las dos fronteras de la democracia argentina. La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem*. Rosario: Homo Sapiens.
- (2007). «La democratización beligerante del populismo». *Historia política. Com Debate*. Revista de la Asamblea Nacional de Panamá.
- Barros, S. (2005). *Espectralidad e inestabilidad institucional. Acerca de la ruptura populista*, Ponencia presentada en el VII Congreso Nacional de Ciencia Política.
- Biglieri, P. (2007). «El retorno del pueblo argentino: entre la autorización y la asamblea. Argentina en la era K». En Biglieri, P. y Perelló, G. *En el nombre del Pueblo. La emergencia del populismo kirchnerista*. Buenos Aires: UNSAM.
- Campione, D. y Rajland, B. (2006). «Piqueteros y trabajadores ocupados en la Argentina de 2001 en adelante. Novedades y continuidades en su participación y organización en los conflictos». En Caetano, G. (comp.) *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*, (pp. 297-327). Buenos Aires: CLACSO.
- Delamata, G. (2004). *Los barrios desbordados: las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires*. Buenos Aires: EUDEBA.
- (comp.) (2005). *Ciudadanía y Territorio. Las relaciones políticas de las nuevas identidades sociales*. Buenos Aires: Espacio.
- Delamata, G. y Armesto, M. (2005). «Construyendo pluralismo territorial. Las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires en la perspectiva de sus bases sociales». En Delamata, G. (comp.). *Ciudadanía y Territorio. Las relaciones políticas de las nuevas identidades sociales*. Buenos Aires: Espacio.
- Hall, S. (2003). «Introducción: ¿quién necesita 'identidad'?» En Hall, S. y Du Gay, P. (comps.). *Cuestiones de identidad cultural*, (pp. 13-39). Buenos Aires: Amorrortu.
- Howarth, D. (2008). «Hegemonía, subjetividad política y democracia radical». En Chrtichley y Marchant (comp.). *Laclau. Aproximaciones críticas a su obra*. Buenos Aires: FCE.

- Laclau, E. (1990). *Nuevas Reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- _____ (2005). *La razón populista*. Buenos Aires: FCE.
- _____ (2006). «Por qué construir un Pueblo es la tarea principal de la política radical». En *Cuadernos del CENDES* 62. Caracas.
- Laclau, E. y Mouffe, C. (2004). *Hegemonía y estrategia socialista*. Buenos Aires: FCE.
- Masseti, A. (2006). «Piqueteros eran los de antes: Sobre las transformaciones en la protesta piquetera». *Revista Laboratorio online*, VII, Otoño/ Invierno, Buenos Aires.
- _____ (2009). *La década piquetera (1995-2005)*. Buenos Aires: Nueva Trilce.
- Muñoz, M. A. y Retamozo, M. (2008). «Hegemonía y Discurso en la Argentina contemporánea. Efectos políticos de los usos de «pueblo» en la retórica de Néstor Kirchner». *Revista Perfiles Latinoamericanos*, (pp. 121-149) 31, México.
- Natalucci, A. (2008). «De los barrios a la plaza. Desplazamientos en la trayectoria del Movimiento Evita». En Pereyra, S.; Pérez, G. y Schuster, F. (comp.). *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones piqueteras pos crisis de 2001*. La Plata: Al Margen.
- Novaro, M. (2011). «La cultura política y el sentido común bajo el kirchnerismo». En Malamud, A. y De Luca, M. (coord.). *La política en tiempos de los Kirchner*, Buenos Aires: EUDEBA.
- Pérez, G. (2008). «Genealogía del quilombo. Una exploración profana por algunos significados del 2001». En Pereyra, S.; Pérez, G. y Schuster, F. (comps.). *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001*. La Plata: Al Margen.
- Reta, M. A. (2008). «Huellas en el camino hacia la peronización: los estudiantes junto al movimiento obrero peronista». *Revista Nuevo Mundo*. En línea: <<http://nuevomundo.revues.org/38032>>.
- Retamozo, M. (2006). *El movimiento de trabajadores desocupados en Argentina. Subjetividad y acción en la disputa por el orden social*. Mimeo. Tesis de Doctorado. México: FLACSO.
- Schuster, F. (2005). «Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva», en Schuster, F. y otros (comps.). *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*, Buenos Aires: Prometeo.

- Svampa, M. (2008). *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*, Siglo XXI/CLACSO, Buenos Aires.
- Tonelli, L. (2011). «Prefacio» en Malamud, A. y De Luca, M. (coords.). «La cultura política y el sentido común bajo el kirchnerismo». Malamud, A. y De Luca, M. (coord.). *La política en tiempos de los Kirchner*. Buenos Aires: EUDEBA.
- Torre, J. C. (2004). *La operación política de la transversalidad. El presidente Kirchner y el partido Justicialista*, Texto revisado de la intervención en la Conferencia «Argentina en Perspectiva», organizado por el Centro de Estudiantes de la Universidad T. Di Tella, noviembre. Mimeo.
- Verón, E. y Sigal, S. (2004). *Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista*. Buenos Aires: EUDEBA.

El eslabón perdido entre movimiento popular y democracia

Ariel H. Colombo

En América del sur confrontan otra vez la voluntad general y los mecanismos de mano invisible. Esta parte del mundo salió de los noventa con rupturas que generan reacciones desestabilizadoras, y que colisionan con la continuidad del statu quo internacional. Los movimientos populares, particularmente en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, participan de procesos de democratización que revierten la catástrofe neoliberal e introducen tensiones, hasta ahora apenas controlables, derivadas de la reconstrucción del Estado. Logran altas tasas de crecimiento con desendeudamiento, sin déficit fiscal ni déficit externo, con una tasa de inversión sobre PBI de alrededor del 24%, sin distribucionismo fácil ni proteccionismo irrestricto, y reducen sustancialmente el desempleo, la pobreza, e incluso la desigualdad¹. Las reformas estructurales transcu-

¹ Ni la entropía del Estado a favor del globalismo impidió el surgimiento de nuevos sujetos políticos, ni estos fueron posibles por la mera presencia de enclaves primarios o de concentraciones indígenas. Hay altos niveles de sublevación potencial conectados a una tradición ideológica beligerante, que confluyen en gobiernos que generan expectativas difícilmente reversibles. Estos gobiernos que en pocos años reformaron y distribuyeron más que cualquier socialdemocracia europea en la década de los cincuenta, no representan un «neoliberalismo compensatorio» sino iniciativas de reformas que se

ren dentro del constitucionalismo del Estado de derecho liberal, una novedad que exaspera no solamente a la derecha sino también a diversas expresiones de la izquierda y del establishment académico. Han hecho posible una proyección colectiva del futuro al politizar a sociedades que sustituyen a las prácticas de desobediencia civil por una competición electoral intensificada, que a su vez reemplaza un consenso sin opciones por una conflictividad racionalmente encauzada. Uno de los puntos de fricción, es la institución presidencial que, cuando cae bajo el influjo de la acción autónoma de los pueblos, se convierte en un instituto de democracia directa, por lo cual, no casualmente, los mismos que reclaman un presidencialismo fuerte que responda a la demanda de orden son también lamentan la pérdida de la «república» cuando los gobiernos se proponen cambios redistributivos. Los avances alcanzados exigen, no obstante, el involucramiento creciente de los sectores populares porque los gobiernos enfrentan ahora la cuadratura del círculo: elevar la tasa de inversión industrial con una baja tasa de ganancia en sectores extractivos, y reformar en sentido progresivo la tributación, porque de otro modo industrializarse será siempre más caro que exportar e importar más barato que producir para el mercado interno, manteniéndose una presión inflacionaria estructural.

Ahora bien, para interpretar las posibilidades de esta reconstrucción, parece imprescindible proponer categorías de análisis que registren la dinámica de actores que trascienden un impasse de las agencias políticas que se remonta a la crisis de los Estados intervencionistas keynesianos, y que reinstaló desde principios de los setenta la idea de que una interdependencia anónima que llevaría espontáneamente a resultados positivos, y que la *necesidad histórica* o el *intelecto general* tenderían el puente de una inteligencia de enjambre o de hormiguero entre el presente y el futuro². Creo, en tal sentido, que la teoría

refuerzan unas con otras. El caso de Argentina es excepcional: en diciembre de 2012 registraba 378 genocidas sentenciados y más de mil procesados, no habiendo registro de otro caso histórico, salvo Alemania y Japón durante la posguerra, países invadidos que fueron obligados a juzgar a sus criminales. Véase el documento informativo de la Cepal, Panorama social 2012, que muestra para estos países la reducción en dos puntos por año del índice de concentración de Gini.

² Entre algunos autores representativos: Guattari y Negri (1999); Bull (2006); Virno; Zizek (2000).

sigue fuera de la perspectiva del participante, y contribuye a confusiones tan poco desinteresadas como la muy difundida sobre si en nuestros países, los que más han avanzado en el desmantelamiento del andamio neoliberal, no se habrían instalado *populismos autoritarios* en lugar de verificarse procesos de democratización. Como sea, el nexo conceptual entre el movimiento popular y la democratización parece insuficiente o deficiente.

Hay puntos de vista que otorgan centralidad a la acción colectiva intencional, y el objeto de esta reflexión es detectar si además reconocen sus potenciales democráticos, es decir, si establecen alguna mediación significativa entre estas nociones, o deben incorporarse otros conceptos. En el enfoque de Adam Przeworski (1988) los compromisos entre asalariados y empresarios requieren un nivel muy moderado de movilización porque solo son posibles por debajo de la distribución máxima a partir de la cual la derecha convoca a la dictadura. La democratización es imposible más allá de este límite, porque aún antes de ser alcanzado los capitalistas responden con la desinversión y la fuga de capitales, haciendo retroceder el ingreso per cápita promedio por debajo del ingreso del votante mediano, alienando los votos que se ubican entre este votante mediano y el votante que por encima de él recibe el ingreso promedio (Roemer, 2001), y que son los que precisamente aportarían la mayoría electoral para iniciar la transición hacia otro tipo de sociedad. Es decir, ante un *valle de transición* o deterioro material transitorio, los ciudadanos son disuadidos por un desplazamiento que es propio de la lógica del sistema. Se vuelve racional, si son autointeresados, seguir la trayectoria capitalista y ajustarse prudentemente a ella en términos social-demócratas o nacional-populares. En otros términos: no habría forma de superar la disyunción entre el corto y el largo plazo porque el automatismo sistémico incrementa la tasa de descuento temporal de la clase media. Ni Przeworski, ni otras variantes del marxismo analítico, han previsto cómo pasar a una sociedad no-capitalista. Los trabajadores tendrán que aprovechar la segunda mejor opción, que es el compromiso de clases. No habría elementos para pensar a la brecha entre el corto y el largo plazo como el tiempo que falta para alcanzar objetivos de democratización. El potencial transformador de la acción oscilará dentro de cierto rango de variación irrebasable.

En la perspectiva de Jürgen Habermas (1989; 1997; 2002) la acción surge informalmente, al quedar bloqueada la comunicación institucionalizada, con el propósito de remover los obstáculos y restablecer el diálogo. Si este se ha quebrado porque las pretensiones de validez fueron impugnadas, hay que retroceder al plano argumentativo para defenderlas bajo la presuposición inmanente de que solo serán válidas las decisiones que todos los afectados acordarían en un debate sin restricciones. No obstante a que este principio es inevitable, ya que carece de alternativas (para rechazar la argumentación tenemos que usar argumentos), puede ser suspendido, o hacer solo *como si* fuese practicable porque, advierte, la presión temporal puede obligar a introducir otras reglas, como la de la mayoría, que interrumpe la deliberación pero hace posible una decisión. A mi juicio, esta relativización, del principio del discurso desestabiliza retroactivamente los fundamentos de la democracia que la pragmática universal aporta. Si puede ser dejado de lado porque falta tiempo para seguir deliberando hasta llegar al consenso racional, entonces la decisión puede ser arbitraria. No constata que el déficit temporal que impide obtener el mejor argumento, condensa las mismas asimetrías materiales y cognitivas que aniquilan las posibilidades de acción, y que, para que el debate no sea diferido, el principio moral tendría que incluir sus propias condiciones de aplicación. Así, también en Habermas, la constitución de un público como meta de la acción comunicativa, no podrá eludir los imperativos sistémicos que imponen consensos fácticos, y la relación interna entre acción y democracia quedará bloqueada por destemporalización, o por la coacción de necesidades materiales que no pueden posponerse. No casualmente, Habermas se resigna a movimientos sociales que asedian a la fortaleza pero sin intentar nunca conquistarla, y que solo buscarán cambios en la opinión pública.

Finalmente, desde el punto de vista de Ernesto Laclau (2005; 2008) la desconexión entre acción y democracia surge como solución, no como el problema. A partir de la equivalencia de demandas, ante la incapacidad del sistema para resolverlas una por una, que comparten algún tipo de frustración, surge el pueblo como construcción discursiva contingente, que divide a la sociedad en dos campos antagónicos. Una de esas demandas se vuelve hegemónica al encarnar una pleni-

tud ausente, que es el reverso imaginario de esa situación negativa, un significante que puede ser adoptado por agentes de signo político completamente opuesto. El término «justicia», por ejemplo, no tiene nada que anticipe que será asumido por un movimiento democrático o por uno antidemocrático. Sin embargo, Laclau advierte que no implica que vale todo, porque no solamente asumirán significantes vacíos sino que lo harán en un contexto normativo que nunca es cuestionado totalmente. Si postuláramos un dogmatismo procedimental no resolveríamos nada porque solo quienes comparten ciertos valores sustanciales pueden aceptar como legítimos ciertos procedimientos; es decir, para resolver qué diferencias son aceptables y cuáles no, no existe un criterio independiente, y sería un error buscarlo al margen de las luchas sociales de cada momento. El problema aquí, a mi juicio, es que si hay valores sustantivos compartidos que subordinan la elección de procedimientos, estos serán convertidos en *instrumentos*. Si estoy de acuerdo sólo con las reglas que conducen a la realización de metas sustantivas previas, adhiero al instrumentalismo típico de todas las Constituciones, en las que hay materias intangibles o prepolíticas, dogmáticamente fuera del alcance de la soberanía popular procedimentada, y que constituyen un instrumentalismo *dilatorio*, en tanto demora el cambio de modo sistemático. Además, los contextos en que se decide, también son producidos o delimitados por decisiones anteriores, y, como la primera también estaría sometida a un contexto dado, ingresamos a una regresión que pone en desventaja a la acción al no poder apoyarse o fundarse en un principio de referencia contrahistórico.

Como puede apreciarse, estos tres teóricos contemporáneos no llegan a establecer realmente un vínculo interno entre la acción y sus propias condiciones de posibilidad temporal. Nunca sabremos si la acción mientras se produce es democratizadora o no, o hasta qué punto, o si el criterio de evaluación es meramente retroactivo, inútil para las próximas decisiones. A la vez, e indirectamente, aparece el problema del tiempo faltante como brecha entre el corto y el largo plazo, como límite de las decisiones válidas, y como dilación o irresolución, pero sería difícil hallar la solución al interior de estas lógicas teóricas para las cuales el tiempo es, o una constante inmutable que puede

usarse bien o mal pero siempre disponible, o una variable identificable con el transcurso histórico, o un recurso escaso sin referencia a cómo puede ser producido.

En un sistema que funciona por repetición, de acuerdo a la circulación de la mercancía y a la rotación del capital, que arrastran a la sociedad a una constante fuga hacia adelante y que convierte a la historia en el relato de ciclos más o menos regulares, como el que propusieron Arrighi y otros (2001; 2005), el presente es capturado y eliminado de la experiencia humana, el futuro es convertido en futuro anterior o destino, y el pasado transformado en un pasado que nunca pasa o que nunca se supera. Parece ineludible, entonces, estudiar la acción por oposición al automatismo, y empezar por distinguir entre el proceso histórico como reiteración proyectada al infinito y el tiempo como finitud o plazo que lo interfiere. Una cuestión previa es, sin embargo, que la interrupción de la historia por el tiempo, a la que aludiera Walter Benjamin en sus Tesis³, no puede ser obra de ninguna filosofía sino de la propia acción colectiva intencional. Adoptar la perspectiva de la *acción*, y no la del *sistema*, parece en tal sentido un requisito insalvable.

Un punto de partida posible es la distinción que el propio Laclau (2012) establece entre oposición real, contradicción dialéctica y antagonismo social. La oposición supone complementariedad entre dos polos positivos que, si bien están en colisión, no cambian. La contradicción es un antagonismo pero como negatividad ficticia que contiene su autosuperación. Si en la oposición está enteramente ausente la negatividad, y en la dialéctica está presente como momento orientado a su reabsorción en una positividad superior. el antagonismo alude, en cambio a una incompatibilidad irreparable por la cual la sociedad nunca logra constituirse a sí misma en orden objetivo o en espacio único de representación. Tal negatividad es irrecuperable porque es

³ En discusión con las Tesis de Walter Benjamin propuse la expresión *pasado posterior*, una experiencia que *adelanta* respecto de los actuales niveles de coraje o coherencia porque su propio fracaso no colocó por detrás de ella, y cuyos aciertos y errores se visualizan solo cuando se es parte en el presente de una acción semejante (Colombo, 2009). Para una panorámica reciente de la filosofía de la acción: Leyva (2008).

presencia de la ausencia de fundamento en la estructura, que requiere de una fijación parcial de sentido por medios retóricos capaces de expresar aquello que es irrepresentable. Un ejemplo de esta superación transitoria es la idea de clase hegemónica de Gramsci, que universaliza sus objetivos convirtiéndolos en los de una fuerza social más amplia. En el marxismo clásico, lo universal ya estaba inscripto desde un comienzo en el proletariado que, por no tener intereses particulares que defender, al liberarse liberaba a todos. La centralidad ontológica de la clase se debía a su creciente ampliación y empobrecimiento por efecto de la gran industria, y, consecuentemente, se superponía lo ontológico y lo óntico, y no se universalizaba nada: la clase era en sí y por sí universal. Para Laclau la originalidad de Gramsci radica en que el universalismo no es un dato sino la construcción contingente de hegemonía. Es que la heterogeneidad social requiere de ese momento que no viene dictado por ninguna secuencia apriorística, y por el que ciertos contenidos son investidos con la representación de la plenitud ausente de la comunidad. La operación hegemónica crea un puente provisional entre lo óntico y lo ontológico, pero a la vez reproduce su imposible convergencia.

Ciertamente, las oposiciones y contradicciones no contienen una negatividad constitutiva, pero también creo que si bien son reacciones reintegrables a la política institucionalizada, conforman una voluntad colectiva *intencional* al revalorizar al *futuro actual*, o al desestabilizar lo que los economistas llaman *curva de indiferencia* al reducir la tasa de descuento temporal. Refuerzan la legitimidad del sistema, pero cuestionan de algún modo la reiteración cada vez del ciclo, y merecen toda nuestra atención. Cuando una reacción se convierte en antagonismo la negatividad traba al sistema y el proceso histórico por el cual el pasado amenaza prorrogarse para siempre, es interferido dramáticamente. Pero para que ello suceda, el antagonista se sujeta a reglas inherentes a la rebelión, que no es cualquier explosión de irracionalidad. Aunque no sean normativas en ningún sentido, ni se emparentan con plenitud alguna, son reglas de *justicia procesal* pura porque no anteponen ni posponen ningún contenido, originario o final. Tampoco «flotan» sino que son las presuposiciones pragmáticas de toda resistencia, y, la coherencia con ellas le da el doble aspecto ruptura incondicional (en relación al

sistema) y de apertura ilimitada (en relación a sus víctimas) persistentes, esto es, no solo se trata de una negación en sentido trascendental sino también de carácter atemporal.

Mientras un sistema solo tolera *reacciones*, y el déficit temporal consagra su *cierre* estructural, la acción tiene dos momentos diferentes, no conectados necesariamente. El primero es este de negatividad extrema, lo específicamente *político*, pero no como imposibilidad de un orden objetivo reparada parcialmente por alguna construcción hegemónica contingente, sino como parte contra el todo que no quiere ser otro todo, que no tiene nada para representar ni para universalizar, o que no encarna un sistema o un proyecto alternativo sino reglas que sustraen a los rebeldes del proceso histórico y que les permite enfrentarlo sin mediaciones. Serán la parte sin parte en el todo que no tiene la pretensión de convertirse en otro todo, y que por ello no encarna algún sustantivismo ético o jurídico sino únicamente reglas de validez enteramente procesales, que no mandan qué hacer. Será, en definitiva, el acto de rebelión cuya intencionalidad se define por el valor sin medida, o excedente, que asume el futuro actual. El sujeto, en estos términos, es sujeción a la justicia inmanente a toda rebelión, y la convergencia óptica-ontológica, que Laclau rechaza, o lo *político* que introduce el intervalo atemporal entre causa y efecto, entre normas y fines, es decir, la suspensión misma de las determinaciones que inercialmente dominan el presente. El paso de la condición de fuerza reactiva a la de fuerza moral, no es un intento necesario e imposible. Es un acto de dignidad, *inhumana* si se quiere, respaldado en la radicalidad de su propia forma.

Cuando una rebelión se desparticulariza no universaliza sus objetivos articulando otras demandas, porque simplemente no los tiene ni se adelanta con ellos. Lo que la convierte en antagonismo irreparable es, precisamente, esta coherencia con sus reglas *necesarias*, incompatibles con reglas instrumentales y dilatorias, las propias de cualquier sistema. No hay nada que obligue a que una fuerza reactiva se convierta en fuerza moral, pero eventualmente esta transformación en voluntad general no ocurre sin reglas de *justicia procesal pura*. Las rebeliones no decidirán nada, el futuro que valoran es atemporal, pero se reafirman si son consistentes en sentido pragmático, con re-

glas que no podrían evitar o rechazar sin recaer en modalidades simplemente reactivas de impugnación; en otros términos, una autocontradicción pragmática⁴ que no se planteará entre el contenido proposicional de un acto de habla y sus pretensiones de validez, sino entre estos reclamos de validez y reglas de validez. La *primacía del procedimiento sobre cualquier contenido y la prioridad de la participación en cualquier contenido (de modo tal que quienes no fueron parte de la decisión lo sean en la inmediata ulterior)*, son reglas idénticas los principios de soberanía popular y los derechos humanos cuando no se limitan ni se oponen sino que se *suponen y posibilitan*, y que en interacción, disuelven toda tradición, aún la propia, o todo contexto, aún el de la cada decisión. Al sujetarse a ellas, no anteponen ni posponen ningún contenido como lo hacen las reglas de justicia instrumental. No mandan qué hacer; por eso las rebeliones populares que parecen siempre conducidas al fracaso y a la masacre, y son tan imprevisibles como frágiles porque *ya* no son parte de la historia ni cuentan *todavía* con un tiempo propio para la toma de decisiones.

Habermas (2004) también afirma que ni los derechos humanos ni la soberanía popular son segundas fuentes de legitimación una respecto de la otra, y que ambos principios son igualmente originarios. Esta fue, señala, la intuición tanto de Rousseau como de Kant. La idea de autolegislación establece una relación interna entre la libertad y la razón, que para Habermas solo puede desplegarse como proceso histórico que va corrigiéndose a sí mismo, al menos si se concibe a la Constitución como proyecto que perpetúa el acto fundacional que prosigue de generación en generación. Pero dado que ni una Asamblea Constituyente podría garantizar la legitimidad de las reglas por las que ella se ha formado, y el proceso democrático seguirá un *regressus ad infinitum*, en lugar de recurrir a un punto de vista moral último que podrían detenerlo, como el que sostengo, propone enten-

⁴ Una crítica, desde esta óptica, a las éticas discursivas de Karl-Otto Apel y de Jürgen Habermas, y a la ética convergente de Ricardo Maliandi, en Colombo (2010). Los actos intencionales definidos en términos de revalorización del futuro o capacidad de espera, son previos a las «razones para actuar» o a las «pretensiones de validez» de los actos de habla. Sobre la «intencionalidad»: Searle (2000) y Habermas (2002).

der la regresión misma como expresión del carácter abierto hacia el futuro de la Constitución de un Estado de derecho: todas las generaciones tendrán que afrontar la tarea de actualizarla como adecuación interpretativa a las circunstancias. Esta continuidad falible del hecho fundacional solo podrá romper aquella circularidad si el proceso es entendido como aprendizaje *a largo plazo* capaz de autocorrección.

Sin embargo, no hay evidencias históricas al respecto, y este largo plazo tiende al infinito; la Constitución de los EE.UU., a la que alude Habermas como ejemplo, no ha sido perfeccionada salvo como sistema de alternancia sin alternativas que petrifica *sine die* asimetrías extremas. Se trata de una institucionalidad que desactiva la conflictividad potencial resultante mediante su externalización como imperio terrorista. Es que el Estado de derecho del capitalismo liberal, cuyo origen fundante es el crimen, consagra el aplazamiento, y posterga de generación en generación la remoción de los límites impuestos por la autonomía privada a la soberanía popular. Este rechazo de la democracia en nombre de derechos prepolíticos no surge de una deriva decadente; estuvo prevista por sus «padres fundadores». Madison pensó a la democracia en términos de libertades que limitan al poder y liberan a la sociedad de tener que definir el bien común. Las diversas líneas del conflicto social se cruzarán, y al cruzarse neutralizarían espontáneamente su intensidad, estabilizando la libre búsqueda del bien privado. Esta concepción que toma a los individuos como son y no como debían ser, se traduce en la división vertical y horizontal del poder, que reproducen el cruce de conflictos que conllevan la parálisis institucional y a que las elites políticas puedan negociar cartelizadamente la explotación política de la ciudadanía. Este modelo de despoltización fue imitado por las constituciones latinoamericanas, y es el que está hoy en pugna con la democratización en curso, que tiene sus raíces en otra tradición, antagónica, e inaugurada por la práctica política de los sans-culottes robesperrianos, que concibieron a la república como *democracia en acción*. La frontalidad del choque se produce porque el primer modelo se conforma a un funcionamiento sistémico no intencional, mientras que el segundo se encarna en iniciativas populares autónomas.

La relevancia de contar con un criterio de crítica estrictamente procesal, es decir, no condicionado por cláusulas predemocráticas, se

muestra, por ejemplo, en los casos de desobediencia civil autónoma, como lo fue el pacifismo británico de fines de los años cincuenta. El gobierno británico había resuelto fabricar armas nucleares. Inmediatamente, el movimiento pacifista adquirió fuerza y logró obstaculizarlo de múltiples formas, a tal punto que la mitad del Comité de los 100, presidido por Bertrand Russell, fue encarcelado. Quienes criticaron estos actos de desobediencia civil, y aún quienes adherían a la posición antinuclear, señalaban que los disidentes tenían todo el derecho a difundir sus ideas y de influir en la sociedad con el objeto de alcanzar una mayoría electoral que obligara a cambiar esa política, pero que no tenían el derecho de obstruir, ni siquiera pacíficamente, la política dictada por un gobierno legítimo. La respuesta a esta crítica por parte de los rebeldes se sostuvo en dos argumentos opuestos. Uno, «sustantivista» y mayoritario, compartido por intelectuales e historiadores de los movimientos sociales, postulaba que por encima de todo, aún de la voluntad de la mayoría legal, existe el derecho a la vida, que debía respetarse incondicionalmente y no arriesgarlo con armas que podían conducir a un exterminio mayor que el perpetrado por los nazis. Quienes defendían esta posición debían enfrentarse a la objeción obvia de que el derecho a la vida también era defendido por el gobierno, que sostenía el equilibrio disuasivo. Podía retrucarse que la disuasión significa estar dispuesto a usar las armas, y que esta misma actitud ponía en peligro la paz, y proseguir la discusión hasta un punto muerto, no por creencias inconmensurables sino a raíz de reglas decisorias que solo podían llevar o al acuerdo fáctico elitista o a la polarización en base a un desacuerdo igualmente irracional. Esto es, cualquier decisión posible sería inmoral, como lo demostró la táctica del laborismo, que cambió permanentemente de posición según le fuera adversa o no electoralmente.

El otro argumento, «procesalista» y minoritario entre los disidentes, casi sin defensores hasta hoy en los movimientos sociales, sostuvo que la decisión del gobierno no era legítima, porque en realidad solo ejecutaba una decisión tomada en 1947 por un gobierno con una mayoría diferente, en una reunión secreta de gabinete, sobre cuyo contenido no se había informado al parlamento, y, menos aún a la sociedad. Consecuentemente, si se hubiese tenido oportunidad de

deliberar de forma pública y abierta, con la información necesaria, otra hubiera sido la decisión, y ahora no deberían enfrentarse al conformismo de los hechos consumados. También aducían que la fabricación de armas de ese tipo involucraba un universo de afectados que trascendía los límites geográficos y éticos de la sociedad británica, y debían ser considerados como participantes en una decisión sobre la materia. La fuerza de este argumento, que impugna el uso de las reglas vigentes del sistema respecto de principios de validez pragmáticamente presupuestos en toda decisión, radica en que los disidentes, incluidos los mayoritarios, ya los ponían en práctica con sus actos de desobediencia civil: buscaron introducir el debate en la sociedad confiando en su capacidad reflexiva, obstruían al gobierno al extremo de avisar a la policía de sus planes con antelación, lo pusieron ante el dilema de reprimirlos o dejarlos actuar libremente; es decir, aplicaban recursivamente las reglas respecto de las cuales reclamaban coherencia al gobierno. Transgredían la ley intencionadamente, ateniéndose a las sanciones correspondientes, exponiéndose personalmente y rechazando que la represión o los riesgos recayeran sobre terceros; inscribían sus exigencias, no en un espacio público preexistente sino que creaban uno más amplio al obligar a toda la sociedad a definirse en relación al problema; eludían un reconocimiento de la sociedad más allá de la cuestión; eludían la representación, porque los hubiera hecho dependientes de un reconocimiento externo a la acción, y que les habría asignado un guión, neutralizando la incertidumbre deliberadamente provocada; prefiguraban, finalmente, mediante un práctica ejemplar cuáles debían ser las reglas decisorias.

Ahora bien, esta coherencia pragmáticamente expuesta también es susceptible a la confiabilidad, siempre que se trate de la confianza sin el propósito de recibirla o de darla, a la que en tal caso se accede inintencionadamente. La fuerza moral de los rebeldes se transformará en una *fuerza emplazante*, la de un plazo que hace posible a la acción en su segundo momento, y que es un tiempo limitante que pone un límite a la inequidad al obtener por parte de otros afectados, autorización *por un tiempo* para la toma de decisiones. Es por esta razón que sobreviene algo que antes no existía, un resultado inesperado que vinculará a los implicados mediante el plazo que conmina a

realizar ciertos objetivos de inmediato, y que son los que hace tanto realizables como exigibles. Este plazo, en que se convierte el futuro actual, posibilita la experiencia del tiempo de la acción, y, si hay una bisagra entre movimientos sociales y políticas democráticas es esta confianza inspirada por una fuerza moral a la que reconvierte, de forma involuntaria, en capacidad de emplazamiento. El nexo entre antagonismo y transformación, entre reglas de validez y reglas decisorias, entre lo político y la política, es este emplazamiento que habilita el despliegue autónomo de la acción, y que surge como subproducto lateral de la resistencia, a semejanza de la espontaneidad, el sueño, o la autoestima, en el sentido que interpreta Elster (1988; 1994) estos estados. Pareciera ser el eslabón perdido o el puente olvidado para atravesar el *valle de transición* entre el corto y el largo plazo, o para descomprimir la presión destemporalizadora sobre un debate apremiado por la toma de decisiones, o para contrarrestar la dilación inherente a las reglas instrumentales⁵.

Por último, esta fuerza emplazadora se consumiría rápidamente si no fuera por reglas de autogobierno (la unanimidad, la mayoría, y el acuerdo) que minimizan sus costos decisorios, y que el agente elige y emplea también respecto de reglas de justicia procesal en preservación de su continuidad. Si se hace una suerte de contabilidad imaginaria, podría decirse que el potencial democrático de la acción es ese mismo plazo descontados los costos de decidir, básicamente temporales. Pero el emplazamiento, que urge a la producción de bienes públicos, no tiene traducción al derecho constitucional. La acción que introduce a la democracia como regla decisoria lo hace para resguardar las propiedades temporales del cambio, como la irreversibilidad, la acumulación, el incremento, y la progresión⁶, no para instaurar un

⁵ El tiempo ha sido tratado como factor limitante, y también se ha estudiado su traducción a un formato institucional (Lechner, 1987; Schedler y Santiso, 1999; Ost, 2005, y otros), pero no en su surgimiento como plazo respecto del cual toda democratización es *pro tempore*.

⁶ La irreversibilidad supone que un cambio es preservado sin regresión; la incrementalidad, que el cambio genera la necesidad de otro a continuación; la acumulación, que el cambio siguiente no anula al anterior; y, la progresión, que el cambio mantiene la dirección prevista y la confirma al producirse. Estas propiedades temporales de la acción se mantienen mientras se mantenga el plazo.

sistema. Lógicamente, pueden institucionalizarse la unanimidad pero como veto contramayoritario, o la mayoría pero como maquinaria antideliberativa, o el acuerdo pero como negociación corporativa; en cualquier caso, las reglas sistémicas de legitimación que protegen cláusulas prepolíticas, como la propiedad privada y la libre contratación. Esta incompatibilidad entre reglas decisorias y reglas sistémicas nos remiten de nuevo al problema de la transición.

Según lo señalado antes, si tiene en cuenta el deterioro transitorio que supondría un proceso revolucionario, los trabajadores no se apartarán del capitalismo. Si optaran por un cambio de tal envergadura, dice Przeworski (1988), tendrán que hacerlo sobre la base de necesidades radicales, como el tiempo libre, y no en función de intereses materiales de corto plazo, para lo cual el capitalismo sigue siendo más eficaz. Pero la necesidad de tiempo será difícil de satisfacer, advierte, porque se presentaría otra situación bloqueadora: si los trabajadores demandaran una reducción del tiempo de trabajo, los capitalistas se volverían intensivos en mano de obra, y si reclamaran pleno empleo, se volverán intensivos en tecnología. Mi punto de vista, ante esta automaticidad aparentemente inexorable, es que debe desistirse, no de la posibilidad de que las decisiones más relevantes de todas, que son las de inversión, y que en el capitalismo son adoptadas por el sector privado, queden bajo la órbita de la democracia, sino de demandar tiempo a la lógica de la *destemporalización*, promovida por el instrumentalismo dilatorio característico de las reglas constitucionales. El tiempo, cuya inasibilidad es suficientemente conocida, resulta inintencionadamente de actos intencionales moralmente consistentes, y no habrá ningún anticapitalismo que enfrente el coeficiente de adversidad, cualquiera sea, hacia otro tipo de sociedad sin la fuerza moral como condición necesaria no suficiente del *futuro venidero*⁷.

Si esto fuera así, habría tres tipos de reglas. Las reglas que, en coherencia con ellas, dan a la resistencia el carácter de una fuerza moral; las reglas que, al reguardar el tiempo concedido a la acción, le confieren potencial democrático, y las reglas del sistema, constitu-

⁷ El concepto de *futuro venidero* corresponde a Norbert Lechner (1987).

cionales o no, con las cuales el agente de la acción mantiene una relación estratégica, evitando sobreestimar o subestimar la racionalidad de los actores que se rigen por ellas. Si un movimiento popular es capaz de actuar simultáneamente en los tres planos, y en todos demuestra su voluntad de coherencia, habrá iniciado, dentro o fuera del gobierno, un proceso de democratización. Es obvio, consecuentemente, que si el análisis se centra en las reglas del sistema, la preocupación será su estabilidad, mientras que si se concentra en los resultados conectados de cada tablero, no podrá prescindir de la perspectiva de la acción, y su interés autocrítico será indagar si el movimiento del que es parte producirá los cambios antes que sean revertidos por reacciones sistémicas, o cómo lograrlos.

Si esta fuera la conexión entre movimiento popular y democracia, podrían repensarse algunos patrones interpretativos; por ejemplo, los del dominio político en el capitalismo liberal. En lugar de entenderse a la hegemonía como la única forma de reproducir las bases materiales del consenso de los sectores subordinados, podría ser considerada una modalidad más, la extorsión, y definir las conjuntamente. Los estudios del ciclo capitalista, al no tomar las luchas políticas como variable independiente, han hecho hincapié en la producción del espacio, en la expansión territorial de la acumulación como válvula de seguridad y superación de la crisis. Por ejemplo, en la obra de Giovanni Arrighi, cada ciclo se inicia cuando el capital sobreacumulado se apodera de nuevos activos, se los lleva a un uso rentable en un área geográfica mayor, hasta que de nuevo por presión de la competencia los monopolios de punta son socavados y la masa de beneficios hace caer la tasa de ganancias, apareciendo más capital del que se puede invertir ventajosamente en la producción. Pero las luchas políticas, que Arrighi no logró integrar satisfactoriamente a su modelo, son interrupciones intermitentes que alteran el ciclo y cambian las formas de dominio. En el último, iniciado con la segunda guerra, el capitalismo liberal se estabilizó sobre la base de la *hegemonía* hasta principios de la década de 1970, y lo hizo después y hasta el presente por medio de la *extorsión*. Estas dos formas de dominio, surgieron cuando el capitalismo ya no tenía fronteras espaciales que atravesar y las luchas políticas habían conseguido universalizar derechos electorales y so-

ciales, a mediados del siglo XX. Reproducen el consenso a través del intercambio entre el corto y el largo plazo, pero en realidad son formas de seudotemporalidad que, como permanentes fugas hacia adelante, comenzaron a sustituir a la expansión territorial en la restauración de la rentabilidad, y a la guerra como salida de los riesgos de revolución⁸.

Por la hegemonía se aceptan los sacrificios actuales a cambio de la promesa de un porvenir de mayores salarios e impuestos, de acuerdo a un índice de transformación de ganancias en inversiones que permanece indeterminado, y que es objeto de disputa política. El problema de los sectores populares y medios asalariados es, en este caso, obtener que los propietarios inviertan a partir de una baja tasa de ganancias, logrando que sus mediadores, los sindicatos, partidos y Estado, hagan promesas en tal sentido y las cumplan. Esta fase de acumulación productiva del ciclo colapsó a fines de los 60' a raíz de la insurrección popular en todo el mundo que apuntaba a crear, apoderándose de fuertes Estados intervencionistas, otro tipo de sociedad. La segunda fase del ciclo, y que Arrighi llama de acumulación financiera, fue en realidad un régimen político que se apoyó en la extorsión; en este caso, se trata de un intercambio entre presente y pasado por el que se aceptan sacrificios actuales bajo amenaza de que puedan ser aún mayores, tal como lo fueron en algún momento anterior. El chantaje es políticamente inferior a la hegemonía, y busca generar la demanda del mismo producto que tiene para ofrecer, es decir, protección⁹. Pero es igualmente eficaz para producir consenso, aunque sin reproducir sus fundamentos materiales. Las víctimas tienen que conformarse con no estar peor, y los victimarios tienen que esmerarse en hacer verosímiles sus amenazas. La burguesía deja de representar

⁸ Para una interpretación «espacializante»: Arrighi (2005); Arrighi y Silver (2001); Braudel (1986); Brenner (2009); Wallerstein (2010); Harvey (2007). También Jameson (2009) ensaya una recuperación moderna del posmodernismo centrada en la noción de espacio.

⁹ La forma de recrear la desconfianza, base de la inacción, fue reseñada por un asesor de Carter y de Clinton: «los tres grandes imperativos de la estrategia geopolítica son: evitar la confabulación de los vasallos y mantener la dependencia en cuestiones de seguridad, conseguir que los subordinados sigan siendo influenciables y maleables, y evitar que los bárbaros se coaliguen». Sobre el concepto de «confianza», Colombo (2012).

el futuro porque maximiza las ganancias de corto plazo, y el pueblo, desactivado políticamente por la crisis de la secuencia anterior, acepta los niveles salariales existentes ante la posibilidad de enfrentar al desempleo. Si la hegemonía genera expectativas y promesas para luego enfriarlas y postergarlas, la extorsión agita miedos y amenazas, a los tiene que también que prorrogar, porque en definitiva, promesas y amenazas son incumplibles en la medida que remiten a un tiempo indefinido. Una prórroga que siempre es posible porque la hegemonía cuenta con un futuro imaginario que siempre puede ser pospuesto, y la extorsión con un pasado fantasioso que siempre puede retornar. Las teorías de las crisis de raíz gramsciana no han contemplado esta salida chantajista que no reproduce las bases económicas del consentimiento, solución que no promete nada sino que ofrece protección contra la posibilidad de estar peor, pero que preserva tanto como la hegemonía las reglas del constitucionalismo liberal, en base a un pasado que nunca pasa o que nunca es pasado superado.

Hay en la hegemonía y en la extorsión un trueque que es seudotemporal porque en realidad su cumplimiento no está sujeto a ningún plazo políticamente exigible. Si la hegemonía genera expectativas para la legitimación, que luego enfría para abrir un cauce a la acumulación productiva, la extorsión explota el temor para estabilizar con un mínimo de legitimidad la acumulación financiera. En este último caso, el sistema crea la demanda del producto que tiene para ofrecer: protección contra los problemas que ha generado en un momento anterior, a cambio de la adaptación a una lógica cortoplacista. Así, la hegemonía como promesa de un futuro común que siempre puede ser pospuesto, y la extorsión como amenaza de un pasado disolvente que siempre puede retornar, representan una fuga hacia adelante cada vez más acelerada porque una u otra nunca se cumplen, o son incumplibles, ya que la acumulación de capital no tiene fin. El mandato es que la mercancía circule cada vez a mayor velocidad, hacer más de lo mismo cada vez rápidamente, con la decepción consecutiva y la creación incesantes deseos que tampoco podrán ser satisfechos por la propia naturaleza de los bienes posicionales. La velocidad no permitirá recordar porque solo se accede a un pasado que no pasa, ni permitirá proyectar porque solo se accede a un futuro que no

llegará nunca. La instantaneidad de un crash bursátil marca, por ejemplo, una pérdida de pasado y futuro que es mundial, y que impedirá recordar que hubo otros antes que él ni prever que los seguirán tampoco serán evitados¹⁰. No se busca desarticular algún contenido particular de la memoria y del imaginario, sino bloquear las funciones

¹⁰ Las formas extorsivas que sucedieron a las formas hegemónicas a principios de los años setenta, fueron conformadas por el conjunto de reacciones del capital contra la capacidad política de los sectores populares, no solo de hacer cumplir promesas sino también de desbordarlas. Había Estados de gran tamaño con capacidad de apropiarse de los excedentes y de resistir la entrega de los incrementos de productividad al poder de clase transnacional, y, la maniobra reactiva que desmovilizó a los pueblos desembocó en una acumulación que ya no se dirigió a la reproducción ampliada sino a una especulación que se apoderó de todos los mercados. El movimiento popular fue derrotado cuando se aumentaron los salarios entre 1968 y 1974, ya que el precio de disciplinar los trabajadores a un patrón monetario fijo suponía el riesgo de una radicalización aún mayor. La liquidación del patrón oro permitió la emisión, y la escalada inflacionaria debilitó a los trabajadores y los puso a la defensiva. El repliegue de masas liberó el terreno para la instauración de la secuencia extorsiva, que prosigue hasta hoy en los países centrales, y que tiene por objeto el reemplazo del Estado por el mercado en la asignación de recursos. EE.UU. esperó este repliegue mundial de los pueblos para restaurar la rentabilidad contra sus propios trabajadores y contra sus competidores, pero como la inflación también debilitó al dólar, reorientó el inicio de la fase financiera en su propio beneficio subiendo las tasas de interés en 1979 pasando, de ofrecer fondos, a demandarlos para equilibrar sus cuentas. Hoy Asia oriental financia su doble déficit, y, los costos y beneficios de la mundialización están demasiados interconectados como para que otros países centrales desafíen el poder norteamericano. Lo que los Estados Unidos exportan hoy, en realidad, es la debilidad de su sistema político, porque no pueden prometer un futuro, confiscado por el endeudamiento interno y externo. Al despejarse la escena de la presencia popular, por la que ingresó el neoliberalismo, primero represivamente y luego a través de la extorsión, se implantó una legalidad, réplica de la estadounidense, para la movilidad internacional de los capitales, lo cual permitió al centro apropiarse de los excedentes generados en los circuitos de valorización financiera. Los países, amenazados por la fuga de capitales, elevaron las tasas de interés y remataron el patrimonio público, con el consentimiento electoral de la ciudadanía. Cuando, a mediados de los noventa, los temores se fueron perdiendo en la medida que los males públicos presentes, como el desempleo, eran ya mayores a los del pasado inflacionario, y las amenazas se volvieron inverosímiles, el activismo popular adoptó la estrategia de la desobediencia civil. Pero en el centro no hay ninguna crisis, sino una estabilidad sostenida en la extorsión: que el sistema financiero mundial se encuentre siempre al borde de la quiebra es su forma estable de funcionar. Si EE.UU. quebrara y no pagara su deuda provocaría una implosión contractiva, y si la pagara induciría una explosión inflacionaria. Esta es la forma misma de una extorsión mundializada. No se verifica una decadencia irreversible, que el esperado por el pensamiento desiderativo del conjunto de la izquierda desde hace 40 años, sino un chantaje que posibilita el aplazamiento indefinido, diferimiento constante que es la lógica interna y específica del capitalismo liberal, hasta que las luchas populares impongan otra vez relaciones hegemónicas.

mismas de recordar y de imaginar, ajustar a los individuos a un proceso repetitivo, lo que explica las dificultades para colectivizar la acción asociadas a esta dinámica circular de la seudotemporalidad, que lleva a la perturbación propia del ciudadano asténico, un individuo cansado de intentar siempre lo mismo¹¹. Cuando las promesas y amenazas se vuelven poco creíbles, el capitalismo adaptará a los individuos a la reiteración destemporalizadora: la orden es hacer más de lo mismo cada vez más rápido. A esto alude la extinción de la experiencia en Adorno a través del proceso tecnificado de la producción de bienes, corroída por el mercado y reemplazada por la efímera ilusión de estar informados.

En el marco de esta redefinición de categorías políticas, las imágenes espaciales de «derecha» e «izquierda», que se cargan y descargan semánticamente según épocas y lugares, también deben revisarse. Para la interpretación corriente habría un futuro para las izquierdas, pero dependerá de que cambie de ideales, sin que se advierta que fuera del tiempo elaborado colectivamente carece de sentido discernir entre ideas alternativas inviables por igual y que la inclusión del eje temporal cambia por completo las coordenadas ideológicas. La derecha, atrincherada en el sistema, rechazará las reglas constitutivas de lo político, y adoptará invariablemente políticas de aplazamiento cualquiera sea su contenido ideo-

¹¹ La recurrencia ocupa el tiempo que falta, y las promesas y amenazas serán incumplibles porque se cumplen en algún punto del infinito en base a narraciones ucrónicas de encubrimiento, como la «tendencia al equilibrio» de la libre competencia. El antes y el después se vuelven, así, intercambiables, por lo cual no puede haber un «retorno de lo reprimido». Mientras el fracaso de la represión asegura en Freud una continuidad, y los síntomas siguen siendo reversibles, al quebrarse la capacidad de proyectar colectivamente, las reglas adaptativas del sistema ocuparán el lugar de la acción. Esta adaptación, luego de una represión exitosa, configura lo que a nuestro juicio podría denominarse, sin ironía, «el mal de la banalidad»: las opciones se vuelven indiferentes y el cinismo se combina con la astenia como mecanismo contra la frustración. En este mismo sentido, Sami-Ali (1993) se ha referido a la represión de la función de lo imaginario, que no se limita a la represión freudiana de algún contenido particular. El autor propone otra secuencia: represión, represión lograda, adaptación a lo represivo. Desde mi punto de vista, cuando la orden es no retrasarse, la hiperactividad invade el tiempo del individuo y lo incapacita para poner límites temporales. Eliminada la experiencia del presente, este resurge desmaterializado, como un vacío relleno inercialmente como «presente histórico».

lógico. La izquierda, si no quiere asimilarse a tal política y resuelve trascender su negacionismo ancestral respecto de las iniciativas populares autónomas, no podrá descartar al tiempo como finitud que impone la superación de ciertos agravios, y no de otros, *ahora*. Su programa no dependerá de que las condiciones maduren, o del mayor o menor extremismo en su ideas igualitaristas o libertarias, sino de la capacidad de emplazamiento, que procede de la confianza que puede aportar el universo de implicados como mandato investido de exigibilidad, un vínculo que los enlaza moralmente al hacer factibles sus objetivos, pero que siempre es una respuesta inintencionada a la coherencia con principios de justicia procesal. Ese plazo como mandato es el que han recibido los gobiernos reformistas latinoamericanos, emergentes de movimientos sociales que cuentan con un tiempo breve pero que es el único que hay.

Como se dijo al comienzo, los sectores populares en algunos países de América del sur han impulsado transformaciones que pueden entenderse como un cambio cualitativo en las formas de dominio que adopta el ciclo capitalista. Salieron de la extorsión de los ochenta y noventa para reingresar a las relaciones de hegemonía, iniciando transformaciones que, a la vez que consolidan una nueva primera fase del ciclo de Arrighi, chocan solapadamente con la segunda secuencia del ciclo anterior que subsiste en los países desarrollados. Para poder sostener estos avances es necesario un involucramiento tan activo de los sectores populares que, llegado el momento, podrían trascender la seudotemporalidad específica de la hegemonía, y generar sus propios plazos, esto es, buscando el cumplimiento de las promesas de futuro pueden poner en tela de juicio la lógica de aplazamiento. La anticipación de esta posibilidad por parte de la derecha genera reacciones alimentadas por los sentimientos antiigualitarios y racistas en la clase media, y que obligan a los gobiernos populares, apoyados en ajustadas mayorías, a enfrentar permanentes intentos de golpe de Estado y de mercado. Únicamente en la medida que los sectores populares confíen en sus propias fuerzas sin subestimar ni sobreestimar a sus adversarios, observando una racionalidad estratégica, podrán desbordar en algún momento los parámetros del sistema, sin riesgos de regresión, pero no ya por medio de la praxis multitudinaria con la potencia ilimitada de una inteligencia anónima, sino por medio de la fuerza emplazante de la acción intencional.

BIBLIOGRAFÍA

- Arrighi, G. y Silver, B. (2001). *Caos y orden en el sistema-mundo moderno*. Madrid: Akal.
- Arrighi, G. (2005). «Comprender la hegemonía». En *New Lef Review*, 32 y 33. Madrid: Akal.
- Braudel, F. (1986). *La dinámica del capitalismo*. México: FCE.
- Brenner, R. (2009). *La economía de la turbulencia global*. Madrid: Akal.
- Bull, M. (2006). «Estados del fracaso». En *New Left Review*, 40. Madrid.
- Colombo, A. (2009). «El tiempo de la acción a propósito de las Tesis de Walter Benjamín». En Mudrovcic, M. (ed.). *Pasados en conflicto. Representación, mito y memoria*. Buenos Aires: Prometeo libros.
- Colombo, A. (2010). «Ética discursiva, ética convergente y pragmática del tiempo». En Aguayo, C. y Salas, F. *Éticas convergentes en la encrucijada de la postmodernidad*. Santiago de Chile: Ediciones UCSH.
- Colombo, A. (2012). *La cuestión del tiempo en la teoría política*, V. 4. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Elster, J. (1988). *Uvas amargas. Sobre la subversión de la racionalidad*. Barcelona: Península.
- Elster, J. (1994). *Lógica y sociedad. Contradicciones y mundo posibles*. Barcelona: Gedisa.
- Guattari, F. y Negri, A. (1999). *Las verdades nómadas & General Intellect, poder constituyente, comunismo*. Madrid: Akal.
- Habermas, J. (1989). *Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos*. Madrid: Cátedra.
- Habermas, J. (1997). «Consideraciones finales». En Gimbernat, J. *La filosofía moral y política de Habermas*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Habermas, J. (2002). *Verdad y justificación*, primera parte. Madrid: Trotta.
- Habermas, J. (2004). *Tiempo de transiciones*. Madrid: Trotta.
- Hardt, M. y Negri, A. (2002). *Imperio*. Buenos Aires: Paidós.
- Harvey, D. (2012). *El enigma del capital y las crisis del capitalismo*. Madrid: Akal.
- Jameson, F. (2009). *Arqueologías del futuro. El deseo llamado utopía y otras aproximaciones de ciencia ficción*. Madrid: Akal.

- Laclau, E. (2008). «Atisbando el futuro». En Critchley y Marchart, O. (comps.) *Laclau. Aproximaciones críticas a su obra*. Buenos Aires: FCE.
- Laclau, E. (2012). «Antagonismo, subjetividad y política». En *Revista Debates y Combates*, 3, 2. Junio-julio. Asociación Escenarios, Universidad de San Pablo (Tucumán), y Fondo de Cultura Económica.
- Laclau, E. (2005). *La razón populista*. Buenos Aires: FCE.
- Lechner, N. (1987). «El realismo político: una cuestión de tiempo». En VV.AA. *¿Qué es el realismo en política?* Buenos Aires: Catálogos.
- Leyva, G. (ed.) (2008). *Filosofía de la acción. Un análisis histórico-sistemático de la acción y de la racionalidad práctica en los clásicos de la filosofía*. Madrid: Editorial Síntesis.
- Ost, F. (2005). *El tiempo del derecho*. México: Siglo XXI.
- Przeworski, A. (1988). *Capitalismo y socialdemocracia*. Madrid: Alianza Editorial.
- Roemer, J. (2001). *Political competition Theory and applications*. Massachusetts: Harvard University Press, Cambridge.
- Sami-Alí (1993). *El cuerpo, el espacio y el tiempo*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Schedler, A. y Santiso, J. (1999). *Tiempo y democracia*. Caracas: Nueva Sociedad.
- Searle, J. (2000). *Razones para actuar. Una teoría del libre albedrío*. Barcelona: Ediciones Noble.
- Virno, P. (2008). *Gramática de la multitud*. Buenos Aires: Colihue.
- Wallerstein, I. (2010). «Crisis estructurales». En *New Left Review*. Mayo-junio, 62. Madrid: Akal.
- Zizek, S. (2000). «¿Lucha de clases o posmodernismo? ¡Sí, por favor!». En Butler, J., Laclau, E. y Zizek, S. *Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda*. México: FCE.

La recreación de la gramática *movimentista* de acción colectiva: movimientos sociales y nuevas institucionalidades

Ana Natalucci

Durante los noventa, a diferencia de lo que suele pensarse, emergió un ciclo de movilización extendido entre 1997 y 2001 (GEPSAC, 2006), denominado en un trabajo anterior «pre-crisis» (Natalucci, 2012a). En éste se condensaron años de luchas populares, que facilitaron la emergencia de sujetos políticos, entre ellos el piquetero. En ese proceso se conformó lo que podríamos denominar, siguiendo a Svampa (2005) y a Pérez (2010), un nuevo *ethos* militante, caracterizado por los siguientes rasgos: a- el despliegue en el territorio como unidad de acción política y espacio de reconocimiento organizacional; b- la utilización de la dinámica asamblearia y la democracia por consenso como procedimiento de toma de decisiones, en el marco de un fuerte cuestionamiento a los vínculos políticos delegativos; c- el uso de una retórica de derechos para el reconocimiento de las organiza-

¹ Una versión anterior de este capítulo fue expuesto en el Encuentro Académico «Procesos de organización popular y movimientos sociales en la Argentina contemporánea. Continuidades y rupturas», organizado por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador.

ciones y la enunciación de sus demandas; y por último, d- la autogestión y el cooperativismo como estrategias productivas para enfrentar las transformaciones del mercado de trabajo en su inflexión posfordista. Este *ethos* encontró en la crisis de 2001, especialmente en ese álgido mes de diciembre, su consolidación. Pese al potencial de este *ethos*, lo cierto es que por su estatuto destituyente (que incluía no solo el cuestionamiento al orden político vigente sino también cierta reivindicación de autonomía social respecto del Estado –igualado a lo político–) abría pocas posibilidades para la acción política en el mediano plazo, y con ella las oportunidades para encontrar cierta estabilidad luego de la crisis.²

En 2002 se abrió un nuevo ciclo, en el que empezó a cuestionarse el rasgo exclusivamente destituyente de la política. Las elecciones presidenciales realizadas en abril de 2003 y la emergencia del kirchnerismo como actor político trastocaron la configuración del espacio multiorganizacional tal como se había conocido hasta entonces. Entre otras cuestiones, se propiciaron condiciones para la emergencia de organizaciones, demandas y problemas públicos que, a su vez, incidieron en realineamientos interorganizacionales y la articulación de nuevos frentes políticos; se renovaron las concepciones en torno a la democracia. Tal vez la mayor novedad en este ciclo en materia de movilización social sea la recreación de la gramática movimentista de acción colectiva. Esta transformó los vínculos con el régimen político en tres dimensiones: las formas de participación política, los mecanismos de representación y los dispositivos de legitimación de la comunidad política (Natalucci, 2012a; Pérez y Natalucci, 2012). El impacto en estas tres dimensiones no fue homogéneo; por el contrario, adoptó diferentes características y matices en esa tensión que supone toda articulación entre un ciclo de movilización y un régimen político.

El propósito de este capítulo es analizar las transformaciones en la primera de esas dimensiones: las formas de participación políti-

² Es interesante la propuesta de Pérez (en prensa) respecto de cómo pensar la crisis de 2001 como un «quilombo» y las consecuencias que aparejó para el kirchnerismo.

ca. Por un lado, es la que más cambios ha sufrido. Por otro, los movimientos sociales y sus organizaciones: constituyen formas en que los ciudadanos experimentan la democracia, y en este sentido son imprescindibles para la creación de nuevas institucionalidades. En pos de este objetivo, se revisarán las trayectorias de organizaciones que mantenían un tipo de vínculo heterónomo con el Estado y se reconocían parte de la subcultura del nacionalismo popular. Los casos que tomaremos son el Movimiento Evita, la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat y el Frente Transversal Nacional y Popular. El corpus a ser analizado se conforma de entrevistas en profundidad a dirigentes y cuadros intermedios de las organizaciones, encuestas a militantes realizadas en actos públicos, observaciones participantes en actos y manifestaciones y material producido por ellas.

Antes de finalizar, es menester advertir al lector sobre la necesidad de analizar el proceso de los movimientos sociales y sus organizaciones sin caer en posturas celebratorias que, remarcando «la vuelta de la política» o de «los jóvenes», fuerzan una contraposición con cierta despoltización observada en los noventa. Antes que sostener que o bien en los noventa no hubo militancia que cuestionara el orden imperante o bien que en el kirchnerismo solo hay politización y compromiso, es necesario, por el contrario, un análisis crítico y sistemático que identifique las características, procesos y potencialidades de la movilización en el kirchnerismo y que marque las continuidades y rupturas producidas, como la recreación de tradiciones.

Por último, cabe señalar que este artículo presenta algunos resultados preliminares de una investigación en curso «La movilización en el kirchnerismo».³ En esta oportunidad, el lector no encontrará una conceptualización novedosa respecto de trabajos anteriores, sino más bien una lectura del proceso de las organizaciones.

³ Dicha investigación se inició en 2010, ha sido ejecutada, bajo mi dirección, por el Grupo de Estudios sobre Sociología Política y radicada en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.

Lineamientos teóricos para pensar los movimientos sociales y sus organizaciones

A la luz del objetivo de este capítulo de analizar el proceso de las organizaciones antes que teorizar sobre el mismo, en este apartado se presentarán tres conceptos fundamentales para la perspectiva con que pretendemos analizar la recreación de la gramática movimentista. Estos son el de *gramática política movimentista*, el de *subcultura* y el de *institucionalización*.

El concepto de gramática política⁴ que adoptaremos se inscribe en la tradición wittgensteiniana, que desde una perspectiva pragmática resalta su performatividad:

Un sistema de reglas de acción que ligan el tiempo y espacio de la experiencia de los sujetos, definiendo formas válidas de resolver problemas de autoridad y asignación. En este sentido, el concepto delimita, por un lado, las pautas de interacción de los sujetos; y por otro las combinaciones de acciones para coordinar, articular e impulsar intervenciones públicas, dirigidas a cuestionar, transformar o ratificar el orden social. En definitiva, esta noción alude a las reglas y usos que dotan de un principio de inteligibilidad a las acciones. (Pérez y Natalucci, 2012: 19)

De acuerdo a esta definición pueden identificarse tres tipos de gramáticas: autonomista, clasista y movimentista.⁵ Esta última da por supuesto que la historia se divide en dos etapas: de resistencia y ofensiva. Si en la primera se profundiza la fragmentación del espacio multiorganizacional, en la segunda se generan condiciones que habilita la emergencia de articulaciones inter-organizacionales; esta posibilidad está dada por la difusión de un lenguaje de derechos que per-

⁴ Para profundizar sobre ese concepto y sus diferencias con el de gramática de motivos y como estructura interna de las organizaciones véase Natalucci (2010).

⁵ Por cuestiones de espacio no nos detendremos en la explicación de las gramáticas clasista y autonomista. Para profundizar sobre ellas véase Natalucci, (2010); Pérez y Natalucci (2012a).

mite universalizar algunas de sus demandas junto con la apelación al Estado como su último garante. Cada etapa de alguna manera define el tipo de intervención política predominante: mientras en la defensiva las organizaciones adquieren rasgos destituyentes para cuestionar el orden vigente, en la ofensiva toman uno de tipo instituyente para redefinir reglas de participación, propiciar la reposición o instauración de derechos. De esta manera, la gramática movimentista se maneja en la tensión entre orden y conflicto (Rinesi y Vommaro, 2007) o, en nuestra perspectiva, entre lo instituyente y destituyente en tanto «*la movilización es la condición de posibilidad para impulsar los cambios en el orden social instituido*» (Pérez y Natalucci, 2012: 22).

En definitiva, la gramática movimentista permitió: que ciertas organizaciones –como las que presentaremos en este artículo– interpretaran el kirchnerismo como un proceso político de ofensiva; que se identificaran como líderes primero a Néstor Kirchner y luego a Cristina Fernández; que se entablaran relaciones con organizaciones con las que se intentará construir espacios de coordinación y articulación política; y la auto percepción como *punte*⁶ entre el Estado y los sectores populares, como la concepción en la cual el Estado es el espacio clave desde el cual se puede transformar el orden social en tanto que aquel posibilita, entre otras cuestiones, la instauración de derechos (Natalucci, 2012b).

Ahora bien, estas organizaciones participan de lo que hemos denominado espacio multiorganizacional, entendiendo por tal y de acuerdo a la perspectiva koselleckiana un «campo de experiencias»; es decir, un espacio en el que organizaciones diferentes respecto de sus definiciones político-ideológicas se relacionan entre sí manteniendo relaciones de competencia, solidaridad, cooperación, coordinación o articulación como también modos divergentes de intervención y apropiaciones desiguales sobre la identidad que las convoca. Siguiendo a Diani (2010) hay cuatro tipos de lógicas de coordinación de las acciones colectivas según qué respuestas se ensayen frente a los dilemas

⁶ Usaremos las cursivas para indicar términos nativos, originarios de las organizaciones analizadas.

básicos de la organización (asignación de recursos y definición de los límites): movimientos sociales, coalición, organización y subcultura. Esta última es pensada como una lógica donde existe una manera común de entender el mundo que permite identificar similitudes y proximidades sin que por esto existan relaciones sistemáticas u orgánicas (Diani, 2010).

En este sentido, las organizaciones que comparten una gramática movimentista también comparten un lenguaje y un modo de intervenir en el espacio público que les es familiar, incrementando las posibilidades de establecer articulaciones políticas. En esta clave debe entenderse el proceso que algunas –entre ellas el Movimiento Evita, la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat y el Frente Transversal Nacional y Popular en adelante ME, FTV y FTNyP respectivamente– iniciaron entre 2003 y 2004 para la construcción de frentes políticos desde los cuales coordinar acciones colectivas, proyectos y políticas públicas, tales como el Frente de Organizaciones Populares o el Frente Patria para Todos.⁷

Otro aspecto que comparten las organizaciones fundamentadas sobre una gramática movimentista, como se mencionó, es el de concebir a la movilización como una condición necesaria para la instauración de derechos. Esta concepción implica una estrategia de cuestionamiento al orden social vigente pero también el impulso de propuestas y demandas que deben cristalizarse bajo la forma de derechos. En este punto, el concepto de institucionalización se muestra como mediación entre la capacidad de movilización social y la de participación política-institucional, entre la sociedad civil y el régimen político. La posibilidad de los movimientos y sus organizaciones para crear institucionalidades está directamente relacionada con su capacidad de agencia y con la recursividad de la acción (Giddens, 1994). En tal dirección, la noción de institución no refiere al proceso de formalización de mecanismos internos de un movimiento sino a la

⁷ Por una cuestión de espacio no podré explayarme sobre estas experiencias, para profundizar sobre ellas véase Natalucci (2012b); en Pérez y Natalucci (2012) el lector encontrará los documentos de ambos espacios.

rutinización de pautas de acción. Marchart (2009) siguiendo un enfoque lefortiano sostiene que las sociedades democráticas modernas se caracterizan por la «institucionalización del conflicto», en otras palabras, esta «*es inherente al dispositivo democrático en tanto permite otorgarle cierto reconocimiento al conflicto, constitutivo de la dinámica social*» (Natalucci y Pagliarone, 2013: 92).

Conflictos sociales e institucionalización en el kirchnerismo

La crisis de 2001 puede ser pensada siguiendo a Pérez (en prensa) como una movilización política, entendiendo por tal el proceso que pone en estado de tradiciones y repertorios. Desde esta perspectiva, el kirchnerismo es concebido como un efecto de fusión de aquella crisis, el emergente que permitió la recomposición del orden sociopolítico (Pérez, en prensa).

Entre otras cuestiones, a partir de la asunción de Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003, se produjeron cambios en la contienda política que incidieron en la mutación del espacio multiorganizacional por la cual se recreó su dinámica, así como también las relaciones que las organizaciones habían mantenido hasta entonces con el régimen político. De esta manera, emergieron nuevos colectivos –como el ME o el FTNyP– mientras que otros que habían tenido centralidad, como los autonomistas, se replegaron sobre el territorio. Asimismo, organizaciones con gran despliegue territorial que ya habían intentado participar en el régimen político, como la FTV, profundizaron esta estrategia. Así se trastocaron los protagonismos, progresivamente se renovaron los términos del debate público, los repertorios de acción y las modalidades de participación.

El Movimiento Evita

El Movimiento Evita se conformó en 2005 a partir de la iniciativa del Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita de constituir un movimiento social kirchnerista. Recapitulando, el MTD se desarrollaba en las ciudades de La Plata, Berazategui y Florencio Varela des-

de 2002; fue convocado junto con otras organizaciones a una de las reuniones realizadas en Casa Rosada en junio de 2003. Hasta ese entonces, al igual que otras piqueteras, había tenido una estrategia sumamente confrontativa, utilizado el corte de calle como principal repertorio de acción y gestionado algunos planes sociales y trabajo territorial en áreas periféricas.⁸

Hubo dos acontecimientos que trastocaron radicalmente esta lógica. La primera, la conformación del «gabinete piquetero» tal como fue denominado por la prensa. Éste se constituía de funcionarios y asesores (Boyanovsky Bazán, 2010)⁹, cuya misión consistía en canalizar las demandas de las organizaciones en distintas áreas estatales (Natalucci, 2012b). La segunda, la convocatoria de Néstor Kirchner a integrarse a la coalición de gobierno. El MTD Evita interpretó ambos acontecimientos como la posibilidad de pasar a una *posición ofensiva, capitalizar lo acumulado en el trabajo territorial* a fin de recrear el *movimiento nacional* y recuperar al Estado como *espacio de empoderamiento popular*. En esta coyuntura, definió coordinar acciones con Barrios de Pie, el FTNyP y la FTV conformando un espacio denominado Frente de Organizaciones Populares, conocido como FOP. La suerte de este espacio de coordinación –extensiva al Frente Patria para Todos– no fue la esperada,¹⁰ por lo que el MTD Evita decidió convocar a otras organizaciones y

⁸ Concretamente el MTD Evita asistió a la reunión junto con el MTD Resistir y Vencer, Barrios de Pie, Polo Obrero y Movimiento sin Trabajo Teresa Vive (MST-TV) (Boyanovsky Bazán, 2010). Para reconstruir esta primera etapa del Movimiento Evita véase Natalucci (2012b).

⁹ El *gabinete piquetero* estaba integrado por Oscar Parrilli, secretario General de la Presidencia, quien delegó luego esta tarea en Rafael Follonier, coordinador General de Asuntos Técnicos de la Unidad Presidente, Sergio Berni y Alberto Gandulfo por el ministerio de Desarrollo Social, Héctor Metón de la Comisión Nacional de Tierras Fiscales a cargo del programa Arraigo, Enrique Deibe, secretario de Trabajo y Pedro Cámpora, asesor de la cartera de Trabajo, José López, Luis Bontempo y Pacífico Muro de la secretaría de Obras Públicas, José Campagnoli, subsecretario de Protección Civil y Rogelio Iparraguirre, asesor del ministerio de Justicia (Boyanovsky Bazán, 2010).

¹⁰ Tanto el FOP como el Frente Patria para Todos tuvieron sumas dificultades para consolidarse, influyeron de modo decisivo las diferentes tradiciones de cada una como las lecturas políticas respecto del peronismo, del kirchnerismo y del Partido Justicialista (Natalucci, 2008; 2012b).

fundar el Movimiento Evita como nucleamiento de aquellos que bajo la identidad peronista quisieran construir la *pata social* del kirchnerismo, el *kirchnerismo militante*.

Esta serie de decisiones modificaron la estrategia de la organización hasta entonces, respecto de su vínculo con el régimen político como con el espacio multiorganizacional. En resumidas cuentas, el Evita intentó recrear una lógica movimentista por la cual otras organizaciones se integraran bajo la lógica de la agregación (Laclau, 1996), es decir que, sin modificar identidades previas ni las maneras en que cada colectivo tomaba sus decisiones, compartieran una misma estrategia de intervención política. La eficacia de este tipo de construcción fue limitada ya que no lograba contener en su seno a la diversidad de organizaciones que se habían integrado. De esta manera, el Evita decidió convertirse en una *corriente* dentro del kirchnerismo y concentrarse en la representación de los *sectores más humildes*, de aquellos que no habían podido incorporarse al mundo del trabajo (Natalucci, 2012b). En este contexto, profundizó sus relaciones con la Confederación General del Trabajo (CGT) y se dispuso a la construcción de la Corriente Nacional de la Militancia. En palabras de uno de sus dirigentes, el objetivo debía ser ya no «*la unidad de las organizaciones [sino] la unidad de los trabajadores*» (Entrevista a la autora, junio de 2010), como manera de revertir la fragmentación producida por el neoliberalismo al interior de la clase trabajadora.

Este cambio en la lectura política y de su estrategia fue fundamental, ya que el ME incorporó entre sus demandas a la economía social, especialmente la creación de cooperativas como modo de *subsidiar al trabajo* en pos de su distribución. En este contexto, Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento y, al mismo tiempo, subsecretario de Comercialización de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ideó el Programa de Inversión Social (PRIS), precursor del «Programa de Ingreso Social con Trabajo», conocido como «Argentina Trabaja». El ME participó en su implementación, organizando cooperativas y coordinando su trabajo (Fizman, 2013; Natalucci, 2012c). Asimismo, dos de sus dirigentes fueron electos diputados en dos elecciones posteriores: Fernando «Chino» Navarro fue elegido en 2009 diputado provincial en Buenos Aires, mientras

que Leonardo Grosso –referente de la JP Evita– fue electo diputado nacional por el mismo distrito en 2011.

La Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat

La FTV surgió formalmente en 1998 cuando agrupó a «redes asociativas barriales preexistentes» (Calvo, 2006: 17).¹¹ Con la consolidación del espacio piquetero y su expansión en el Conurbano Bonaerense (Svampa y Pereyra, 2003) la organización creció a un ritmo acelerado. La identidad piquetera, su integración a la CTA y la coordinación de planes de lucha con la Corriente Clasista y Combativa (CCC) fortalecieron la FTV. En este marco, la organización no se quedaba restringida a lo territorial, sino que participó junto a la CCC y CTA del Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO), que en la segunda mitad de 2001 proponía, entre otras cuestiones, la creación de un seguro de empleo y formación para los jefes de hogar desocupados. Durante 2002, participó junto con la CCC de la «Mesa de Diálogo» convocada por el entonces presidente provisional Eduardo Duhalde y de los Consejos Consultivos, que habían sido creados para co-coordinar con los gobiernos locales la implementación del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. A mediados de 2003, por un lado, en el marco de la contienda electoral nacional, la FTV respaldó la candidatura de Néstor Kirchner en detrimento de la de Carlos Menem; asimismo presentó la fórmula Luis D'Elía y Eduardo Slutzky como gobernador y vicegobernador respectivamente por el Frente Cambia Buenos Aires (Pagliarone, 2012). Por otro lado, desistió de participar del plan de lucha que había sido convocado por la CCC para principios de junio (Pagliarone, 2012).

Estas dos acciones empezaron a marcar una diferencia con el pasado de la organización donde la participación institucional y electo-

¹¹ Dichas redes emergieron producto de la toma de tierras en Gregorio de Laferrere en La Matanza en 1986 conocido como El Tambo (Merklen, 1991; 2004). Según Calvo (2003) en 1996 la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) se acercó a la toma de la iglesia del Sagrado Corazón que realizaba la Red de Barrios propiciando su incorporación. Sobre el proceso de la FTV véase además de los ya citados Merklen y Calvo, Svampa y Pereyra (2003) y Armelino (2012).

ral iba ganando espacio. La oportunidad de profundizar esta estrategia llegó cuando Kirchner convocó a la organización a formar parte de la coalición de gobierno (Gómez y Massetti, 2009). En palabras de una entrevista a D'Elía, la FTV dejó de lado la posición beligerante que tenía a partir de un plenario al que asistió una comisión interministerial. La integración formal al Estado se produjo a propósito de la designación del líder de la FTV como subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación (Gómez y Massetti, 2009).

El Frente Transversal Nacional y Popular

El FTNyP surgió a principios de 2004, promovido por Edgardo Depetri, en aquel entonces secretario de Organización de la CTA, a raíz de la convocatoria de Néstor Kirchner a integrarse en la coalición de gobierno. Los vínculos entre Depetri y Kirchner tenían larga data ya que aquel era también secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Santa Cruz, provincia gobernada por el flamante presidente.

Por la procedencia sindical de Depetri, la mayoría de los convocados al FTNyP eran de esta misma extracción, entre ellos dirigentes de ATE y del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) (Da Silva, 2012). Siguiendo a Boyanovsky Bazán (2010), la organización se fundamentaba sobre tres cuestiones: la apropiación de la política del gobierno nacional, la reivindicación del modelo sindical propuesto por la CTA –que implicaba el cuestionamiento al monopolio de representación gremial por rama de actividad– y la construcción de una coalición política de alcance nacional. En sus inicios, las relaciones entre la CTA y el FTNyP eran más estrechas, de alguna manera este era un intento de refundar ese viejo proyecto de la Central del movimiento social, político y cultural (Armellino, 2008), un *proyecto político nacional, popular y democrático*.

Siguiendo a Da Silva, el FTNyP esperaba conformarse en una «organización social y sindical, con expectativas de participación política» (2012: 87). En este sentido, se contemplaba tanto la participación en el proyecto de la Transversalidad como en la coalición de gobierno. El límite en esta estrategia era lo que la organización denominaba

el *pejotismo*, que incluía al Partido Justicialista y al modelo cegetista de acción sindical. De este modo, aquel se conformó como su «frontera identitaria antagónica» (Da Silva, 2012: 87). El kirchnerismo, por el contrario, era pensado como un proyecto superador del PJ por lo que había que contribuir a su renovación. En este marco, Depetri se incorporó a las filas del Frente para la Victoria, por el cual fue electo diputado por la provincia de Buenos Aires en 2005 y 2011. Asimismo, algunos de los dirigentes de la organización, entre ellos Hugo Gómez y Sandra Cruz, fueron elegidos como senador y diputada por el mismo distrito en 2005 y 2007 respectivamente, mientras otros eran designados funcionarios: Juan Pablo O´Dezaille como subsecretario de Organización y Capacitación Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Oscar Laborde como Representante Especial para la Integración y la Participación Social de la Cancillería Argentina (Da Silva, 2012).

En el segundo semestre de 2009, el FTNyP participó en la implementación del programa «Argentina Trabaja» organizando alrededor de «diez mil cooperativistas en 61 cooperativas a través de la Federación de Cooperativas Carlos Mugica» (Da Silva, 2012: 98). Este tipo de intervención potenció sin dudas el desarrollo territorial de la organización así como la articulación con otras políticas, principalmente respecto de la capacitación y formación (enseñanza de oficios, terminalidad de estudios obligatorios).

Balance de la década kirchnerista

Antes de finalizar, me interesa insistir con dos cuestiones. La primera se relaciona con qué herramientas heurísticas analizamos a las organizaciones y sus procesos. En este artículo la propuesta se fundamentó en torno al concepto de las gramáticas. La productividad analítica de dicho enfoque radica en que evitamos pensar que hay organizaciones de jóvenes, culturales, territoriales y políticas para pensar que todas las organizaciones hacen política y que, como diría Tapia (2009), no tienen un lugar asignado en la sociedad civil o en el sistema político, sino que transitan por ambos.

La segunda cuestión tiene que ver con el carácter instituyente/destituyente de los movimientos sociales o, en otras palabras, de su autonomía/heteronomía. En principio, ningún movimiento se sitúa en uno de esos dos polos, es decir, ninguno es completamente autónomo o heterónimo del régimen político; por el contrario, se va posicionando de formas diferentes según las coyunturas, sus dinámicas internas y tradiciones de acuerdo a sus gramáticas. En este sentido, antes que interpretaciones apresuradas sobre el proceso de las organizaciones bajo la lupa de la cooptación, es menester identificar los desafíos que se les presentaron y las decisiones que ensayaron. Al respecto, hay una deuda pendiente para realizar estudios empíricos que nos permitan conocer los procesos de las organizaciones considerando las pretensiones que ellos tienen. Por ello, hay que abstenerse de caer en posturas moralistas o normativistas respecto de lo que los movimientos deberían ser y más bien analizar lo que los movimientos hicieron de acuerdo a sus tradiciones, desafíos que se les presentaron y respuestas que pudieron dar.

La gramática movimentista constituye desde esta perspectiva la gran novedad del kirchnerismo. Respecto de las dinámicas organizativas, en el caso de estas organizaciones más que desmovilización lo que se observa es un cambio en el sentido de su actividad. Hasta 2003 lo hacían para presionar al gobierno, instalar demandas y conseguir recursos (en especial mercadería para los comedores y planes para los desocupados), luego para manifestar su apoyo al gobierno y a las políticas que impulsaba, es decir con un sentido plebiscitario antes que confrontativo.

El ME, la FTV y el FTNyP fueron las protagonistas del ciclo abierto en 2003, donde articulaban una estrategia de cuestionamiento al orden vigente, planteando demandas y exigiendo su conversión en derechos y/o políticas públicas. Esto no siempre aparejó los resultados esperados por las organizaciones; de hecho, como se mencionó en la Introducción, la dimensión que mayores cambios sufrió fue la modalidades de participación, seguida por la de dispositivos de legitimidad y en menor medida la de representación. Respecto de las formas de participación, por un lado, la lógica de construcción territorial sufrió transformaciones: si bien estas organizacio-

nes mantuvieron sus comedores, centros comunitarios o locales en diferentes distritos luego de 2003, lo hicieron a partir de la implementación de políticas sociales definidas por el Ministerio de Desarrollo Social. Tal vez el más ambicioso de ellas sea el «Argentina Trabaja» por su alcance y cobertura. Por otro lado, las organizaciones revisaron la estrategia destituyente que habían adoptado hasta entonces incorporando a su práctica una orientación instituyente, vinculada con la posibilidad de conformar nuevas pautas de acción. En tal dirección, su discusión respecto de este punto se concentró en cómo superar lo territorial e inmiscuirse en áreas estatales centrales para la definición de políticas públicas.

Sobre la representación, bajo la metáfora de *punte* la intención de las organizaciones se orientó a la creación de instancias de mediación entre los sectores populares y el Estado de modo de canalizar sus demandas. La pretensión era construir una doble representación: ante el Estado de los sectores populares y de estos frente a aquel. Esto supuso discutir cuál es el objeto de la representación y bajo qué modalidades se representa. Esta idea ha sido sintetizada en la premisa el *salto a la política* utilizada para expresar la intención de conformarse en representantes de los sectores populares. Pese a sus objetivos, en general asumieron la representación del gobierno frente a los sectores populares para la aplicación de políticas públicas. Incluso, esta fue acotada, ya que, como se desprende de la exposición anterior y pese a sus objetivos, las intervenciones se restringieron a áreas de desarrollo territorial o de la economía social.

Por último, acerca de los dispositivos de legitimación del orden político, con el kirchnerismo se puso en escena un ejercicio eminentemente plebiscitario, donde los avales y críticas se plasmaron por fuera del sistema político, en general en manifestaciones callejeras o en actos públicos. En este marco, deben comprenderse el boicot a la Shell y Esso en marzo de 2005, la participación en la III Cumbre de los Pueblos realizada en Mar del Plata en noviembre de ese mismo año, los festejos del 25 de mayo de 2006, las movilizaciones de marzo a julio de 2008 por el conflicto con las patronales agropecuarias – a propósito de la resolución 125/08 que fijaba retenciones variables –, la realización de los actos en conmemoración de la asunción de Héctor

Cámpora, el acto en el estadio de Vélez Sarfield para recordar el noveno aniversario de la elección del 27 de abril de 2003 cuando Kirchner entró en la segunda vuelta electoral.

Resumiendo, desde 2003 se produjeron cambios en la fisonomía de la gramática movimentista, sin que sus efectos fueran homogéneos respecto del régimen político. Es cierto que los cambios mencionados abrieron potencialidades para las organizaciones populares, pero también constriñeron sus posibilidades acotando sus campos de acción. En esa tensión es posible comprender las transformaciones de la democracia argentina.

BIBLIOGRAFÍA

- Armellino, M. (2012). «Kind of blue. Las vicisitudes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) durante los años kirchneristas». En Pérez, G. y Natalucci, A. (ed.). *Vamos las Bandas. Organizaciones y Militancia Kirchnerista*. Buenos Aires: Nueva Trilce.
- Armellino, M. (2008). «Tensiones entre organización sindical y organización territorial: la experiencia de la CTA y la FTV en el período poscrisis». En Pereyra, S., Pérez, G. y Schuster, F. (ed.). *La Huella Piquetera, Avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001*. Buenos Aires: Al Margen.
- Boyanovsky Bazán, C. (2010). *El Aluvión. Del piquete al Gobierno: los movimientos sociales y el kirchnerismo*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Calvo, D. (2006). *Exclusión y política. Estudio sociológico sobre la experiencia de la Federación de trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat (1998-2002)*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Calvo, D. (2003). «Organización política auto-referenciada en sectores populares. El caso de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat». En *Informe final del Concurso: Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe*. Buenos Aires: CLACSO.
- Da Silva, M. L. (2012). «Cooptados por las ideas. El Frente Transversal Nacional y Popular (2003-2011)». En Pérez, G. y Natalucci, A. (ed.). *Vamos las Bandas. Organizaciones y Militancia Kirchnerista*. Buenos Aires: Nueva Trilce.
- Diani, M. (2010). «Organizational fields in social movement dynamics». En Klandermans, B., Roggeband, C. y Van Stekelenburg, J. (eds.). *Advancements in Social Movement Research*, University of Minnesota Press, Minneapolis.
- Fizman, L. (2013). «Actos de institución y militancia en el Programa Ingreso Social con Trabajo en el conurbano bonaerense». Ponencia presentada en las X Jornadas de Sociología, organizadas por la Carrera de Sociología, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1º al 6 de julio.

- GEPSAC (2006). *Transformaciones de la protesta social en la Argentina, 1989-2003*. Instituto de investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires. [en línea] en <webiigg.sociales.uba.ar/iigg/textos/documentos/dt48.pdf>. Consultado el 2 de septiembre de 2012.
- Giddens, A. (1994). *La constitución de la sociedad*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Gómez, M. y Massetti, A. (2009). *Los movimientos sociales dicen. Conversaciones con dirigentes piqueteros sobre el proyecto nacional y Latinoamericano*. Buenos Aires: Nueva Trilce.
- Laclau, E. (1996). *Emancipación y diferencia*. Buenos Aires: Ariel.
- Merklen, D. (2004). «Sobre la base territorial de la movilización popular y sobre sus huellas en la acción». En *Revista Lavboratorio*, IV, 16. Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires.
- Merklen, D. (1991). *Asentamientos en La Matanza. La terquedad de lo nuestro*. Buenos Aires: Catálogos.
- Natalucci, A. (2012a). *Los dilemas políticos de los movimientos sociales. (Argentina, 2001-2010)*. Serie Documentos de Trabajo del Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca. [en línea] en <americo.usal.es/iberoame/sites/default/files/DocumentoTrabajo%239_Natalucci_0.pdf.>. Consultado el 2 de septiembre de 2012.
- Natalucci, A. (2012b). «Los movimentistas. Expectativas y desafíos del Movimiento Evita en el espacio kirchnerista». En Pérez, G. y Natalucci, A. (ed.). *Vamos las Bandas. Organizaciones y Militancia Kirchnerista*. Buenos Aires: Nueva Trilce.
- Natalucci, A. (2012c). «Políticas sociales y disputas territoriales. El caso del programa Argentina Trabaja». En *Revista Perspectivas de Políticas Públicas*, 2, 3, UNLa, Buenos Aires.
- Natalucci, A. (2010). «¿Nueva gramática política? Reconsideraciones sobre la experiencia piquetera en la Argentina reciente». En *Revista Astrolabio. Nueva Época*, 5, Córdoba.
- Natalucci, A. (2008). «De los barrios a la plaza. Desplazamientos en la trayectoria del Movimiento Evita». En Pereyra, S., Pérez, G. y Schuster, F. (ed.). *La Huella Piquetera, Avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001*. Buenos Aires: Al Margen.

- Natalucci, A. y Pagliarone, M. F. (2013). «Revisitando los conceptos de lo social y lo político: movimientos sociales, procesos de democratización y nuevas institucionalidades». En *Revista Andina de Estudios Políticos*, III, 2. [en línea] en <revistas.ojs.es/index.php/revistaestudiosandinos/article/view/1626/1383>. Consultado el 2 de septiembre de 2012.
- Pagliarone, M. F. (2012). «Piqueteros y funcionarios. Transformaciones de la FTV en el kirchnerismo». En Pérez, G. y Natalucci, A. (ed.). *Vamos las Bandas. Organizaciones y Militancia Kirchnerista*. Buenos Aires: Nueva Trilce.
- Pérez, G. (en prensa). «El quilombo y la huella». En Pérez, G., Pereyra, S. y Vommaro, G. (ed.). *La Grieta. Política, economía y cultura después de 2001*. Buenos Aires: Biblos.
- Pérez, G. (2010). «El malestar en el concepto. Ejes de un debate teórico acerca de los movimientos sociales en Latinoamérica». En Massetti, A., Villanueva, E. y Gómez, M. (ed.). *Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del Bicentenario*. Buenos Aires: Nueva Trilce.
- Pérez, G. y Natalucci, A. (2012). *Vamos las Bandas. Organizaciones y Militancia Kirchnerista*. Buenos Aires: Nueva Trilce.
- Rinesi, E. y Vommaro, G. (2007). «Notas sobre la democracia, la representación y algunos problemas conexos». En Rinesi, E., Nardacchione, G. y Vommaro, G. (comp.). *Los lentes de Víctor Hugo. Transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina reciente*. Buenos Aires: Prometeo.
- Svampa, M. (2005). *La sociedad excluyente*. Buenos Aires: Taurus.
- Svampa, M. y Pereyra, S. (2003). *Entre la ruta y el barrio*. Buenos Aires: Biblos.
- Tapia, L. (2009). «Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la política». En *Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano*. Buenos Aires: CLACSO.

La persistencia de la organización popular: algunas reflexiones en torno a las organizaciones sociales de base territorial y comunitaria en la Argentina contemporánea

Pablo Vommaro

Como parte de las transformaciones producidas a partir de fines de los años sesenta y comienzos de los setenta en el sistema capitalista, ocupan un lugar fundamental los cambios en las formas de producción, en el vínculo entre estado y sociedad y las formas de la política, en los modos de organización social y en los procesos de subjetivación. Dentro de este proceso de mutaciones, el surgimiento de organizaciones sociales urbanas con base territorial y comunitaria es un rasgo distintivo en cuanto a la expresión del antagonismo social y la conformación de configuraciones productivas, políticas y subjetivas alternativas en la dinámica del mundo contemporáneo.

En este sentido, pensamos que el estudio de las características que distinguen a estas organizaciones puede ser una vía de acceso fructífera para comprender tanto las modalidades en las que se formulan proyectos de sociedad alternativos, como la dinámica del conflicto social expresado territorialmente¹.

¹ Recuperando las propuestas de diversos autores, entendemos por territorio al espacio socialmente construido, un espacio habitado y constituido por un entramado de relaciones sociales configuradas en la dinámica espacial. Es decir, el territorio entendido como producción social y la producción social como proceso desplegado en el

De esta manera, en este artículo nos proponemos estudiar el proceso de gestación de los principales rasgos que caracterizan a las organizaciones sociales urbanas de base territorial y comunitaria en la Argentina actual. Para hacerlo, rastrearemos en diferentes momentos históricos buscando identificar en cada uno la constitución de las configuraciones productivas, políticas y subjetivas que encontramos en las experiencias con las que trabajamos en el presente.

Este trabajo se basará en las investigaciones que desarrollamos en los últimos años acerca de las formas de organización y participación que se produjeron en la zona de Quilmes (sur del Conurbano Bonaerense). En nuestras investigaciones trabajamos particularmente con experiencias de tomas de tierras y asentamientos, con Movimientos de Trabajadores Desocupados, y con otros colectivos organizados a nivel territorial².

El rastreo histórico

En primer lugar, pensamos que en nuestro recorrido encontramos la evidencia empírica que nos permite sostener que el origen de las principales características que distinguen a las organizaciones sociales urbanas de base territorial y comunitaria en la actualidad puede rastrearse en los procesos generados a partir de fines de los años sesenta y comienzos de los años setenta, que se reconfiguraron durante la dictadura militar (1976-1983) y la primera mitad de la década del ochenta. Estos procesos expresaron en el territorio las transformaciones que sucedieron en el sistema capitalista en los últimos cuarenta años.

espacio devenido territorio. Territorio como espacio socialmente habitado, poblado por modos de vida y construido en el proceso del habitar comunitario. (Lefebvre, 1969 y 1984; Harvey, 1977; Santos, 2000; Borges, 2003 y 2005; Zibechi, 2008; Davis, 2004 y 2007; Porto Gonçalves, 2001).

² Las investigaciones desarrolladas entre 2002 y 2008 dieron origen a la Tesis doctoral «Política, territorio y comunidad: las organizaciones sociales urbanas en la zona sur del Gran Buenos Aires (1970-2000)», defendida en 2010 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Para ampliar, ver Vommaro (2008, 2010 y 2012).

En segundo término, identificamos algunos de los rasgos característicos de las organizaciones sociales urbanas de la zona Sur del Conurbano Bonaerense. En primer lugar, los elementos que las distinguieron están definidos por la lógica territorial y la construcción comunitaria. Es decir, estas organizaciones surgieron a partir de procesos desplegados en el territorio –en tanto espacio socialmente producido–, al que a su vez reconstituyeron en el desarrollo de su práctica. Esta fuerte imbricación entre el territorio y las organizaciones sociales que se conformaron en él se produjo a través de las redes sociales de organización, que instituyeron espacios comunitarios en el plano barrial.

Asimismo, interpretamos las principales características de estas organizaciones sociales como expresión en el territorio de las mutaciones posfordistas y biopolíticas del sistema capitalista en los últimos cuarenta años. De esta manera, destacamos como distintivo de este tipo de colectivos su fuerte relación con los procesos productivos, políticos y subjetivos contemporáneos. Su surgimiento, y lo que sucedió en ellas, no fue resultado de manifestaciones marginales o efímeras, sino la expresión de las lógicas productivas y políticas de la actualidad, que configuran subjetividades singulares y situadas, ligadas a los acontecimientos gestados comunitariamente en el territorio.

Como cuarto punto, sobre la base de la investigación realizada, pudimos aprehender los rasgos que consideramos más importante para interpretar las organizaciones que estudiamos. Estos elementos se fueron gestando en los diferentes momentos históricos que analizamos. Así, podemos afirmar que los procesos territoriales, a partir de los cuales se constituyeron los espacios comunitarios, configuraron su lógica estableciendo una relación compleja y mediada –no lineal o directa– con las coyunturas económicas, políticas y sociales más generales.

A partir de lo dicho, podemos afirmar que entre fines de los años sesenta y comienzos de los años setenta, con el proceso abierto por el Cordobazo, comenzaron a gestarse algunos de los rasgos que luego caracterizarían a las organizaciones sociales a nivel local. Aquí destacamos: la dimensión territorial, en tanto el espacio socialmente construido configura prácticas políticas y es, a su vez, reconfigurado por éstas; la acción directa, como desafío a las formas delegativas, me-

diadas y representativas de la política; y la constitución un sujeto múltiple, no unívoco u homogéneo.

Continuando con el análisis, entre fines de los años setenta y comienzos de la década del ochenta, durante la dictadura militar, las experiencias profundizaron su nivel de autonomía, constituyéndose no ya en oposición, sino como alternativa, en paralelo o en fuga respecto al estado. Esa autonomía se insinuó también respecto de los partidos políticos y la Iglesia. A su vez, en el proceso de tomas de tierras y construcción de asentamientos de 1981 se construyó una organización basada en la participación directa, la discusión de las jerarquías establecidas y la deliberación colectiva, que esbozaba la mayoría de los elementos que luego permitirán hablar de formas de organización horizontales.

Por último, en los años noventa las organizaciones profundizaron sus propuestas productivas, ensayando lógicas distintas de organizar la producción y el trabajo e instituyendo la autogestión, la autoorganización y la autovaloración de la fuerza de trabajo. Además, la construcción de relaciones sociales de cooperación, alternativas a las de la competencia y el individualismo capitalista, cobró una gran relevancia, lo que llevó a valorizar los espacios de formación y educación concebidos y gestionados por las propias organizaciones. Es decir, sobre la base de los procesos territoriales se pudieron gestar, en la mediana duración, las organizaciones comunitarias sostenidas en redes sociales, que ampliaremos más adelante.

Retomando, planteamos que la perspectiva histórica con la que desarrollamos la investigación nos permitió entonces estudiar los procesos en la mediana duración y establecer continuidades y rupturas que configuraron las interpretaciones que aquí exponemos. A lo dicho, agregamos que en el período estudiado se gestó una forma particular de uso, apropiación y producción del espacio —que instituyó el territorio— a la que denominamos forma social ocupación³. Esta modalidad colectiva de situarse en el espacio constituyó una forma social que implicó

³ Para la formulación de esta noción seguimos a otros autores como Manzano y Triguboff (2009).

una serie de relaciones que, en el proceso a su vez, configuraron nuevas relaciones. En esta ocupación que, remarcamos una vez más, no era solo uso sino también producción, se redefinieron las fronteras entre las esferas pública y privada. Fábricas, tierras y calles fueron ocupadas por sujetos sociales organizados que expresaban, de esta manera, el antagonismo social territorialmente situado y gestaban experiencias autoorganizadas y autogestivas que instituyeron otras lógicas sociales. Lo privado se tornaba público al ser ocupado y reformulado por las organizaciones sociales, y lo público se dejaba de asociar únicamente a lo estatal, para dar lugar a los espacios comunitarios.

De acuerdo a lo anterior, esta manera de apropiación del espacio devenido territorio –esta forma social ocupación–, produjo un nuevo significado del mismo que no era ni privado ni público en un sentido estatal. Era otro sentido de lo público, asociado a lo comunitario, a formas no ligadas directa y unívocamente con lo estatal. Un espacio público distinto, que era producido por las organizaciones sociales en disputa con el estado y también con el mercado. A la vez, este conflicto se expresó en la constitución de lógicas alternativas, que superaron la dinámica de la confrontación especular para instituir modalidades productivas, políticas y de subjetivación alternativas a las dominantes.

En estos procesos podemos encontrar diferencias entre las experiencias a partir de las cuales elaboramos el análisis que presentamos en este artículo. En los ochenta se tomó un espacio deshabitado –terrenos privados– y se lo instituyó en territorio producido en forma comunitaria. Mientras que en los noventa se ocupó un espacio que ya era público –la ruta–, pero que al ser apropiado por los sujetos que lo ocuparon cobró otro significado que remitía a otra forma de lo público, ahora asociado a la organización comunitaria.

Es decir, que en los ochenta se desplegó un proceso de producción de territorio en un espacio que se habitó en forma permanente y que fue transformado en el despliegue de ese habitar comunitario. En los noventa, en cambio, se ocupó un espacio ya habitado y lo que se hizo fue instituir otras formas de habitarlo, producir una apropiación del territorio que, aunque pudo haber sido efímera, generó significados y valores a partir de la organización territorial, que configuraron una subjetividad que también tuvo anclajes comunitarios.

Llegamos así a un sexto punto que nos interesa incluir en el artículo. Las construcciones territoriales y comunitarias, instituidas en un nivel capilar y cotidiano, no son fácilmente desarticulables por la represión estatal, aun por la ejercida durante la última dictadura militar (1976-1983). Estas parecen desplegarse en un espacio que, aunque signado por la tensión con la lógica del estado y el capital, es esquivo a la penetración directa del poder represivo estatal. Más bien parecería que el control de estas experiencias fue más efectivo a partir de cierta territorialización o molecularización del estado (Svampa, 2005; Merklen, 2005; Zibechi, 2008) que se produjo a partir de fines de la década del noventa, sea a través de los planes sociales focalizados y los intentos de fortalecimiento del poder de los punteros; sea por medio de una represión más localizada en el plano barrial y en cada manzana.

Un séptimo elemento que aportamos como parte de nuestras conclusiones es que las experiencias de organización social comunitaria situadas en el territorio constituyeron un sujeto colectivo que puede ser analizado desde la potencia. Es decir, desde sus capacidades de innovación, creación y producción. Sobre la base de su potencialidad para producir resistencias en tanto experiencias vitales de subjetivación. Así, pusimos el acento no tanto en la carencia, la pérdida, la necesidad o la falta, sino en el poder hacer⁴ de estos sujetos colectivos. En sus posibilidades de acción, en sus prácticas y en sus propuestas alternativas a nivel productivo y político.

A partir de lo expuesto, podemos identificar los rasgos que caracterizaron a las organizaciones sociales que estudiamos. Integrando distintos planos de análisis, entre los principales destacamos los siguientes diez:

- *Práctica de la democracia directa*. Es decir, la participación de todos los miembros de la organización en el proceso de toma de decisiones y en la ejecución de lo resuelto. Aparece así una fuerte tensión entre participación y delegación o representación. Si bien éstas últimas permanecen como formas de organización, están acotadas y siempre en tensión con la participación directa.

⁴ Tomamos el concepto de Holloway (2002).

- *Despliegue de formas de acción directa.* La toma de tierras y el corte de ruta son, por excelencia, dos de las más típicas y visibles. Esto se vincula tanto con las prácticas de resistencia de cada experiencia, como con sus formas organizativas y la modalidad de relación que plantean con el estado.

- Institución de una forma política que *denominamos política con el cuerpo o política de cuerpo presente.* Esto es, que la participación en la vida de la organización solo es posible si se está presente, física y subjetivamente. Quien no está presente no participa de la toma, del asentamiento, de las asambleas, del piquete y de los diversos espacios en los que se decide la vida cotidiana a nivel colectivo. Esto expresa al menos dos procesos. Por un lado, el carácter indelegable que adquirió la política en el territorio. Por el otro, la politicidad de los cuerpos y el compromiso de la integralidad de la vida en la práctica política de la organización. En efecto, los modos de participación política y de subjetivación se expresan también en el plano corporal. Es por eso que esta característica puede ser conceptualizada como política desde lo cotidiano o política de la vida.

- *Redefinición de la frontera entre lo social y lo político.* Esto se produce a partir del despliegue de la política territorial y comunitaria. El límite entre las esferas social y política se hace difuso, ya que lo que antes eran las dimensiones productiva y reproductiva confluyen no solo espacial, sino también socialmente. Así también, se puede hablar de reversibilidad entre las esferas de la producción y la reproducción en las realidades territoriales que estudiamos.

- Consolidación de la *organización asamblearia* como forma fundamental de disposición de la política interna de las experiencias analizadas. Esta forma organizativa está asociada tanto a la horizontalidad, como a la democracia directa y la política con el cuerpo. Implica la circulación de la palabra, y también el involucramiento directo de todos los integrantes en el sostenimiento de la organización colectiva.

- *Cuestionamiento de las jerarquías y búsqueda de la horizontalización* de las relaciones al interior de cada organización. Esta tendencia hacia la horizontalidad dejó una fuerte impronta en las formas organizativas de las experiencias estudiadas y constituyó uno de los puntos que las distanció de los partidos políticos y los sindicatos, las formas organizativas clásicas.

- Despliegue de prácticas que buscan la *autonomía*. Esta autonomía es producto muchas veces del desarrollo de los espacios autogestionados y autoorganizados, que fortalecen una lógica política basada en el autogobierno y la no subordinación al estado ni a ninguna estructura política o social como los partidos políticos, los sindicatos, o la Iglesia. Esta autonomía, en tanto capacidad de constituir y desplegar lógicas propias que surjan de la dinámica territorial y comunitaria de la propia organización, es instituida también con respecto al capital. Esto, al menos como tendencia, fue esbozado en los talleres productivos que se crearon en el MTD de Solano y en las formas de producción del espacio que se gestaron en los asentamientos de 1981.

- *Creación de tiempos y espacios propios*, que responden a la dinámica de la organización y no están subordinados, al menos totalmente, a las temporalidades y espacialidades dominantes. Estas innovaciones témporo-espaciales son expresión de lo que Badiou (2000) llamó fidelidad al acontecimiento que origina o dinamiza la organización social. En efecto, el acontecimiento –la toma de tierras, el corte de ruta– es también instituyente de tiempos y espacios que surgen de la lógica territorial y comunitaria –situada– a partir de los cuales se constituyen las experiencias sociales estudiadas.

- Desarrollo de espacios de *educación, formación y capacitación autogestionados*. Allí, tanto las dinámicas como los contenidos son decididos por las organizaciones sobre la base de sus necesidades y proyectos políticos. La importancia de estos espacios se funda en varios aspectos entre los que destacamos: la búsqueda de la autonomía, también en el plano subjetivo; la centralidad que se le otorga en estas experiencias a la construcción de relaciones sociales como forma de realización del cambio social en el aquí y el ahora (una forma de comenzar a instituir la nueva sociedad en el presente); y el valor que adquieren las dimensiones afectivas, cognitivas, lingüísticas y subjetivas en las formas de dominación y explotación del capitalismo posfordista y, por eso mismo, en la gestación de sus resistencias y alternativas. En la experiencia de las tomas y los asentamientos estos espacios fueron, sobre todo, las Comunidades Eclesiales de Base. En el MTD de Solano se generaron ámbitos específicos para desplegar esta dimensión.

- Constitución de un *sujeto social múltiple*, diverso, no fácilmente filiable a una identidad única. La multiplicidad de este sujeto encuentra en el protagonismo de los jóvenes y las mujeres (jóvenes y adultas), un rasgo común que incide en muchas de las características que describimos antes, las que pueden ser analizadas también en clave generacional –como expresión de conflictos intergeneracionales– y como feminización de las prácticas sociales que definen a las organizaciones que estudiamos.

Nuestro noveno señalamiento es que, en el período estudiado, se produjo un proceso de transformación complejo del cual destacamos ahora al menos tres elementos. En primer lugar, la territorialización de la producción y, por ende, de la política. Esta política territorializada –territorial– generó un proceso de politización de lo cotidiano. En efecto, las prácticas y relaciones cotidianas se politizaron, es decir, lo privado adquirió un lugar público –no estatal– en el que se dirimió el conflicto social situado. Como tercer aspecto, a partir de esta politización de lo cotidiano –de lo privado– en el territorio se gestó una lógica que denominamos político-social, para diferenciarla de la lógica clásica, a la que llamamos político-partidaria o político-estatal. La primera estaba ligada a la comunidad y sus organizaciones y surgió desde el territorio. En cambio, la segunda estaba vinculada al estado y sus instituciones –y por extensión a las instituciones de la democracia representativa como los partidos políticos– y era exterior a la lógica territorial y, en algunos casos, antagónica respecto de ella.

En décimo lugar, los procesos de territorialización y politización recién descriptos otorgaron un lugar central a las redes sociales de organización. Éstas fueron el soporte para la organización de las experiencias que analizamos, los espacios comunitarios que sobre la base de ellas surgieron, y a la vez, se reconfiguraron en el proceso territorial y a partir de él. Como vimos, estas redes sociales –una disposición y composición singular de las relaciones sociales que construyen lo común en el territorio– integraron diversos planos. Entre ellos: redes de vecindad, de parentesco, de paisanaje (según el origen migrante desde las provincias del Nordeste argentino o desde países limítrofes como Paraguay), de acuerdo a cierta afinidad política o militante anterior, por pertenencia a cierto sector de la Iglesia o cerca-

nía a experiencias religiosas, entre otras. Estas redes superpuestas, y a veces con tensiones entre ellas, se reconstituyeron y resignificaron en cada uno de los períodos estudiados.

A partir de nuestro trabajo de investigación definimos a estas redes como un tejido, una trama reticular, en la que se articulan, superponen y contradicen diferentes niveles o dimensiones con distinto tipo y grado de relación entre sí. Sobre la base de esta dinámica social en redes podemos analizar los procesos de organización social estudiados a la vez como resultado de la organización construida a partir de estas redes, y como generadores de nuevas redes de relaciones sociales con un fuerte anclaje en el territorio y determinadas en gran parte por la experiencia vivida en los primeros tiempos –fundantes– de cada experiencia de organización.

Entonces, consideramos que en el territorio y los espacios comunitarios formados sobre la base de estas redes existen algunos elementos de carácter permanente⁵ que se despliegan y actualizan en una coyuntura específica. Pensamos en redes organizativas territoriales con fuertes grados de continuidad, que contienen potencias políticas y subjetivas que se despliegan ante determinadas situaciones contingentes produciendo un acontecimiento que se expresa en el terreno político, y genera –o fortalece– la constitución de una comunidad dentro la propia dinámica social. Así, si bien las experiencias territoriales y comunitarias que estudiamos tienen una lógica propia –que llamamos político-social–, el proceso político más general incide en la visibilidad, la intensificación y el despliegue de su construcción basada en estas redes, o en su debilitamiento y dilución en el territorio.

Continuando con el análisis de los planos social y político de nuestro estudio surgen dos interrogantes que compartimos⁶. En primer lugar, ¿cómo pensar configuraciones de lo político donde ya no es lo ideológico o lo programático –en su sentido duro– el factor más importante de cohesión interno, ni existe un *telos* determinado que le otorgue sentido a las prácticas políticas? En segundo término, ¿cómo

⁵ Podríamos hablar, siguiendo a Spinoza, de una potencia inmanente.

⁶ Una de las lecturas a partir de la cual formulamos estas preguntas es Picotto (2007).

encontrar el sentido de lo político en lo cotidiano, en lo territorial, en lo situacional, en la producción de relaciones sociales, en la valorización de la amistad y los afectos y en los espacios comunitarios?

Por otra parte, a partir de analizar las expresiones territoriales del capitalismo en su momento biopolítico y posfordista, pudimos avanzar en las definiciones de los rasgos que caracterizaron las configuraciones productivas, políticas y subjetivas de las organizaciones sociales estudiadas.

Expondremos ahora una síntesis de estas configuraciones

En cuanto a lo productivo, se trata de que en las organizaciones que trabajamos se expresó el proceso de territorialización de la producción al que ya nos referimos. Esto tiene varias implicancias. Por un lado, coloca a la esfera productiva en un lugar central para comprender la dinámica de estas experiencias. Esto nos aleja de una visión de las mismas en tanto organización de los excluidos o de los marginados, y relegada al plano reivindicativo de la reproducción. Por otro, lleva a una resignificación del trabajo y la producción que incorpore el trabajo social, inmaterial y afectivo como claves para comprender las relaciones de producción que se gestan en los procesos productivos de estas organizaciones. Es decir, que considere la puesta en juego del *general intellect*⁷ como medio de producción.

Además, se diluyó la distinción entre las esferas de la producción y la reproducción, las que se tornaron reversibles y superpuestas. Esta reversibilidad y superposición se desplegó en el territorio. Allí se constituyeron talleres productivos autogestionados y autoorganizados que se dispusieron sobre la base de lógicas alternativas a las del capital. De esta manera, los trabajadores que participaron en los espacios productivos de estas organizaciones recuperaron los saberes expropiados por el modelo taylorista-fordista y, a la vez, el control sobre el proceso de trabajo. Se configuró así una incipiente lógica de autovaloración de la fuerza de trabajo, sustraída de la dinámica regida por el capital.

⁷ Ver Marx (1972), Negri (1999) y Virno (2002).

Respecto de las configuraciones políticas, están conformadas a partir de los procesos territoriales. Es decir, que se trata de una política situada que constituye, y se constituye a partir de, la lógica político-social. Más arriba nombramos los principales rasgos de estas formas políticas como: la búsqueda de la autonomía y la horizontalidad, la práctica de la democracia directa y la acción directa, y la creación de tiempos y espacios como fidelidad al acontecimiento instituyente. En efecto, las modalidades sobre la base de las que se configura la política en estas organizaciones surgen de un acontecimiento⁸ fundante, en tanto ruptura inesperada de la situación dada, del statu quo. Este acontecimiento provoca una apertura no prevista, que inaugura un espacio alternativo para la expresión de una forma política distinta, otra.

Asimismo, estas configuraciones políticas incluyen –y se superponen con– lo social, y constituyen, en la dinámica territorial, los espacios comunitarios que interpretamos como despliegue y composición de lo común en el territorio y expresión situada del antagonismo social. De acuerdo al trabajo empírico realizado, estas formas de la política territorializada, que condensan también los procesos de politización de lo cotidiano, pueden ser identificadas a partir de al menos tres rasgos. El primero es que se constituyen sobre la base de una organización colectiva. El segundo es que se despliegan en el plano público, redefinido en clave comunitaria o no estatal. El tercero, es que se funden en el reconocimiento de un conflicto encarnado en un antagonista, que puede estar o no situado en el territorio, pero que necesariamente tiene una expresión en él. A partir de esto la práctica adquiere un carácter público y contencioso, a la vez que situado y comunitario; es decir un carácter político.

En lo referido a las configuraciones subjetivas, se conformaron a partir de las experiencias vividas en el territorio y su reinterpretación de acuerdo a la dinámica de las redes sociales de organización y los espacios comunitarios que constituyeron. Los procesos de subjetivación que analizamos incluyeron la producción de saberes, valores, lenguajes, afectos, percepciones, deseos, que se compusieron colectivamente.

⁸ Retomamos esta noción de Badiou (2000).

Las subjetividades de los integrantes de las organizaciones sociales estudiadas contuvieron también la dimensión histórica, por lo que estuvieron atravesadas por tradiciones y experiencias de continuidades, pervivencias y rupturas. Asimismo, estas producciones subjetivas, gestadas en la dinámica del conflicto social en el territorio, posibilitaron prácticas afirmativas que consolidaron modos de vida alternativos a los dominantes. Devenir sujeto –individual y colectivo– significó, así un movimiento, un desplazamiento, de algún modo una fuga, hacia otros modos de ser, de habitar el territorio, de estar junto con otros y de instituir relaciones de cooperación también a nivel productivo. Así, afirmación e innovación son rasgos de estos procesos de subjetivación que se componen en la dinámica comunitaria y territorial.

Estos modos de subjetivación se expresaron también en la dinámica generacional. En efecto, abordamos el sujeto juvenil que identificamos como protagonista de las experiencias con las que trabajamos sobre la base de la noción de generación. Una generación se instituye a partir de un momento de ruptura que surge de compartir una experiencia común y problemas comunes a los que no se les encuentra solución dentro de los cánones establecidos. Para superar estos problemas es necesario producir un cambio, nuevamente, un desplazamiento. Entonces el vínculo generacional se produce a partir de una vivencia común en torno a una experiencia de ruptura que crea mecanismos de identificación y reconocimiento en tanto parte constitutiva de un nosotros que es interpretado en clave generacional.

Experiencia en común, malestar y disconformidad con lo dado, intuición de que las alternativas no están contenidas en la situación conocida y búsqueda colectiva de otras opciones, producción de un ruptura que altera la situación y abre otros caminos, y constitución de un nuevo sujeto colectivo, son rasgos que caracterizan el proceso de institución generacional. En la dinámica histórica, para comprender las singularidades de cada experiencia a la vez que sus elementos comunes, es necesario abordar tanto los procesos de constitución de generaciones, como las relaciones intergeneracionales. Es en este plano de los vínculos entre generaciones en donde podemos reinterpretar quiebres y permanencias de las organizaciones estudiadas como expresiones de experiencias de conformación de generaciones que pueden mantener relaciones

de conflicto entre ellas⁹. Así, la noción de generación es una forma útil para aproximarse a las relaciones entre jóvenes y política, especialmente relevantes en las organizaciones sociales de base territorial y comunitaria como las que analizamos aquí.

Por otra parte, retomando la centralidad interpretativa de la noción de territorio y la constitución de un modo de uso, apropiación y, sobre todo, de producción territorial que llamamos forma social ocupación, subrayamos, con Harvey (2008), el movimiento de recuperación del control sobre la ciudad y la institución de modos de urbanización alternativos por parte de las organizaciones sociales. Así, a la recuperación de saberes y del control sobre el proceso de trabajo, se le agregó una reapropiación del espacio urbano –devenido territorio– que se produjo mediante la creación otras formas de producir el espacio que se desplegaron en clave comunitaria.

Esta reapropiación y producción del espacio y los modos de urbanización alternativos estuvieron caracterizados también por la preservación de ámbitos de uso común –públicos no estatales, comunitarios– y por una lógica en la que predominaba el valor de uso, por sobre el de cambio. Es decir, que la ocupación de tierras y la construcción de asentamientos se realizaron sobre la base de una lógica no mercantil, donde se privilegió la utilidad por sobre la ganancia y se respetó la dinámica comunitaria. Si bien esto fue más claro en las tomas y los asentamientos, también se expresó en el MTD de Solano a través de la ocupación de las rutas y la reapropiación del espacio barrial mediante los distintos trabajos comunitarios y talleres productivos que esta organización desplegó en el territorio.

Esta producción de territorio que realizaron las experiencias que estudiamos implicó una reformulación de la relación entre lo urbano y lo rural¹⁰. Más que como espacios separados y desconectados, nosotros concebimos la lógica territorial como integradora de momentos de intensificación del vínculo entre ambos planos, donde cada uno se carac-

⁹ En esta dinámica de rupturas y continuidades entre generaciones adquiere un lugar relevante la mutilación de una generación que perpetró la última dictadura militar (1976-1983).

¹⁰ Esto fue abordado por, entre otros, Davis (2004) y Lefebvre (1972).

teriza por su disposición en el continuo urbano-rural. Los procesos de migración interna fueron fuertes articuladores de esta relación. Así, rasgos como la concepción acerca de la tierra, las formas productivas y ciertas formas organizativas –tanto en las tomas y los asentamientos, como en el MTD de Solano– pueden interpretarse a la luz de esta relación de convergencia, superposición y diferenciación.

Sobre la base del trabajo realizado podemos formular una definición de asentamiento, que distinga a esta forma de construcción del espacio de la que fue típica de las villas miseria o de emergencia. Los elementos característicos de los asentamientos de 1981 en Quilmes, que pueden servir para estudiar otras experiencias similares, son:

- la ocupación es organizada colectivamente, planificada y se produce simultáneamente, no es espontánea y por agregación como la de las villas;
- se produce una topografía regular y planificada, que generalmente continúa la trama urbana circundante, no es un trazado intrincado e irregular;
- sin embargo, esta continuidad de la trama urbana producida en los asentamientos implica otra concepción acerca de la ciudad y el territorio ya que se constituye de acuerdo con las lógicas comunitarias, que privilegian el valor de uso por sobre el cambio, y preservan los espacios para usufructo común;
- se enfatiza en la instalación de una familia por lote para evitar el hacinamiento y respetar el trazado urbano;
- son considerados soluciones permanentes y por ello se inicia un proceso de autoconstrucción de viviendas de material que dura varios años;
- se asientan generalmente sobre terrenos privados que luego son expropiados por el estado, lo que implica una lucha por la regularización dominial. Las villas, en cambio, están generalmente instaladas sobre tierras fiscales.

Otro aspecto que nos interesa mencionar en este artículo es lugar de la Iglesia y de las prácticas religiosas populares en los procesos de organización que investigamos. En efecto, las tomas y los asentamientos de 1981 en Quilmes son de difícil comprensión si no se considera la acción de las Comunidades Eclesiales de Base –expresión de los cam-

bios acontecidos en la Iglesia Católica luego del Concilio Vaticano II—, sobre todo en los momentos iniciales. La experiencia de trabajo barrial que tenían los miembros de las Comunidades, en especial sus *animadores*, que se combinaba con una práctica organizativa y un abordaje político de los problemas locales, fue un insumo para la construcción de la organización colectiva que sostuvo la continuidad en el tiempo de los asentamientos, aun en una coyuntura dictatorial. Asimismo, el surgimiento del MTD de Solano también estuvo asociado a dinámicas que llevaban adelante los sectores más dinámicos de la diócesis de Quilmes a mediados de los años noventa.

De esta manera, las relaciones vinculadas a la fe religiosa o a la religiosidad popular fueron una dimensión significativa en la composición de las redes sociales que conformaron los espacios comunitarios en Solano en el período estudiado. Sin embargo, el significado de estas dimensiones asociadas a la Iglesia y a la religiosidad presenta importantes ambivalencias y contradicciones. Por un lado, construye un dispositivo de control, un mecanismo de dominación tendiente a la reproducción del sistema¹¹. Por otro, pone de relieve el contenido alternativo y disruptivo de las relaciones construidas, entre otras cosas, a partir de este tipo de redes y fortalece la organización comunitaria que encuentra en el plano religioso otra fuente de legitimación y crecimiento.

Tomando en cuenta la importancia explicativa de esta dimensión podemos criticar el abordaje de procesos como los que analizamos desde la lógica de pensar sujetos de derecho en clave estatal o ciudadana. En efecto, muchos de los derechos enarbolados en los momentos de más confrontación de estas experiencias pueden ser entendidos de acuerdo a la clave de análisis que los relaciona con cumplimiento de preceptos o concepciones bíblicas y con la realización del hombre en tanto ser humano, como creación divina, más que como la obtención de derechos ciudadanos que el estado debe garantizar. Estos derechos así concebidos, entonces, se realizan, se ponen en acto, se ejecutan; no se demandan o reclaman. Se toman, no se exigen.

¹¹ Si entendemos la religión en tanto ideología reproductiva, sobre todo lo referido a la religión oficial e institucionalizada.

Expondremos una breve síntesis del proceso histórico que abarcó nuestra investigación. Lo haremos subrayando rupturas y continuidades entre los distintos períodos que trabajamos. En efecto, nos proponemos brindar una posible reinterpretación de los distintos momentos históricos en los que se despliegan las experiencias que investigamos.

En primer lugar, concebimos los años setenta en una clave de tensión creciente entre las experiencias territoriales y la lógica estatal dominante. Esta tensión que fue acotando las posibilidades de despliegue de las organizaciones territoriales, aunque no las ahogó totalmente y por eso pudieron mantenerse durante la dictadura y volver a crecer en los años noventa, se produjo en dos sentidos. Por un lado, respecto de la intensificación de la represión estatal y para estatal hacia las organizaciones sociales y todo intento de resistencia, individual o colectivo. Por otro, en cuanto a las organizaciones que optaron por la lucha armada y la relación especular y simétrica con el estado. Este camino cerró muchas oportunidades para el despliegue de las organizaciones de base territorial y comunitaria que habían producido proyectos autónomos de construcción alternativa en el plano local. Asimismo, la escalada en la lógica político-militar contribuyó a contrarrestar los elementos creativos, exploratorios y experimentales que abrió el Cordobazo en 1969.

El segundo momento que comentamos es el de la dictadura (1976-1983). En estos años remarcamos, considerando fuertemente el brutal genocidio, la continuidad de prácticas de organización social y resistencia a nivel local y la gestación de experiencias territoriales y comunitarias, que desplegaron proyectos en los que se insinuaban las tendencias hacia la autonomía en una dimensión molecular y en el plano de la vida cotidiana. Estas experiencias resignificaron procesos anteriores y constituyeron la base para muchas organizaciones que se gestaron en los años ochenta y noventa. Particularmente en los casos que estudiamos, en 1981 se formó el asentamiento que se convirtió en el barrio San Martín, en el cual se constituyó el MTD de Solano en 1997.

Llegamos así a los años noventa, que enfocamos poniendo énfasis en el nacimiento –o reactualización– de organizaciones sociales que produjeron formas políticas alternativas para su organización interna, crearon

iniciativas productivas autogestionadas y autoorganizadas, y llevaron adelante acciones directas de ocupación de rutas. Esta perspectiva no sólo permite cuestionar las teorías de la fragmentación y la desintegración social. También, posibilita desplazarnos de las consideraciones del desocupado como un sujeto carente o padeciente, para concebirlo con sus capacidades de creación y producción plenas, constituyendo organizaciones de afirmación desde las cuales desplegar su potencia productiva (material e inmaterial), lo que nos introduce también en el campo de la autovaloración y la formación de otras lógicas de trabajo y producción.

Podemos continuar el rastreo del proceso histórico a partir de nuestras claves de interpretación con los sucesos de diciembre de 2001, los rasgos que allí se expresaron y las situaciones que se abren a partir de este acontecimiento. Más allá de las diversas posiciones y de los debates que aún existen al respecto, diciembre de 2001 constituyó un acontecimiento político de enormes dimensiones, un punto de inflexión en el proceso histórico cuyas resonancias aun se perciben. Por un lado, constituyó un momento de visibilidad y emergencia pública del proceso de organización territorial que se venía gestando en los años noventa y que se potenció con la confluencia de otros sectores movilizados, como los ahorristas, las asambleas barriales y, al poco tiempo, las empresas recuperadas por sus trabajadores. En efecto, en la larga década neoliberal (1989-2001) se gestaron modalidades de compromiso y de participación política por fuera y en directo cuestionamiento a las vías institucionales y representativas (Vommaro, 2012). Esto fue parte de un doble proceso –ya referido páginas atrás– de politización de lo cotidiano y territorialización de la política que produjo la ampliación de las fronteras de lo político y la creación de formas políticas o militantes innovadoras. Esto es, modalidades de militancias territoriales y comunitarias que podemos llamar político-sociales y que se presentaron como alternativas a la lógica político-partidaria, más ligada a lo estatal. Antes que el reemplazo de una por otra, debemos reconocer las relaciones de tensión, conflicto y contradicción entre estas dos lógicas políticas, que, además, se agudizó en aquellas coyunturas de activación o visibilización de las prácticas territoriales.

Así, desde nuestra perspectiva, más que fragmentación y desafiliación, lo que se produjo durante la década del noventa fue el fortalecimiento y

la reactualización de formas alternativas de expresión de la política en los barrios, que resignificaron elementos que se habían esbozado en las décadas pasadas, y anticiparon algunos de los rasgos que se visibilizarían en 2001. Estas otras formas políticas se constituyeron a partir de la territorialización y la creación de espacios comunitarios. Así, la política se resituó en clave territorial y las organizaciones que expresaron estos cambios –las denominadas piqueteras entre las principales– ocuparon un lugar de creciente visibilidad e incidencia en las definiciones públicas del conflicto social. A partir de estos cambios el territorio cobró un lugar de centralidad y se convirtió en una dimensión explicativa para entender las dinámicas económicas, políticas y sociales en un plano más general. En cierto sentido, la lógica del sistema devino territorial.

Para seguir pensando

Por otra parte, a partir del proceso abierto en 2001 podemos identificar algunos ecos que aún persisten y delimitan la política argentina. En primer lugar, podemos decir que la restauración de la dominación fue dificultosa, llevó varios años recomponer el sistema político y generar las condiciones para lograr un crecimiento económico que atenúe la pobreza y mejore las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad respetando sus diversidades.

En segundo término, lo público se colocó en el centro del debate. Por un lado, emergió con fuerza y de múltiples formas lo público no estatal, los espacios comunitarios y barriales. Por otro, el estado recompuso su lugar social como promotor de políticas, compensaciones y regulaciones. Además, el espacio público se constituyó en el ámbito privilegiado en donde se dirimía la disputa política y gran parte de la vida social.

El tercer rasgo que podemos destacar es que la acción directa se presentó como la modalidad más efectiva de acción política de los diversos sectores movilizados. Las instancias institucionales de mediación con el estado se demostraron insuficientes para canalizar los conflictos y las formas de acción directa (corte de ruta, tomas y ocupaciones) ganaron terreno en las protestas.

Como cuarto elemento, destacamos la constitución del territorio y la comunidad como ámbitos social y políticamente significativos, que adquirieron creciente centralidad. El territorio –en tanto espacio socialmente construido y significado- se convirtió tanto en lugar de producción política de las organizaciones sociales, como de legitimación de la política estatal y partidaria.

En quinto lugar, se multiplicaron las experiencias de autogestión y autoorganización social, tanto sean expresadas en las fábricas recuperadas por sus trabajadores, en los espacios barriales con diversos emprendimientos productivos, y en ámbitos rurales con las organizaciones campesinas, indígenas y la producción comunitaria.

El último punto que señalamos es el ya mencionado proceso de recomposición del estado, que fue paulatino pero no menos constante. En la actualidad el estado ha ganado espacio como diseñador, promotor y ejecutor de políticas públicas. Esto, si bien el agotamiento de las modalidades clásicas de representación y legitimación políticas no está superado, es reconocido por todos los sectores, a pesar de las resistencias que persisten por parte de los grupos más concentrados y privilegiados de la sociedad. Así, la legitimidad política resquebrajada fue de difícil y lento –aunque constante– restablecimiento, pero la política post 2001 no es igual a la anterior, para ser exitosa requiere asumir la mayoría de los elementos que destacamos en este trabajo.

Llegamos así al final de nuestro recorrido. Sabemos que muchas cosas han quedado inconclusas y otras requerirán reformulaciones más pronto de lo que quisiéramos. Sin embargo, pensamos que hemos podido lograr la mayoría de los objetivos que nos propusimos. Y hemos formulado una interpretación acerca de las organizaciones sociales urbanas en la Argentina contemporánea y estableciendo las relaciones con las mutaciones posfordistas del sistema capitalista. Nuestro propósito, además de realizar una contribución original y enriquecedora a nuestro campo de estudios; era, sobre todo, contribuir al fortalecimiento y la potenciación de estas experiencias, convencidos de que expresan vías posibles, radicales y aún inexploradas, hacia la construcción de una sociedad mejor. Esperamos, al menos, haber aportado nuestro granito al respecto.

BIBLIOGRAFÍA

- Badiou, A. (2000). *Movimiento social y representación política*. Buenos Aires: Instituto de Estudios y Formación de la CTA.
- Borges, A. (2003). *Tempo de Brasília: Etnografando lugares-eventos da política*. Río de Janeiro: Relume Dumará.
- Borges, A. (2005). «Sobre pessoas e variaveis: etnografia de uma crenca politica» (pp. 67-93). En *Mana*, 11.
- Davis, M. (2004). «Planeta de ciudades-miseria. Involución urbana y proletariado informal» (pp. 5-34). En *New Left Review*, 26.
- Davis, M. (2007). «Los suburbios de las ciudades del tercer mundo son el nuevo escenario estratégico decisivo». En *Rebelión*. [en línea] en <www.rebellion.org>.
- Harvey, D. (1977). *Urbanismo y desigualdad social*. Madrid: Siglo XXI Editores.
- Harvey, D. (2008). «El derecho a la ciudad» (pp. 23-39). En *New Left Review*, 53, noviembre-diciembre.
- Holloway, J. (2002). *Cambiar el mundo sin tomar el poder*. Buenos Aires: Herramienta Ediciones.
- Lefebvre, H. (1984). *La Producción del espacio*. Barcelona: Anthropos.
- Manzano, V. y Triguboff, M. (2009). «La trama política de las ocupaciones de espacios públicos y privados: un estudio en asambleas y organizaciones de desocupados». En el I Congreso Nacional sobre Protesta Social, Acción Colectiva y Movimientos Sociales, UNQ-UBA, Buenos Aires.
- Marx, K. (1972). *Elementos fundamentales para la crítica de la Economía Política*. (Grundrisse), 2. México: Siglo XXI
- Merklen, D. (2005). *Pobres ciudadanos*. Buenos Aires: Ed. Gorla.
- Negri, A. (1999). *Las verdades nómadas & General Intellect, poder constituyente, comunismo*. Madrid: Akal.
- Picotto, D. (2007). *¿Cuáles son las formas que adquiere el trabajo en la Argentina actual en el marco de las transformaciones del modo de producción ocurrido en las últimas tres décadas?* Trabajo final para el seminario de doctorado de Heller, M. FSoc- UBA, Mimeo.

- Porto Gonçalves C. W. (2001). *Geo-grafias*. México: Siglo XXI.
- Santos, M. (2000). *La naturaleza del espacio*. Barcelona: Ariel.
- Svampa, M. (2005). *La sociedad excluyente*. Buenos Aires: Taurus.
- Virno, P. (2002). *Gramática de la multitud*. Buenos Aires (mimeo).
[Traducción de Eduardo Sadier]
- Vommaro, P. (2008). «El trabajo territorial y comunitario en las organizaciones de trabajadores desocupados: el caso del MTD de Solano». En Pereyra, S., Pérez, G. y Schuster, F. (eds.). *La Huella Piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001*. Buenos Aires: Al Margen.
- Vommaro, P. (2010). «Política, territorio y comunidad: las organizaciones sociales urbanas en la zona sur del Gran Buenos Aires (1970-2000)». Tesis doctoral defendida en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Director: Federico Schuster. Co-director: Pablo Pozzi. *Mimeo*.
- Vommaro, P. (2011). «El proceso de movilización social en los sesenta desde el protagonismo juvenil: las experiencias del Movimiento Rural de la Acción Católica y las Ligas Agrarias en la Argentina» (pp. 191-214). En *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales Niñez y Juventud*, 9, 1. Enero-junio. Manizales.
- Vommaro, P. (2012). «2001 antes y después: la consolidación de la territorialidad» (pp. 106-117). En *Revista Forjando*, 1. Julio. Buenos Aires.
- Zibechi, R. (2008). *Territorios en resistencia. Cartografía de las periferias urbanas latinoamericanas*. Buenos Aires: La Vaca.

La *política vivida*: una propuesta programática desde la antropología

Julieta Quirós

Una serie de problemas epistemológicos con los que yo misma tropecé, como antropóloga, al hacer etnografía sobre experiencias de movilización política en el Gran Buenos Aires, me ha llevado, en los últimos años, a explorar con cierta sistematicidad la naturaleza e implicancias de la relación –varias relaciones, a decir verdad– entre cuatro términos: sectores populares, cientistas sociales, prácticas políticas, prácticas de conocimiento. Si tuviera que ligar esos términos en una proposición diría, entonces, que llevo cierto tiempo examinando las *prácticas de conocimiento* que (nosotros) los *cientistas sociales* ponemos en marcha a la hora de estudiar *prácticas políticas* que tienen por protagonistas a los *sectores populares*. La preocupación, como se ve, es de naturaleza epistemológica y, *por tanto* –al decir de Eduardo Viveiros de Castro (2010)–, política.

Recientemente, la ocasión de presentar un proyecto de investigación ante organismos de ciencia y técnica me obligó a rotular mi labor en un *objeto* asible, sucinto, convincente: la constitución –escribí entonces– de «una episteme de la *política popular* en la ciencia social argentina contemporánea», es decir –amplié seguidamente–, de un modo

históricamente situado de producir (unas y no otras) preguntas, respuestas y debates sobre las formas de acción y participación política de los sectores populares. Y siendo yo una antropóloga nativa, estudiando procesos políticos de mi país, la tarea implicó inicialmente un auténtico ejercicio de auto-antropología, es decir, de reconocimiento y objetivación de un conjunto de disposiciones intelectuales que hacen a nuestro sentido (socio-antropológico) práctico: preguntas y objetos de investigación imaginados; supuestos y operaciones clasificatorias practicadas; conceptos y marcos teóricos utilizados; lecturas, apropiaciones y usos vernáculos de conceptos y nociones que hacen al campo semántico –regional y global– del estudio de la política popular: «clientelismo», «intercambio», «poder», «desigualdad», «resistencia», «distribución», «economía moral», «política social», «Estado», «acción colectiva», «movimiento social», «protesta social».

Las disposiciones intelectuales a las que refiero son, entonces, formas incorporadas –y puestas en práctica sin necesidad de ser enunciadas– que constituyen lo que, parafraseando a Loïc Wacquant (2002a), he llamado los «no-dichos» del estudio de la política popular. Esos no-dichos configuran las condiciones de posibilidad de lo que puede ser dicho y lo que no, lo que puede ser pensado y lo que no, y de ahí que su objetivación sea tarea obligada para la ciencia social: *decir(los)* nos permite registrar qué tipo de preguntas y respuestas estamos produciendo, y vislumbrar, por tanto, cuáles están quedando fuera de nuestra imaginación sociológica.

En esta oportunidad, quiero aprovechar la instancia de discusión y de balance propuesta por las reuniones que dan origen a esta compilación, para sintetizar algunos resultados de ese proceso de objetivación, y específicamente presentar las principales líneas de una propuesta programática que llamo antropología de la *política vivida*. Esta propuesta resulta, precisamente, de la tensión entre nuestras prácticas de conocimiento y las prácticas políticas que he tenido oportunidad de acompañar etnográficamente en barrios del Gran Buenos Aires; su principal *cuestión* –es decir, su razón de ser, origen y propósito– apunta a enriquecer nuestra comprensión –y nuestra capacidad de dar cuenta– de *cómo* las personas se involucran (y des-involucran) en política, y por consecuencia, de *cómo* la política misma, en sus diversas formas y especies, se produce y transforma.

Poniendo en contexto: la política escindida

Empiezo por el principio de un recorrido personal, que es cuando inicié mi investigación de campo sobre formas de organización política en Florencio Varela, sur del Gran Buenos Aires, y la perspectiva etnográfica me permitió objetivar, primero, y discutir después, la visión compartimentada con la que el sentido común socio-antropológico establecido –mi sentido común– escindía, empírica y analíticamente, el activismo de los sectores populares en expresiones *contestatarias* y *no contestatarias* de la política. Como he señalado en otras oportunidades, lejos de tratarse de una clasificación vernácula, política *contestataria* y *no contestataria* eran entonces –y continúan siendo hoy– rótulos del mainstream euroamericano en los que prácticamente cualquier estudioso encuadraba y/o debía encuadrar su objeto, sus preguntas, sus marcos teórico-conceptuales, su campo dialógico –a quiénes lee y quiénes lo leen, con quiénes discute, en qué simposio o mesa de congreso participa, en qué etiquetas enmarca su investigación. Por lo general, en cada contexto espacio-temporal, política *contestataria* y *no contestataria* cuentan con referentes empíricos distintivos; entiendo que en la Argentina de mediados de la década de 2000 –por tomar el momento en que me integro a las filas de investigadores dedicados al estudio de procesos políticos populares–, esas *variantes* de la política estaban representadas por dos figuras emblemáticas: de un lado, las organizaciones piqueteras (arquetipos de la beligerancia colectiva y de la forma organizativa *movimiento social*); del otro, las redes del peronismo (arquetipo él, sus punteros, sus dirigentes y sus siempre sospechadas bases, del reproductivismo automático de la política clientelar). La oposición entre *piqueteros* y *punteros* era política y sociológica. Y así como en muchos contextos de la política vivida esas figuras podían enfrentarse por espacios de *poder* y de *hacer* –y entonces representaban, cómodamente, imágenes morales contrapuestas de la política (de un lado la resistencia y la transformación; del otro el clientelismo y la dominación)–, en otros contextos las cosas no eran ni tan simples ni tan claras. Los hábitos epistemológicos de la ciencia social establecida eran más proclives a las miradas rupturistas –las cosas claras–, siendo poco sensibles a

ambigüedades que, cuando percibidas, eran atribuidas a efectos transicionales o detalles de pequeña escala que –se juzgaba– no comprometían al cuadro general. Todavía recuerdo, en este sentido, la sensación de alivio y de hallazgo que me produjo leer –dentro de un cuantioso corpus de literatura– un modesto artículo, datado del año 2004, en que Virginia Manzano, colega antropóloga, buscaba restituir, a través del estudio de las «tradiciones asociativas» de sus interlocutores de campo en el distrito bonaerense de La Matanza, una mirada relacional de las experiencias de organización política que entonces etnografiaba (cf. Manzano 2004).

Sin lugar a dudas, de entonces a hoy, puede decirse que este tipo de perspectivas –que propongo llamar *relacionales* u *holistas*, en la medida que buscan dar cuenta del dinamismo e imbricaciones de las expresiones contestatarias y no contestatarias, como también de oposiciones como beligerancia vs. clientelismo; movimiento vs. Estado; movimiento vs. partido; autonomía vs. heteronomía; horizontalismo vs. autoritarismo; transformación vs. reproducción– han ganado cada vez más lugar en el pensamiento y la práctica de la ciencia social actual¹. Y aunque sus aportes para la comprensión de formas políticas contemporáneas han sido, desde mi punto de vista, realmente sustantivos, no debe extrañarnos que algunas operaciones cognoscitivas enraizadas en la escisión entre política *contestataria* y *no contestataria* permanezcan in-interrogadas. He señalado que un caso ejemplar de este fenómeno está dado por la persistencia de dos formas opuestas de descripción y explicación que los científicos sociales accionamos de modo diferencial, según el *tipo* de proceso o espacio político que estemos estudiando. Se trata de la disposición a asociar *ciertas* experiencias políticas a *ciertos tipos* de motivación y de vínculo social: cuando de política *contestataria* se trata (el estudio de un «movimiento social», por poner un caso), es común –incluso

¹ Este movimiento ha sido impulsado tanto desde las academias del norte –véanse, por ejemplo, los trabajos de Goldstone (2003), Tilly (2005), Auyero (2007, 2009), Lazar (2008)– como del sur –véase especialmente los aportes de Grimson y Cerrutti (2005), Merklen (2005), Sigaud (2005, *et al* 2010), Semán (2009), Manzano (2007, 2009), Ferraudi Curto (2006, 2009), Quirós (2006, 2009), Vommaro (2007, 2009)–.

esperable— encontrar una forma de descripción y explicación que llamo *moralismo*, esto es, un privilegio analítico de relaciones y móviles de acción de naturaleza ideológico-moral o político-moral. Si esto ocurre es porque el analista —y por lo general su audiencia— presupone que ese tipo de motivaciones («no instrumentales») predomina —o debería predominar— en ese tipo de prácticas y relaciones políticas. De manera simétrica e inversa, cuando de política no contestataria se trata (el estudio de relaciones de tipo «clientelar», por poner un caso), prevalece lo que llamo *economicismo*, es decir, explicaciones que privilegian relaciones y móviles de acción de naturaleza económico-material, en la medida que se presupone que —en primera o en última instancia— esas prácticas y relaciones políticas estarían signadas por motivaciones eminentemente «instrumentales» (Quirós, 2011).

La matriz relacional «moralismo vs. economicismo» no es una práctica de conocimiento enunciada: es parte de los «no-dichos» del estudio de la política popular, y como tal no solo es constituida por (lo dicho y lo no dicho en) la literatura académica (la «producción» socialmente objetivada en «trabajos publicados»), sino también, y de manera fundamental, por y en todas aquellas instancias no escritas de producción y circulación de ideas en las que nuestros sistemas de disposiciones intelectuales son creados y recreados, y en definitiva, nuestra ciencia social producida: la enseñanza —el diseño curricular, el trabajo en clase, las instancias de evaluación de tesis—; las reuniones académicas; las conferencias y debates; la producción, dirección y evaluación de proyectos de investigación.

Tal como he indicado en otras oportunidades, una de las formas discursivas que adopta —y que ha configurado, en cada una de esas instancias— esa matriz es propiamente teórica. Así, por ejemplo, el predominio de descripciones y explicaciones moralistas en el estudio de la política contenciosa se ha constituido de la mano de ciertas apropiaciones vernáculas de esquemas conceptuales euroamericanos, como las teorías de los nuevos movimientos sociales y la perspectiva de la acción colectiva propuesta por la historia social de E. P. Thompson. Por caminos distintos, ambas corrientes han contribuido a una sobre-representación de dimensiones no instrumentales en el análisis de expresiones beligerantes de activismo popular. Mientras tanto, el do-

minio del economicismo en el estudio de prácticas encuadradas en la política instituida encuentra su clivaje en el marco conceptual de los estudios de clientelismo y patronazgo. Hasta la socio-antropología, que discute con la «visión espasmódica» e instrumentalista del clientelismo profesada por la ciencia política, suele practicar descripciones economicistas de *última instancia*: las dimensiones «morales», «culturales» y «simbólicas» que los socio-antropólogos proclaman estudiar, suelen quedar, en la práctica analítica, reducidas a un maquillaje social –una realidad de segundo orden, por lo general deformadora o mistificadora de la realidad *objetiva* (esencialmente asimétrica, interesada e instrumental) de las relaciones «clientelares» (Vommaro y Quirós, 2011)–. Los análisis que prescinden del término «clientelismo» no están exentos de este hábito –no-dicho, por cierto; basta mencionar el predominio que adquieren perspectivas transaccionalistas o teorías del intercambio en el estudio de relaciones políticas que remiten al fenómeno clientelar –y en esto los estudios sobre peronismo son caso ejemplar–.

Mi argumento puede graficarse en estos términos:

	Razón dominante y/o subyacente	Razón subsidiaria y/o aparente
Política contestataria	Político-moral (<i>compromiso</i>)	Económico-material (<i>interés y/o necesidad</i>)
Política no contestataria	Económico-material (<i>intercambio, interés</i>)	Afectivo-moral (<i>compromiso, favor, ayuda</i>)

Fuente: elaboración propia.

Por qué van: el debate social sobre política y sectores populares

No se trata, sin embargo, de un esquema puramente sociológico – si es que algo puramente sociológico pudiera existir–. Los términos implicados en las explicaciones moralistas y economicistas de la política hacen al tipo de controversia en que discurre un debate social –

del que participan medios de comunicación, actores políticos, gubernamentales y no gubernamentales, intelectuales y opinión pública—que tiene por objeto definir la naturaleza, legitimidad o ilegitimidad de las experiencias de participación política de los sectores populares. Ese debate afecta tanto a las prácticas de la política *instituida* (el activismo partidario y el voto, por ejemplo) como a las prácticas consideradas *contestatarias* (movilizaciones y repertorios de protesta, movimientos sociales); y temprano o tarde se detiene en *una* controversia específica, que tiene un sujeto —*la gente*— y un objeto —las condiciones, razones, causas y motivaciones que estarían produciendo su (tal o cual) comportamiento político—. En el lenguaje de todos los días (en los medios, en una conversación de bar, en una mesa familiar, en la disertación del conductor de taxi), esa controversia suele aparecer expresada en la siguiente fórmula: ¿*por qué la gente* (hace políticamente lo que hace)? ¿*Por qué los vota?* ¿*Por qué está ahí?* (en un acto partidario, en una movilización, un piquete, un corte de ruta) ¿*Por qué va?* Las razones implicadas en la forma de explicación que llamo moralismo son aquellas que signan el deber-ser de la acción política (*la gente* está ahí por *convicción*, por *compromiso*, por *adhesión* a una causa colectiva), mientras las razones implicadas en el economicismo definen la política espuria (*la gente* está ahí por *interés* o por *necesidad*, una *necesidad* que otros más poderosos —los políticos, los dirigentes— manipulan y aprovechan)².

La definición y el reconocimiento social de *qué* y *quiénes* representan el ejercicio virtuoso o vicioso de la política es siempre dinámica y objeto de disputa; aquello que se mantiene constante es el propio esquema que opone, por lo general en forma excluyente, motivaciones de

² Las atribuciones de *necesidad* y de *interés* son, por lo general, accionadas diferencialmente según la posición social considerada; un caso típico se da en la caracterización social y sociológica de las relaciones llamadas «clientelares»: mientras la acción política de las bases («clientes») es explicada por la *necesidad*, la de los «mediadores» y/o «dirigentes» suele ser explicada por el *interés*. En uno y otro caso, el economicismo presume un *intercambio* de bienes políticos (expresiones de apoyo, participación electoral, movilización política) por bienes económicos (recursos, asistencia, programas sociales); la diferencia no parece tanto de *intencionalidad* como de *posición* y rédito desigual en los términos del intercambio.

carácter político-moral y colectivo (actuar por un bien común), por un lado, y motivaciones de carácter económico-material e individual (actuar por un bien particular), por el otro. Si prestamos atención, no se trata de explicaciones atribuidas exclusiva o distintivamente a los *sectores populares*; el economicismo es una forma general y extendida de desacreditar intenciones que otros proclaman o pretenden genuinamente *políticas*; la dirigencia (*los políticos*) suele ser uno de sus principales blancos; eventualmente otras identidades, como la *clase media* –pensemos, en los últimos años, en las caracterizaciones públicas (oficiales y no oficiales) del kirchnerismo sobre el activismo y movilización social de los sectores «anti-K»–. Pero lo cierto es que cuando de *sectores populares* se trata, la pregunta –por qué– y sus respuestas –moralistas vs. economicistas– adquieren una *sistematicidad* peculiar. Comparativamente, por ejemplo, clases medias y altas gozan de notable inmunidad moral en lo que a su comportamiento político respecta, y no sólo porque el economicismo que eventualmente se les atribuye es *en última instancia distinto* (un economicismo considerado «de clase», «sectorial» y por lo general presumido como «consciente»), sino también, y fundamentalmente, porque son esas clases las principales productoras de preguntas sobre el comportamiento político que merece ser interrogado, esto es, el comportamiento político de los otros. En la historia política argentina esas preguntas fueron inauguralmente formuladas a partir de octubre del '45; y una de ellas, la principal –por qué el peronismo– sería fundadora de la sociología e historia social vernáculas modernas (Neiburg, 1998; Gutiérrez y Romero, 2007), y también, como ha mostrado recientemente Alejandro Grimson (2012) en sus «mitos sobre el peronismo», inspiradora de las explicaciones más representativas y corrientes del economicismo.

Sin lugar a dudas, el debate político de la política de los sectores populares es parte constitutiva de las condiciones sociales de producción de conocimiento –es decir, de su episteme–, y esto no solamente porque algunos analistas intervienen activa, directa y eventualmente públicamente en ese debate, sino porque sus términos participan, inevitable aunque no siempre reconocidamente, en la configuración de las preguntas, respuestas, supuestos y operaciones de la ciencia social. En uno y otro caso, nuestras prácticas de conocimiento son polí-

ticas³. Así, por ejemplo, la literatura socio-antropológica contemporánea sobre expresiones políticas contestatarias –con las que, por pertenencia ideológica, los analistas tienen natural afinidad– abunda en embates, explícitos o implícitos, con explicaciones economicistas (consideradas sociológicamente reduccionistas y políticamente reaccionarias). Y si esta práctica no es en sí misma problemática (en la *acción colectiva*, como en cualquier acción social, hay «algo más que» razones económico-materiales), sí lo es que, siguiendo la propia naturaleza del debate, la ciencia social se haya visto inclinada a comprimir ese «algo más que» en una *contraparte* moralista. Como señalé alguna vez, todo transcurre como si nuestro trabajo estuviera hecho una vez que hemos mostrado la anti-economía de la política contestataria⁴. La operación simétrica e inversa es practicada en el estudio de expresiones de la política instituida: ese mismo investigador social que vislumbra en la beligerancia formas sociales renovadoras y emancipatorias, es crítico de aquellas estructuras establecidas cuyos vicios y efectos de poder aspira a mostrar; de allí que todos participamos de un consenso tácitamente establecido, que funciona sin necesidad de ser dicho: mientras en el estudio de la política contestataria consideramos política y sociológicamente peligroso otorgar un lugar *demasiado* significativo al orden de lo «económico-material» (son *cosas* de alto poder contaminante, capaces de alterar todos los signos de manera súbita e irreversible, transformando –para nuestros contrincantes en el debate, para nuestra audiencia, colegas o evaluadores en alguna instancia académica– la acción comprometida en acción instrumental; la acción colectiva en individual; el movimiento autónomo en movimiento heterónomo; la auténtica política en política mercantilizada, es decir, en falsa política)⁵; juzgamos, inversamente, que cuando de política instituida se trata, es pertinente dar *suficiente*

³ Véase al respecto una rica y reciente discusión entablada por un grupo de intelectuales argentinos, Colectivo Situaciones (2011) y Grimson (2011).

⁴ Grignon y Passeron (1991) han analizado brillante y originalmente este tipo de operaciones en lo que refiere a visiones populistas y miserabilistas de «lo popular». Véanse igualmente, para otros contextos, las reflexiones de Bourgois (2002) y Wacquant (2002a).

⁵ Para un análisis de estas operaciones de contaminación en la academia y fuera de ella, véase Quirós (2011).

lugar analítico a *esas cosas* –de lo contrario, ¿qué estaríamos explicando? Aquí cualquier intento de simetrización de aspectos instrumentales y no instrumentales de las relaciones en juego es leído con sospecha y reprobación (nuestra y de nuestra audiencia), y entonces, mientras nos resulta razonable leer afirmaciones del tipo «el puntero y el vecino perciben sus intercambios como favores» o «se sienten amigos», nos resultaría como mínimo dudoso leer (o escribir) «el puntero y el vecino se *hacen* favores» o «*son* amigos».

La política vivida: desplazamientos conceptuales y metodológicos

Me interesa referir, adicionalmente, a dos hábitos intelectuales extendidos en la ciencia social contemporánea que, en mi opinión, han contribuido al privilegio de esos dos órdenes de motivación –economicista y moralista– en el estudio del activismo político de los sectores populares. Uno de ellos, de carácter metodológico, descansa en el predominio de la entrevista como técnica de construcción de datos. Predominio que se da no solo en la indagación sociológica, sino también en las investigaciones –de antropólogos y no antropólogos– que se valen o sostienen valerse del método etnográfico. El fast-knowledge impuesto por los criterios cuantitativos de *producción* del mercado académico es, sin duda, una fuerza que contribuye a la preeminencia de la entrevista por sobre otras técnicas –por naturaleza más *lentas*, como la observación–⁶. El fenómeno involucra, sin embargo, un problema epistemológico adicional y más profundo, que hace a una concatenación de reducciones desafortunadas: en primer lugar, la reducción de la etnografía a una indagación de la «perspectiva de los actores»; luego, la reducción de esas «perspectivas» a «lo que la gente *piensa*»; seguidamente, la reducción de «lo que la gente *piensa*» a «lo que la gente *dice*»; y finalmente, a «lo que la gente

⁶ Sobre otros efectos de la política científica contemporánea en la práctica de las ciencias sociales, véase el elocuente trabajo de Esteban Krotz (2011).

dice» privilegiadamente en circunstancias *hechas para decir*: el discurso público; la declaración; el documento escrito; la entrevista con el investigador. No ha de extrañarnos que, valiéndose de este tipo de material, el grueso de la investigación etnográfica o dicha etnográfica contemporánea esté dominado por un tipo particular de evidencia, la *palabra dicha* (*representativa* de la «perspectiva de los actores»), mientras otros materiales (empezando por los provenientes de la observación) sean decididamente relegados, no sólo en la edición del texto final, sino fundamentalmente –y esto es lo más grave– en el propio proceso de relevamiento y construcción de datos⁷.

La matriz economicismo vs. moralismo en el estudio de la política popular está íntimamente vinculada a estas (desafortunadas) prácticas de conocimiento. Al sobreestimar analíticamente la evidencia lingüística, el discurso socio-antropológico ha quedado atrapado en un conjunto de controversias y oposiciones con que las personas, en el mundo social, explican y disputan explicaciones sobre el accionar político propio y ajeno: *compromiso vs. interés*; *compromiso vs. necesidad*; *política vs. economía*; *colectivo vs. individual*. En lugar de interrogarse por la pragmática de estos términos y sus oposiciones –esto es, por cómo funcionan en el mundo social– los ha congelado en sentidos, representaciones, intenciones y explicaciones entre los cuales el cientista social se ve inclinado a tomar partido o mediar. Volveré en breve sobre este punto.

Un segundo hábito intelectual al que quiero referir aquí, y que en mi opinión ha atrapado –o contribuido a atrapar– los estudios de política popular en la matriz economicismo/moralismo, refiere al menosprecio –cuando no omisión analítica– de dimensiones y motivos de la acción social que podríamos agrupar en lo que Max Weber clasificó sociológicamente como acción social «irracional». Desde el punto de vista de la sociología weberiana, economicismo y moralismo pueden leerse como dos variantes de explicación «racional»: ambas compar-

⁷ Estoy aquí comprimiendo una enorme y seria discusión sobre (qué es, cómo estudiar, qué hacer con) la «perspectiva nativa» en antropología, y recomiendo en este sentido ver las sugestivas discusiones planteadas por Peirano (1995, 2001), Goldman (2006b), Guber (2001), Balbi (2012).

ten la presunción de que el origen y continuidad de los vínculos y acciones políticas en juego residiría en *algo* –en lenguaje bourdiano: capital económico, simbólico, político, social, cultural– que las personas buscan ganar, conservar, acrecentar. Es decir, están refiriendo a acciones con arreglo a fines y con arreglo a valores (respectivamente). Desde mi punto de vista, esta mirada «demasiado energética» –al decir de Sherry Ortner (1993)– de la práctica, nos ha impedido incorporar a nuestros análisis fuerzas del involucramiento político que desdibujan el moralismo y el economicismo, y que la etnografía, como modo de conocimiento, permite apreciar de forma incomparable. Porque es cierto que ha habido intentos de salidas *reformistas* por parte de algunos analistas –me refiero, en el caso de los estudios sobre política popular, a la operación de restituir la igualdad ontológica de fuerzas instrumentales y no instrumentales de la acción política, buscando mostrar que son o pueden ser «las dos cosas» (razón material y razón moral; interés y compromiso; necesidad y adhesión a una causa)–; pero igualmente cierto es que con esta alternativa, al buscar mediar los polos de un debate preconstituido, seguimos sin preguntarnos *qué otras cosas hay además de esas dos cosas*.

Etnografiar, en su dimensión vivida y cotidiana, las acciones, interacciones y vínculos políticos de vecinos, militantes, dirigentes y referentes de un conjunto de barrios del Gran Buenos Aires, me ha llevado, entre otras cosas, a plantearme esa pregunta. Argumento, en este sentido, que una antropología de la política vivida, es decir, una perspectiva orientada a acompañar, registrar, describir y analizar la política que *se hace*, antes que la política que *se dice*; la política que *se vive* ordinariamente, antes que la política que se enuncia en un discurso público, en un manifiesto o en una entrevista; nos conduce por otros caminos epistemológicos, y sobre todo por preguntas, respuestas y debates alternativos al economicismo y el moralismo. En lo que resta de este artículo quiero puntualizar dos líneas de esa antropología: la primera refiere a un abordaje propiamente etnográfico –es decir, pragmático en lugar de semántico– de la palabra-en-el-mundo-social, empezando por las explicaciones (moralistas, economicistas, y otras) que las personas atribuyen a su accionar y el de los otros; la segunda atañe a la elaboración de una

teoría etnográfica del involucramiento político, la cual nos lleva a reflexionar, a su vez, sobre las posibilidades de una teoría holista, procesual y relacional de la motivación.

Estudiar la palabra en (y como) acción

Como han señalado Luc Boltanski y Laurent Thévenot (2006 [1991]), ningún abordaje sociológico puede ignorar el hecho (social) de que, al igual que nosotros socio-antropólogos, las personas someten su mundo a interrogación; entre otras cosas, esto quiere decir que (como nosotros) producen explicaciones sobre lo que hacen, atribuyen intenciones y motivaciones a las acciones propias y ajenas; y más importante: cotidianamente tejen sus vínculos en base a las respuestas que dan a esas preguntas y a las intenciones que atribuyen a esas acciones. Quiero mencionar, en este sentido y a modo de ejemplo, que durante mi trabajo etnográfico en el Gran Buenos Aires pude ver a la Huanca, puntera del PJ –y una de mis principales interlocutoras de campo–, procurar diferenciar para sí aquellos vecinos que la acompañaban (políticamente) «por compromiso» de aquellos que lo hacían «a cambio de algún beneficio»; también pude ver a los dirigentes partidarios de la Huanca diferenciar el «verdadero militante» de aquel otro que está pendiente «a ver qué le dan» –y es por eso que Huanca se esforzaba en demostrar que ella *no necesitaba* ni estaba *interesada* en *ese* empleo público que tanto esperaba de sus dirigentes–. Del mismo modo, pude ver a dirigentes de movimientos de desocupados preocupados por cómo generar y garantizar verdadero «compromiso» entre sus bases –»compromiso» opuesto a esas adhesiones parciales que consideraban «meramente» sujetas a «la necesidad» (económica) –. Vi a esas «bases», también, procurar distinguir entre aquellos referentes y dirigentes que hacen «política» en el buen sentido del término –es decir, *algo bueno para los demás*–, de aquellos que hacen «uso político de la necesidad de la gente» y «solo te dan si vas a los actos». Mientras tanto, vi a los funcionarios del Estado condicionar la asignación de recursos públicos a lo que consideraban una «verdadera» organización social, en desmedro de aquella otra que solían descalifi-

car como organización «bolsonera». Basta echar un vistazo a cualquier investigación empírica contemporánea para advertir la generalidad y extensión social de cada uno esos términos: si *la gente* va espontáneamente y por su cuenta, o si va llevada por otros; si va a voluntad u obligada; si va a conciencia o sin saber a dónde ni a qué; si va por convicción política o va por motivos económicos; si va comprometidamente o interesadamente. *Por qué van (y por qué vienen), por qué están ahí (y aquí)* es una pregunta social, es una pregunta sociológica, y es también una pregunta nativa.

Al congelar estas controversias sociales en el lenguaje conceptual del economicismo y el moralismo, la socio-antropología se está perdiendo lo que ellas tienen de más interesante: sus usos dinámicos, conflictivos y polisémicos en la política vivida. ¿Qué controversias, preguntas y respuestas plantean las personas en sus acciones, relaciones e interacciones de la vida cotidiana?, ¿qué efectos producen esas preguntas y respuestas?, ¿cuáles y en qué contextos de situación son socialmente aceptables o inaceptables?, ¿cómo operan en la constitución, dinámica, y disolución de las relaciones y prácticas que estudiamos?, ¿cómo vehiculizan, reproducen y transforman las relaciones de poder en juego? Estos son algunos de los interrogantes implicados en una indagación etnográfica de las explicaciones sociales del involucramiento político, es decir, una indagación que, estudiando las palabras en acto, pueda dar cuenta de sus efectos performativos en el universo social (Peirano, 2001). Familiarizarnos con este ejercicio nos permitirá, por un lado, abrir perspectivas al atolladero «moralismo vs. economicismo» —entre otras cosas porque, en su vida ordinaria, las personas ensayan *otras* explicaciones del involucramiento político que no estamos habituados a contemplar como dato sociológico: el *gusto*, la *pasión*, el *miedo*, el *entretenimiento*, por dar ejemplos que juzgo particularmente significativos—. Por otro lado, nos permitirá reponer lo que estamos habituados en llamar «reflexividad de los actores» —y que en lo personal creo más conveniente renombrar como «la condición de *persona* de las personas con quienes trabajamos»—.

El hacer(se) de la política: hacia una teoría etnográfica del involucramiento

Apelo a un suceso etnográfico. En una oportunidad, cuando después de más de un año de ausencia volví al Gran Buenos Aires a dar inicio a una nueva campaña de campo, me encontré con la sorpresa de que Pato Elizalde, una adolescente que hasta entonces había sido mi principal interlocutora de campo, había abandonado de manera definitiva la organización de desocupados en la que había participado intensamente durante casi tres años, y de la cual había llegado a ser – con solo 16 años de edad– delegada barrial. También pude sorprenderme al ver que su hermana María, dos años menor (que hasta entonces había tenido un vínculo acotado, inclusive de cierto recelo con la organización), ahora se aproximaba cada vez más: no sólo trabajaba en uno de los comedores comunitarios del movimiento, sino que había sido elegida como parte de la comisión ejecutiva; también había empezado a participar en la *juventud* del movimiento, asistiendo a las reuniones semanales. Un día, mientras me contaba con preocupación algunos problemas que se habían presentado en la última de esas reuniones de los chicos, María refirió, por primera vez, a esa transformación que yo venía observando en su vínculo con la organización:

–Viste que antes yo iba [al movimiento] así nomás –me dijo–. Ahora voy distinto... Me interesa lo que se habla en las reuniones, hablo, opino... No sé... Como que me fui enganchardo, ¿viste?...

De los tantos *déjà vu* que me había deparado mi retorno a los barrios de Florencio Varela en aquel entonces, la expresión de María fue de esas que, en el mismo momento que uno las escucha, se da cuenta de que ya hubo otras tantas que pasaron sin ser advertidas. *Ir engancharse*. El verbo no me era nuevo, tampoco la conjugación; así mismo lo había escuchado, por ejemplo, de muchas personas que, narrándome los inicios y caminos recorridos en su activismo político, concluían diciendo, como quien condensa una larga historia en una sola frase: *y así me fui enganchardo...*

La sorpresa que me causó la entusiasta aproximación de María al movimiento –y el apesadumbrado distanciamiento de Pato– me permitió dar, por primera vez, un *lugar* a ese verbo por el que hasta entonces –enfrascada en el horizonte de posibles trazado por el economicismo y el moralismo– no me había dejado interpelar. ¿Qué era *engancharse*?, ¿qué era lo que había ido *enganchando* a María?, ¿cómo se había *ido enganchando*? De manera simétrica e inversa: ¿qué habría ido *des-enganchando* a su hermana Pato? En definitiva: ¿cómo las personas se *van enganchando* (y *desenganchando*) en política?, ¿cómo la política las *va enganchando* y *desenganchando*?

Traigo aquí estas preguntas porque ellas –y sus respuestas– exigieron una serie de replanteos en mis prácticas de conocimiento. En primer lugar, porque «cómo las personas se van enganchando» es de esas preguntas que no se resuelven en *una* respuesta, y de esas palabras que no se explican con palabras. *Engancharse* es una acción de múltiples acciones, que solo se observa *en* acciones. Y no solo en lo que las personas hacen, sino también, y sobre todo, en *cómo* lo hacen: María no solamente había pasado a participar *más* del movimiento. Estaba participando *distinto*. *Ahora voy distinto*, me había dicho. Solo cuando estuve dispuesta a construir mi datos considerando los detalles más cotidianos, rutinarios, ordinarios y a simple vista más insignificantes del *hacer* de María –el *cómo* de su participación en cada movilización y actividad del movimiento; el *cómo* de su trabajo en el comedor, de sus relaciones personales dentro y fuera del movimiento; sus vínculos amigos y sus vínculos conflictivos; sus expectativas, sus alegrías, sus decepciones– pude empezar a comprender qué era ese «ir distinto». Y sobre todo a darme cuenta de que el *enganche* de María consistía no tanto en el hecho de que ella participaba *más en el* movimiento, como en el hecho de que el movimiento participaba *más de ella* misma.

Del mismo modo, solo cuando estuve dispuesta a seguir ese *hacer* pude advertir que, por más que la Huanca, otra de mis interlocutoras de campo, dijera que la política no debía *mezclarse* con los afectos, ella no podía evitar ser afectada por la política, y que en una elección, en un acto barrial, en un conflicto con algún *compañero* o *dirigente* del PJ, lo que se ponía en juego para la Huanca era mucho más que

una «posición» o un quantum de «capital político»: era su disposición (o no) para levantarse de la cama, eran las ganas (o no) de salir de su casa. Haciendo política las personas se hacen a sí mismas, porque son afectadas y tienen una relación afectiva con ese hacer. Y esto implica decir, también, que las personas hacen política *porque* la política las afecta, esto es: porque las hace *persona* (si se quiere, en el sentido antropológico del término)⁸.

Si el *engancharse* (de María y de tantos otros) puede ser abarcado por las razones del economicismo y el moralismo, es precisamente porque encierra *otras* dimensiones de experiencia; y si la etnografía puede dar cuenta de esas dimensiones es precisamente porque es una forma de conocimiento que permite capturar eso que Loïc Wacquant (2009, 2002b) llama el sabor y el dolor de la acción social. Por tanto –y en segundo lugar–, explorar cómo las personas *se enganchan* nos convoca a dar un lugar –epistemológico y analítico– a los múltiples sentidos de conocimiento que son puestos en juego en el trabajo de campo en tanto *experiencia vivida por y entre personas* –el investigador/a/es en relación con sus interlocutores. Esto implica, entre otras cosas, empezar a considerar con suma seriedad no solo lo que miramos y escuchamos en el campo –eso que *evidenciamos* cuando escribimos ‘fulano hizo tal cosa’, o más corrientemente, poniendo dos puntos y abriendo comillas: ‘fulano *dijo* tal otra’, sino también, lo que podemos olfatear y percibir en nuestra convivencia y vínculo con los otros. Como bien señala Jeanne Favret-Saada (1990), la comunicación entre el etnógrafo y sus interlocutores de campo no es solamente verbal; tampoco exclusivamente voluntaria e intencional: como en cualquier relación social, en la relación de campo hay *también* comunicación no verbal y desprovista de intencionalidad. Salvo que insistamos en reducir la antropología a una indagación de aspectos intelectuales de la experiencia humana (cosificados en las «representaciones nativas»), no hay razón para excluir la evidencia empírica producida en y por esa otra comunicación.

⁸ Personas relacionales y «totales», para usar la expresión con que Mauss (1971: 284 y ss.), en una conferencia de 1924, caracteriza al objeto de la sociología: ese ser humano «completo y concreto», en el que cuerpo, alma y sociedad se entremezclan.

En sintonía con estas observaciones, creo que vale la pena recordar los preceptos del método etnográfico del B. Malinowski, uno de los fundadores de la antropología moderna, quien ya en los años 20 del siglo pasado advirtió en su programa que eso que llamamos «perspectiva nativa» no es sólo –ni tanto– un punto de vista, una forma de *ver* o *pensar* el mundo, sino también –y más bien–, una manera de *hacer* y *vivir* el mundo –precisamente *eso* que los sentidos involucrados en el campo nos permiten capturar–.

Y aquí cabe, probablemente, una advertencia que considero fundamental: no se trata, entiéndase bien, de hacer del «gusto», el «sabor», el «dolor», el «placer» de la acción un nuevo orden motivacional que viene a revelar algo más verdadero o más fundamental que las razones implicadas en el economicismo y el moralismo. Tampoco estoy proponiendo una *agregación* de dimensiones o motivaciones: antes eran «económico-material» y «político-moral», ahora se sumaría la «afectivo-emocional».⁹ Averiguar cómo las personas se *van enganchando* me ha llevado por un camino conceptual distinto, que consiste menos en adicionar y más en (re)*enganchan* cosas que nuestras prácticas de conocimiento nos han enseñado a pensar (y abordar) *des-enganchadas*. Y es por eso mismo que esa noción nativa –*engancharse*– es disparador y pilar de lo que propongo llamar, tomando prestado el término acuñado por Malinowski (1935), una «teoría etnográfica» del involucramiento político. Esta noción, que a los no antropólogos puede resultar extravagante, no refiere –tal como la palabra «teoría» puede llevar a pensar– a un sistema deductivo o un esquema conceptual acabado, sino más bien a una perspectiva analí-

⁹ En la última década, la preocupación por (re)incorporar la dimensión «emocional» al estudio del activismo político ha sido colocada en la agenda de la ciencia social euroamericana, sobre todo desde la sociología de la acción colectiva (véanse especialmente Goodwin *et al* 2001; Goodwin y Jasper 2004; Juris 2008). Uno de los problemas implicados en estas propuestas (o más bien y sobre todo en sus apropiaciones más corrientes) ha sido el establecimiento de una perspectiva nuevamente unidimensional, que aísla «las emociones» como variable u orden motivacional delimitado y delimitable. Recientemente, en nuestra academia, una serie de trabajos antropológicos entablan interesantes discusiones al respecto: véase Pita (2010), Fernández Álvarez (2011) y Zenobi (2012).

tica (suscitada por un universo etnográfico específico, la política vivida en Florencio Varela, en ese caso), orientada al estudio de un fenómeno general, el activismo político como hecho social (total). Precisando más sus alcances –o sus límites–, diría que esa teoría etnográfica es un *recurso* epistemológico apto para responder a una cuestión específica: la de cómo (nosotros, investigadores sociales, podemos comprender y explicar cómo) las personas se involucran –y des-involucran– en política.

Como señala Marcio Goldman (2006a, 2006b) en su propia lectura de la noción malinowskiana, una «teoría etnográfica» no es teoría puramente «nativa»; tampoco es teoría puramente «antropológica»; es precisamente lo que el antropólogo produce a partir del *encuentro* entre ambas. Puedo decir, en este sentido, que esa fórmula sintética e indeterminada con que mis interlocutores describen su involucramiento político –*ir enganchándose*– fue al encuentro (y a una revisita) de una tradición epistemológica con la que, a mi entender, guarda particular afinidad: la socio-antropología de Marcel Mauss. Siendo más específica, el *engancharse* me remitió inmediatamente a las nociones de *híbrido* y de *hecho social total* implicadas en el *Ensayo sobre el don* de Mauss. El fenómeno que el autor propone llamar *don* es de carácter *total* porque tienen una naturaleza «multidimensional» –moral, afectiva, económica, política, corporal, espiritual, religiosa– que desdibuja fronteras clasificatorias establecidas. Particularmente borra, según Mauss, las fronteras y oposiciones implicadas en las nociones de *interés* (vs. desinterés) y *libertad* (vs. obligación). En este sentido, como han interpretado otros autores (Graeber, 2001; Karsenti, 2009), el don es *total* porque su carácter interesado y obligatorio *no cancela* su carácter desinteresado y voluntario. El don enmaraña –totaliza– lo que nuestro pensamiento distingue, y por eso es un *híbrido* sociológico ejemplar; también por eso mismo es que, argumenta Mauss al final de su *Ensayo*, convendría reelaborar nuestros propios términos analíticos: «*esos conceptos de derecho y de economía que nos complace oponer: libertad y obligación; liberalidad, generosidad, lujo y ahorro, interés, utilidad; sería bueno volver a ponerlos en el crisol*» (Mauss, 2007 [1925]: 232, traducción mía).

Entiendo que una *mezcla* de ese tipo aparece cuando nos disponemos a averiguar cómo las personas se *van enganchando* en política, y nos invita, por tanto, a pasar nuestros conceptos por el crisol. Cuando seguimos de cerca al hacer cotidiano del dirigente, del militante, del vecino, del político, advertimos que eso que nuestra práctica intelectual se empeña en *analizar*, la política vivida lo mixtura: necesidades materiales que comprometen la dignidad moral; intereses que tocan fibras afectivas tan profundas que el propio término *interés* pierde su identidad y su sentido descriptivo; convicciones y compromisos políticos que comprometen a los estados de ánimo, a las sensaciones, al cuerpo, a la salud y la enfermedad. En suma: las personas, en su hacer cotidiano, nos enseñan que para entender –y describir– cómo se *van enganchando*, no basta ni sumar viejos términos («son las dos cosas») ni adicionar nuevos («son más que dos cosas»), sino que es preciso, más bien –y esto es un «en tercer lugar»–, indagar lo que aparece si estamos dispuestos a *prescindir analíticamente* –como propone Mauss– de la propia oposición y exclusión de términos como interés/desinterés, necesidad/compromiso, instrumental/moral, cálculo/liberalidad, individual/colectivo, economía/política.

De este modo, la teoría etnográfica del involucramiento político sobre la que estoy apuntando nos convoca a re-sociologizar dimensiones relegadas de la acción social (que Max Weber conceptualizó dentro de la acción *irracional*, aunque este adjetivo no significara en modo alguno «menos» o «no» *social*¹⁰), y al mismo tiempo, nos convoca a correrlos desde nuestra (pre)disposición analítica hacia nuestro pensamiento sintético. Esto quiere decir, entre otras cosas, que en lugar de discriminar «motivos» para atribuirlos diferencialmente a *ciertos* tipos de relación y acción (política en este caso); o que en lugar de hacer «distinciones conceptuales» con la promesa de *–después, más tarde–* volver a juntar las cosas –sin nunca llegar a juntarlas–; intentemos acoger intelectualmente la impureza que hace a la política vivida, como a cualquier otra cosa humana. De ahí también

¹⁰ Basta recordar el análisis weberiano de la relación carismática o del lugar de la *pasión* en la vocación política.

que definiendo la potencia y el estatus conceptual de *política vivida* –y específicamente del carácter indeterminado de ese adjetivo, que no precisa ser meticulosa e inobjetablemente desagregado.

En este sentido –y por último– *engancharse* nos invita a totalizar –reenganchar– nuestra propia concepción de «motivación» –o nuestras teorías no-dichas sobre ella–. Y esto en por lo menos dos sentidos: por un lado, en lugar de pensar la motivación como fuerza o conjunto de fuerzas que anteceden a la acción y la provocan, empezar a tratarla como parte de lo que se produce (y transforma) *haciendo*. Si hay algo que revela una etnografía centrada en el *hacer(se)* cotidiano de la política es que las personas se enganchan en política *por y a través de* las propias contingencias y vicisitudes de su hacer¹¹. Por otro lado, en lugar de seguir asociando el orden «motivacional» a los individuos, pasar a considerar seriamente su carácter intrínsecamente relacional, esto es, (co)producido por personas-en-relación-con-personas –y por tanto con y entre organizaciones, movimientos, partidos, gobiernos, mercados, Estados–, en el marco de determinadas condiciones sociales, históricas, estructurales. Si las personas se *enganchan* –y desenganchan– en política es porque se enganchan y desenganchan entre sí¹². Es a la luz del carácter relacional de la motivación que debemos restituir, también, la pregunta por el poder y el funcionamiento del poder –la desigualdad, la asimetría, las relaciones de explotación y opresión– implicados en los procesos sociales que estudiamos, y específicamente en las experiencias (vivas) que etnografiamos (Bourgois, 1995).

¹¹ Ciertamente, estos movimientos, como los enunciados más arriba, requieren de una reflexión y reformulación de nuestras estrategias narrativas y nuestras técnicas de escritura. Se trata de un tema de suma importancia, que amerita un artículo aparte. Me conformo con mencionar, mientras tanto, un recurso, la descripción *lenta*, que he propuesto y experimentado como estrategia para restituir la palabra como acción y lo que se produce *haciendo* (véase Quirós, 2011; también Quirós, 2006).

¹² En mi propio trabajo despliego esta perspectiva procesual y relacional de la motivación desde el concepto de *figuración* de Norbert Elias, con especial atención al lugar del Estado y sus políticas en la constitución de organizaciones, vínculos, rutinas y repertorios de acción política. En un trabajo reciente, María Inés Fernández Álvarez (2011) llama la atención sobre el individualismo metodológico implicado en la pregunta por las «motivaciones», y propone una línea de análisis que encuentro sumamente sugestiva: la de las condiciones de producción del «hacer juntos».

Entiendo que cada uno de estos movimientos nos permitirán complejizar la respuesta que amerita una pregunta que, querámoslo o no, concierne a nuestras investigaciones: ¿por qué la gente hace lo que hace? En general no planteamos nuestros problemas de investigación en esa fórmula, pero ella es, innegablemente, una de las claves de lectura e interpretación, lega y experta, de lo que escribimos. Pienso que si esto ocurre es porque, en alguna medida, siempre estamos proporcionando alguna respuesta a ese interrogante –invocando, presumiendo o imaginando intenciones, motivaciones, razones, disposiciones, condiciones de posibilidad (alguna/a de estas cosas, o todas ellas juntas)–. La apuesta sigue ahí y confío que aceptarla, enmarcando nuestros conceptos, es un camino prolífico para ampliar los horizontes de nuestra comprensión del involucramiento y desinvolucramiento políticos; de las formas sociales en que la política es producida y transformada; para des-empobrecer y refigurar, en suma, un debate político que oprime los *porqués* de los sectores populares en razones y sinrazones miserables o heroicas.

BIBLIOGRAFÍA

- Auyero, J. (2007). *La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Auyero, J., Lapegna, P. y Page, F. (2009). «Patronage Politics and Contentious Collective Action: A Recursive Relationship» (pp. 1-31). En *Latin American Politics and Society*, 51(3).
- Balbi, F. (2012). «La integración dinámica de las perspectivas nativas en la investigación etnográfica» (pp. 485-499). En *Intersecciones en Antropología* 13.
- Boltanski, L. y Thévenot, L. (2006) [1991]. *On justification. Economies of Worth*. Princeton: Princeton University Press.
- Bourgois, P. (2002). «The Violence of Moral Binaries: Response to Leigh Binford» (pp. 221-231). En *Ethnography*, 3(2).
- Bourgois, P. (1995). *In search of respect: selling crack in El Barrio*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Colectivo Situaciones (2011). «Romanticismo» (pp. 299-303). En *Tabula Rasa*, 15.
- Favret-Saada, J. (1990). «Être Affecté» (pp. 3-9). En *Gradhiva: Revue d'Histoire et d'Archives de l'Anthropologie*, 8.
- Fernández Álvarez, M. I. (2011). «Além da racionalidade: o estudo das emoções como práticas políticas» (pp. 41-68). En *Mana. Estudos de Antropologia Social*, 17, N1.
- Ferraudi Curto, C. (2009). «Hoy a las dos, cabildo: etnografía en una organización piquetera». En Grimson, A., Ferraudi Curto, C. y Segura, R. (comps.). *La vida política en los barrios populares de Buenos Aires*. Buenos Aires: Prometeo.
- Ferraudi Curto, C. (2006). «Lucha y papeles en una organización piquetera del sur de Buenos Aires». En Míguez, D. y Semán, P. (comps.). *Entre Santos, Cumbias y Piquetes. Las culturas populares en la Argentina reciente*. Buenos Aires: Biblos.
- Goldman, M. (2006a). *Como funciona a democracia. Uma teoria etnográfica da política*. Río de Janeiro: 7Letras.
- Goldman, M. (2006b) «Alteridade e experiencia: antropologia e teoria etnográfica» (pp. 161-173). En *Etnográfica*, X(1).

- Goldstone, J. (ed.) (2003). *States, Parties and Social Movements*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Goodwin, J. y Jasper, J. (eds.) (2004). *Rethinking social movements. Structure, meaning and emotion*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Goodwin, J., Jasper, J. y Polleta, F. (comps.) (2001). *Passionate Politics. Emotions and Social Movements*. Chicago-Londres: The University of Chicago Press.
- Graeber, D. (2001). *Toward an Anthropological Theory of Value. The False Coin of Our Own Dreams*. New York: Palgrave.
- Grignon, C. y Passeron, J. C. (1991). *Lo culto y lo popular. Miserabilismo y populismo en sociología y en literatura*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Grimson, A. (2012). *Mitomanías argentinas: cómo hablamos de nosotros mismos*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Grimson, A. (2011). «¿Románticos y Realistas? Diálogos sobre conocimiento y política» (pp. 305-315). En *Tabula Rasa*, 15.
- Grimson, A., Cerrutti, M. (2005). «Buenos Aires, neoliberalismo y después. Cambios socioeconómicos y respuestas populares». En Portes, A., Roberts, B. y Grimson, A. (eds.). *Ciudades latinoamericanas. Un análisis comparativo en el umbral del nuevo siglo*. Buenos Aires: Prometeo.
- Guber, R. (2001). *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. Buenos Aires: Norma.
- Gutiérrez, L. y Romero, L. A. (2007). *Sectores populares, cultura y política. Buenos Aires en la entreguerra*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Juris, J. (2008). «Performing politics. Image, embodiment, and affective solidarity during anti-corporate globalization protests» (pp. 61-97). En *Ethnography*, 9(1).
- Karsenti, B. (2009). *Marcel Mauss. El hecho social como totalidad*. Serie Sociedades Contemporáneas. Buenos Aires: Antropofagia.
- Krotz, E. (2011). «Las ciencias sociales frente al triángulo de las Bermudas» (pp. 19-46). En *Revista de El Colegio de San Luis*, 1. Nueva Época, 1.
- Lazar, S. (2008). *El Alto, Rebel City: Self and Citizenship in Andean Bolivia*. Durham: Duke University.

- Malinowski, B. (1935). *Coral gardens and their magic. A study of the methods of tilling the soil and of agricultural rites in the Trobriand Islands*. London: George Allen & Unwin Ltd.
- Manzano, V. (2007). *De La Matanza Obrera a Capital Nacional del Piquete: etnografía de procesos políticos y cotidianos en contextos de transformación social*. Tesis de Doctorado por la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Manzano, V. (2004). «Tradiciones asociativas, políticas estatales y modalidades de acción colectiva: análisis de una organización piquetera» (pp. 153-166). En *Intersecciones en Antropología*, 5.
- Mauss, M. (1971) [1924]. «Relaciones reales y prácticas entre la sociología y la psicología». En: *Sociología y Antropología*. Madrid: Tecnos.
- Mauss, M. (2007) [1925]. *Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*. París: Quadrige/PUF.
- Merklen, D. (2005). *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina 1983-2003)*. Buenos Aires: Gorla.
- Neiburg, F. (1998). *Los intelectuales y la invención del peronismo*. Buenos Aires: Alianza Editorial.
- Ortner, S. (1993). «La teoría antropología desde los años sesenta». En *Cuadernos de Antropología*. México: Universidad de Guadalajara.
- Peirano, M. (2001). *O Dito e o Feito. Ensaio de Antropologia dos Rituais*. Río de Janeiro: Relume Dumará/NuAP.
- Peirano, M. (1995). *A favor da etnografía*. Río de Janeiro: Relume-Dumará.
- Pita, M. V. (2010). *Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la violencia policial*. Buenos Aires: Editores del Puerto/CELS.
- Polleta, F. y Jasper, J. (2001). «Collective Identity and Social Movements» (pp. 283-305). En *Annual Review of Sociology*, 27.
- Quirós, J. (2011a). *El porqué de los que van. Peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires (una antropología de la política vivida)*. Buenos Aires: Antropofagia.
- _____ (2009). «Política e economia na ação coletiva: uma crítica etnográfica às premisas dicotómicas» (pp. 127-153). En *Mana. Estudos de Antropologia Social*, 15(1).

- Quirós, J. (2006). *Cruzando la Sarmiento: los piqueteros en la trama social del sur del Gran Buenos Aires*. Buenos Aires: Antropofagia.
- Semán, P. (2009). «Más allá de la descripción, más acá de los dualismos: efectos cruciales de un recorrido entre países, investigaciones y disciplinas» (pp. 1041-1059). En *Estudios sociológicos*, 27, 81. Septiembre-diciembre.
- Sigaud, L. (2005). «As condições de possibilidade das ocupações de terra» (pp. 255-280). En *Tempo Social*, 17, 1, Junio.
- Sigaud, L., Hernandez, M. y Rosa, M. (2010). *Ocupações e acampamentos: sociogênese das mobilizações por reforma agrária no Brasil*. Río de Janeiro: Garamond.
- Tilly, C. (2005). «Invention, diffusion, and transformation of the Social Movement repertoire» (pp. 287-300). En *European Review of History*, 2, 2.
- Viveiros de Castro, E. (2010). *Metafísicas Caníbales. Líneas de antropología estructural*. Buenos Aires: Katz.
- Vommaro, G. (2009). *Regards croisés sur les rapports des classes populaires au politique en Argentine. Retour sur la question du clientélisme*. Tesis de Doctorado por la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París.
- _____ (2007). «‘Acá no conseguís nada si no estás en política’. Los sectores populares y la participación en espacios barriales de sociabilidad política» (pp. 161-178). En *Anuario de Estudios en Antropología Social CAS-IDES*.
- Vommaro, G. y Quirós, J. (2011). «‘Usted vino por su propia decisión’: repensar el clientelismo en clave etnográfica» (pp. 65-84). En *Desacatos. Revista de Antropología Social*, 36. Mayo-agosto. México: CIESAS.
- Wacquant, L. (2009). «The Body, the Ghetto and the Penal State» (pp. 101-129). En *Qualitative Sociology*, 32.
- _____ (2002a). «Scrutinizing the street. Poverty, morality, and the pitfalls of urban ethnography» (pp. 1468-1532). En *American Journal of Sociology* 107(6).
- _____ (2002b). *Corpo e alma. Notas etnográficas de um aprendiz de boxe*. Río de Janeiro: Relume-Dumará.
- Zenobi, D. (2012-en prensa). «Del ‘dolor’ a los ‘desbordes violentos’. Un análisis etnográfico de las emociones en el movimiento Cromañón». En *Intersecciones en Antropología*. UNICEN.

Interés, identidad, arreglos morales: notas para pensar la participación política popular en Argentina

Gabriel Vommaro

Trascender los dualismos

Luego de más de una década de proliferación de estudios sobre la política y los sectores populares es mucho lo que se ha producido en materia de conocimiento denso de las dinámicas de involucramiento político, de relación con el Estado, de intercambios políticos, de identificaciones con los espacios políticos barriales. Al mismo tiempo, la literatura sobre el tema ha dejado algunos puntos oscuros, que tienen que ver con la movilización de un pensamiento dicotómico que tiende a separar nociones y actores que en el terreno aparecen fuertemente imbricados: interés-identidad/cultura/moral; ciudadanía-clientelismo; punteros-piqueteros; dominación-negociación; militancia-contraprestación.

Este trabajo no pretende realizar un recorrido exhaustivo sobre la importante producción en torno a la política popular¹. Tampoco iden-

¹ Entre los intentos de revisión crítica de la literatura sobre política popular, se destacan aquellos que se ocuparon del modo en que las ciencias sociales estudiaron a los piqueteros. Cf, entre otros, (D'Amico y Pinedo, 2009; Ferraudi Curto, 2011).

tificar todas las corrientes interpretativas en pugna. Se basa en muchas de ellas, recupera sus hallazgos empíricos y sus consecuencias analíticas. A partir de ellos y de nuestro propio trabajo de terreno, se propone trazar algunas líneas conceptuales que consideramos fundamentales para comprender las dinámicas de la política de los sectores populares, y que pueden hacernos salir de los impasses a los que nos llevan las consideraciones dicotomizantes. Trabajamos en tres sentidos: primero, proponemos reintegrar la política popular y los intercambios políticos que tienen lugar en los barrios populares en la trama de relaciones en la que se generan, y que contempla tanto una multiplicidad de actores, como de lógicas y escalas de acción: regulaciones técnicas y morales, políticas y económicas; intervenciones locales y nacionales, territoriales e internacionales que se imbrican con la circulación de bienes de origen público (programas sociales, planes, etcétera), actores (expertos, dirigentes, referentes) e ideas (sobre las buenas formas de la política); segundo, incorporamos la forma en que los actores se presentan –y presentan sus quejas, heroísmos, denuncias, justificaciones, etcétera– ante los observadores externos, incluidos los científicos sociales, como una puerta de acceso a la reflexividad que movilizan en sus relaciones políticas cotidianas, y que les permite evaluar la justeza y la justicia de los intercambios políticos en los que se encuentran involucrados; tercero, a partir de la incorporación de esta actividad reflexiva, intentamos pensar, a través del concepto de cálculo moral/arreglos morales, el modo en que estas evaluaciones están hechas de componentes morales y de componentes de interés, de valoraciones recursivas que tienen que ver con el cuánto y con el cómo de los intercambios. Esta perspectiva permite superar, creemos, los problemas de las concepciones dominantes sobre las relaciones políticas de intercambio en términos de clientelismo.

En las páginas que siguen, en primer lugar, realizamos un breve recorrido histórico que sitúa las condiciones intelectuales de emergencia de las preocupaciones recientes sobre la política popular. En segundo lugar, discutimos algunos de los desafíos del análisis de esta en virtud de la complejidad de las tramas sociales y políticas en las que se inserta, hechas de pluralidad y densidad organizativa, multipertenencias, conflictos, negociaciones y principios de jerarquización. Luego, espe-

cificamos cómo consideramos que opera la reflexividad de los actores en relación a los intercambios políticos, y qué implicancias tiene tomarla en serio en el análisis. Por último, discutimos las concepciones dominantes sobre el clientelismo y proponemos la noción de cálculo moral, o de arreglos morales, para pensar estos fenómenos de un modo más global y complejo, evitando el reduccionismo culturalista tanto como el racionalista.

Una agenda de investigación nacida de la descomposición

Durante la primera mitad de los años noventa, las ciencias sociales argentinas se dedicaron a estudiar la descomposición de la llamada sociedad salarial, la crisis del mundo del trabajo, el aumento de la pobreza, la precariedad, la informalidad y, poco después, el desempleo. Los actores políticos ligados al mundo popular estaban en crisis. El peronismo había realizado las reformas económicas que habían terminado de erosionar esa Argentina industrial, cercana al pleno empleo, de sindicatos fuertes y consumo interno sostenido por las políticas de Estado. La crisis de la «Argentina peronista», por hablar como Halperín Donghi, iniciada en los años de la dictadura militar de 1976, parecía resolverse en los años noventa con la instauración de una sociedad de desempleo y pobreza (Beccaria y López, 1996). Y, para la perplejidad de las ciencias sociales, el peronismo llevaba a cabo esa transformación sin perder las bases de sus apoyos populares. La estabilización de la moneda y de los precios internos parecía ser una de las principales razones de este singular éxito (Palermo y Novaro, 1996). También lo era la capacidad de supervivencia de la identidad peronista: forjada en los años en los que las condiciones de existencia correspondían con ese conjunto de elementos simbólicos, esa identidad resistía a las nuevas condiciones de vida de sus portadores, que veían en la salida (*exit*) más costos en que la permanencia (Sidicaro, 1995). Los sindicatos, en tanto, debilitados en sus bases sociales, retrocedían en sus demandas, abandonaban viejas banderas, y privilegiaban la supervivencia organizativa por sobre las estrate-

gias de confrontación (Murillo, 1997). Mientras la sociología pensaba la crisis y la fragmentación social, la ciencia política se ocupaba de pensar las consecuencias del nuevo orden para la estabilidad del régimen político (Rinesi y Nardacchione, 2007). El hecho de que se redujera el poder de las corporaciones, por un lado, y de que el peronismo fuera capaz de iniciar un proceso de reformas sociales y económicas sin sufrir por ello ni amenazas militares ni grandes amenazas sociales parecía dar cuenta de la buena salud del régimen democrático (Palermo y Novaro, 1996; Levitsky, 2003).

La estabilidad política asociada al plan de estabilización monetaria mostró sin embargo sus primeros signos de debilidad. En diciembre de 1993 se produjo el llamado Santiagueñazo, una protesta masiva en la capital de Santiago del Estero que terminó con la renuncia del gobernador y la intervención federal de la provincia. La reestructuración económica producía sus primeros efectos políticos. La noción de «estallido» aparece entonces para dar cuenta de una reacción tan masiva como sorpresiva; para los observadores del momento, se trata de un malestar ligado a un problema socio-económico, en este caso el atraso en el pago de los salarios de los empleados estatales, de gran importancia numérica en esa provincia. A Santiago del Estero le sigue Jujuy (entre 1993 y 1995), San Juan (julio de 1995), Córdoba (junio de 1995) y Río Negro (setiembre y octubre de 1995) (Farinetti, 1999). Estos estallidos parecen dar la razón a la prédica sociológica progresista, que había basado su oposición al menemismo en la difusión de cifras sobre la «caída» de la sociedad argentina. Los estudios sobre pobreza, informalidad, desempleo, financiados por la oficina de Unicef en Buenos Aires y publicados en una colección de la editorial Losada (por ejemplo, Minujin, 1992), constituyeron un importante esfuerzo intelectual en ese sentido, y proveyeron al análisis socio-político exhaustivas descripciones de la descomposición.

En el país de del empobrecimiento y la desindustrialización también se reactualizaban las fracturas en el mundo sindical, y aparecían actores que se reconocían herederos del sindicalismo combativo de los años sesenta y setenta, al tiempo que traían novedades al mundo de las organizaciones de trabajadores. A fines de 1992, se crea el Congreso de los Trabajadores Argentinos, en 1996 llamado Central

de los Trabajadores Argentinos, y por fin Central de Trabajadores de la Argentina (Armellino, 2005). Pone en marcha un nuevo modelo sindical de autonomía del Estado y de los partidos –es decir, entonces, del peronismo–, de elección directa de las autoridades y de incorporación de trabajadores desocupados, primero, y de organizaciones sociales no estrictamente ligadas al mundo del trabajo formal, luego. La idea de que, para representar mejor a los trabajadores, era necesario integrar a empleados y desempleados, da cuenta de un cambio de orientación en algunos sectores sindicales respecto de los modelos de representación corporativa y de la visión sobre el mundo popular. «La nueva fábrica es el barrio», afirmaba una de sus principales consignas. La CGT, basada en el modelo tradicional siguió siendo, de todos modos, la central mayoritaria, pero el nacimiento de la CTA reconoció la existencia de otros actores relevantes de la politicidad popular. Contra las teorías el boga, los desocupados podían ser un sujeto movilizable.

Por esos años, el Estado transforma también algunas de sus intervenciones sobre los sectores populares. Las políticas de combate contra la pobreza se imponen paulatinamente en la agenda de las políticas sociales. En 1993, se crea la Secretaría de Desarrollo Social, que se transforma en Ministerio en 1999. La focalización, la descentralización y la participación de la sociedad civil son las tres principales líneas que orientan estas políticas dirigidas al mundo popular. Las políticas sociales se ligan al territorio, lo intervienen, lo vuelven un espacio de politización. La militancia popular territorial, que reconoce diferentes orígenes –desde la participación de larga data del catolicismo de base a la reconversión de militantes políticos y sindicales en militantes barriales, pasando por la aparición de nuevos «emprendedores políticos territoriales», provenientes del mundo universitario, que asumen la consigna de transformar al territorio en el nuevo espacio de politización– encuentra en la interacción con el Estado una de sus fuentes de obtención de recursos para alimentar las organizaciones de pertenencia. Los actores de tradición movimientista y nacional-popular se muestran más adaptados y más afines a participar de esta nueva relación política y burocrática. Al mismo tiempo, la politicidad popular asociada a la relación con agencias estatales des-

centralizadas, ONG de expertos y activistas, actualiza el problema de los criterios de justicia en la distribución y atribución de bienes de origen público. Las sucesivas etapas del Plan Trabajar son el emblema de los nuevos programas de transferencia de recursos focalizados. Junto a este, existe una amplia serie de dispositivos de intervención en el mundo popular orientados a «asistir» a los diferentes tipos de poblaciones pobres definidas por las oficinas del Estado argentino y de los organismos multilaterales: niños, mujeres embarazadas, madres solteras, ancianos...

En la segunda mitad de los años noventa, las ciencias sociales argentinas comienzan a pensar las transformaciones de la política popular. Lo hacen, aún, entre la narración de la descomposición y la crisis y la búsqueda de nuevas formas organizativas. Tres trabajos destacan en este panorama. *La plaza vacía*, de Danilo Martuccelli y Maristella Svampa; *Desde abajo*, compilado por Maristella Svampa, y *¿Favores por votos?*, compilado por Javier Auyero². Estos textos son centrales por algunas razones de peso. En primer lugar, parten de la crisis y las mutaciones del peronismo para pensar las nuevas formas de la política popular. Estas mutaciones se relacionan con un mundo popular empobrecido y desalarizado. Por otra parte, demarcan algunas de las principales coordenadas con las que serán pensadas las formas de la política popular años más tarde, incluso por sus propios autores, que devendrán referencias ineludibles en ese campo de estudios³. Para sus autores, el peronismo ya no es una identidad

² A ellos habría que sumar el artículo de Marina Farinetti aparecido en la revista *Trabajo y Sociedad* en 1999, que aporta una de las primeras sistematizaciones acerca de las transformaciones de la política popular. Farinetti inicia algunas pistas de investigación que luego serán retomadas por los trabajos iniciados en torno a la crisis de 2001: las transformaciones y la crisis del movimiento obrero no significan la desaparición de la política territorial, sino su mutación en formas de política territorial y de movilización social para cuya comprensión las que las ciencias sociales argentinas no contaban aún con las herramientas adecuadas. Para pensar los estallidos, la autora propone recuperar las herramientas de los estudios de la acción colectiva, por un lado, y de la historiografía del surgimiento de la clase obrera, por el otro, en particular en relación a un concepto que se volverá central en muchos análisis posteriores de la politicidad popular: el de economía moral, de E. P. Thompson. cf. (Farinetti, 1999).

³ Para un análisis detallado del trabajo de Auyero, remitimos a nuestro (Vommaro, 2009).

herética, sino una performance pública y un dispositivo reticular de distribución de bienes. El concepto de clientelismo es el que explica mejor las relaciones de ese movimiento con el mundo popular: «el clientelismo afectivo, expresión de una crisis, es una manera relativamente estable de definición del vínculo político ‘desde abajo’ en el posperonismo», afirman Martuccelli y Svampa en *La plaza vacía* (1997: 393). Este mundo popular se encuentra atravesado por un proceso de «desertificación organizativa», afirma Auyero en *¿Favores por votos?* en el que sólo parecen existir estas redes de resolución de problemas que tienden a dar sobriedad a una identidad desgastada. Sin embargo, en *Desde abajo*, algunas indagaciones rescatan nuevas formas de productividad de la política popular, en especial en torno a la organización de asentamientos como espacios producidos por la acción colectiva y no como meros reflejos de la pobreza o de la descomposición. En el artículo de Denis Merklen, en efecto, se trabaja sobre la capacidad organizativa de los sectores populares para «cazar» recursos en esos territorios. Svampa, en tanto, ensaya explicaciones sobre la crisis de la identidad sindical que la ligan a procesos de más largo alcance: la crisis de un «modelo identitario» «esencialista», y «el primado del individuo, en la cultura del yo, y en los consumos culturales» (2000: 154). La autora rescata el hecho de que «las nuevas formas de cultura urbana» no dejan de ser «un lugar de producción de nuevos conflictos simbólicos y estrategias de distinción entre las diferentes clases sociales» (2000: 153).

La aparición de las primeras movilizaciones piqueteras en los arrabales de Buenos Aires, a fines de los años noventa y comienzos de los dos mil, atrajeron entonces la atención de los investigadores sociales. Las movilizaciones de diciembre de 2001 y el ciclo político y organizativo abierto en torno a aquellos acontecimientos despertó el entusiasmo y el interés de nueva parte de las energías investigativas. Si las cuentas parecían saldadas con el peronismo, se trataba de indagar lo nuevo, su productividad organizativa e identitaria, su potencialidad emancipadora. Las dicotomías entre esa política de la descomposición y de una identidad popular degradada y una politicidad naciente abundaron en los análisis y, creemos, dificultaron la comprensión de algunas de las dimensiones más ricas de la política popular.

Los desafíos analíticos de la politicidad popular

La crisis de la sociabilidad propia del mundo industrial y salarial y la importancia creciente de la política en los barrios populares impulsaron toda una serie de estudios empíricos que renovaron el panorama de la investigación en el país. Dos fenómenos endógenos coinciden con esta reorientación de las energías investigativas, de la pobreza, la dominación política y la exclusión, a la organización popular, la acción colectiva y los movimientos sociales. El primero, el giro etnográfico de las ciencias sociales argentinas, en especial de la sociología, lo que trajo aparejada la multiplicación de terrenos y de preguntas asociadas a la vida de los sectores populares, siempre más abiertos y habituados a la mirada externa de periodistas, expertos, emprendedores políticos y, desde luego, investigadores... El segundo, la proliferación de posgrados y fuentes de financiamiento que dio impulso y materialidad a esta explosión etnográfica⁴. A la vez, esta diversificación se combinaba bien con la existencia de una pluralidad de organizaciones sociales, políticas, eclesiales, etcétera que, en algunos casos, se hicieron visibles luego del giro de la atención de las ciencias sociales hacia el mundo popular y su politicidad y, en otros casos, emergieron precisamente en ese contexto, de intensidad en la movilización y de oportunidades políticas para la obtención de recursos de parte del Estado que nutrieran a los nuevos espacios políticos barriales.

En algunos casos, esta diversificación tendía a ser vista como el renacer de una productividad política que se había dado por muerta, o por neutralizada por las redes de clientela del peronismo. En ella, los emprendedores políticos territoriales que competían con las redes del peronismo eran vistos como parte de una lucha de lo «nuevo» con lo «viejo». Incluso, en uno de los trabajos fundadores de los nuevos estudios de la productividad política popular, *Entre la ruta y el ba-*

⁴ Excede los límites de este trabajo la indagación sobre la dinámica interna de las ciencias sociales argentinas en los años dos mil, por lo que no podemos resolver en pocas líneas la compleja interacción entre condiciones institucionales y orientaciones dominantes en el campo académico. Solo queremos señalar la coexistencia de estos dos procesos, así como su mutua influencia.

rrio, de Svampa y Pereyra, se hablaba de una «lucha cuerpo a cuerpo» entre punteros y piqueteros (2003: p. 91). La cercanía intelectual y las simpatías políticas de algunos analistas, llevaron quizá a trazar demasiado rápidamente una frontera entre estos dos tipos de actores.

Esta primera dicotomía expresa las dificultades para pensar tres tipos de cuestiones cruciales para comprender la política territorial, que fueron luego tematizadas por otros trabajos. En primer lugar, las continuidades biográficas, la proximidad social y política y hasta la superposición organizativa entre punteros y piqueteros. Estas relaciones, mucho más estrechas de lo que algunos analistas hubiesen esperado, iban desde la importancia de la vieja militancia peronista basista –que había pasado en muchos casos por la política barrial del justicialismo– en la creación de nuevos movimientos, a la reconversión de punteros –desplazados en internas locales– en animadores de nuevas organizaciones que los cobijaban y les ofrecían oportunidades de crecimiento político a cambio de la movilización de su saber hacer político-territorial. Los análisis centrados en las divisiones ideológicas antes que en la trama de relaciones y de biografías individuales y organizativas en la que se insertaron los nuevos movimientos territoriales, así como la política territorial de los sectores populares en su conjunto, llevaron a sobreestimar diferencias tajantes vistas «desde arriba» por sobre los entrelazamientos, las interrelaciones y las superposiciones que existían si uno miraba el mismo fenómeno «desde abajo». Si en ciertos casos existían conflictos intensos entre dirigentes piqueteros y dirigentes partidarios, fruto de la percepción de amenaza que sentían estos últimos con el crecimiento de los primeros, en otros casos hubo formas de articulación, o bien de combinaciones entre cooperación y competencia⁵.

La segunda cuestión central es la multiplicidad organizativa (Grimson et al, 2003; Vommaro, 2007), que permitía pensar la existencia de diversas organizaciones en el mismo territorio, y por tanto la competencia política como un rasgo fundamental de la política barrial. Esta va-

⁵ Algunos trabajos mostraron, incluso, la imbricación entre el mundo evangélico y la política partidaria territorial. cf. (Semán, 2006).

riedad de organizaciones en el territorio, de tipo social, eclesial o político-partidario, daba cuenta de la complejidad de la trama organizativa de la política popular, de la superposición de lógicas y de capas históricas, así como de la existencia de espacios sociales de conflicto y competencia que combinaban lealtades locales y alianzas o conflictos municipales, provinciales o nacionales. La multiplicidad organizativa difería, además, de la imagen de la «desertificación organizativa» advertida por Auyero en sus trabajos de terreno realizados en los años noventa, la cual era ubicada, en el esquema explicativo del autor en el lugar del sustrato fundamental del énfasis en la dominación clientelar, consecuencia del monopolio político.

Por último, esta multiplicidad organizativa, así como el conjunto de relaciones que esta supone, permite insertar la participación popular en la trama social y política territorial que incluye relaciones de competencia, multipertenencia, etcétera, no solo a nivel de los dirigentes de las organizaciones, sino también de los militantes, y hasta de los participantes asiduos de esos espacios menos comprometidos con la *illusio* de la organización. Nuevamente, partir del estudio de las prácticas y evaluaciones políticas y morales de los miembros de las organizaciones y no solamente de sus líderes, llevaba a repensar ideas demasiado rígidas, y hasta sustancialistas, de la membresía, como es, muchas veces la noción de identidad (D'Amico y Pinedo, 2009). Ya en los años noventa, como vimos, los trabajos de Svampa a propósito de los modos de implicancia de los jóvenes con el peronismo llevaban a cuestionar visiones esencialistas de la identidad. Muchas veces, esta perspectiva fue desechada a la hora de pensar en los nuevos movimientos territoriales. Como si, a una ideología juzgada como apropiada por los científicos sociales, le seguiría un involucramiento más pleno y permanente. Al contrario, diversos trabajos etnográficos mostraron que la participación en espacios territoriales de sociabilidad política debía ser pensada a partir del verbo «estar», antes que del verbo «ser» (Quirós, 2005): «estoy con los piqueteros», o inclusive «voy con los piqueteros» (Ferraudi Curto, 2007; Quirós, 2011) permitía comprender mejor ese involucramiento intermitente, atravesado por otro tipo de fidelidades, y cuya restitución la noción de identidad tendía a obturar demasiado rápido.

Como corolario, puede decirse que, en ese contexto, una mirada atenta de la multiplicidad organizativa y sus implicancias habilitaba volver sobre un hecho fundamental, muchas veces pasado por alto por los estudios sobre política popular: que el conflicto, la competencia, el trabajo político de construcción de una organización, el mantenimiento en el tiempo de las lealtades barriales, era una realización activa y esforzada, un *trabajo* de los emprendedores políticos territoriales, por un lado, y una relación social recursiva y en tensión entre referentes y miembros, por otro lado, y no la consecuencia lógica del empobrecimiento, o de un «despertar» político que se veía como generalizado luego de los acontecimientos de diciembre de 2001. La noción de «referente», que aparecía en algunos trabajos de terreno como un modo habitual de llamar a los dirigentes territoriales⁶ (Vommar, 2007), se volvía entonces fructífera para pensar el modo en que los dirigentes barriales que lograban construir organización, entablar relaciones de confianza, lealtad, cooperación con vecinos y con militantes y dirigentes exteriores al barrio, devenían de ese modo puntos de identificación, tanto para «pedir cosas», como para denunciar, quejarse, acompañar, militar, etcétera. El hecho de que la vida política y organizativa pasase en gran medida en las casas de estos dirigentes volvía además estos espacios marcas del territorio, puntos de «referencia» en diferentes situaciones.

Diversos trabajos (Colabella, 2012) han mostrado la importancia que tuvo para la política territorial una novedad histórica fundamental de ese período de crisis de 2001 y 2002, cuando el Estado necesitaba reconstruir sus bases mínimas de funcionamiento, de legitimidad y de orden. Se trata de la implementación de políticas sociales de alcance masivo, por un lado, y el reconocimiento –conflictivo, trabajoso y variable según el distrito, por cierto– de las organizaciones sociales territoriales como interlocutoras del Estado, gestoras de recursos públicos y agentes de esas políticas en el territorio, por otro

⁶ Algunos casos, la palabra referente servía también para llamar a los dirigentes con los que se mantenían relaciones políticas por fuera del territorio: «los referentes de la organización», por ejemplo. La categoría asume, así, un sentido posicional y contextual, que debe ser indicado en relación a las situaciones en las que es utilizada.

lado. Existían antecedentes de ambas cuestiones: como ya señalamos, el Plan Trabajar, en sus sucesivas etapas, implementado desde 1996, había comenzado a alimentar la sociabilidad política popular – ya incluía condicionamientos ligados a una «contraprestación» en trabajo comunitario o barrial– y a partir de 2000 se convirtió en objeto de demanda de algunos movimientos sociales territoriales; el gobierno de la Alianza, precisamente ese año, había ampliado la lista de actores territoriales a quienes se admitía como gestores de estas políticas de transferencia condicionada (Lodola, 2005). Pero el Programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, que en poco tiempo llegó a tener casi dos millones de beneficiarios, así como otros programas de ayuda alimentaria, sanitaria, comunitaria, etc. que lo complementaron, representó una intensificación de la llegada de recursos a los barrios populares a través de las organizaciones sociales, políticas y eclesiales. Estos recursos llegaban cargados de requisitos técnicos que guiaban su atribución y su implementación: con la acumulación de saber en la materia al menos desde los años ochenta (Vommaro, 2012a), tanto en las agencias estatales nacionales como en las oficinas de los organismos multilaterales que financiaron la mayor parte de estas políticas, los criterios de distribución de los planes –quiénes tenían «derecho» a ellos–, así como las tareas necesarias para mantenerse como beneficiario –las «contraprestaciones»– eran ya asunto de detalladas definiciones expertas. Estas regulaciones se sumaban a las que provenían de las relaciones políticas y sociales territoriales, en las que, como vimos, la competencia y la negociación no estaban ausentes. Las organizaciones territoriales establecieron sus tareas cotidianas de asistencia social –merenderos, huertas, comedores, etcétera–, así como sus actividades proselitistas, en base a ese trabajo regulado por el derecho legal de los programas sociales y por el derecho moral y político de las negociaciones cara a cara. La articulación entre participación política y contraprestación abrió la puerta para múltiples indagaciones (Manzano, 2008). Una parte de los estudios, más vinculados al mundo de las políticas sociales y de las ciencias políticas, se preocupó por evaluar la eficacia de las políticas sociales, los modos de distribución de los recursos por regiones, grupos sociales, etc. (Lodola, 2005; Golbert, 2004). En tanto, otros trabajos co-

menzaron a indagar las lógicas de los intercambios y de las actividades mediadas por bienes de origen público.

La relación entre contraprestación y participación política pudo ser aprehendida a partir de categorías utilizadas por los propios actores, como las de trabajo político y trabajo social. En efecto, la noción de trabajo se ha mostrado productiva para pensar la participación (Quirós, 2008; Vommaro, 2012b) en virtud de que permite dar cuenta de una actividad regulada por tiempos de actividades realizadas colectivamente en merenderos, huertas, comedores, actividades que producen bienes – tanto políticos y sociales como materiales– y que ayudan a reproducir la organización y la capacidad de movilización de los referentes territoriales: en tanto se realizan en la mayor parte de los casos en las casas de estos emprendedores políticos, reúnen a los vecinos «asistidos» –quienes van a comer, a merendar, a tomar clases de apoyo escolar– y a los vecinos movilizados, en muchos caso categorías asumidas por las mismas personas. Cuando los actores distinguen el trabajo político del trabajo social, asocian el primero más claramente con las actividades de proselitismo, movilización electora, participación en actos, etcétera y el otro con las tareas de asistencia.

Se trabaja porque se produce, pero también porque ello asegura la obtención de ingresos para la vida de las familias. La contraprestación es, en este sentido, un trabajo regulado por reglas que en muchos casos se asemejan a las de los trabajos más formales, y que ordenan los pedidos de licencias, de suplencias, de vacaciones... De este modo, se establecen regulaciones del compromiso que tienden a fijar obligaciones con la tarea, y no solamente con el referente, y que organizan el tiempo de la vida cotidiana de las personas. Se trabaja, también, porque como advertimos en algunas observaciones el hecho de «no quedarse quieto» aparece como un valor moral positivo (Vommaro, 2007), que distingue a los trabajadores de los «vagos», los «aprovechadores», etc. Al mismo tiempo, ese trabajo es político y social, porque los bienes y servicios producidos se relacionan con la existencia de una organización, de un espacio de sociabilidad política que acumula un capital colectivo, el capital territorial (Ortiz de Rosas, 2012) que supone tanto el conocimiento del espacio y de sus habitantes, como la capacidad de movilización de estos últimos. En

las agrupaciones organizadas de modo más verticalista, ese capital está centralizado en la figura del referente, que actúa como mediador entre el barrio y el centro político, las oficinas estatales, etcétera.

Con la noción de trabajo, así, volvemos a identificar formas de regulación, de negociación, de establecimiento de obligaciones y contraprestaciones que distan de la pura arbitrariedad, de la pura dominación personal de los intercambios asimétricos, lo que no impide que se establezcan sobre la base de relaciones jerárquicas y desiguales. El trabajo político, es, por fin, un modo de entender la política y lo político asociado a las condiciones en que se ha desarrollado la política popular en las últimas décadas: a un modo de relación con el Estado, con lo político y con las actividades para la reproducción de las familias.

La mirada del analista, la mirada de los actores

Las transformaciones del tratamiento estatal de los sectores populares, así como de los modos de desarrollo de la política popular, se vieron acompañadas de un desplazamiento de la mirada hacia este mundo, y de la aparición de un mayor número de observadores preocupados por las buenas formas de «la política de los pobres». Las ciencias sociales argentinas habían forjado en torno a la transición democrática una mirada de esta cuestión en clave de ciudadanía politicista, es decir anclada en las instituciones y las reglas formales, lo que no favorecía un tratamiento complejo de los nuevos modos de politicidad popular⁷. A esta mirada, se le agregaba el énfasis en la descomposición al que ya aludimos al inicio de este trabajo, para configurar una grilla de lectura sobre los sectores populares como cuasi ciudadanos, quienes contaban con los derechos que les asegura-

⁷ Ya Guillermo O'Donnell había llamado la atención sobre la conveniencia de estudiar, junto a las instituciones formales, las prácticas e instituciones informales, que en América latina en general, y en Argentina en particular, tenían gran vigencia y productividad (1996). Aunque el autor no dejaba de lamentar esta realidad, su intervención arrojaba luz sobre su existencia, y alentaba su investigación.

ba este status, sin duda, pero al no tener las necesidades materiales satisfechas no podían «saltar» de la vida social a la esfera política. A lo sumo, quedaban presos de relaciones de clientela. Una crítica a este planteo ha sido desarrollada por Denis Merklen en su trabajo sobre los «pobres ciudadanos» (2005). En efecto, con ese juego de palabras Merklen quería señalar que los sectores populares eran, al mismo tiempo, las dos cosas, estratos sociales inferiores, y actores políticos, y que había que mirar la inscripción territorial de las franjas desalarizadas para comprender sus modos de politicidad. El autor enfatizaba este término, politicidad, justamente para pensarlo en el mismo rango que la sociabilidad: los sectores populares no eran primero actores sociales que luego, tras un aprendizaje que los hacía trascender el mundo de «la pobreza» y el clientelismo, podían devenir ciudadanos, sino que eran actores políticos desde esa misma inscripción social. Las orientaciones estatales en materia de política social impulsaban a los pobres a la organización. La organización les daba un estatuto político que debía ser aprehendido con otras categorías que el pensamiento transicional del ciudadano elector, desanclado del mundo social, no era capaz de desarrollar. La nueva politicidad requería de nuevos conceptos para pensarla, alejados de la dicotomía entre ciudadanía y pobreza/clientelismo⁸.

Sin embargo, buena parte de las ciencias sociales volvieron a movilizar este concepto clásico acuñado por la historia social, primero, luego por la antropología del Mediterráneo y por fin por la sociología y la ciencia política: clientelismo. Como veremos, fue el modo en que se pensaría la nueva politicidad en amplios circuitos del campo intelectual. Esta renovación de los estudios sobre el clientelismo se articuló con un conjunto de dispositivos de control de la política popular, asociados a la entrada de nuevos grupos expertos provenientes, en algunos casos, de la lucha contra la corrupción, en la organización de programas de «protección de los planes sociales», como se los ha llamado en México, o de «lucha contra el clientelismo», como se han

⁸ Que poblaba la ciencia política, y cuya formulación duradera para América latina realizó J. Fox. cf. (Fox, 1994).

presentado en el caso argentino (Vommaro, 2011), en los que se trataba de construir a los sectores populares territorializados y desalarizados como «víctimas» de las redes de dominación político-partidarias (Combes y Vommaro, 2012). De la mano del trabajo experto de formateo y enmarcamiento (*framing*), por hablar como Erving Goffman, de los intercambios políticos en un lenguaje de expertise jurídico-política compatible con las preocupaciones acerca de la «calidad de la democracia», dominantes tanto en la ciencia política como en el mundo de las fundaciones y organismos multilaterales como el PNUD⁹, se pudo nutrir de datos surgidos de estudios cuantitativos –muchas veces de mediana factura técnica– a las denuncias sobre manipulación de planes sociales que crecieron en la prensa argentina durante la primera mitad de los años dos mil (Vommaro, 2011).

El enmarcamiento en términos de victimización de los pobres y de la politicidad popular movilizaba visiones miserabilistas de este mundo (Grignon y Passeron, 1989), que hacían de los sectores populares no agentes, o marionetas de la voluntad de los patrones¹⁰. Clientelismo y victimización, por un lado, y clientelismo y desviación, por el otro, entonces, formaron parte de la grilla dominante de lectura de la política popular. En ese contexto, una cuestión fundamental tendió a ser marginada del análisis: la reflexividad de los actores.

Es en enfoques alternativos de la política popular, en especial de tipo etnográfico, que emergen dos cuestiones fundamentales ligadas a la capacidad de los actores de dar cuenta de sus prácticas, y de las relaciones en las que se encuentran comprometidos, incluso en posi-

⁹ Cf. al respecto el libro *Candados y contrapesos. La protección de los programas, políticas y derechos sociales en México y América latina*, publicado por el PNUD con apoyo de universidades latinoamericanas (Guadalajara, 2009). El texto, que reúne artículos de politólogos prestigiosos como Guillermo O'Donnell y Susan Stokes, entre otros, así como de expertos en transparencia de diferentes países, es una muestra de esta convergencia entre diferentes preocupaciones sobre la democracia y el mundo popular. Se trata de las actas de un seminario internacional realizado en abril de 2007 en México, y organizado por el PNUD. Bajo el título «Candados y derechos: protección de programas sociales y construcción de ciudadanía».

¹⁰ En la tapa de un libro experto sobre la cuestión, *Fighting clientelism*, pueden verse unas marionetas accionadas por manos cuyos dueños anónimos se anuncian más grandes y más poderosos. cf. (Carrillo y Gruenberg, 2007).

ciones subordinadas: por un lado, el modo en que, habituados a las miradas de observadores externos interesados en la política popular, escenifican sus relaciones sociales –querellas locales, virtudes, denuncias, justificaciones, etc.– ante estos observadores, incluidos los investigadores en ciencias sociales. Por otro lado, el hecho de que las evaluaciones morales movilizadas ante actores externos no son diferentes de –y en este sentido permiten aprehender– el modo en que estos actores populares evalúan, en sus interacciones, las relaciones con sus pares, con los miembros de las organizaciones, los referentes, etcétera y en especial el cómo y la magnitud de los intercambios regulares, recursivos y cotidianos que incluyen la inversión de una cierta cuota de trabajo político, la obtención de un plan o de otro tipo de recurso de origen público, el acceso rápido a una dependencia pública, el «acompañamiento» (Quirós, 2011), la movilización, etcétera. El establecimiento de lo justo y de lo injusto, de lo legítimo y lo ilegítimo, no es entonces propiedad exclusiva del observador externo, sino también una actividad cotidiana de los actores del mundo popular, que organiza sus relaciones y sus espacios de sociabilidad.

Así, el observador de las ciencias sociales no sólo debe controlar sus propias prenociones, sus modos de involucramiento con la política popular y las maneras en que éstos pueden operar en su relación con las formas que adopta ésta en las interacciones cotidianas, sino que también debe tomar en cuenta esta dimensión reflexiva fundamental de la sociabilidad política que es una competencia movilizada por los actores –aunque no siempre verbalizada– que abre la puerta al mundo de las negociaciones y los conflictos morales que atraviesan y ordenan las relaciones políticas. Los pobres, en definitiva, son ciudadanos y también actores sociales competentes.

Del clientelismo al cálculo y los arreglos morales

La importancia que asignamos a tomar en cuenta la reflexividad de los actores en la comprensión de sus relaciones políticas nos lleva al último punto de nuestro recorrido: el estudio de las regulaciones de los intercambios y las relaciones políticas territoriales. El clientelismo, como

relación asimétrica de intercambio de bienes por algún tipo de lealtad ha sido, como vimos, el modo dominante de entender la lógica de los intercambios políticos en los sectores populares. Así, cuando las ciencias sociales argentinas y los estudios políticos sobre el país pensaron las relaciones políticas en las que circulan bienes de origen público, lo hicieron de dos modos fundamentales. En primer lugar, desde fines de los años noventa, los trabajos sociológicos que recuperaban los clásicos aportes de la antropología social se ocuparon de la dimensión simbólica y cultural del clientelismo (Martuccelli y Svampa, 1997; Auyero, 1997). Sin duda, los trabajos de Auyero fueron centrales en la elaboración de este tipo de explicaciones que podemos llamar «culturalistas» del clientelismo. No se trata de un culturalismo clásico, como lo habían sido las explicaciones acerca del subdesarrollo de las teorías de la modernización y el funcionalismo, sino de un tipo de explicación que, combinando antropología social y sociología estructural de raíz bourdiana, piensa las elaboraciones culturales como una máscara de las relaciones de dominación. A diferencia de la concepción clásica del marxismo acerca de la ideología, no ve a la cultura como un mero reflejo, sino que la trata como una fabricación activa de los sujetos que forman parte de las relaciones políticas, pero ese producto es finalmente un artefacto en cuyo despliegue se encubren las desigualdades. Así, contra las visiones puramente racionalistas y espasmódicas del clientelismo, esta sociología tiene el mérito de restituir la importancia de las modalidades de la acción política (las *performances*), su temporalidad, su recursividad, el peso las tradiciones, de los símbolos, de las evaluaciones de los actores. No obstante, estos elementos tienden a aparecer bajo la forma del inconsciente, como opera la categoría de habitus. La cultura como máscara, entonces.

El segundo modo de pensar las relaciones de clientela, forjado por la ciencia política racionalista y cuantitativista dominante desde las últimas décadas, en especial en la academia anglosajona, olvida la dimensión cultural de las relaciones de intercambio político, y se centra, en cambio, en el interés. Se trata de concebir el clientelismo como una transacción gobernada por los objetivos maximizadores de los actores: los patrones, buscan obtener apoyos políticos, y para ello movilizan los bienes a los que tienen acceso en virtud de sus posiciones

institucionales o informales; los clientes, quieren bienes para su supervivencia, y a cambio ofrecen su apoyo político (Kitschelt y Wilkinson, 2007). En el mercado político, el encuentro entre la oferta y la demanda se da en las coyunturas favorables: los momentos electorales. En sus versiones más radicales, así, esta visión instrumentalista reduce el clientelismo a una pura transacción de bienes por votos (Stokes, 2005). El dominio de estudio de la compra de votos (*vote buying*), que ha sido ampliamente criticado por sus simplificaciones (Combes y Vommaro, 2012), y hasta por ver transacción en donde puede haber movilización política (Nichter, 2008), se ha mostrado no obstante muy poderoso como herramienta de intervención experta, al brindar una definición del clientelismo muy fácilmente operacionalizable y utilizable en los estudios de control de la «calidad de la democracia» y de «protección de programas sociales» a los que ya aludimos. Esta perspectiva, que tiene el mérito de restituir la dimensión de la negociación y el conflicto en las relaciones de clientela, reduce estas últimas a una pura negociación transactiva, sin tiempo, sin tradiciones, sin evaluaciones de los actores más allá del puro cálculo.

Ahora bien, en ámbitos de competencia y densidad organizativa, ¿en qué consiste el poder de coerción del patrón? S. Stokes debió buscar un modelo de «monitoreo perverso» (2005) que le permitía decir que los clientes cumplían la contraprestación en el cuarto oscuro por miedo a ser controlados por los patrones. Ese control es difícilmente hallable en la práctica, al menos como caso representativo del mundo popular. Para la sociología culturalista, la identidad podría ser una respuesta, pero de este modo se obtura la posibilidad de pensar el conflicto, la negociación, las evaluaciones morales y la reflexividad de los actores en sus relaciones políticas.

Si, en cambio, situamos las relaciones políticas en la trama social compleja y conflictiva de la densidad organizativa barrial, si pensamos las identidades de manera desustancializada, como momentos de identificación, de estar con, que requieren negociaciones y actualizaciones recursivas y recurrentes, y si recuperamos una visión de los actores que dé cuenta de sus competencias, la tensión entre asimetría y negociación, entre cultura y estrategia puede ser diluida en el estudio de los intercambios políticos en una perspecti-

va conceptual que lidia, al mismo tiempo, con tres cuestiones: primero, la importancia de las tensiones y los cálculos entre lo que cada una de las partes entrega y lo que recibe, en las relaciones políticas, como elemento constitutivo de las relaciones políticas desiguales; segundo, las magnitudes del intercambio no solo refieren a lo que se da, sino también al cómo de esa entrega, que es una entrega de bienes y de servicios, de tiempo y de relaciones, y por tanto compromete también a la persona, involucra su personalidad pública en la trama social barrial; tercero, las magnitudes del qué y del cómo no refieren solo a un cálculo de costos y beneficios, sino también a evaluaciones morales que realizan los actores respecto de lo que merecen recibir y lo que deben entregar, y que no lleva siempre a establecer magnitudes objetivas equivalentes, sino relaciones morales de equivalencia. Estas relaciones son, también, relaciones de poder, y como han mostrado los estudios clásicos sobre el don, desde Marcel Mauss, la deuda, el desbalance entre las partes en el intercambio, tiende a reproducir jerarquías sociales a favor del acreedor. Estas deudas, sin embargo, solo son efectivizables en el seno de la trama social en la que fueron contraídas.

En un trabajo anterior, realizado junto a Julieta Quirós (Vommaro y Quirós, 2011), pensamos esta articulación entre negociación y evaluaciones morales a partir de una herramienta conceptual que llamamos «cálculo moral»: el juego de términos permitía pensar la negociación y la equivalencia como inseparables de la justicia y la justeza. La dimensión moral, en este sentido, lejos de ser un ingrediente que se sobreimprime sobre una materialidad del intercambio, contribuye desde el inicio a hacer inteligible la situación en la que éste tiene lugar, la definición de las partes y de los bienes y servicios que circulan. Así como Harold Garfinkel proponía una solución cognitiva al problema del orden de Hobbes planteado en términos normativos por T. Parsons, la perspectiva del cálculo moral hace de las tensiones morales un punto de entrada a las relaciones habitualmente llamadas clientelistas que evita las dicotomías, y que inserta la totalidad de las relaciones sociales en un conjunto de principios generadores de prácticas y de evaluaciones movilizadas por los participantes. Si la noción de cálculo moral puede llevar a malos entendidos, porque la idea

del cálculo remite, después de todo, a una operación individual, por un lado, y ligada a una racionalidad formal, por el otro, proponemos aquí pensar el concepto en términos de «arreglos morales»: formas de concertar distribuciones de bienes, de prestigios, de posiciones que pueden o no estar formalizadas, pero que siempre suponen la negociación entre magnitudes morales –merecidas, trabajadas, ganadas, acaparadas– de los objetos del intercambio.

Los arreglos morales, en definitiva, nos llevan a mirar el mundo popular a partir de la unidad de la experiencia, y no de las separaciones. Reinsertar la política popular en esa unidad, y en la trama social que subyace, requiere de herramientas analíticas con capacidad para dar cuenta de la complejidad que abre esta perspectiva. Pensar en radical simetría con los actores estudiados nos habilita a avanzar en esa dirección.

BIBLIOGRAFÍA

- Armellino, M. (2005). «Resistencia sin integración: protesta, propuesta y movimiento en la acción colectiva sindical de los '90. El caso de la CTA» (pp. 275-311). En Schuster, F. y otros, *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo.
- Auyero, J. (1996). «La doble vida del clientelismo político». En *Sociedad*, 8.
- (2001). *La política de los pobres. Las prácticas del clientelismo del Peronismo*. Buenos Aires: Manantial.
- (2002). «Los cambios en el repertorio de la protesta social en la Argentina» (pp. 187-210). En *Desarrollo Económico*, 42, 166.
- (2004). «Política, dominación y desigualdad en la Argentina contemporánea. Un ensayo etnográfico» (pp. 133-145). En *Nueva Sociedad*, 193.
- Auyero, J. (comp.) (1997). *¿Favores por votos? Estudios sobre clientelismo político contemporáneo*. Buenos Aires: Losada.
- Beccaria, L. y López, N. (comps.) (1996). *Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina*. Buenos Aires: Unicef/Losada.
- Carrillo, F. y Christian Gruenberg (2007). *Fighting clientelism: transparency and participation in targeted programs*. Buenos Aires, BID-CIPPEC.
- Colabella, L. (2012). «Asistentes sociales y peronistas vs. Dirigentes y referentes piqueteros en la matanza: una reflexión sobre grados de autonomía y dependencia con el estado». En *Publicar en Antropología y Ciencias Sociales*, 11.
- Combes, H. y Vommaro, G. (2012). «Relations clientélares ou politisation: pour dépasser certaines limites de l'étude du clientélisme» (pp. 17-35). En *Cahiers des Amériques latines*, 69.
- Delamata, G. (2004). *Los barrios desbordados. Las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires*. Buenos Aires: Eudeba-Libros del Rojas.

- D'Amico, M. V. y Pinedo, J. (2009). «Debates y derivas en investigaciones sobre 'los piqueteros'. Una bitácora de lectura» (pp. 155-180). En *Sociohistórica*, 25.
- Farinetti, M. (1999). «¿Qué queda del 'movimiento obrero'? Las formas del reclamo laboral en la nueva democracia argentina». En *Trabajo y Sociedad*, 1, I.
- Ferraudi Curto, M. C. (2007). «Cuando vamos de piqueteros. Una aproximación crítica al concepto de identidad». En Rubinich, L. (ed.), *La sociología ahora*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- ____ (2011). «(Des)encuentros en torno a los sentidos de la política: devolución de la tesis en una organización piquetera» (pp. 111-134). En *Nueva Antropología*, 24, 75.
- Fox, J. (1994). «The Difficult Transition from Clientelism to Citizenship: Lessons from Mexico» (pp. 151-184). En *World Politics*, 46, 2.
- Golbert, L. (2004). *¿Derecho a la inclusión o paz social? Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados*. Santiago del Chile: CEPAL, Serie Políticas Sociales.
- Grignon C. y Passeron, J. C. (1989). *Lo culto y lo popular: miserabilismo y populismo en la sociología y en la literatura*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Grimson, A. et al. (2003). *La Vida Organizacional en Zonas Populares de Buenos Aires. Informe Etnográfico*. Center for the Study of Urbanization and Internal Migration in Developing Countries, Universidad de Austin, Texas.
- Kitschelt, H. y Steven I. W. (ed.) (2007). *Patrons, Clients and Policies. Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Levitsky, S. (2003). *Transforming Labor-Based Parties in Latin America. Argentine Peronism in Comparative Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lodola, G. (2005). «Protesta popular y redes clientelares en la Argentina: el reparto federal del plan trabajar (1996-2001)» (pp. 515-536). En *Desarrollo Económico*, 44, 176.
- Manzano, V. (2008). «Etnografía de la gestión colectiva de políticas estatales en organizaciones de desocupados de La Matanza-Gran Buenos Aires» (pp. 77-92). En *Runa*, 28.

- Martuccelli, Danilo y Maristella Svampa (1997). *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*. Buenos Aires: Losada.
- Masson, L. (2002). «La villa como aldea» pp. 71-78, *Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología*, XXVII.
- Minujin, A. (comp.) (1992). *Cuesta Abajo. Los nuevos pobres: efectos de la crisis en la sociedad argentina*. Buenos Aires UNICEF/Losada.
- Merklen, D. (2000). «Vivir en los márgenes: la lógica del cazador. Notas sobre sociabilidad y cultura en los asentamientos del Gran Buenos Aires hacia fines de los 90» (pp. 81-119). En Maristella Svampa (ed.), *Desde Abajo. Las transformaciones de las identidades sociales*. Buenos Aires: UNGS-Biblos.
- _____ (2005). *Pobres ciudadanos*. Buenos Aires: Gorla.
- Murillo, M. V. (1997). «La adaptación del sindicalismo argentino a las reformas de mercado en la primera presidencia de Menem» (pp. 419-446). En *Desarrollo Económico*, 37, 147.
- Nichter, S. (2008). «Vote buying or Turnout buying? Machine politics and the Secret Ballots» (pp. 19-31). En *American Political Science Review*, 102, 1.
- O'Donnell, G. (1996). «Illusions about consolidation» (pp. 34-51). En *Journal of Democracy*, 7, 2.
- Ortiz de Rozas, V. (2012). «Política provincial y liderazgos de popularidad territorial. Los 'aparatos' o 'máquinas políticas' un asunto de representación política». En Cheresky, I. y Annunziata, R. (comps.) *Sin programa, sin promesa. Liderazgos y procesos electorales en Argentina* (pp. 169-202). Buenos Aires: Prometeo.
- Palermo, V. y Novaro, M. (1996). *Política y poder en el gobierno de Menem*. Buenos Aires: FLACSO-Norma.
- Quirós, J. (2006). *Cruzando la Sarmiento. Los piqueteros en la trama social del sur del Gran Buenos Aires*. Buenos Aires: Antropofagia/Centro de Antropología social, IDES.
- _____ (2011). *El porqué de los que van. Peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires (una antropología de la política vivida)*. Buenos Aires: Antropofagia.
- Rinesi, E. y Nardacchione, G. (2007). «Teoría y práctica de la democracia argentina» (pp. 9-55). En Rinesi, E., Nardacchione, G. y Vommaro, G. *Los lentes de Víctor Hugo. Transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina reciente*. Buenos Aires: Prometeo/UNGS.

- Semán, P. (2006). «Las formas políticas populares: más allá de los dualismos» (pp. 161-174). En *Bajo continuo. Exploraciones descentradas sobre cultura popular y masiva*. Buenos Aires: Editorial Gorla.
- Sidicaro, R. (1995). «Poder político, liberalismo económico y sectores populares 1989-1995» (pp. 119-156). En AA.VV., *Peronismo y menemismo. Avatares del populismo en la Argentina*. Buenos Aires: El Cielo por Asalto.
- Svampa, M. (ed.) (2000). *Desde abajo. La transformación de las identidades sociales*. Buenos Aires: UNGS/Biblos.
- Stokes, S. (2005). «Perverse accountability. A formal model of machine politics with evidence from Argentina» (pp. 315-325). *American Political Science Review*, 99, 3.
- Vommaro, G. (2007). «‘Acá no conseguís nada si no estás en política’. Los sectores populares y la participación en espacios barriales de sociabilidad política» (pp. 161-178). *Anuario de Estudios en Antropología Social 2006*.
- (2009) «Diez años de ¿Favores por votos? El clientelismo como concepto y como etiqueta moral» (pp. 141-158). En Rinesi, E., Vommaro, G. y Muraca, M. (comps.), «*Si este no es el pueblo...*». *Hegemonía, populismo y democracia en Argentina*. Buenos Aires: UNGS/UNMDP.
- (2011). «Las transformaciones de las miradas sobre la política popular en la Argentina: notas tomadas de una tesis». En *Ensemble. Revista electrónica de la Casa Argentina en París*, 3, 5.
- (2012a) «Los pobres y la pobreza como dominio experto: contribuciones a una socio-historia» (pp. 79-133). En Morresi, S. y Vommaro, G. (comps.), *Saber lo que se hace. Expertos y política en Argentina*. Buenos Aires: Prometeo/UNGS.
- (2012b). «El trabajo político de los jóvenes: notas sobre la participación en espacios locales de sociabilidad política» (pp. 303-329). En Battistini, O. y Mauger, G. (comps.), *La difícil inserción de los jóvenes de clases populares en Argentina y Francia*. Buenos Aires: Prometeo.
- Vommaro, G. y Quirós, J. (2011). «‘Usted vino por su propia decisión’: repensar el clientelismo en clave etnográfica» (pp. 65-84). *Desacatos. Revista de Antropología Social*, 36.

Demandas colectivas y formas de intervención estatal: un enfoque relacional de la política en el Gran Buenos Aires

Virginia Manzano

Adolfo Gilly, politólogo argentino y profesor de la Universidad Autónoma de México, sostuvo que la rebelión de los indígenas de Chiapas ponía de relieve los rasgos más profundos de la forma de Estado contra la cual se rebelaban (Gilly, 2007). El vínculo entre rebelión y formas de poder estatal venía siendo materia de exploración de antropólogos e historiadores mexicanistas, quienes influidos por la noción de hegemonía de Antonio Gramsci así como también por debates acerca de acciones de resistencia cotidiana procuraban comprender la movilización de los sectores subalternos como resultado de relaciones y tradiciones que se afirman *con* y *contra* el Estado (Joseph y Nugent, 1994).

Estas propuestas relacionales orientaron aspectos de mi trabajo de campo en el distrito de La Matanza¹ –oeste del Gran Buenos Aires– con el denominado Movimiento de Desocupados (piquetero) en un

¹ Es el distrito más poblado de Argentina detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contabilizando un total de 1.775.816 habitantes en el último Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010.

intento por descentrar la visión del sujeto o actor colectivo (el movimiento) para ponderar relaciones sociales e históricas que habilitaban espacios políticos para la movilización colectiva frente al aumento en los niveles de desempleo durante los años noventa². Es preciso añadir que allá por el año 2000, cuando inicié mi investigación, estas propuestas resultaban sumamente fértiles puesto que permitían analizar cómo diversas maneras de intervención estatal otorgaban una tonalidad específica a esas relaciones en un contexto donde las investigaciones sociales argentinas insistían sobre el «retiro del Estado» o «la ausencia del Estado».

Las políticas en tanto una de las formas que asume la intervención estatal –tales fueron los programas de ocupación transitoria destinados a jefes/as de hogar desocupados, los cuales se basan en el otorgamiento de una suma monetaria por debajo del salario mínimo a cambio de tiempo diario de contraprestación en tareas comunitarias o productivas– permitían reconstruir los vínculos que las personas tejían con los movimientos sociales. Vínculos que animaron a los movimientos de desocupados en particular y a los modos de vida del Gran Buenos Aires en general durante los últimos treinta años (Manzano, 2004, 2007). En ese sentido, establecí cómo los programas estatales (*planes*, en el lenguaje coloquial de los barrios que recorrí) se convirtieron en una expectativa para los sujetos, destacando la incidencia de trayectorias sociales de vida y el papel preponderante que asumieron desde la década del ochenta *referentes o dirigentes barriales*.

En este capítulo entonces pretendo iluminar los alcances de un abordaje relacional para el estudio de la política de los sectores subalternos. Para ello desplegaré la argumentación en dos planos complementarios. El primero proyecta el análisis de la configuración de un espacio político para demandar colectivamente en torno al problema de la desocupación, indicando formas particulares de intervención estatal desde la década del ochenta. El segundo trae a superficie otro

² En el año 2001, sobre un total de 575.654 personas que formaban la población económicamente activa de La Matanza, el 17,5% eran desocupados abiertos (100.739 personas) y el 15,2% eran subocupados (87.499 personas). Datos de Consultora Equis.

orden de relaciones que posibilitaron que políticas sociales se conviertan en demandas colectivas y en expectativa para los sujetos.

El mencionado abordaje se halla íntimamente asociado con el trabajo de campo antropológico, es por ello que estimo necesario recorrer los principales recorridos que asumió el proceso de investigación en el que se basan algunos de los resultados que aquí presento.

Desde octubre del año 2000 hasta marzo del año 2006 desarrollé un trabajo de campo intensivo en el distrito de La Matanza, que incorporó observación, entrevistas en profundidad (sesenta en total) y recopilación de fuentes secundarias. Mis primeras visitas a la zona, durante el mes de octubre de 2000, pusieron en duda mis lecturas sobre movimientos sociales o, más precisamente, sobre formulaciones conceptuales relativas a movimientos sociales y acción colectiva³. El movimiento no aparecía como una instancia autónoma de partidos políticos y del Estado, como suele aparecer en las definiciones y expectativas de los analistas. Más bien, mis primeros registros de campo daban cuenta de una intensa agitación social debido a que el gobierno nacional mantenía una «deuda» con el distrito de La Matanza en torno a la distribución de una cantidad acordada de *planes* (programas de ocupación transitoria) y *mercaderías* (alimentos frescos y secos). A lo largo de mi primer día de trabajo, tuve la oportunidad de presenciar una numerosa reunión en la sede del Concejo Deliberante, presidida por el entonces intendente municipal, secundado por concejales municipales y con la asistencia de quienes más tarde reconocería como integrantes de dos organizaciones que tomarían estado público: la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat y la Corriente Clasista y Combativa. Militantes de una Agrupación denominada Felipe Vallese, de filiación peronista, intentaban traducirme los puntos en discusión y también me anticiparon la intención de cortar la ruta número 3 en caso que el gobierno nacional demorara la cancelación de la deuda aludida previamente. Una semana después me encontré

³ Me refiero a las elaboraciones europeas sobre nuevos movimientos sociales, a las estadounidenses sobre acción colectiva y a la prolífica literatura sobre movimientos sociales y transición democrática en América Latina. Para una revisión exhaustiva de estas líneas de análisis puede consultarse Manzano (2007).

registrando el piquete montado durante los seis primeros días de noviembre sobre la mencionada ruta.

A pocos días retorné a La Matanza para repasar con los protagonistas sus vivencias sobre el corte de ruta. Se trataba de concejales municipales que eran al mismo tiempo militantes de la agrupación Frente Grande y dirigentes de gremios incorporados en la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), docentes, médicos, *militantes* católicos vinculados a la orientación de la Teología de la Liberación y, principalmente, miembros de las dos organizaciones que, como anticipé, lograrían reconocimiento público en Argentina: la «Red de Barrios», perteneciente a la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV, de ahora en adelante), a su vez integrante de la CTA, y la Corriente Clasista y Combativa (CCC, de ahora en adelante). Por su parte, el intendente y concejales municipales enrolados en el Partido Justicialista mantuvieron vínculos con quienes cortaron rutas, particularmente aceitando las negociaciones con funcionarios del nivel provincial y nacional de gobierno.

Esos diversos grupos sociales y políticos que había identificado desde mi primer día en La Matanza, con sus múltiples pertenencias y tramas relacionales, se fundían en los análisis de las ciencias sociales y en los reportes de los medios masivos de comunicación en la imagen de un actor colectivo homogéneo: *los piqueteros*. A diferencia del enfoque sobre el «actor colectivo», mis interrogantes se dirigieron a profundizar el análisis sobre esa trama relacional y sobre las tradiciones históricas que habían posibilitado las condiciones para la puesta corporal en la ruta durante seis días en noviembre y más tarde durante dieciocho en mayo de 2001. De manera simultánea, me intrigaba cómo el Estado organizaba e imprimía una tonalidad particular al conjunto de esas relaciones, específicamente mediante políticas alimentarias y de ocupación transitoria.

Una vez que comencé mi trabajo de campo de manera sistemática, establecí vínculos más estrechos con aquellas personas que en las organizaciones de desocupados eran definidas como *dirigentes* o *referentes* barriales. En los diálogos que mantuvimos me advertían que había *dos Matanzas*: una que rodeaba el edificio municipal y «otra» que empezaba al cruzar el *Camino de Cintura*. La ruta provincial 4 o *Camino de*

Cintura es una circunvalación que atraviesa internamente diferentes distritos del Gran Buenos Aires y al mismo tiempo los une. En la «*otra Matanza*» se emplazan barrios obreros formados durante la década del sesenta y asentamientos urbanos conformados tras los procesos de ocupación de tierras durante la década del ochenta. En dos de esos asentamientos funcionaban las sedes centrales de la FTV, y de la CCC, como eran El Campo y Santa Emilia⁴, respectivamente. En esos espacios, donde el ritmo cotidiano de las actividades estaba pautado por los requerimientos de programas estatales de asistencia social, observé reuniones, asambleas, cursos y escuelas de formación política.

Con la ayuda de algunos *referentes barriales* me desplazé desde las sedes centrales de ambas organizaciones a barrios más alejados. En esas sedes había recorridos pautados para periodistas, investigadores, estudiantes y delegaciones de otros movimientos sociales que deseaban conocer la *experiencia piquetera*. También había recorridos pautados para los *dirigentes o referentes barriales*, y para las personas que se acercaban a tratar problemas vinculados con *planes y mercaderías*, o con causas particulares (enfermedades o problemas judiciales). Realicé trabajo de campo en tres barrios durante cuatro años; allí pude seguir de cerca la relación entre los *referentes barriales* y sus grupos de referencia. En los ambientes más íntimos de los espacios domésticos y barriales conocí personas y familias, mujeres y varones, adultos y jóvenes. De manera progresiva, entendí que pertenecer a una organización de desocupados constituía una dimensión dentro de experiencias y trayectorias más amplias de vida, que combinaban, entre otras cosas, trabajos eventuales con períodos de no trabajo; vínculos porosos con el Estado a través de centros de salud y escuelas; e inserción en circuitos religiosos y deportivos.

Desde los inicios de mi trabajo, como vengo sosteniendo, reparé en el compromiso entablado entre distintos actores que se expresaba en calles, rutas y dependencias estatales. Esos compromisos fueron poco analizados puesto que en la mayoría de los estudios sobre el movimiento piquetero, el conurbano bonaerense aparecía de manera

⁴ Respetando convenciones antropológicas, tanto el nombre de barrios como de personas fueron cambiados para conservar la confidencialidad pautada en la investigación.

estática, como un bloque homogéneo en contraposición con el interior del país. Se enfatizaba la especificidad del modelo territorial de las protestas del Gran Buenos Aires en comparación con las puebladas de provincias del sur y del norte de Argentina, las cuales se hallarían ligadas a la privatización de empresas públicas y a la descentralización administrativa (Svampa y Pereyra, 2003). Esta lectura procuraba resaltar un conjunto de procesos que habrían definido las características del conurbano durante la década del noventa, como el empobrecimiento, la pauperización, la desindustrialización, el triunfo del peronismo en su versión neoliberal, la expansión de una red punteril y la centralidad del barrio como escenario de reivindicación y de inscripción social y política (Svampa y Pereyra, 2003; Delamata, 2004; Merklen, 2005). Se trataba de una imagen unívoca que cedía un margen limitado para dimensionar en el análisis la trayectoria histórica de los distritos que componen el Gran Buenos Aires, los alineamientos políticos locales y los estilos de gestión municipal.

En este punto valiéndome de fuentes secundarias –históricas y hemerográficas– así como también de observaciones en las sesiones del Concejo Deliberante de La Matanza pude establecer las particularidades de la constitución histórica de este distrito en comparación con la zona sur y norte del Gran Buenos Aires y las imágenes evocadas que exaltan la resistencia, el movimiento y la lucha.

La Matanza, entre 1930 y 1960, se convirtió en una zona obrera, a través de la instalación de grandes plantas industriales de rubros automotriz, metalúrgica y textil, radicándose firmas tales como Chrysler-Fevre (1946) y Mercedes Benz (1952). En consonancia con ese impulso industrial, evidenció un crecimiento poblacional sostenido desde mediados de la década del cuarenta, que tuvo como una de sus facetas más sobresalientes la atracción de contingentes migratorios de diversas provincias de Argentina. En ese sentido, los datos de los censos nacionales de población y vivienda resultan elocuentes: de 98.470 habitantes registrados en el censo de 1947 a 401.738 en 1960. De manera articulada, se lotearon extensiones rurales para la conformación de barrios urbanos habitados por trabajadores industriales y floreció una trama asociativa ligada tanto a la urbanización de esos espacios (sociedades de fomento, clubes, etcétera) como a la celebra-

ción de la identidad de origen de sus pobladores, tales fueron los centros de residentes provincianos. Así, en un contexto de altos niveles de desempleo, como fueron los primeros años del siglo XXI, las principales imágenes evocadas en discursos de funcionarios locales, en la prensa también local o en los documentos producidos por la Junta de Estudios Históricos de La Matanza se relacionaban con el mundo del trabajo e instaban a la articulación de un proyecto de desarrollo industrial que contuviera la disputa por el salario justo en el marco de relaciones armónicas entre los sectores del trabajo (obreros, maestros, industriales, etcétera). La ligazón entre La Matanza y el mundo del trabajo fijaba sentidos en un espacio de lucha política orientado hacia la construcción de un «proyecto nacional» capaz de reservar al distrito un sitio dominante para el impulso de la prosperidad del país. Estas imágenes también se articulaban con otras que focalizaban en la irrupción de La Matanza en las principales páginas de la historia del peronismo en conexión con el proceso denominado «Resistencia Peronista», acentuando componentes como la resistencia, la lucha y el movimiento. El conjunto de esas evocaciones se desplegaban tras una década de profundos desplazamientos en el espacio político identificado con el peronismo tanto a nivel nacional como local así como de transformaciones sociales agudas. Y en caso que estas evocaciones del movimiento, la lucha y la resistencia no hayan contribuido a la construcción de un espacio político de movilización, sí es posible afirmar que aportaron a su legitimación. De este modo, los piquetes ingresaron en una genealogía histórica del distrito y se incorporaron a una forma de gestión del gobierno local que produce instancias de negociación a través del conflicto y la acción disruptiva.

Intentaré entonces desplegar un conjunto de datos sobre la vida política construidos desde un abordaje antropológico y relacional. Hacia las conclusiones me interesa puntualizar cómo las relaciones que cobraron visibilidad en un contexto de movilización social presentan un carácter más permanente y pueden considerarse como puntos de partida para el análisis de aquellos estudios que, ceñidos a un tiempo posterior a mi investigación, aspiran a complejizar lecturas corrientes de los procesos políticos, especialmente de aquellos que llevan adherida la categoría de «kirchnerismo».

Del movimiento al espacio político de la movilización

Cuando en el año 2000 tomé contacto con integrantes de la FTV y de la CCC, pude oír acerca de la movilización de la Red de Barrios a la Secretaría Nacional de Desarrollo Social en el año 1995 y también sobre la instalación de una Olla Popular en la plaza central de La Matanza, frente al edificio municipal, en el año 1996.

A lo largo de mi investigación restituí detalles de ambos episodios de movilización mediante una minuciosa reconstrucción etnográfica, sustentada en fuentes hemerográficas, entrevistas en profundidad y en el hallazgo de una copiosa documentación conservada en manos de agentes sanitarios, enfermeras y médicos ligados a la CCC. Con este material, dimensioné esos eventos en múltiples sentidos evitando reducirlos a simples «antecedentes» de la conformación de organizaciones de desocupados a nivel local puesto que los mismos indican, según mis datos, la configuración de espacios políticos que habilitan determinados modos de demandar colectivamente, de disputar y de negociar con el Estado.

Con motivo de la instalación de la Olla Popular en 1996, periódicos de alcance local como otros de influencia nacional pusieron en juego en sus reportes categorías tales como *hambre*, *desnutrición* y *alimentos* así como también categorizaciones de sujetos en tanto *indigentes* o *desocupados*. Esas categorías se vinculaban con el encuadre y el soporte de las demandas colectivas enunciadas a través de la palabra (petitorios, cartas, volantes, etcétera) y el cuerpo –puesta corporal en plaza y calles– ante agencias estatales. En otros trabajos (Manzano 2007, 2008; Manzano y Moreno, 2011) reconstruí de manera pormenorizada el proceso de construcción de demandas colectivas y los momentos centrales en las negociaciones con funcionarios gubernamentales, por eso aquí solo me interesa recuperar trazos centrales con el objeto de precisar mi argumentación en torno a la configuración de espacios políticos para la movilización.

En mi estudio identifiqué que durante los meses de diciembre de 1995 y enero de 1996, dos médicos, una enfermera y trece *agentes de salud* de la sala de primeros auxilios del barrio Santa Emilia desarrollaron un censo sobre el estado nutricional de niños de entre 0 y 6

años. A través de ese procedimiento, establecieron que el 19% de la población infantil de entre 0 y 2 años se encontraba «desnutrida», mientras que el porcentaje ascendía al 22% sobre el total de niños de entre 2 y 6 años. Con esas mediciones reforzaron los argumentos producidos en encuentros que representantes vecinales del asentamiento Santa Emilia venían manteniendo con otros barrios en torno al problema de la «desocupación». Se decidió entonces instalar una «olla popular» en la plaza San Martín de la localidad de San Justo, frente a la sede del gobierno municipal de La Matanza, bajo la consigna: «*Por trabajo, contra el hambre y la desocupación*». En el petitorio entregado al gobierno municipal se demandaba:

- 1- Alimentos para todas las familias de desocupados: entrega semanal y distribución mediante asociaciones barriales y vecinales, centros de fomento o cooperadoras.
- 2- Cien mil puestos de trabajo en La Matanza (ocupación en obra pública –sin costo para los vecinos–; ocupación en el plan hídrico que contemple todos los arroyos; ocupación en infraestructura en los barrios).
- 3- Ampliación del subsidio por desocupación, que abarque a todos los casos por desocupación.
- 4- Boleto gratuito para los desocupados para ir a buscar trabajo.
- 5- Que se exceptúe al desocupado del pago de servicios e impuestos.
- 6- Que se implementen los cuatro turnos de seis horas en fábricas, empresas y grandes supermercados. (Boletín informativo de los «Barrios de la Olla», mayo de 1996)

Por esa misma época, pobladores del barrio El Campo impulsaron la conformación de una «Red de Barrios» junto con sacerdotes, integrantes de Comunidades Eclesiales de Base (CEBs, de ahora en adelante) y dirigentes gremiales de Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (SUTEBA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), varios de ellos filiados con líneas peronistas que se encontraban en ese tiempo en disidencia con el gobierno nacional de Carlos Menem y habían formado en el distrito el partido político Frente Grande. La acción inaugural de la mencionada «Red» consistió en la organización de un censo en el año 1995 con el propósito de conocer

los *problemas de trabajo, alimentarios y sanitarios* que aquejaban a los barrios agrupados. Estos resultados se tabularon, se ordenaron en carpetas y se trataron en una asamblea en la cual se decidió organizar una movilización a la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación para reclamar alimentos para las «familias desocupadas», que incluyó la ocupación de la planta baja de ese edificio en espera de una audiencia con Eduardo Amadeo, el entonces Secretario.

En suma, ambos procesos, casi simultáneos en el tiempo, incorporaron la ocupación de plazas y edificios públicos municipales y nacionales para elevar resultados de censos y encuestas efectuados por pobladores de asentamientos y barrios populares con el apoyo de médicos, enfermeras, trabajadores sociales, maestros de escuelas y personal estatal agremiados, sacerdotes e integrantes de CEBs. Las mediciones que se presentaban a dependencias gubernamentales se habían concentrado en problemas sanitarios, alimentarios y laborales. Así, con los censos como *prueba de verdad*, se movilizaban para demandar al Estado alimentos para familias desocupadas.

Sendas movilizaciones expresaron la construcción gradual de un espacio para la acción política en torno al problema de la desocupación que articulaba y actualizaba experiencias previas de organización y acción colectiva. Entre esas experiencias se destacaban las ocupaciones de tierras durante la década del ochenta, la formación y funcionamiento de CEBs, y tradiciones político-gremiales cuyas propuestas se orientaron a impulsar acciones sindicales tanto en el espacio laboral como en el barrial/territorial⁵ (Manzano, 2007).

Del conjunto de estas experiencias, me interesa subrayar a las ocupaciones de tierras ocurridas durante la década del ochenta, especialmente porque quienes participaron de esos procesos actualizaron du-

⁵ Me refiero a la constitución de la CTA, que se inicia gradualmente con un encuentro de gremialistas, centralmente de sindicatos estatales, en la localidad de Burzaco en 1991, continúa con la fundación del Congreso de los Trabajadores Argentinos en 1992 y se afianza con la creación de la CTA en 1996. También a la conformación de la Corriente Clasista y Combativa en el año 1994, que se halla ligada a integrantes del Partido Comunista Revolucionario de la Argentina de orientación maoísta, la cual crea su vertiente de desocupados en 1998. Para un análisis sobre las interpretaciones de ambas líneas gremiales sobre el problema del desempleo puede consultarse Manzano (2007).

rante los años noventa una modalidad de relación con el Estado asociada a la reivindicación de la tierra para incorporar en ella la demanda por *trabajo* (Manzano, 2007).

Las formas en que se ocuparon tierras en La Matanza fueron diversas, una de las ocupaciones más estudiadas por las ciencias sociales ha sido aquella que originó el barrio El Campo en enero de 1986, que luego se transformó en sede central de la FTV (Merklen, 1991). Se trató de una ocupación impulsada por integrantes de CEBs, quienes mantenían vínculos con protagonistas de las primeras *tomas de tierras* en la zona sur del Gran Buenos Aires en 1981⁶ y con militantes del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). La organización se basaba en delegados por manzana, articulados en un cuerpo de delegados que representaba a todo el barrio. Además, se crearon comisiones especiales encargadas de las tramitaciones requeridas para obtener la titularidad de la tierra y de otras demandas, como la construcción de una escuela primaria, un jardín maternal y un centro de salud⁷. Sin embargo, el mayor número de ocupaciones, como lo fue el caso del barrio Santa Emilia (sede central de la CCC), siguió otros itinerarios por ello es difícil datar su origen en una fecha puntual correspondiente al día de la «toma colectiva de los terrenos». De acuerdo con mis propios datos así como también de investigadores en la temática urbana (Cravino, 2006), en esas situaciones fueron personas ligadas al gobierno local quienes controlaron los alcances del sistema de acceso a la tierra, asignando y delimitando predios. Los pobladores arribaron progresiva y escalonadamente en el transcurso del tiempo desde marcos de relaciones familiares, laborales y vecinales. De manera disputada con las primeras organizaciones vecinales se fueron conformando juntas vecinales, sociedades de fomento u otro tipo de enti-

⁶ Diversas investigaciones señalan que integrantes de Comunidades Eclesiales de Base impulsaron las primeras «tomas de tierra» entre los años 1981 y 1982 en la zona sur del Gran Buenos Aires, específicamente en una franja fronteriza entre los partidos de Quilmes y Almirante Brown, que comprende las localidades de San Francisco Solano y Rafael Calzada. Para un análisis detallado puede consultarse Aristizábal e Izaguirre (1988), Merklen (1991), y Cravino, 1998.

⁷ En esta descripción me baso en testimonios recogidos en mi trabajo de campo, en el estudio de Merklen (1991) y el diario *Clarín*, 14/2/86.

dades para demandar la regularización de la tenencia de la tierra y la provisión de otros bienes (electricidad, agua, escuelas, centros sanitarios, etcétera).

Más allá de la diversidad en la forma de ocupación de las tierras, en todos los casos se advierte una modalidad similar de relación con el Estado que contiene distintas dimensiones. Por un lado, se distinguen prácticas colectivas de «hacer», como construir zona urbana en tierras donde antes habían funcionado estancias u hornos de ladrillos, definiendo, como diría Arjun Appadurai (2002), un área social cuasi-legal que tensiona, precisamente, la distinción histórica y asimétrica entre lo legal y lo ilegal. La producción de contactos con los gobiernos en un movimiento envolvente hacia la legalidad influye en el sentido que ciertas acciones que desde ordenes de dominio se categorizan como ilegales pasan a convertirse en precedentes legítimos, indicativos del esfuerzo de los pobladores para construir ciudad (delimitación de parcelas, conexión de agua y electricidad, solicitud de transporte público, arreglo de calles, emparejamientos de terrenos, etcétera), facilitando el diálogo con agencias estatales. Por otro lado, se genera un saber práctico sobre habilidades requeridas para el manejo del funcionamiento cotidiano de las dependencias estatales: tecnologías de presentación de demandas (encuestas, censos, cartas, petitorios, etcétera), modos de circulación de expedientes, tipos de trámites, etcétera.

Desde esas experiencias históricas, las primeras movilizaciones en torno a la desocupación se insertaron en un encuadre más amplio de problemas vinculados con la *desnutrición*, el *hambre* o los inconvenientes alimentarios y sanitarios en general. Recuperando los planteos del historiador inglés E. P. Thompson (1995) en cuanto a las *nociones legitimadoras* en las que enraizaban los motines de subsistencia en la Inglaterra del siglo XVIII, es posible sostener que el *hambre*, la *desnutrición* y la *demanda* de alimentos apelaban a normas y costumbres inscriptas en la relación con el Estado. En particular, remitían a un modo de relación configurado a partir de la implementación, durante la década del ochenta, de políticas de asistencia alimentaria destinadas a familias con jefes de hogar desocupados o de bajos ingresos. El Plan Alimentario Nacional (PAN), lanzado en 1984 por el Ministerio

de Salud y Acción Social, repartió durante el año 1987 1.370.000 cajas mensuales de alimentos que cubrían a 1.340.000 familias en todo el país (Grassi, Hintze y Neufeld, 1996). Otra política alimentaria que perfiló acciones en los barrios donde realicé trabajo de campo fue el Programa Alimentario Integral y Solidario (PAIS), dependiente del Ministerio de Acción Social de la provincia de Buenos Aires. Ese programa fue lanzado en 1989, en el contexto de la crisis hiperinflacionaria, y su objetivo era atender a sectores en situación de «pobreza crítica», según criterios de NBI (Chiara, 1991). La implementación de esa política contemplaba tres instancias: organización de los grupos PAIS, abastecimiento alimentario mediante compras o comedores comunitarios, y apoyo a proyectos de generación de empleo. Por esa misma época, diversas organizaciones barriales, así como también las CEBs, respondieron a la crisis hiperinflacionaria con la puesta en funcionamiento de comedores comunitarios.

La reconstrucción de las relaciones entre el Estado y los sectores subalternos a partir de políticas de asistencia alimentaria permite sostener que las demandas que impulsaron las primeras movilizaciones en torno al problema de la desocupación apelaban a una norma estandarizada de intervención estatal basada en el reparto de alimentos. Ese modo de relación con el Estado, configurado durante la década del ochenta, permeaba experiencias de vida y de organización colectiva. A la vez, activaba expectativas sociales sobre las posibilidades de demanda y sobre las respuestas esperadas de parte de funcionarios gubernamentales.

De las políticas a la vida de las políticas

El escenario de disputa y movilización que inicialmente se configuró en torno al problema de la desocupación se redefinió parcialmente debido a iniciativas expresadas en los programas de ocupación transitoria. Estos últimos comenzaron a implementarse en 1993, pero alcanzaron una mayor extensión a partir de 1995, con la creación del Programa Trabajar, y se unificaron en 2002 en el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados.

Como profundicé en trabajos previos, estos programas se convirtieron en el centro de debate tanto de las ciencias sociales como entre los propios movimientos de desocupados (Manzano, 2007). Algunos interpretaron que los programas estatales representaban estrategias tendientes a institucionalizar un movimiento social disruptivo mediante mecanismos de negociación en torno a la distribución de planes de empleo y ayuda alimentaria (Delamata, 2004; Svampa y Pereyra, 2003, 2005). Otros sostuvieron que estas políticas constituían una «presa» para antiguos trabajadores que, convertidos en pobres, actuaban con una «lógica racional» (cazadora) persiguiendo recursos que dispensaban instituciones estatales u ONGs (Merklen, 2005).

Repensando a estos programas más allá de su asociación con estrategias instrumentales, consideré pertinente reconstruir la manera en que los mismos eran «apropiados» en contextos particulares de relaciones sociales, históricas y activamente configuradas. En este sentido, una serie de etnografías, como la de Quirós (2006), aportaron copiosos datos para mostrar cómo los *planes* tenían omnipresencia palmaria en los barrios, siendo un medio central de vida a la vez que un lenguaje compartido que permitía la comunicación a un conjunto de personas diverso y heterogéneo (Quirós, 2006).

Tal como expuse en la introducción de este capítulo, con mi llegada a La Matanza advertí la centralidad de estos programas estatales en diversos contextos de interacción social, como la reunión en el Concejo Deliberante, los cortes de ruta, las sedes centrales de las dos organizaciones de desocupados más importantes de la zona (la FTV y la CCC) y el vínculo cotidiano entre dirigentes y referentes barriales con personas de sus barrios.

Como escena reiterada en cada uno de los barrios que visité a lo largo de mi trabajo de campo puedo traer como ejemplo lo que ocurría diariamente en la sala de salud del barrio Santa Emilia, lugar en el que trabajaban médicos, enfermeras y agentes sanitarios vinculados con la CCC, quienes habían elaborado el censo que permitió instalar una Olla Popular en la plaza central de La Matanza en el año 1996.

Un intenso movimiento de personas y objetos otorgaba particularidad a la sala de salud. En la planta baja, mujeres, niños y ancianos aguardaban por la atención de los médicos. Jóvenes que *trabajaban*

con el plan entregaban turnos y ordenaban la espera. Las agentes sanitarias, quienes también *trabajaban con el plan*, se distribuían en distintas tareas: un grupo entregaba medicinas en una farmacia creada desde que el *movimiento* había «logrado» que se implementara en la salita el Programa Remediar, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación; el otro grupo se dedicaba a nebulizar niños, medir talla y peso de las criaturas, curar heridas, preparar inyectables, aplicar inyecciones y medir la presión arterial. En horas del almuerzo se aceleraba el movimiento; se formaba una extensa hilera de personas que portaban recipientes para retirar raciones de alimentos que se distribuían como parte del comedor comunitario que funcionaba allí con subsidios estatales. Desde las azoteas del edificio repicaban martillos puesto que una cuadrilla compuesta mayormente por varones adultos a través de los *planes* tenía asignada como contraprestación ampliar las instalaciones de la sala para construir una nueva cocina, un salón de reuniones y nuevos consultorios en planta alta. En un extremo de la sala, Floreal, con su ceguera, doblaba pacientemente gasas e insistía sobre sus expectativas de obtener con ayuda del movimiento una pensión por su invalidez.

Como muestra la pequeña escena de mi trabajo de campo, los planes pautaban el ritmo cotidiano de los barrios así como también las expectativas de vida de sus pobladores. Los mismos poseían un valor de uso para quienes eran definidos como *beneficiarios* porque complementaban otras fuentes de ingresos de las economías familiares (empleos eventuales, cirujeo, trueque o la ayuda de algún familiar mejor posicionado socialmente). El ingreso del *plan* era relativamente regular y, además, representaba ciento cincuenta pesos reunidos en una sola paga. En consecuencia, y así lo pusieron de relieve numerosos testimonios y observaciones que realicé, la cuantía del *plan* se utilizaba fundamentalmente para abonar gastos de servicios, como luz eléctrica y gas (garrafas); para cancelar deudas con comercios barriales y con parientes, o para adquirir bienes más costosos, como ropa, calzado o medicinas. Tal como pude observar, los días del mes en los cuales se abonaba el beneficio de los programas de empleo, alrededor de las *bocas* de expendio que funcionaban en aquellos años, como el edificio de una antigua fábrica en Isidro Casanova o las ins-

talaciones del Club Deportivo Laferrere, se montaban ferias que ofrecían diversos productos comestibles o indumentaria. Otro aspecto a destacar era el uso del *plan* para solidificar vínculos familiares a partir del préstamo y la devolución de dinero.

Más allá de la utilidad de *los planes*, el ingreso a un programa de empleo y el mantenimiento del beneficio a lo largo del tiempo no se agotaba en un trámite realizado de manera individual por alguna persona desempleada; tampoco se limitaba a un solo *corte de ruta*. Acceder a un *plan* y mantenerlo requería de una intensa movilización de energía social: piquetes, manifestaciones callejeras, audiencias con funcionarios públicos, especialización y coordinación de tareas técnicas, y *contraprestación* en proyectos comunitarios o productivos.

Para llevar adelante esas actividades, las organizaciones de desocupados conformaron equipos técnicos. Desde fines de la década del noventa se produjo una creciente especialización en el manejo administrativo de programas de empleo que se expresó en la adecuación tanto de estructuras como de tareas. El almacenamiento de documentación, así como también de mercaderías provenientes de otras acciones estatales, ocupaba la mayor parte del espacio en los locales donde funcionaban organizaciones de desocupados (fuera la CCC o la FTV). El dinero recaudado del aporte mensual de beneficiarios de *planes* y de otras actividades (rifas, bailes y ferias) se destinaba fundamentalmente a la mejora de equipamientos. En este sentido, sobresalía la adquisición de fotocopiadoras, computadoras, cartuchos para impresoras y papel. Los fondos reunidos también se empleaban para cubrir los gastos de traslado a dependencias estatales, que incluían boletos de autobuses, combustible de autos y estipendio para el almuerzo. En otro orden, aquellas personas que cumplían tareas de *autodefensa* en piquetes o manifestaciones públicas conformaron un sistema de guardias nocturnas y rotativas para custodiar las instalaciones con el objetivo de proteger los bienes y la documentación que se acopiaban en esos lugares. Las personas que pasaron a formar parte de estos equipos, en el caso de la CCC fueron inicialmente seleccionados debido a la buena caligrafía; sin embargo, nuevos requerimientos en las normativas estatales exigieron de pericias ligadas a la operación informática que aprendieron en interacción con los pro-

pios empleados estatales. En el caso de la CCC estos equipos eran integrados por personas que habían completado la instrucción primaria y solo tres contaban con la formación secundaria incompleta, a diferencia, el equipo técnico de la FTV estaba compuesto por graduados y estudiantes universitarios, en su mayoría egresados de la carrera de Trabajo Social.

Si desde la vida cotidiana el conjunto de los programas estatales de la última década fueron significados como *planes*, desde los requerimientos técnicos se fue cimentando un vocabulario que pervive hasta la actualidad en términos tales como *beneficiario*, *proyectos*, unidades ejecutoras y organismos responsables.

De modo sintético es posible advertir cómo estas políticas asumieron un carácter coercitivo, impuesto «desde arriba» y asimétricamente como única propuesta posible frente a la desocupación. Estas eran financiadas por Organismos Internacionales de Crédito (Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo) y expresaban, no sin matices, orientaciones para los «países pobres» a nivel mundial. En los documentos, informes y publicaciones de los citados Organismos a los que pude acceder se recomendaba la «focalización» de las políticas públicas atendiendo a la relación entre el equilibrio macroeconómico y el gasto social. Se proponían alternativas para la «selectividad» de los beneficiarios optimizando recursos y partidas presupuestarias, como la «focalización» del gasto social sobre aquellos grupos sociales y regiones delimitados previamente como pobres. A su vez, estos programas se transformaron en la principal respuesta del Estado frente al desempleo, desplazando a un segundo plano otras alternativas posibles, como el Seguro por Desempleo.

Desde el enfoque relacional adoptado en mi investigación también es posible atender a cómo estas políticas volvieron en tanto construcción de demanda colectiva hacia el Estado. En trabajos anteriores reconstruí la manera en que los programas de ocupación transitoria se convirtieron en demanda colectiva a la vez que fueron constituyendo a las propias organizaciones de desocupados (Manzano, 2007). Un camino sinuoso emprendido en 1997, que tuvo momentos de negociación y otros de disputa abierta con agencias provinciales y nacionales de gobierno, acabó por transformar a esta modalidad de po-

lítica estatal en conquista de la lucha colectiva. Se abrieron intersticios para demandas que se expresaban en los propios términos de los componentes de las políticas estatales (vacantes, cantidad de beneficiarios, fechas de ingresos, herramientas, etcétera), creando como principio de legitimidad de acceso a esos recursos «la participación en la lucha».

Al convertir a los programas de empleo en un objeto que se construye con la lucha colectiva, las organizaciones de desocupados redefinieron los criterios de selección de beneficiarios centrados en la focalización sobre la pobreza, introduciendo otros vinculados con el mérito demostrado en la «lucha». En otras palabras, los programas de empleo fueron vistos como un premio al mérito, al esfuerzo y al sacrificio, así como también una *excusa* para fortalecer la organización. La participación en la lucha se transformó en una prueba de mérito, y dio lugar a la proliferación de estrategias que oscilaban tensamente entre el cumplimiento de los requerimientos establecidos y la posibilidad de evadir algunas de las normas en función de estados de enfermedad, ancianidad o discapacidad.

Los *planes* también se convirtieron en demanda colectiva debido al intenso trabajo desplegado por *referentes* y *dirigentes* locales, quienes progresivamente se fueron incorporando a las que pasaron a denominarse como organizaciones de desocupados. Estos asumieron la tarea de crear a las políticas como demanda para los pobladores de los barrios: recorrieron viviendas promocionando *los planes* e inscribiendo en un registro a quienes aspiraban a obtenerlos; organizaron reuniones, algunas de ellas con la presencia de funcionarios estatales, y activaron vínculos de parentesco, vecindad y amistad para cimentar expectativas sociales acerca del beneficio de esos programas. La demanda debió ser creada porque *los planes* representaban una novedad en comparación con la intervención estatal «normatizada» durante los ochenta y, en otros casos, porque desde las trayectorias de vida el beneficio de esos programas no era visto como una opción viable, por ejemplo antiguos trabajadores industriales consideraban al trabajo con los planes poco útil o productivo. Sin embargo, en la medida en que creaban esta demanda construían a los movimientos como posibilidad, lo que no era una tarea sencilla, puesto que las personas

habían puesto en juego una diversidad de iniciativas y respuestas frente a la precariedad de la vida, como el empleo en trabajos eventuales, la venta ambulante, la participación en clubes de trueque, la preparación de comidas caseras para su venta en ferias zonales o el cirujeo.

Las trayectorias de vida que reconstruí en mi investigación, sumadas a la observación de variadas situaciones de interacción social, muestran que las personas agenciaron el vínculo con los movimientos desde una experiencia holística de vida, en la cual aspiraciones, expectativas y sentidos se modelaban en diversas inserciones que trabajan juntas y en simultáneo: la asistencia a iglesias evangélicas, la participación en CEBs, la imputación de delitos y las energías cotidianas dispensadas en el seguimiento de causas judiciales, el ingreso y egreso periódico de prisiones, los tratamientos médicos, las desventuras de las relaciones de pareja, las situaciones de «violencia doméstica», la crianza de los niños y, sobre todo, los conflictos con hijos adolescentes referidos al uso de drogas, alcohol o robos. Se debe destacar que parte de esas experiencias se incorporaron como problemas a ser procesados por las organizaciones de desocupados, especialmente en el caso de la CCC.

A modo de cierre

Parte sustantiva de las relaciones políticas reconstruidas en este capítulo se sostienen en la adopción de una visión de procesos y relaciones de hegemonía. La apropiación antropológica de esta categoría enfatizó que la misma no puede ser vista simplemente como consenso ideológico, antes que eso, en la formulación de Gramsci implica la compleja unidad entre coerción-consenso, por ello algunos autores proponen referir a la hegemonía en tanto proceso de dominación y lucha, problemático y disputado (Roseberry, 1994). Recuperando estos aportes, intenté mostrar cómo históricamente, al menos desde la década del ochenta, se configuró un marco común, material y significativo, que estableció los términos centrales sobre los cuales y el terreno sobre el cual puede ocurrir la lucha, la impugnación y la demanda. Términos y terreno que no fueron elegidos de manera autóno-

ma por las poblaciones subalternas, pero a través de los cuales generaron una intensa actividad. Así, los programas alimentarios y de empleo para desocupados se transformaron en potentes puntos de lucha, a través de los cuales se movilizaron formas y lenguajes impuestos, a la vez que activados y remodelados por procesos de organización colectiva. Estos procesos de disputa permiten comprender cómo los marcos históricos dentro de los cuales ocurre la lucha y la demanda resultan sólidos y frágiles a la vez, volviendo central la interpretación de los mismos desde una visión de procesos transaccionales.

La lectura de los procesos sociales en términos de transacción retoma los aportes efectuados por diversas líneas de análisis antropológico desde la década de los cincuenta. Barth (1959, 1959a) consideraba el sistema político como la suma de interacciones diádicas y voluntarias. En la década del ochenta, Menéndez (1981) redefinió ese concepto incorporando una visión sobre las relaciones de dominación/subalternidad, y Grimberg (1997), por su parte, recuperó la categoría *campo transaccional* para describir relaciones y procesos de poder que articulaban en tensión confrontación-negociación, concertación-negociación, coerción-consenso y resistencia-reproducción. Estos aportes permiten sostener que los procesos analizados en esta parte expresan la configuración de un *campo transaccional* en torno a los programas de empleo.

En este proceso jugaron un rol central las políticas, las cuales, desde una visión de hegemonía, resultan de cambiantes correlaciones de fuerzas sociales. Este énfasis permite complejizar visiones de las políticas como respuestas del Estado tendientes a cooptar o institucionalizar movimientos sociales disruptivos, puesto que ni el Estado ni los movimientos, desde el enfoque que procuré presentar, pueden ser considerados como instancias a-históricas y escindidas sino que constituyen el producto de la acción de sujetos situados en relaciones sociales y de fuerza. La pregunta quizás sea por la manera en que el Estado es continuamente configurado y reconfigurado por la movilización colectiva y cómo configuraciones estatales expresadas en políticas modelan a los movimientos colectivos.

Las políticas también se inscriben en experiencias de vida cotidiana, es por ello que se torna problemático concebirlas como recursos

dados a personas pobres y desintegradas de antiguos lazos sociales. Atendiendo a la construcción de demandas, es posible mostrar cómo el proceso de apropiación de los recursos vehiculizados por distintos programas se produce en un marco de relaciones sociales históricamente configurado entre el Estado y la población, y en una trama sumamente densa de vida social e histórica donde se juegan múltiples significados, compromisos y obligaciones.

Partiendo de un enfoque relacional, mi investigación no se orientó a describir la acción colectiva, ni de la formación de un actor colectivo (los piqueteros); tampoco aspiró ser un análisis de la implementación de políticas sociales. Más bien, intentó producir un análisis antropológico para explicar por qué *el piquete* y las organizaciones de desocupados se constituyeron en «*sitios*» donde se procesaron tradiciones políticas e ideológicas, alianzas políticas y sindicales, experiencias de vida cotidiana y modos estatales de gestión de la población en contextos de transformación social de la Argentina y del Gran Buenos Aires en particular. *Sitios* que permiten examinar la inscripción de movilizaciones colectivas en una intimidad histórica que, en mi caso, asocia al distrito de La Matanza con la industria, el peronismo y la resistencia.

Finalmente, considero que si un elemento constante caracteriza a la política colectiva de los sectores populares durante los últimos treinta años es el desplazamiento y la re-creación permanente de espacios para la acción. Desplazamiento y re-creación que lejos de ser contingentes, se sostienen en la sedimentación de experiencias y tradiciones históricas y cotidianas, activando en simultáneo aprendizajes de la lucha colectiva, del funcionamiento estatal por medio de las políticas y de los partidos políticos. El terreno configurado con las movilizaciones colectivas en demanda de trabajo habilitó el desplazamiento de sectores subalternos para dar vida a cooperativas de trabajo y de vivienda, a nuevas tomas tierra, a frentes partidarios, al trabajo industrial y a la *ocupación* de lugares en el Estado. Es probable que entonces se trate de desplazar la intensa atención otorgada a la política de los movimientos para captar la política en movimiento.

BIBLIOGRAFÍA

- Appadurai, A. (2002). «Deep Democracy: Urban Governmentality and the Horizon of Politics» (pp. 21-47). En *Public Culture*, 14(1).
- Aristizábal, Z. y Izaguirre, I. (1988). *Las tomas de tierras en el Sur del Gran Buenos Aires. Un ejercicio de formación de poder en el campo popular*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
- Barth, F. (1959). *Political Leadership among the Swat Pathans*. London: Althone Press.
- Chiara, M. (1991). «El modelo de gestión del Programa Alimentario Integral y Solidario: Una relectura de su implementación». En Peñalva, S. y Rofman, A. (eds.). *Desempleo y pobreza estructural en la Argentina*. Buenos Aires: OIT-CLACSO.
- Cravino, M. C. (1998). «Los asentamientos del Gran Buenos Aires. Reivindicaciones y contradicciones». En Neufeld, M. R., Grimberg, M., Tiscornia, S. y Wallace, S. (comps.). *Antropología Social y Política. Hegemonía y poder: el mundo en movimiento*. Buenos Aires: EUDEBA.
- Delamata, G. (2004). *Los barrios desbordados. Las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires*. Buenos Aires: Libros del Rojas-Universidad de Buenos Aires.
- Gilly, A. (2007). «El ejército indígena y el Estado mexicano». En Lagos, M. y Calla, P. (eds.). *Antropología del Estado. Dominación y Prácticas Contestatarias en América Latina*. La Paz: Cuadernos de Futuro 23/INHD/PNUD.
- Grassi, E., Hintze, S. y Neufeld, M. R. (1996). «Crisis del Estado de bienestar y construcción del sentido de las políticas sociales» (pp. 15-38). En *Cuadernos de Antropología Social*, 9. Buenos Aires.
- Grimberg, M. (1997). *Demanda, negociación y salud. Antropología social de las representaciones y prácticas de trabajadores gráficos 1984-1990*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras-Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires.
- Joseph, G. y Nugent, D. (1994). «Popular culture and state formation in Revolutionary Mexico». En Joseph, G. y Nugent, D. (eds.). *Everyday*

- forms of state formation. Revolution and the negotiation of rule in modern Mexico.* Durham & London: Duke University Press.
- Manzano, V. (2007). «De La Matanza Obrera a Capital Nacional del Piquete. Etnografía de procesos políticos y cotidianos en contextos de transformación social». En *Tesis de Doctorado*. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- (2008). «Del desocupado como actor colectivo a la trama política de la desocupación: antropología de campos de fuerzas sociales». En Cravino, M. C. (comp.). *Acción colectiva y movimientos sociales en el Área Metropolitana de Buenos Aires*. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Manzano, V. y Moreno, L. (2011). «Censar, demandar y acordar: Demandas colectivas y políticas estatales en el Gran Buenos Aires» (pp. 1-11). En *Revista Pilquen, Ciencias Sociales*, 14. Universidad Nacional del Comahue. Viedma, Río Negro.
- Menéndez, E. (1981). *Poder, estratificación y salud. Análisis de las condiciones sociales y económicas de la enfermedad en Yucatán*. México DF: Ediciones de la Casa Chata.
- Merklen, D. (1991). *Asentamientos de La Matanza. La terquedad de lo nuestro*. Buenos Aires: Catálogos Editora.
- Merklen, D. (2005). *Pobres Ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*. Buenos Aires: Editorial Gorla.
- Quirós, J. (2006). *Cruzando la Sarmiento. Una etnografía sobre piqueteros en la trama social del sur del Gran Buenos Aires*. Buenos Aires: Antropofagia.
- Roseberry, W. (1994). «Hegemony and the language of contention». En Joseph, G. y Nugent, D. (eds.). *Everyday forms of state formation. Revolution and the negotiation of rule in modern Mexico*. Durham & London: Duke University Press.
- Svampa, M. y Pereyra, S. (2003). *Entre la Ruta y el Barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.
- Thompson, E. P. (1995). *Costumbres en común*. Madrid: Crítica.

Autores

Pablo Forni

Licenciado en Sociología, Universidad del Salvador (USAL). M.A. y Ph.D. en Sociología (2000) University of Notre Dame. Es investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y docente en la USAL y en Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Buenos Aires. Asimismo, es director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (IDICSO) de la USAL. Ha sido profesor visitante en distintas universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa. Ha publicado sobre organizaciones comunitarias, economía y capital social así como sobre métodos cualitativos de investigación en Ciencias Sociales.

Mariana Nardone

Licenciada en Sociología (USAL, Argentina). Doctora en Ciencias Sociales y Magíster en Diseño y Gestión de Programas Sociales (FLACSO, Argentina). Investigadora Adjunta (Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, Argentina). Sus áreas de investigación incluyen arte comunitario, capital social, organizaciones de la sociedad civil y redes sociales. Se desempeña en actividades de gestión y evaluación de programas sociales y culturales en organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil. E-mail: mariananardone@yahoo.com.ar.

Luciana Castronuovo

Licenciada en Sociología (USAL). Candidata a Doctora en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ha sido becaria doctoral del CONICET (2008-2013). Integrante de proyectos de investigación relacionados con el análisis de organizaciones comunitarias. Investigadora IDICSO (USAL). Profesora de metodología de investigación en carreras de grado y posgrado (UBA, FLACSO, USAL). Se ha desempeñado en el ámbito estatal en el área de evaluación de programas sociales y en organizaciones no gubernamentales en el área de investigación social, especializada en metodología cualitativa. E-mail: luciana.castronuovo@gmail.com

Tomás Nougués

Estudiante avanzado (tesista) de la carrera Sociología en la USAL. Ayudante de la materia Teoría Sociológica Contemporánea en la USAL. Asistente de Investigación en IDICSO.

Manuel Zapico

Estudiante avanzado de la carrera Sociología en la USAL. Ayudante de la materia Teoría Sociológica Contemporánea en la USAL. Asistente de Investigación en IDICSO. Investigador Ad Honorem del Centro de Estudios Sociales y Sindicales (CESS).

Laura Fiszman

Antropóloga (FFyL-UBA). Magister en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales (FLACSO). Doctoranda en Ciencias Antropológicas (FFyL-UBA/FCS-USAL); Becaria CONICET (2007-2012); Investigadora adjunta del IDICSO (USAL). Tutora de la Especialización en Abordaje Integral de las Problemáticas Sociales en el Ámbito Comunitario (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación-Universidad Nacional de Lanús); Tutora de la Especialización docente de nivel superior en Educación y TIC (Ministerio de Educación de la Nación); Tutora del Programa de Educación Media y Formación para el Trabajo para Jóvenes (Unión Europea-Ministerio de Educación de la Nación-Universidad Nacional de San Martín). Ha trabajado en distintas agencias estatales y en ONG E-mail: laurafiszman@gmail.com

Agustina Gradín

Licenciada en Ciencias Políticas por la UBA. Doctoranda en Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias Sociales de la UBA). Magister en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión social, FLACSO. Becaria Doctoral del CONICET. Docente-Investigadora del Área de Estado y Políticas Públicas, FLACSO Argentina. Coordinadora Académica del Diploma Superior en Organizaciones de la sociedad civil, FLACSO Argentina. Especialidades: Estado, Políticas Públicas, modelos de desarrollo, Organizaciones de la sociedad civil. E-mail: agradin@flacso.org.ar

Mauricio Schuttenberg

Doctor en Ciencias Sociales por la FLACSO (Argentina) y Magíster en Ciencia Política en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Investigador Asistente de CONICET. Profesor Adjunto de Problemas de Historia Argentina en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y de Historia de las Ideas y los procesos políticos en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Integrante de los centros CPS e IdIHCS en la UNLP. E-mail: mauricioschuttenberg@gmail.com

Ariel Colombo

Investigador del CONICET/IDICSO, autor de *La cuestión del tiempo en la teoría política I-V*, Buenos Aires, Prometeo Libros. E-mail: colombo@nodosoft.com.ar

Ana Natalucci

Licenciada en Comunicación Social, Universidad Nacional de Córdoba. Doctora en Ciencias Sociales por la UBA. Magister en Ciencias Sociales (UBA). Investigadora Asistente del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, donde investiga temas relativos a la sociopolítica de las organizaciones territoriales y sindicales. Actualmente coordina el Colectivo de Estudios sobre Sociología Política en dicho Instituto. Docente de la Carrera de Ciencia Política y de la Maestría en Intervención, ambas de la UBA. Ha sido Profesora invitada en el Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, España. E-mail: anatalucci@gmail.com

Pablo Vommaro

Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y Profesor de Historia por la UBA. Posdoctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud (Universidad Católica de Sao Paulo, CINDE-Universidad de Manizales y CLACSO). Investigador del CONICET. Co-coordinador del Equipo de Estudios de Políticas y Juventudes (EPoJu, IIGG-UBA). Integrante del Grupo de Estudios sobre la Protesta Social y la Acción Colectiva (GEPSAC, IIGG-UBA) y del Programa de Historia Oral (FFyL - UBA). Docente de grado y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Autor de artículos en revistas nacionales e internacionales y de capítulos de libros acerca de las problemáticas de las organizaciones sociales urbanas de base territorial en la Argentina de los últimos 40 años, la participación política de los jóvenes, la Historia Oral y la historia argentina y latinoamericana recientes. E-mail: pvommaro@gmail.com

Julieta Quirós

Antropóloga por la Universidad de Buenos Aires y Doctora en Antropología por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente es Investigadora Asistente del CONICET y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y de la Maestría de Antropología Social IDES-IDAES de la Universidad Nacional de San Martín. Como investigadora se dedica al estudio etnográfico y comparativo de prácticas políticas y modos de producción del Estado; entre sus principales publicaciones figuran *El porqué de los que van. Peronistas y piqueteros en el Gran Buenos Aires* (Antropofagia, 2011) y *Cruzando la Sarmiento. Una etnografía sobre piqueteros en la trama social del sur del Gran Buenos Aires* (Antropofagia, 2006). E-mail: juquiros@hotmail.com

Gabriel Vommaro

Doctor en sociología por la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Centre de Sociologie Européenne). Ha obtenido un Diplôme d'Etudes Approfondies en la misma casa de estudios y el título de Magíster en Investigación en Ciencias Sociales por la UBA. Cursó la carrera de sociología en la UBA, donde fue docente de teoría social y

de teoría política. Investigador-docente en la UNGS (IDH, Area de Política) e Investigador Asistente del CONICET. Actualmente es coordinador de la Carrera de Estudios Políticos y del Area de Política del Instituto del Desarrollo Humano, UNGS. Sus temas de investigación son: cultura y prácticas políticas en la Argentina de la post-transición democrática; configuraciones, redes y espacios de sociabilidad política; medios de comunicación y política; ciencias sociales y expertise. Entre sus publicaciones se encuentran: *¿Lo que quiere la gente? Los sondeos de opinión y el espacio de la comunicación política en Argentina (1983-1999)* (Prometeo, 2008) y *Mejor que decir es mostrar. Medios y política en la democracia argentina* (UNGS/Biblioteca Nacional, 2008). E-mail: gvommaro@ungs.edu.ar

Virginia Manzano

Doctora de la UBA, área Antropología Social, Facultad de Filosofía y Letras. Licenciada en Ciencias Antropológicas, Orientación Sociocultural; título otorgado por la UBA, Facultad de Filosofía y Letras. Investigadora Asistente del CONICET. Directora de proyectos de Investigación subsidiados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (MINCyT) y por Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Profesora de la Maestría en Antropología Social, Secretaría de Posgrado, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Miembro socia de la Asociación Latinoamericana de Antropología (ALA). Miembro socia de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo. Miembro socia del Colegio de Graduados en Antropología. Libros publicados: Grimberg, Mabel; Enandez, Marcelo, y Manzano, Virginia (editores): *Antropología de tramas políticas colectivas. Estudios en Argentina y Brasil*. Buenos Aires, Co-edición Editorial Antropofagia-Facultad de Filosofía y Letras (UBA), 2011. E-mail: virginiamanzan@gmail.com

Esta edición de 500 ejemplares se terminó
de imprimir en Impresiones Centro, Bolívar,
Prov. de Buenos Aires, Argentina,
en el mes de Febrero de 2015.

Otros títulos de Edulp

*Peronismos, izquierdas
y organizaciones populares.
Movimientos e identidades políticas
en la Argentina contemporánea*
Martín Retamozo, Mauricio Shutttenberg
y Aníbal Viguera (compiladores)

*Claroscuros. Trabajo Social, capitalismo
tardío y subjetividades*
Susana Malacalza, María Pilar Fuentes
y Verónica Cruz (compiladoras)

*Hacia una universidad accesible.
Construcciones colectivas
por la discapacidad*
Sandra L. Katz y Paula M. Danel
(compiladoras)

*Miradas sobre la pobreza.
Intervenciones y análisis en la Argentina
posneoliberal*
María Diloretto y Ana Josefina Arias
(compiladoras)

A partir del año 2003 se desarrollan renovadas experiencias organizativas en el contexto de las políticas públicas de amplia cobertura y el liderazgo político del peronismo kirchnerista. Estas organizaciones populares combinan la promoción comunitaria, la economía social y la militancia política. En muchas instancias se vinculan activamente con los diferentes niveles gubernamentales y son, asimismo, apoyadas desde el Estado. En cada uno de los capítulos la temática es abordada por investigadores provenientes de diferentes disciplinas de las ciencias sociales. La pluralidad de enfoques teóricos y herramientas metodológicas permitirán al lector conocer mejor las características, especificidades y proyección de las organizaciones populares.

